Diario Oficial
LA GACETA
Costa Rica

RICARDO SALAS ALVAREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por RICARDO SALAS ALVAREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.03.16 16:00:42 -06'00'

COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 · 2022

ALCANCE Nº 57 A LA GACETA Nº 52

Año CXLIV | San José, Costa Rica, jueves 17 de marzo del 2022 | 301 páginas

PODER LEGISLATIVO
LEYES

REGLAMENTOS
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

NOTIFICACIONES
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.

PODER LEGISLATIVO

LEYES

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PLENARIO

DECLARACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL COMO INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA MÚSICA Y LA CULTURA DE COSTA RICA

DECRETO LEGISLATIVO N.° 10117

EXPEDIENTE N.º 22.319

SAN JOSÉ – COSTA RICA

10117

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

DECLARACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL COMO INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA MÚSICA Y LA CULTURA DE COSTA RICA

ARTÍCULO ÚNICO **-** Se declara a la Orquesta Sinfónica Nacional como Institución Benemérita de la Música y la Cultura de Costa Rica.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Silvia Hernández Sánchez
Presidenta

Aracelly Salas Eduarte
Primera secretaria

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández
Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra.—1 vez.—Exonerado.—Solicitud N° 335153.—(L10117 - IN2022631587).

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PLENARIO

APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS PARA LA ENMIENDA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 4 AL CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA

DECRETO LEGISLATIVO N.° 10143

EXPEDIENTE N.° 22.600

SAN JOSÉ - COSTA RICA

10143

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS PARA LA ENMIENDA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 4 AL CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA

ARTÍCULO ÚNICO- Se aprueba, en cada una de sus partes, el “Canje de Notas para la Enmienda de los Artículos 1, 3 y 4 al Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Reino de España”, de fecha 9 y 11 de junio de 2021. El texto es el siguiente:

6

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
República de Costa Rica

NATALIA CÓRDOBA ULATE
DIRECTORA JURÍDICA

C E R T I F I C A:

Que los siguientes doce (12) folios, los cuales identifico con mi rúbrica y sello de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, son copia fiel y exacta de los documentos originales que he tenido a la vista y que corresponden al *"Canje de notas para la enmienda de los artículos 1, 3 y 4 del Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Reino de España"*, los cuales se encuentran en custodia de la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. **********

ES CONFORME. Se expide la presente en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al ser las nueve horas del veinte de julio de dos mil veintiuno.**********

República de Costa Rica
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

DM-DT-1367-2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto –Despacho del Ministro– saluda muy atentamente a la Honorable Embajada del Reino de España, con ocasión de referirse al Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno del Reino de España, suscrito en la ciudad de San José, el 16 de noviembre 1979.

Sobre el particular, este Ministerio tiene el honor de acusar recibo de su atenta nota N.° 66 / 2021 de fecha 09 de junio del 2021, que dice lo siguiente:

"La Embajada de España saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y se refiere al Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José, el 16 de noviembre de 1979 (publicado en el B.O.E n° 65, de 17 de marzo de 1981).

En relación con el mencionado Convenio, esta Embajada tiene el honor de comunicar que, en las consultas entre las Autoridades Aeronáuticas de España y Costa Rica, celebradas de manera epistolar los pasados meses de marzo, abril y mayo de 2021, se acordó la modificación de los artículos 3, 4 y consecuentemente del artículo 1 del citado Convenio sobre Transporte Aéreo, quedando los mencionados artículos como sigue:

ARTÍCULO 1

Definiciones

Para la interpretación y los fines del presente Convenio y su anexo, los términos que a continuación se especifican tienen la siguiente significación:

a) El término "Convenio" significa el presente Convenio y su anexo.

b) El término "Autoridades aeronáuticas" significa para el Reino de España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Dirección General de Aviación Civil). Y por lo que se refiere a la República de Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, o en ambos casos, la persona o Entidad que fuera autorizada para desempeñar las funciones que en la actualidad ejercen dichas Autoridades.

c) El término "Empresa aérea designada" significa la Empresa de transporte aéreo que cada una de las Partes contratantes designe para explotar los servicios convenidos en las rutas especificadas en el Anexo al presente Convenio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del mismo.

d) El término "servicio aéreo" significa todo servicio aéreo regular realizado por aeronaves de transporte público de pasajeros, carga y correo.

e) El término "servicio aéreo internacional" significa el servicio aéreo que pasa por el espacio aéreo situado sobre el territorio de más de un Estado.

f) El término "escala para fines no comerciales" significa el aterrizaje para fines ajenos. al embarque o desembarque de pasajeros, carga y correo.

g) El término "tarifa" significa los precios que han de pagarse por el transporte de pasajeros. equipajes y carga, y las condiciones bajo las cuales se aplican estos precios. Incluyendo los costos y condiciones en que prestan sus servicios las agencias y otros servicios auxiliares, pero excluyendo la remuneración y las condiciones para el transporte de correo.

h) El término "capacidad de una aeronave" significa a carga comercial de una aeronave en función del número de asientos para pasajeros y del peso útil para carga y correo.

i) El término "capacidad ofrecida" significa la capacidad de las aeronaves utilizadas en la explotación de cada uno de los servicios aéreos convenidos multiplicado por la frecuencia.

j) El término "frecuencia" significa el número de vuelos de ida y regreso que una Empresa aérea efectúa en una ruta especificada en un periodo dado.

k) El término "servicios convenidos" significa los servicios aéreos internacionales regulares que, con arreglo a las estipulaciones del presente Convenio puedan establecerse en las rutas especificadas.

l) El término "rutas especificadas" significa las rutas establecidas en el anexo al presente Convenio.

m) El término "territorio" en relación a un Estado significa el área terrestre y el mar territorial de ese Estado, así como el espacio aéreo suprayacente.

n) El término "nacionales", en el caso de España, se entenderá como referido a los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

ñ) Los términos "Tratados de la Unión Europea" y "Derecho de la Unión Europea" se entenderán como referidos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los Reglamentos Comunitarios vigentes en materia de transporte aéreo.

ARTÍCULO 3

Designación de empresas

1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar por escrito a la otra Parte Contratante, a través de la vía diplomática, el número de empresas aéreas que desee, con el fin de explotar los servicios aéreos convenidos en las rutas especificadas, así como a sustituir por otra a una empresa aérea previamente designada.

2. Las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes Contratantes podrán exigir que las empresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, demuestren que están en condiciones de cumplir con las obligaciones prescritas en las leyes y reglamentos, normal y razonablemente aplicados por dichas Autoridades a la explotación de los servicios aéreos internacionales, de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, que incluye cualquier Anexo adoptado en virtud del Artículo 90 de dicho Convenio, cualquier modificación de los Anexos o del Convenio en virtud de los Artículos 90 y 94 del mismo, siempre que dichos Anexos y modificaciones hayan sido aprobados o ratificados por ambas Partes Contratantes.

3. Al recibir dicha designación, y previa solicitud de la empresa aérea designada, formulada en la forma requerida, la otra Parte Contratante deberá, con arreglo a las disposiciones de los apartados 3 y 4 del presente Artículo, otorgar sin demora los correspondientes permisos y autorizaciones.

4. La concesión de las autorizaciones de explotación mencionadas en el apartado 2 de este Artículo requerirá:

a) En el caso de una empresa aérea designada por el Reino de España:

1. Que esté establecida en el territorio del Reino de España de conformidad con los Tratados de la Unión Europea y que posea una licencia de explotación válida de conformidad con el Derecho de la Unión Europea; y

2. Que el control reglamentario efectivo de la compañía aérea lo ejerza y mantenga el Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la expedición de su Certificado de Operador Aéreo, apareciendo claramente indicada en la designación la Autoridad Aeronáutica pertinente; y

3. Que la compañía aérea se encuentre efectivamente bajo el control de Estados Miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y/o de sus nacionales.

b) En el caso de una empresa aérea designada por Costa Rica:

1. Que esté establecida en el territorio de Costa Rica y autorizada conforme a la legislación aplicable en Costa Rica y

2. Que Costa Rica ejerza y mantenga un control regulador efectivo y continuado de dicha empresa aérea y sea responsable de emitir el Certificado de Operador Aéreo; y

3. Que la compañía aérea esté efectivamente controlada por Costa Rica y/o nacionales de Costa Rica.

5. Cuando una empresa aérea haya sido designada y autorizada conforme a este artículo, podrá comenzar, en cualquier momento, a explotar los servicios para los que ha sido designada, siempre que cumpla con las disposiciones de este Convenio.

ARTÍCULO 4

Revocación o Suspensión de autorizaciones

1. Cada Parte se reserva el derecho de retirar o revocar la autorización de explotación o los permisos técnicos de una empresa aérea designada por la otra Parte Contratante, de suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos especificados en el Artículo 2 del presente Convenio, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de dichos derechos:

a) En el caso de una empresa aérea designada por:

1. el Reino de España:

i) cuando no esté establecida en el territorio del Reino de España de conformidad con los Tratados de la Unión Europea o carezca de una licencia de explotación válida conforme al Derecho de la Unión Europea o

ii) cuando el control reglamentario efectivo de la empresa aérea no lo ejerza o mantenga el Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la expedición de su Certificado de Operador Aéreo, o cuando la Autoridad Aeronáutica pertinente no figure claramente indicada en la designación.

iii) cuando la compañía aérea no esté efectivamente controlada por Estados Miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y/o de sus nacionales.

2. Costa Rica:

i) cuando no esté establecida en el territorio de Costa Rica o no esté autorizada conforme a la legislación aplicable en Costa Rica o

ii) cuando Costa Rica no ejerza o mantenga un control regulador efectivo y continuado sobre dicha empresa aérea o no sea responsable de la emisión del Certificado de Operador Aéreo.

iii) cuando la compañía aérea no esté efectivamente controlada por Costa Rica y/o nacionales de Costa Rica.

b) Cuando dicha empresa aérea no cumpla las leyes y reglamentos de la Parte que otorga estos derechos, o

c) Cuando dicha empresa aérea deje de explotar los servicios convenidos con arreglo a las condiciones prescritas en el presente Convenio; o

2. A menos que la revocación, suspensión o imposición inmediata de las condiciones previstas en el apartado 1 de este Artículo sean esenciales para impedir nuevas infracciones de las leyes y reglamentos, tal derecho se ejercerá solamente después de consultar a la otra Parte Contratante.

Si dicha propuesta de modificación es aceptable para la República de Costa Rica, se propone que la presente Nota y su Nota de respuesta en sentido afirmativo modifiquen el Convenio, aplicándose provisionalmente a partir de la fecha de Canje de Notas, de conformidad con lo establecido en su artículo 15, párrafo 2, y que la modificación entre en vigor en la fecha que ambas Partes Contratantes convengan, una vez que hayan obtenido la aprobación que cada una de ellas requiera, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales en un canje de notas adicional.

La Embajada de España en Costa Rica aprovecha esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto de Costa Rica, el testimonio de su más alta consideración"

Sobre lo anteriormente mencionado, este Ministerio tiene el honor de informar a la Honorable Embajada del Reino de España, que es aceptable para el gobierno de la República de Costa Rica, la propuesta de modificación indicada, y que la presente Nota y su Nota de respuesta en sentido afirmativo constituyen un Acuerdo de modificación al Convenio susodicho, con la salvedad de la aplicación provisional, en virtud de la Constitución Política de Costa Rica, y que la modificación entrará en vigor en la fecha que ambas Partes Contratantes convengan, una vez que hayan obtenido la aprobación que cada una de ellas requiera, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales en un canje de notas adicional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto – Despacho del Ministro – hace propicia la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada del Reino de España, las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

San José, 11 de junio de 2021

A LA HONORABLE
EMBAJADA DEL REINO DE ESPAÑA
CIUDAD.-

NOTA VERBAL

Nº 66 / 2021

La Embajada de España saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y se refiere al Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José, el 16 de noviembre de 1979 (publicado en el B.O.E nº 65, de 17 de marzo de 1981).

En relación con el mencionado Convenio, esta Embajada tiene el honor de comunicar que, en las consultas entre las Autoridades Aeronáuticas de España y Costa Rica, celebradas de manera epistolar los pasados meses de marzo, abril y mayo de 2021, se acordó la modificación de los artículos 3, 4 y consecuentemente del artículo 1 del citado Convenio sobre Transporte Aéreo, quedando los mencionados artículos como sigue:

Artículo 1.

Definiciones

Para la interpretación y los fines del presente Convenio y su anexo, los términos que a continuación se especifican tienen la siguiente significación:

a) El término “Convenio” significa el presente Convenio y su anexo.

b) El término “Autoridades aeronáuticas” significa para el Reino de España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Dirección General de Aviación Civil). Y por lo que se refiere a la República de Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, o en ambos casos, la persona o Entidad que fuera autorizada para desempeñar las funciones que en la actualidad ejercen dichas Autoridades.

c) El término “Empresa aérea designada” significa la Empresa de transporte aéreo que cada una de las Partes contratantes designe para explotar los servicios convenidos en las rutas especificadas en el Anexo al presente Convenio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del mismo.

d) El término “servicio aéreo” significa todo servicio aéreo regular realizado por aeronaves de transporte público de pasajeros, carga y correo.

e) El término “servicio aéreo internacional” significa el servicio aéreo que pasa por el espacio aéreo situado sobre el territorio de más de un Estado.

f) El término “escala para fines no comerciales” significa el aterrizaje para fines ajenos. al embarque o desembarque de pasajeros, carga y correo.

g) El término “tarifa” significa los precios que han de pagarse por el transporte de pasajeros. equipajes y carga, y las condiciones bajo las cuales se aplican estos precios. Incluyendo los costos y condiciones en que prestan sus servicios las agencias y otros servicios auxiliares, pero excluyendo la remuneración y las condiciones para el transporte de correo.

h) El término “capacidad de una aeronave” significa a carga comercial de una aeronave en función del número de asientos para pasajeros y del peso útil para carga y correo.

i) El término “capacidad ofrecida” significa la capacidad de las aeronaves utilizadas en la explotación de cada uno de los servicios aéreos convenidos multiplicado por la frecuencia.

j) El término “frecuencia” significa el número de vuelos de ida y regreso que una Empresa aérea efectúa en una ruta especificada en un periodo dado.

k) El término “servicios convenidos” significa los servicios aéreos internacionales regulares que, con arreglo a las estipulaciones del presente Convenio puedan establecerse en las rutas especificadas.

l) El término “rutas especificadas” significa las rutas establecidas en el anexo al presente Convenio.

m) El término “territorio” en relación a un Estado significa el área terrestre y el mar territorial de ese Estado, así como el espacio aéreo suprayacente.

n) El término “nacionales”, en el caso de España, se entenderá como referido a los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

ñ) Los términos “Tratados de la Unión Europea” y “Derecho de la Unión Europea” se entenderán como referidos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los Reglamentos Comunitarios vigentes en materia de transporte aéreo.

Artículo 3.

Designación de empresas

1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar por escrito a la otra Parte Contratante, a través de la vía diplomática, el número de empresas aéreas que desee, con el fin de explotar los servicios aéreos convenidos en las rutas especificadas, así como a sustituir por otra a una empresa aérea previamente designada.

2. Las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes Contratantes podrán exigir que las empresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, demuestren que están en condiciones de cumplir con las obligaciones prescritas en las leyes y reglamentos, normal y razonablemente aplicados por dichas Autoridades a la explotación de los servicios aéreos internacionales, de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, que incluye cualquier Anexo adoptado en virtud del Artículo 90 de dicho Convenio, cualquier modificación de los Anexos o del Convenio en virtud de los Artículos 90 y 94 del mismo, siempre que dichos Anexos y modificaciones hayan sido aprobados o ratificados por ambas Partes Contratantes.

3. Al recibir dicha designación, y previa solicitud de la empresa aérea designada, formulada en la forma requerida, la otra Parte Contratante deberá, con arreglo a las disposiciones de los apartados 3 y 4 del presente Artículo, otorgar sin demora los correspondientes permisos y autorizaciones.

4. La concesión de las autorizaciones de explotación mencionadas en el apartado 2 de este Artículo requerirá:

a) En el caso de una empresa aérea designada por el Reino de España:

1. Que esté establecida en el territorio del Reino de España de conformidad con los Tratados de la Unión Europea y que posea una licencia de explotación válida de conformidad con el Derecho de la Unión Europea; y

2. Que el control reglamentario efectivo de la compañía aérea lo ejerza y mantenga el Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la expedición de su Certificado de Operador Aéreo, apareciendo claramente indicada en la designación la Autoridad Aeronáutica pertinente; y

3. Que la compañía aérea se encuentre efectivamente bajo el control de Estados Miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y/o de sus nacionales.

b) En el caso de una empresa aérea designada por Costa Rica:

1. Que esté establecida en el territorio de Costa Rica y autorizada conforme a la legislación aplicable en Costa Rica y

2. Que Costa Rica ejerza y mantenga un control regulador efectivo y continuado de dicha empresa aérea y sea responsable de emitir el Certificado de Operador Aéreo; y

3. Que la compañía aérea esté efectivamente controlada por Costa Rica y/o nacionales de Costa Rica.

5. Cuando una empresa aérea haya sido designada y autorizada conforme a este artículo, podrá comenzar, en cualquier momento, a explotar los servicios para los que ha sido designada, siempre que cumpla con las disposiciones de este Convenio.

Artículo 4.

Revocación o Suspensión de autorizaciones

1. Cada Parte se reserva el derecho de retirar o revocar la autorización de explotación o los permisos técnicos de una empresa aérea designada por la otra Parte Contratante, de suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos especificados en el Artículo 2 del presente Convenio, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de dichos derechos:

a) En el caso de una empresa aérea designada por:

1. el Reino de España:

i) cuando no esté establecida en el territorio del Reino de España de conformidad con los Tratados de la Unión Europea o carezca de una licencia de explotación válida conforme al Derecho de la Unión Europea o

ii) cuando el control reglamentario efectivo de la empresa aérea no lo ejerza o mantenga el Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la expedición de su Certificado de Operador Aéreo, o cuando la Autoridad Aeronáutica pertinente no figure claramente indicada en la designación.

iii) cuando la compañía aérea no esté efectivamente controlada por Estados Miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y/o de sus nacionales.

2. Costa Rica

i) cuando no esté establecida en el territorio de Costa Rica o no esté autorizada conforme a la legislación aplicable en Costa Rica o

ii) cuando Costa Rica no ejerza o mantenga un control regulador efectivo y continuado sobre dicha empresa aérea o no sea responsable de la emisión del Certificado de Operador Aéreo.

iii) cuando la compañía aérea no esté efectivamente controlada por Costa Rica y/o nacionales de Costa Rica.

b) Cuando dicha empresa aérea no cumpla las leyes y reglamentos de la Parte que otorga estos derechos, o

c) Cuando dicha empresa aérea deje de explotar los servicios convenidos con arreglo a las condiciones prescritas en el presente Convenio; o

2. A menos que la revocación, suspensión o imposición inmediata de las condiciones previstas en el apartado 1 de este Artículo sean esenciales para impedir nuevas infracciones de las leyes y reglamentos, tal derecho se ejercerá solamente después de consultar a la otra Parte Contratante.

Si dicha propuesta de modificación es aceptable para la República de Costa Rica, se propone que la presente Nota y su Nota de respuesta en sentido afirmativo modifiquen el Convenio, aplicándose provisionalmente a partir de la fecha de Canje de Notas, de conformidad con lo establecido en su artículo 15, párrafo 2, y que la modificación entre en vigor en la fecha que ambas Partes Contratantes convengan, una vez que hayan obtenido la aprobación que cada una de ellas requiera, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales en un canje de notas adicional.

La Embajada de España aprovecha esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto de Costa Rica el testimonio de su más alta consideración.

San José, 9 de junio del 2021.

AL HONORABLE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Ciudad

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Silvia Hernández Sánchez
Presidenta

Aracelly Salas Eduarte
Primera secretaria

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández
Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano Quirós y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.—1 vez.—Exonerado.—Solicitud N° 335148.—(L10143 - IN2022631578).

REGLAMENTOS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

REGLAMENTO PARA EL JUEGO

LOTTO Artículo 1.-Definiciones.

Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por:

Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio.

Apuesta regular: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en un sorteo específico con la posibilidad de obtener un premio, donde el premio máximo es el primer acumulado y no participa del acumulado Revancha.

Apuesta con Revancha: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio, donde el premio máximo, si selecciona esta opción, es el acumulado Revancha para dicha apuesta. Es una modalidad de juego que le permite al jugador participar por cierta suma adicional de dinero, por un segundo acumulado de Lotto y otros premios de consolación, cuyos ganadores se determinan por medio de un sorteo adicional.

Acumulado revancha: Importe de dinero que se repartirá como premio máximo para los ganadores de 5 aciertos en el sorteo vigente. Es el acumulado independiente, es decir, no supeditado al Primer Acumulado, que rige para los que hayan comprado una apuesta específica con la modalidad de Revancha.

Bolsa de Premios: Monto total en premios disponibles para repartir entre los ganadores para cada sorteo, según se estipule en este Reglamento.

Bolsa de premios ajustada: Término utilizado para describir la bolsa de premios menos la Reserva, menos la cantidad de dinero que haya sido pagada a los ganadores de premios fijos de 2, 3 y 4 aciertos, en caso de haber ganadores en dichas categorías de 2, 3 y 4 aciertos.

Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un punto de venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o pagos de premios realizados al jugador, incluyendo, pero no limitado a, nombre del producto comprado, monto en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, fechas, número de sorteo entre otros.

Gallo Tapado: Apuestas que el sistema emite de manera aleatoria.

Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de apuestas para un sorteo en particular.

Junta: Junta de Protección Social.

Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta.

Punto de Venta: Personas físicas o jurídicas autorizados por la Junta para la venta y pago de premios al público. Sitio o persona que cuenta físicamente con una terminal del sistema especializado para la venta de las apuestas.

Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar la cantidad de ganadores.

Primer Acumulado: Importe de dinero que se repartirá como premio máximo para los ganadores de 5 aciertos en el sorteo vigente. Es el acumulado que rige para los que hayan comprado una apuesta específica para este acumulado.

Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o ambas, según corresponda, adicionales y asociados con el Juego Lotto, por un período determinado, con la finalidad de incentivar la venta del producto.

Pozo Acumulativo Anunciado: Importe de dinero que se anunciará como premio máximo a repartir en el sorteo vigente para ganadores de 5 aciertos, ya sea para el primer acumulado o para la Revancha.

Reserva: Porcentaje de la bolsa de premios que se guarda para financiar montos de premios o montos extraordinarios (para ser destinados a los jugadores).

Revancha: Modalidad de juego que le permite al comprador participar por cierta suma adicional de dinero, por un segundo acumulado de Lotto y otros premios de consolación, cuyos ganadores se determinan por medio de un sorteo adicional inmediatamente después de realizado el sorteo de Lotto.

Sorteo: El proceso de selección al azar, que determina la combinación ganadora de un premio, realizado y fiscalizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.

Sistema: Software en línea y tiempo real que administra cada una de las transacciones producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento transaccional del pago de premios.

Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su selección de una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a través de la terminal de lotería en línea con el fin de generar un comprobante de transacción válido conteniendo la jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no es obligatoria llenarla, el jugador puede pedir directamente al operador de la terminal en línea para la introducción manual de la apuesta.

Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un identificador (número serial) único en el sistema.

Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de cómputo central (dispositivo físico-equipo-utilizado para la venta y procesamiento transaccional del pago de premios de lotería electrónica).

Artículo 2.-Condiciones.

El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la venta y pago de premios del juego Lotto, tanto para sus apuestas regulares como para las apuestas con Revancha, la realización de promociones y la ejecución de sus sorteos, sin que suponga se concierte contrato alguno entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, quedando limitada la actividad de quienes participan a pagar el importe correspondiente y efectuar sus apuestas en la forma establecida por estas normas.

El hecho de realizar una apuesta implica por parte del jugador, el conocimiento de este Reglamento y la adhesión a éste, quedando sometida su apuesta a las normativas del presente Reglamento.

Artículo 3.-Obligaciones del jugador.

El jugador es responsable de verificar, en el momento de realizar la transacción (ya sea por tarjeta de jugada o al pedir directamente al operador de la terminal en línea para su introducción manual), que los datos de la apuesta sean correctos conforme lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 4.-Del juego denominado Lotto.

Lotto es un juego por medio del cual el jugador elige cinco números diferentes de dos dígitos entre el 00 y el 40. La Junta se reserva el derecho de disminuir o aumentar la cantidad de números disponibles para ser seleccionados, así como la cantidad de números a seleccionar. La Junta realizará dos sorteos de manera consecutiva, uno inmediatamente después del otro, en los cuales se seleccionará al azar la combinación ganadora conformada por cinco números, tanto para el primer acumulado como para el acumulado revancha. Se pagará el acierto de 5, 4, 3 y 2 números de cada combinación ganadora.

La determinación y selección de las apuestas ganadoras será, independientemente del orden obtenido durante la extracción de los números.

Las apuestas de este juego se pueden efectuar directamente en los puntos de venta autorizados. El jugador, para realizar la apuesta, debe indicar la combinación de cinco números diferentes, de dos dígitos cada uno, que van del 00 al 40 sin importar el orden. Si el jugador desea jugar Lotto con Revancha, debe indicarlo expresamente y pagar un adicional de ₡400 (cuatrocientos colones). Con la combinación que seleccionó para la apuesta regular, participa en ambos sorteos y puede ganar premios en ambos sorteos, según coincidan los números de su combinación con los resultantes de ambos sorteos. El jugador no puede seleccionar números distintos para la apuesta con Revancha. Si la combinación elegida por el jugador (o si la solicitó “Gallo Tapado”) coincide con la combinación ganadora de ambos sorteos, el jugador gana ambos premios. Los premios que le corresponden le serán entregados de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 de este Reglamento.

El punto de venta debe entregar un comprobante que respalde las transacciones de venta del Juego Lotto.

Artículo 5.- De las promociones. Corresponde a la Junta Directiva aprobar la mecánica, el plan de premios y la vigencia de las promociones asociadas con el Juego Lotto.

Corresponde a la Gerencia General emitir el procedimiento de cada promoción, el cual debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Los sorteos para determinar los ganadores de las promociones se realizarán en el horario y la fecha que determine la Junta Directiva y serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.

El plazo para hacer efectivos los premios de las promociones, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo de que se trate.

Según sea la mecánica de la promoción y los premios a otorgar, la Junta Directiva determinará si éstos se financiarán con el dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas mensuales del Juego Lotto destinados a publicidad y promoción, si formarán parte del plan de premios del juego o se tomarán del fondo para premios extra.

Artículo 6.- Porcentaje y estructura de la bolsa de premios.

El porcentaje de la bolsa de premios es el 55% de las ventas brutas, dicho porcentaje podrá modificarse para entregar premios adicionales. De modificarse, la Junta comunicará con antelación.

I. La estructura de premios para las apuestas regulares, funciona de la siguiente manera:

Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar:

- a) el pozo del Primer Acumulado en caso de que las ventas del juego no sean suficientes o que la cantidad de ganadores con premio fijo sobrepasen la bolsa de premios generada para el sorteo en cuestión.
- b) los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es suficiente.
- c) montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores.

Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios.

Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 3 aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría de 3 aciertos y la categoría 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos.

Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta regular, que para este caso es de ₡600 (seiscientos colones).

Tres aciertos: Paga premio fijo de ₡9.500 (nueve mil quinientos colones).

Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ₡100.000 (cien mil colones).

Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 2, 3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada la cual será utilizada para pagar el premio de 5 aciertos.

Cinco aciertos:

- el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado inicia con un premio mínimo garantizado a repartir entre los ganadores de ₡50.000.000 (cincuenta millones de colones) desde el inicio del juego y cada vez que hay ganador del premio acumulado de los 5 aciertos. Este pozo se incrementará para cada sorteo, de acuerdo a las reglas que se detallan en este Reglamento.
- los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado. De haber varios ganadores de esta categoría, el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado se reparte entre ellos por partes iguales. En el caso que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de la división sea igual o menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco aciertos recibirán cinco veces el premio asignado a cuatro aciertos.
- La Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado de ₡50.000.000 (cincuenta millones de colones) de inicio para el Primer Acumulado y de haber algún cambio, este será comunicado con antelación.

En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el Primer Acumulado se acumulará, según lo establecido en las siguientes reglas:

- 1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con las ventas del juego para financiar el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado, entonces el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado recién pasado se incrementa en un mínimo de ₡5.000.000 (cinco millones de colones) para el próximo sorteo.
- 2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del juego el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado, entonces, al Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado para el sorteo recién pasado se le sumará el monto resultante de calcular el 27,16% de los ingresos por ventas alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de millar inferior inmediata.

II. La estructura de premios para las apuestas con Revancha funciona de la siguiente manera:

Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar:

- a) el pozo del Acumulado Revancha en caso de que las ventas del juego no sean suficientes o que la cantidad de ganadores con premio fijo sobrepasen la bolsa de premios generada para el sorteo en cuestión.
- b) los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es suficiente.
- c) montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores.

Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. En caso de que ambos sorteos den como resultado los mismos números sin importar el orden, quién haya comprado su apuesta con Revancha podrá redimir ambos premios según corresponda.

Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 3 aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría de 3 aciertos y la categoría 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos.

Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta regular, que para este caso es de ₡600 (seiscientos colones).

Tres aciertos: Paga premio fijo de ₡5.000 (cinco mil colones).

Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ₡50.000 (cincuenta mil colones).

Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 2, 3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada, la cual será utilizada para pagar el premio de 5 aciertos.

Cinco aciertos:

- el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha inicia con un premio mínimo garantizado a repartir entre los ganadores de ₡20.000.000 (veinte millones de colones) desde el inicio del juego y cada vez que hay ganador del premio acumulado de los 5 aciertos. Este pozo se incrementará para cada sorteo de acuerdo a las reglas que se detallan en este Reglamento.
- los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha. De haber varios ganadores de esta categoría, el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha se reparte entre ellos por partes iguales. En el caso que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de la división sea igual o menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco aciertos recibirán cinco veces el premio asignado a cuatro aciertos.

- la Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado para el Acumulado Revancha de ₡20.000.000 (veinte millones de colones) de inicio y de haber algún cambio, este será comunicado con antelación.

En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el Acumulado Revancha se acumulará según lo establecido en las siguientes reglas:

- 1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con las ventas del juego para financiar el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha, entonces el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha recién pasado se incrementa en un mínimo de ₡1.000.000 (un millón de colones) para el próximo sorteo.
- 2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del juego el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha, entonces, al Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha para el sorteo recién pasado se le sumará el monto resultante de calcular el 26,20% de los ingresos por ventas alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de millar inferior inmediata.

Artículo 7.- Captura de apuestas.

Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de la tarjeta de jugada o pidiendo directamente al operador de la terminal en línea para su introducción manual. La tarjeta de jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada o de una apuesta válida. El único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado. Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) es hacer su jugada con la modalidad automática o "Gallo Tapado", donde el sistema le emite una jugada con 5 números al azar completamente aleatorio.

Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o "Gallo Tapado", en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea de números que se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas "GT" que significan "Gallo Tapado".

El monto único para las apuestas regulares de Lotto es de ₡600 (seiscientos colones) y para las apuestas Revancha ₡400 (cuatrocientos colones). El comprador no podrá adquirir una apuesta con Revancha al menos que haya adquirido la apuesta regular. La combinación de números que seleccionó el comprador para la apuesta regular será la misma combinación que se utilice para la apuesta con Revancha. La Junta se reserva, por condiciones de oportunidad en el juego, la potestad de modificar el precio de las apuestas. Si lo hace, los cambios serán aprobados y comunicados por los medios correspondientes con antelación a que surtan efectos.

Artículo 8.- Tiempo límite para la recepción de apuestas.

La recepción de apuestas para cada sorteo se inicia a partir del momento en que la Junta lo defina en el sistema automatizado. La hora de cierre o momento en que se cierra la recepción de apuestas en cada sorteo, será como mínimo, de 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio de dicho sorteo.

Artículo 9.- Validación de apuestas.

Para poder participar en el respectivo sorteo, cada apuesta debe estar válidamente registrada en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas para la captura de apuestas. Para efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado un número de transacción que la identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio, el jugador debe presentar su comprobante de apuesta.

Artículo 10.- De la fecha y los horarios de los sorteos.

Los sorteos de Lotto se realizan conforme al Calendario de Sorteos aprobado por la Junta Directiva, en el lugar, en los días, en el horario y la frecuencia que esta lo determine.

El Calendario de Sorteos para Lotto será publicado en los medios oficiales para conocimiento de los jugadores.

El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización. Los sorteos serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.

Artículo 11.- Metodología para la realización de los sorteos.

Los sorteos se realizarán con la extracción de cinco números del 00 al 40 por medio de las tómbolas de aire o manuales, con el fin de determinar los ganadores de las apuestas regulares. Posterior a este sorteo, se realiza de forma inmediata un sorteo para extraer otros cinco números del 00 al 40 por medio de tómbolas de aire o manuales para determinar los ganadores de las apuestas con Revancha.

Luego de la realización de los sorteos, se procede a incluir la información por parte de los funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos.

Posteriormente, se elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los datos necesarios para generar los pagos de los premios correspondientes.

Artículo 12.- Pago de premios.

Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos de venta. En caso que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para pagar el premio, el jugador podrá llamar al centro de servicio al cliente que sea dispuesto para tales

efectos para que se le indique dónde puede hacer efectivo su premio. Los requisitos para hacer efectivo unos premios son: **(i)** presentar el comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro; y, **(ii)** un documento de identificación vigente (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte). La Junta se reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que sea necesaria para llevar a cabo el cambio de premios mayores a USD 10.000 (diez mil dólares estadounidenses).

En caso que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá llamar al centro de servicio al cliente que sea dispuesto para tales efectos, para coordinar lugar, fecha y hora donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta designe, en cuyo caso esta última o quién se designe, podrá revisar si con los datos que quedaron sin daño es suficiente para poder realizar el pago. En caso que el daño no lo permita, el pago del premio no se podrá realizar. El jugador es responsable de cuidar como buen padre el tiquete comprado.

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el cambio de premio.

Artículo 13.- Plazo para hacer efectivos los premios.

El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales, contando a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo. Si el plazo se computa en un día inhábil el premio se hará efectivo el día hábil inmediato siguiente.

Artículo 14.- Premios no cambiados.

Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo para hacer efectivos los premios, se consideran parte de las utilidades del juego.

Artículo 15.- Derogatoria. Se deroga el Reglamento para el Juego Lotto publicado en el Alcance No. 8 a La Gaceta No. 8 del 11 de enero del 2019 y sus reformas.

Rige a partir de su publicación del 04 de abril del 2022.

Aprobado con el acuerdo JD-153 correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la sesión extraordinaria 15-2022, celebrada el 10 de marzo de 2022

Evelyn Blanco Montero, Gerente, Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones.—1 vez.—Solicitud N° 334514.—(IN2022631438).

REGLAMENTO PARA EL JUEGO 3 MONAZOS (TRES MONAZOS)

Artículo 1.- Definiciones.

Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por:

Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en un sorteo específico, con la posibilidad por azar de obtener un premio.

Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un punto de venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o pago de premios realizados al jugador, incluyendo, pero no limitado a, nombre del producto comprado, monto en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, fechas, número de sorteo, entre otros.

Gallo tapado: Combinación aleatoria de una apuesta que el sistema emite.

Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de apuestas para un sorteo en particular.

Junta: Junta de Protección Social.

Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta.

Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos consecutivos, tanto para mediodía, tarde, noche o todos hacia el futuro, hasta un límite de 10 sorteos incluyendo el vigente.

Jugadas en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas en sorteos que ocurrirán en el futuro, a partir de un sorteo que ocurre después del próximo, tanto para mediodía, tarde, noche o todos, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los sorteos contenidos en los siguientes 8 días contados a partir del momento de la compra.

Jugadas multi-sorteo en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas multi-sorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando el primer sorteo seleccionado de esa compra este contenido en uno de los siguientes 8 días contados a partir del momento de la compra.

Punto de venta: Comercios o establecimientos, sean personas físicas o jurídicas, autorizados por la Junta para la venta y pago de premios al público del Juego 3 Monazos Sitio o persona que cuenta físicamente con una o más terminales del sistema especializado para la venta de lotería electrónica.

Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar la cantidad de ganadores.

Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o ambas, según corresponda, adicionales y asociados con el Juego 3 Monazos (Tres Monazos), por un período determinado, con la finalidad de incentivar la venta del producto.

Sorteo: Proceso de selección al azar que determina la combinación ganadora de un premio, realizado y fiscalizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.

Sistema: Software en línea y en tiempo real que administra cada una de las transacciones producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento transaccional del pago de premios.

Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su selección de una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a través del terminal de lotería en línea con el fin de generar un comprobante de transacción válido conteniendo la jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no es obligatoria llenarla, el jugador puede pedir directamente al operador de la terminal en línea para la introducción manual de la apuesta. que sea informada por el jugador.

Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un identificador (número serial) único en el sistema.

Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de cómputo central (dispositivo físico-equipo-utilizado para la venta y procesamiento transaccional del pago de premios de lotería electrónica).

Artículo 2.- Condiciones

El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la venta y pago de premios del juego 3 Monazos (Tres Monazos) en sus diferentes modalidades, la realización de promociones y la ejecución de sus sorteos, sin que suponga se concierte contrato alguno entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, quedando limitada la actividad de quienes participan a pagar el importe correspondiente y efectuar sus apuestas en la forma establecida por estas normas.

Artículo 3.- Obligaciones del jugador

El jugador es responsable de verificar, en el momento antes de completar la transacción (ya sea por tarjeta de jugada o al pedir directamente al operador de la terminal en línea para su introducción manual), que los datos de la apuesta sean correctos conforme lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 4.- Del juego denominado 3 Monazos

3 Monazos: Es un juego que consiste en diferentes modalidades de apuestas, donde el jugador puede escoger (o hacerlo Gallo Tapado) tres números del 0 al 9 según la modalidad seleccionada y se gana cuando el número favorecido en el sorteo realizado por la Junta concuerda con el número y modalidad previamente seleccionado por el jugador de acuerdo con las características descritas a continuación, y en referencia a las modalidades de juego.

Modalidades de juego: El juego 3 Monazos incluye cuatro diferentes modalidades de juego, como se describen en este Reglamento, para las cuales se deben hacer apuestas independientes y su comprobante de transacción indicará la modalidad seleccionada por el jugador, de acuerdo con la siguiente clasificación.

• **Orden:** El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres números del 0 al 9. En esta modalidad se gana únicamente cuando los números seleccionados concuerdan en el mismo orden con los números favorecidos en el sorteo realizado por la Junta.

• **Desorden:** El jugador selecciona tres números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene la posibilidad de ganar cuando los números seleccionados coinciden con los del sorteo sin importar en el orden en que se encuentren. En esta modalidad los números deben ser todos distintos entre sí.

• **Combo orden - desorden:** El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene dos formas de ganar: una si los números seleccionados coinciden con los del sorteo de la Junta en el mismo orden, y la otra en distinto orden al seleccionado por el jugador. En esta modalidad los números deben ser todos distintos entre sí.

• **Combo orden – últimos dos:** El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene dos formas de ganar: una si los tres números seleccionados coinciden con los del sorteo de la Junta en el mismo orden, y la otra si los últimos dos dígitos coinciden con los del sorteo de la Junta también en el mismo orden.

Artículo 5.- De las promociones

Corresponde a la Junta Directiva aprobar la mecánica, el plan de premios y la vigencia de las promociones asociadas con el Juego 3 Monazos (Tres Monazos).

Corresponde a la Gerencia General emitir el procedimiento de cada promoción, el cual debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Los sorteos para determinar los ganadores de las promociones se realizarán en el horario y la fecha que determine la Junta Directiva y serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.

El plazo para hacer efectivos los premios de las promociones, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo de que se trate.

Según sea la mecánica de la promoción y los premios a otorgar, la Junta Directiva determinará si éstos se financiarán con el dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas mensuales del Juego 3 Monazos (Tres Monazos) destinados a publicidad y promoción, si formarán parte del plan de premios del juego o se tomarán del fondo para premios extra.

Artículo 6.- Estructura de premios

El juego 3 Monazos consta de una estructura de premios fijos para cada una de las cuatro modalidades, las cuales se detallan a continuación:

• **Orden:** Paga 650 veces la inversión, si acierta los 3 números en el mismo orden.

• **Desorden:** Independientemente de orden o desorden del acierto de los tres números, se paga 100 veces la inversión. Todos los números deben ser diferentes entre sí.

• **Combo Orden - Desorden:** Paga 500 veces la inversión si acierta los tres números en el mismo orden o 25 veces si los acierta en distinto orden.

• **Combo orden – últimos dos:** Paga 500 veces la inversión si acierta los tres números en el mismo orden o si acierta los últimos dos dígitos en el mismo orden gana 15 veces.

Artículo 7.- Captura de apuestas

Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de una tarjeta de jugada o manual pidiendo directamente al operador de la terminal en línea para su introducción. La tarjeta de jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada o de una apuesta válida. El único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado.

Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) es hacer su jugada con la modalidad automática o "Gallo Tapado", donde el sistema le emite una jugada con un número al azar completamente aleatorio.

Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o "Gallo Tapado", en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea del número que se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas "GT" que significan "Gallo Tapado".

El monto mínimo de las apuestas para las jugadas de 3 Monazos es de ¢100 (cien colones) y el jugador tiene la oportunidad de apostar por encima de este monto en múltiplos de ¢100 (cien colones) hasta un máximo de ¢50.000 (cincuenta mil colones) por apuesta. En un mismo comprobante de transacción puede haber varias apuestas, sin embargo, la sumatoria máxima de estas apuestas no puede superar los ¢2.000.000 (dos millones de colones). La Junta se reserva, por condiciones de oportunidad en el juego, la potestad de modificar el precio de las apuestas, comunicándolo de manera oportuna.

El juego permite a los jugadores realizar jugadas multi-sorteo y jugadas en avance (ver artículo 1 definiciones). Además, los jugadores podrán realizar jugadas multi-sorteo en avance. Para hacer esto, el primer sorteo de la secuencia multi-sorteo en avance deberá estar contenido en uno de los siguientes siete días contados a partir del día siguiente al momento de la compra.

En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente al sorteo. Es decir, cada apuesta registrada en ese comprobante de transacción tiene sesenta días naturales y los plazos serán distintos según la fecha del sorteo de cada transacción para hacer efectivos los premios. Los días se contarán como se explica en este reglamento.

Artículo 8.- Tiempo límite para la recepción de apuestas

La recepción de apuestas para cada sorteo se inicia a partir del momento en que la Junta lo defina en el sistema automatizado. La hora de cierre o momento en que se cierra la recepción de apuestas en cada sorteo, será de mínimo 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio de dicho sorteo.

Artículo 9.- Validación de apuestas

Para poder participar en el respectivo sorteo, cada apuesta debe estar válidamente registrada en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas para la captura de apuestas. Para efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado un número de transacción que la identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio debe presentar su comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro.

Artículo 10.- De los días de sorteos

Los sorteos de 3 Monazos se realizarán los días, en el horario y la frecuencia que determine el Calendario de Sorteos aprobado por la Junta Directiva, en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta defina.

El Calendario de Sorteos para 3 Monazos será publicado en los medios oficiales para conocimiento de los jugadores.

El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta Directiva, previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización.

Los sorteos serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.

Artículo 11.- Metodología para la realización de los sorteos. Los sorteos de 3 Monazos (Tres Monazos) se realizarán los días, en el horario y en la frecuencia que determine el Calendario de Sorteos.

Los sorteos de 3 Monazos se realizarán por medio de extracción de bolitas que conformen tres números del 0 al 9 por medio de las tómbolas de aire o tómbolas manuales. Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los datos necesarios con lo cual se aprueba el proceder a generar los pagos de los premios correspondientes.

Artículo 12.- Pago de premios

Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos de venta. En caso de que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para cancelar el premio el jugador podrá llamar al número del Centro de Servicio al Cliente que sea dispuesto para tales efectos, para que se le indique donde puede hacer efectivo su premio. Los requisitos para hacer efectivo un premio son presentar el comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro y un documento de identificación vigente (cédula

de identidad, cédula de residencia o pasaporte). La Junta se reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que sea necesaria para llevar a cabo el cambio de premios mayores o iguales a USD 10.000 (diez mil dólares estadounidenses).

En caso, que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá llamar al centro de servicio al cliente respectivo al 4100-2300 para coordinar lugar, fecha y hora donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta designe, en cuyo caso esta última o quién se designe podrá revisar si con los datos que quedaron sin daño es suficiente para poder realizar el pago. En caso, que el daño no lo permita, el pago del premio no se podrá realizar. El jugador es responsable de cuidar como buen padre el tiquete comprado.

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el cambio de premio.

Artículo 13.- Plazo para hacer efectivos los premios

El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo.

En el caso que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo correspondiente. Es decir, cada apuesta registrada en ese comprobante de transacción tendría distintos plazos para hacer efectivos los premios. Si el plazo termina, cierra y se computa en un día inhábil el premio se hará efectivo el día hábil inmediato siguiente.

Artículo 14.- Premios no cambiados

Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo para hacer efectivos los premios, se considerarán parte de las utilidades del juego.

Artículo 15.- Derogatoria. Se deroga el Reglamento para el juego 3 Monazos (Tres Monazos), publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre del 2019 y sus reformas.

El presente Reglamento rige a partir del 04 de abril del 2022.

Aprobado con el acuerdo JD-152 correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la sesión extraordinaria 15-2022, celebrada el 10 de marzo de 2022

Evelyn Blanco Montero, Gerente, Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones.—1 vez.—Solicitud N° 334515.—(IN2022631439).

REGLAMENTO PARA EL JUEGO NUEVOS TIEMPOS

Artículo 1.- Definiciones. Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por:

Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio.

Apuesta con Reventados: modalidad de juego de Nuevos Tiempos donde hay disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en un sorteo específico, adicional a la apuesta de Nuevos Tiempos; donde si el jugador selecciona esta opción, tiene la posibilidad de obtener un premio adicional.

Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un punto de venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o pago de premios realizados al jugador, incluyendo, pero no limitado a, nombre del producto comprado, monto en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, fechas, número de sorteo, entre otros.

Gallo tapado: Apuestas que el sistema emite de manera aleatoria.

Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de apuestas para un sorteo en particular.

Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos consecutivos que se realicen al mediodía, en la tarde, en la noche o a cualquier hora del día, hasta un límite de 10 sorteos incluyendo el vigente.

Jugadas en avance: Apuestas en sorteos que ocurrirán en el futuro, a partir de un sorteo que ocurre después del próximo, que se realicen al mediodía, en la tarde, en la noche o a cualquier hora del día, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los sorteos contenidos en los siguientes 8 días naturales contados a partir del momento de la compra.

Jugadas multi-sorteo en avance: Apuestas multi-sorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando el primer sorteo seleccionado de esa compra, esté contenido en uno de los siguientes 8 días naturales contados a partir del momento de la compra.

Junta: Junta de Protección Social.

Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta.

Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o ambas, según corresponda, adicionales y asociados con el Juego Nuevos Tiempos y sus modalidades, por un período determinado, con la finalidad de incentivar la venta del producto.

Punto de venta: Personas físicas o jurídicas autorizados por la Junta para la venta y pago de premios al público de los productos de apuestas. Sitio o persona que cuenta físicamente con una o más terminales del sistema especializado para la venta de lotería electrónica.

Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar la cantidad de ganadores.

Sorteo: Proceso de selección al azar que determina la combinación ganadora de un premio, realizado y fiscalizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.

Sistema: Software en línea y tiempo real que administra cada una de las transacciones producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento transaccional del pago de premios.

Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su selección de una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a través del terminal de lotería en línea con el fin de generar un comprobante de transacción válido conteniendo la jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no es obligatorio llenarla, el jugador puede pedir directamente al operador de la terminal en línea para la introducción manual de la apuesta.

Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un identificador (número serial) único en el sistema.

Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de cómputo central (dispositivo físico - equipo - utilizado para la venta y procesamiento transaccional del pago de premios de lotería electrónica).

Artículo 2.- Condiciones. El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la venta y pago de premios del juego Nuevos Tiempos en sus diferentes modalidades, la realización de promociones y la ejecución de sus sorteos, sin que suponga se concierte contrato alguno entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, quedando limitada la actividad de quienes participan a pagar el importe correspondiente y efectuar sus apuestas en la forma establecida por estas normas.

El hecho de realizar una apuesta implica por parte del jugador, el conocimiento de este Reglamento y la adhesión a éste, quedando sometida su apuesta a las normativas del presente Reglamento.

Artículo 3.- Obligaciones del jugador. El jugador es responsable de verificar, en el momento de realizar la transacción (ya sea por tarjeta de jugada o al pedir directamente al operador de la terminal en línea para su introducción manual), que los datos de la apuesta sean correctos conforme lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 4.- Del juego denominado Nuevos Tiempos y sus modalidades. Es un juego que consiste en diferentes modalidades de apuestas, donde el jugador puede escoger un número entre un rango de números definidos según la modalidad seleccionada y se gana cuando el número favorecido en el sorteo realizado por la Junta concuerda con el número previamente seleccionado por el jugador de acuerdo con las características descritas a continuación referente a las modalidades de juego.

Modalidades de juego: El juego Nuevos Tiempos incluye cinco diferentes modalidades de juego, como se describen en este reglamento, para las cuales se deben hacer apuestas independientes y su comprobante indicará la modalidad seleccionada por el jugador.

- **Exacto:** El jugador debe seleccionar por cada apuesta un número entre el 00 y el 99. Se gana cuando el número seleccionado concuerda con el número favorecido en el sorteo realizado por la Junta. Esta es la única modalidad del juego Nuevos Tiempos en la cual se puede jugar también la opción de Nuevos Tiempos Reventados, descrita en el presente artículo.
- **Reversible:** En esta modalidad de jugada, el jugador selecciona de la misma manera un número entre el 00 al 99, sin embargo, en esta modalidad el jugador tiene doble posibilidad de ganar, una manera es si obtiene el número exacto favorecido en el sorteo y la otra manera es si su número es el inverso del número favorecido. Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) en esta modalidad no aplica.
- **Primero:** En esta modalidad de jugada, el jugador apuesta por el primer dígito del número ganador del sorteo de la Junta, de manera que puede escoger un número del 0 al 9 y gana si el primer digito del número favorecido en el sorteo concuerda con el primer dígito del número apostado.
- **Terminación:** En esta modalidad de jugada, el jugador apuesta por el último dígito del número ganador del sorteo de la Junta, de manera que puede escoger un número del 0 al 9 y gana si el último digito del número favorecido en el sorteo concuerda con el último dígito del número apostado.
- **Apuesta con Reventados:** esta modalidad se juega en combinación con la modalidad Exacto y sólo se puede adquirir si el jugador compró su jugada con Exacto. El jugador invierte un monto adicional a la modalidad Exacto y con eso participa en un segundo sorteo que sucede inmediatamente después del sorteo de Nuevos Tiempos donde se seleccionó un número entre 00 y 99. Si el número seleccionado por el jugador en la modalidad de Exacto coincide con el favorecido en el sorteo de Nuevos Tiempos, el jugador gana el premio correspondiente a Exacto.

Si además sale premiada la bolita denominada Reventada en el segundo sorteo, el jugador que haya seleccionado jugar Nuevos Tiempos Reventados, gana el premio adicional. Para optar por el premio de Nuevos Tiempos Reventados, debe haber jugado y acertado la modalidad Exacto.

Artículo 5.- De las promociones. Corresponde a la Junta Directiva aprobar la mecánica, el plan de premios y la vigencia de las promociones asociadas con el Juego Nuevos Tiempos.

Corresponde a la Gerencia General emitir el procedimiento de cada promoción, el cual debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Los sorteos para determinar los ganadores de las promociones se realizarán en el horario y la fecha que determine la Junta Directiva y serán fiscalizados conforme lo establecido en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías.

El plazo para hacer efectivos los premios de las promociones, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo de que se trate.

Según sea la mecánica de la promoción y los premios a otorgar, la Junta Directiva determinará si éstos se financiarán con el dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas mensuales del Juego Nuevos Tiempos destinados a publicidad y promoción, si formarán parte del plan de premios del juego o se tomarán del fondo para premios extra.

Artículo 6.- Estructura de premios. El juego Nuevos Tiempos consta de una estructura de premios fijos para cada una de las modalidades, las cuales se detallan a continuación:

- **Exacto:** Paga 70 veces la inversión
- **Reversible:** Paga 35 veces la inversión
- **Primero:** Paga 7 veces la inversión
- **Terminación:** Paga 7 veces la inversión
- **Nuevos Tiempos Reventados:** paga 200 veces sobre la inversión específica que el jugador haya decidido adicionar para Nuevos Tiempos Reventados. Estas 200 veces son independientes de las 70 veces que se pagan sobre la inversión que se haya realizado en la modalidad Exacto. Por ende, el jugador gana 70 veces sobre la inversión específica que haya realizado en la modalidad exacto, más 200 veces sobre la inversión específica que haya realizado en Reventados, siempre y cuando se juegue y acierte la modalidad Exacto y salga premiada la bolita denominada Reventada.

Artículo 7.- Captura de apuestas. Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de una tarjeta de jugada o manual pidiendo directamente al operador de la terminal en línea para su introducción. La tarjeta de jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada o de una apuesta válida. El único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado.

Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) es hacer su jugada con la modalidad automática o "Gallo Tapado", donde el sistema le emite una jugada con un número al azar completamente aleatorio.

Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o "Gallo Tapado", en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea del número que se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas "GT" que significan "Gallo Tapado".

El monto mínimo de las apuestas para las jugadas de Nuevos Tiempos es de ₡100 (cien colones) y el jugador tiene la oportunidad de apostar por encima de este monto en múltiplos de ₡100 (cien colones) hasta un máximo de ₡50.000 (cincuenta mil colones) por apuesta.

En un mismo comprobante de transacción puede haber varias apuestas, sin embargo, la sumatoria máxima de estas apuestas no puede superar los ₡2.000.000 (dos millones de colones). La Junta se reserva, por condiciones de oportunidad en el juego, la potestad de modificar el precio de las apuestas, comunicándolo de manera oportuna.

El juego permite a los jugadores realizar jugadas multi-sorteo, jugadas en avance y jugadas multi-sorteo en avance, según las definiciones establecidas en el artículo 1.

En el caso de la modalidad de Nuevos Tiempos Reventados, el jugador tiene la oportunidad de invertir un monto adicional al que destinó a la modalidad de Exacto, por encima del mínimo indicado, en múltiplos de ₡100 (cien colones) y hasta un máximo equivalente al monto apostado en la jugada de Nuevos Tiempos en su modalidad Exacto.

En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente al sorteo. Es decir, cada apuesta registrada en ese comprobante de transacción tiene distintos plazos para hacer efectivos los premios. Los días se contarán como se explica en este reglamento.

Artículo 8.- Tiempo límite para la recepción de apuestas. La recepción de apuestas para cada juego se inicia a partir del momento en que la Junta lo defina en el sistema automatizado. La hora de cierre o momento en que se cierra la recepción de apuestas en cada juego, será, mínimo de 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio de dicho sorteo.

Artículo 9.- Validación de apuestas. Para participar en el respectivo sorteo, cada apuesta debe estar válidamente registrada en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas para la captura de apuestas. Para efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado un número de transacción que la identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio debe presentar su comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro.

Artículo 10.- De los días de sorteos. Los sorteos de Nuevos Tiempos y Nuevos Tiempos Reventados se realizarán los días, en el horario y la frecuencia, que determine el Calendario de Sorteos aprobado por la Junta Directiva, en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta defina.

El Calendario de Sorteos para Nuevos Tiempos será publicado en los medios oficiales para conocimiento de los jugadores.

El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrán ser modificados por la Junta Directiva, previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización.

En caso de anticipar o suprimir el sorteo, la comunicación debe hacerse con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha señalada para celebrar el sorteo, siempre y cuando no se hayan capturado apuestas para el caso de supresión del sorteo y en caso de posposición, la comunicación podrá hacerse con no menos de un día hábil de anticipación a la fecha original.

Los sorteos serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto.

Artículo 11.- Metodología para la realización de los sorteos. Los sorteos de Nuevos Tiempos y Nuevos Tiempos Reventados se realizarán en los días, en el horario y la frecuencia que determine el Calendario de Sorteos.

Cada sorteo del día se llevará a cabo de la siguiente manera:

Se realizará por medio de extracción de bolitas que conformen un número del 00 al 99 por medio de las tómbolas de aire o tómbolas manuales.

Posterior a este sorteo, se realiza de forma inmediata un sorteo para determinar si hay ganadores de Nuevos Tiempos Reventados. En dicha tómbola se encuentran tres bolitas donde una es premiada (denominada Reventada) y otras dos están en blanco simbolizando que no están premiadas. En el sorteo se extrae una de las tres bolitas por medio de tómbolas de aire o manuales para determinar si sale favorecida la bolita denominada Reventada.

En los días que se realice únicamente sorteos de Nuevos Tiempos se realizará por medio de extracción de bolitas que conformen un número del 00 al 99 por medio de las tómbolas de aire o tómbolas manuales.

Cuando estos se jueguen en combinación con los sorteos de la Lotería Popular o Lotería Nacional, el número que se tomará como favorecido para el juego de Nuevos Tiempos será el mismo número favorecido como Premio Mayor en el sorteo de Lotería Popular o Lotería Nacional correspondiente a esos días.

Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los datos necesarios para proceder generar los pagos de los premios correspondientes.

Artículo 12.- Pago de premios. Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos de venta. En caso de que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para cancelar el premio, el jugador podrá llamar al número del Centro de Servicio al Cliente que sea dispuesto para tales efectos, para que se le indique donde puede hacer efectivo su premio. Los requisitos para hacer efectivo un premio son presentar el comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro y un documento de identificación vigente (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte). La Junta se reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que sea necesaria para llevar a cabo el cambio de premios mayores o iguales a USD 10.000 (diez mil dólares estadounidenses).

En caso que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá llamar al centro de servicio al cliente respectivo al 4100-2300 para coordinar lugar, fecha y hora donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta designe, en cuyo caso esta última o quién se designe podrá revisar si con los datos que quedaron sin daño es suficiente para poder realizar el pago. En caso que el daño no lo permita, el pago del premio no se podrá realizar. El jugador es responsable de cuidar como buen padre el tiquete comprado.

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el cambio de premio.

Artículo 13.- Plazo para hacer efectivos los premios. El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo.

En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo correspondiente. Es decir, cada apuesta registrada en ese comprobante de transacción tendría distintos plazos para hacer efectivos los premios. Si el plazo se computa en un día inhábil el premio se hará efectivo el día hábil inmediato siguiente.

Artículo 14.- Premios no cambiados. Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo para hacer efectivos los premios, se consideran parte de las utilidades del juego.

Artículo 15.- Término para reclamos. En caso de que exista disconformidad por parte de algún jugador sobre el pago o no de un premio o sobre el monto respectivo que se haya pagado, se podrá presentar el respectivo reclamo, el cual debe dirigirse a la Unidad de Pago de Premios, como responsable de resolver los reclamos de premios.

La fecha límite para su presentación, lo es dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente al día del sorteo. La Unidad de Pago de Premios, atenderá, resolverá y comunicará al interesado su resolución, dentro del plazo de 30 días naturales al recibido de la solicitud firmada por el reclamante.

Artículo 16.- Derogatoria. Se deroga el "Reglamento para el Juego Nuevos Tiempos", publicado en el Alcance No. 270 a La Gaceta No.231 del 04 de diciembre del 2019 y sus reformas.

El presente Reglamento rige a partir del 04 de abril del 2022.

Aprobado con el acuerdo JD-151 correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la sesión extraordinaria 15-2022, celebrada el 10 de marzo de 2022

Evelyn Blanco Montero, Gerente, Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones.—1 vez.—Solicitud N° 334513.—(IN2022631450).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

INTENDENCIA DE AGUA
RE-0006-IA-2022 del 14 de marzo 2022

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD REGULATORIA EN LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS COMUNALES (ASADAS)

EXPEDIENTE OT-203-2021

RESULTANDO:

I. El 23 de marzo de 2017, mediante la resolución RRG-091-2017, el cual corre agregado al expediente, el Regulador General estableció los lineamientos para la estandarización de la implementación de la contabilidad a nivel institucional, en los cuales se instruyó a las Intendencias, entre otras cosas, estandarizar el proceso y realizar una consulta pública para discutir los formatos uniformes de contabilidad regulatoria de cada servicio regulado.

II. El 4 de abril de 2017, mediante el oficio 295-RG-247, el cual corre agregado al expediente, el Regulador General, con la finalidad de llevar a la práctica los lineamientos establecidos en la resolución RRG-091-2017, instituyó una “Fuerza de Tarea” para efectos de realizar las labores de coordinación interna, estandarización, revisión y seguimiento entre las Intendencias.

III. El 17 de enero de 2018, mediante el oficio 0013-IA-2018, la Intendencia de Agua formalizó un informe con la propuesta de implementación de la contabilidad regulatoria para los servicios de acueducto, alcantarillado, hidrantes, suministro de agua para riego y piscicultura y actividades de protección del recurso hídrico. Esta propuesta no contemplaba a las Asociaciones Administradores de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Comunales (ASADAS), únicamente a los tres grandes operadores regulados por la Intendencia de Agua, a saber: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH S.A.) y al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). (OT-242-2017, Folios 86 al 139).

IV. El 31 de enero de 2018, la Intendencia de Agua emitió la resolución RIA-001-2018 por medio de la cual se formalizó la implementación de la contabilidad regulatoria para los servicios de acueducto, alcantarillado, hidrantes, suministro de agua para riego y piscicultura y actividades de protección del recurso hídrico. Esta resolución no contemplaba a las ASADAS. (OT-242-2017, Folios 148 a 175).

V. El 25 de junio de 2019, por medio del oficio OF-0438-IA-2019, se conformó un equipo de trabajo de la Intendencia de Agua que trabajaría en conjunto con funcionarios del AyA y el Colegio de Contadores Privados, para elaborar la contabilidad regulatoria de las ASADAS. Sin embargo, esta colaboración fue infructuosa, por lo que se decidió llevar a cabo el proyecto únicamente con personal propio de la Intendencia. (Mismo que corre agregado a los autos).

VI. El 14 de octubre de 2019, mediante el oficio OF-0891-IA-2019, la Intendencia de Agua solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), criterio técnico sobre si las ASADAS pueden ser o no incluidas dentro de la categoría de Pequeña y Mediana Empresa (PYME). (OT-242-2017, folio 738).

VII. El 16 de octubre de 2019, mediante el oficio OF-0902-IA-2019 la Intendencia de Agua solicitó al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR), criterio técnico sobre el tipo de normativa internacional contable que deben utilizar las ASADAS para elaborar y presentar sus estados financieros. (OT-242-2017, folio 739).

VIII. El 29 de octubre de 2019, mediante el oficio DM-OF-491-19, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio respondió a lo solicitado mediante el oficio indicado en el resultando anterior, indicando que las ASADAS no pueden ser consideradas como PYME. (OT-242-2017, folio 866).

IX. El 13 de enero de 2020, mediante el oficio CCP-023-2019, el CCPCR respondió a lo solicitado mediante el oficio indicado en el resultando anterior. (Mismo que se encuentra visible en el expediente OT-242-2017).

X. El 15 de abril de 2021, mediante el oficio OF-0221-IA-2021, la Intendencia de Agua solicitó a un grupo de ASADAS remitir al ente regulador los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020. Dichos estados financieros solicitados correspondían a: Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los estados financieros. (Folio 1275).

XI. El 25 de mayo de 2021, la Intendencia de Agua emitió la resolución RE-0009-IA-2021, mediante la cual se formalizaron las etapas del proceso de producción de cada uno de los servicios regulados que prestan los tres grandes operadores regulados por IA, a saber: AyA, ESPH S.A. y SENARA y que fueron establecidas en el informe IN-0044-IA-2021. (Folios 55 a 62).

XII. El 28 de mayo de 2021, mediante escrito sin número, la señora Ileana Vanessa Castro López, en su condición de Subgerente General con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma del AyA, interpuso solicitud de aclaración y recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución RE-0009-IA-2021. (Folios 67 al 88).

XIII. El 2 de junio de 2021, mediante el oficio GER-296-2021 del 31 de mayo de 2021, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH, S.A.) interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y gestión de nulidad, contra la resolución RE-0009-IA-2021. (Folio 89 archivo en zip).

XIV. El 4 de junio de 2021, mediante la resolución RE-0011-IA-2021 la Intendencia de Agua se pronunció sobre el recurso de revocatoria y la gestión de nulidad interpuestos por la ESPH, S.A. contra la resolución RE-0009-IA-2021. (Folios 90 a 92, 97 y 99).

XV. El 15 de junio de 2021, mediante el oficio OF-0363-IA-2021, la Intendencia de Agua, rindió el informe que ordena el artículo 349 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), respecto del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la ESPH, S.A. (Folios 104 a 106)

XVI. El 21 de junio de 2021, mediante el oficio OF-0374-IA-2021, la Intendencia de agua rindió criterio sobre la solicitud de aclaración y el recurso de revocatoria gestionados por el AyA. (Folios 107 al 125).

XVII. El 21 de junio de 2021, mediante la resolución RE-0012-IA-2021, la Intendencia de Agua se pronunció sobre la solicitud de aclaración y el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el AyA contra la resolución RE-0009-IA-2021. (Folios 126 al 144).

XVIII. El 24 de junio de 2021, mediante el oficio OF-0388-IA-2021, la Intendencia de Agua emitió el informe que ordena el artículo 349 de la Ley General de

la Administración Pública, en el que elevó ante la Junta Directiva el recurso de apelación interpuesto por el AyA contra la resolución RE-0009-IA-2021. (Folios 164 al 166).

XIX. El 7 de setiembre de 2021, la Intendencia de Agua emitió la resolución RE-0021-IA-2021, la cual adicionó y aclaró la resolución RE-0009-IA-2021, haciendo cambios en las etapas de la cadena de valor de los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes. (Folios 456 a 464).

XX. El 23 de septiembre de 2021, mediante la resolución RE-0197-JD-2021, la Junta Directiva rechazó por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la ESPH, S.A. (Folios 583 al 592).

XXI. El 14 de marzo de 2022, mediante el informe IN-0035-IA-2022, la Intendencia de Agua emitió el informe denominado "INFORME DE CONTABILIDAD REGULATORIA Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION CONTABLE PARA LOS SERVICIOS REGULADOS POR LA INTENDENCIA DE AGUA PRESTADOS POR LAS ASADAS", en el que recomendó implementar en las ASADAS la contabilidad regulatoria en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, hidrantes y protección del recurso hídrico, separados por etapas de la cadena de valor y establecer de manera unificada la estructura, descripción, periodicidad y orden de la información regulatoria financiero contable que estos operadores deben presentar a la Intendencia de Agua, tal y como se dispone. (Mismo que corre agregado a los autos).

CONSIDERANDO:

I. Del informe IN-0035-IA-2022 del 14 de marzo de 2022, que sirve de base a esta resolución, conviene extraer lo siguiente:

Informe IN-0035-IA-2022 del 14 de marzo de 2022:

I. "(…) ***ASPECTOS GENERALES***

Para cumplir la función de fijar tarifas, fiscalizar contable, financiera y técnicamente y mantener una base de datos completa, confiable, actualizada y técnicamente organizadas de todas las variables relevantes de las actividades o servicios regulados, es necesario que la Intendencia de Agua disponga de información suficiente, completa, compatible, relevante, orientada al usuario, accesible, oportuna y fácil de usar; relacionada con la prestación del servicio público respectivo y dentro de ella la que se relaciona con información financiero

contable, que refleja los costos y gastos asociados a la prestación del servicio y que sobre la base de su estandarización, permita su debido análisis técnico.

La Intendencia de Agua para cumplir adecuadamente sus funciones, competencias y atribuciones asignadas por la Junta Directiva, adoptó una organización por procesos sustentada en la orientación al usuario, la planificación estratégica, el monitoreo y el seguimiento, la gestión por resultados, la transparencia y la rendición de cuentas, como principios para la transformación de la cultura institucional y como pilar para la modernización del marco regulatorio.

La socialización y desarrollo participativo de los ingresadores o plantillas regulatorias estándar para la presentación a la Intendencia de Agua de la información de importancia regulatoria, así como la renovación de los mecanismos de comunicación y coordinación de las empresas reguladas, constituyen factores críticos para avanzar en la consolidación de un modelo de regulación económica y de calidad, que garantice la armonización de los intereses entre los usuarios y los prestadores de los servicios públicos.

Es prioridad de la Intendencia de Agua promover adecuadamente procesos participativos para el desarrollo de un marco regulatorio ágil y eficiente y no establecer requisitos de forma discrecional e impositiva, de tal manera que los mismos se fortalezcan con la participación activa y proactiva de los sectores involucrados con antelación a que se conviertan en un requisito legal para los operadores regulados; dando así una certeza jurídica a las empresas ya que conocen previamente la dirección o enfoque regulatorio que establecerá la Intendencia, así como los fines y beneficios derivados de las iniciativas, facilitando la remisión de la información de naturaleza regulatoria una vez formalizado el requerimiento.

Como complemento a ese proceso participativo para la propuesta de mejoras regulatorias, la Intendencia ha promovido espacios para el acompañamiento a los regulados, procurando así la debida implementación de las disposiciones regulatorias.

Para avanzar en un modelo de regulación moderno, estratégico, transparente y confiable, la Intendencia de Agua ha desarrollado las herramientas e instrumentos necesarios para avanzar en la simplificación, estandarización y automatización de los requerimientos de información que las empresas reguladas deben presentar a este Ente Regulador, como condición necesaria para velar por el cumplimiento del principio del servicio al costo, prestación óptima de los servicios públicos, del correcto manejo de las variables de costo y

gasto, inversión, endeudamiento, ingresos percibidos y rentabilidad, y de velar por la no inclusión de costos ajenos a la prestación del servicio público respectivo, innecesarios o desproporcionados.

El proceso de simplificación, estandarización y automatización permitirá en el corto y mediano plazo disponer de bases de datos adecuadas, monitorear los mercados, comparar y preparar informes para los diferentes sectores regulados y de consumo, construir escenarios para la toma de decisiones, reducir a un nivel razonable los períodos de análisis y respuestas a terceros, dar un oportuno seguimiento a las fijaciones tarifarias y disponer de información actualizada y de fácil comprensión en la página web, logrando con ello la llamada "democratización de la información", la participación efectiva de los usuarios en los procesos de consulta pública y la mejora continua en los instrumentos regulatorios.

Siguiendo con el proceso de simplificación, estandarización y automatización de información, resulta necesario, a partir de los sistemas contables internos con que cuentan las ASADAS, ordenar la información sobre saldos y cuentas y estados financieros, con un enfoque basado en la cadena de valor de cada servicio regulado y definir los criterios de asignación de cuentas comunes, de tal forma que su distribución sea justa, consistente, estable, que no perjudiquen al servicio público regulado respectivo y permita realizar comparaciones en el tiempo.

El proceso de estandarizar bajo un mismo sistema de captura y manejo de datos contables o no contables, a partir de la plataforma tecnológica de la que disponen los operadores, ha sido denominado a nivel internacional como contabilidad regulatoria.

La finalidad básica de este tipo de sistema es disminuir a un nivel razonable y manejable la asimetría de información, estableciendo para ello una serie de reglas, normas, procedimientos, formatos, ingresadores y parámetros que son uniformes y estandarizados para todos los prestadores de servicios públicos regulados, permitiendo igualmente la separación de sus estados financieros por actividad o servicio y cuyos saldos deberán coincidir con los estados financieros auditados remitidos de forma anual. Lo anterior con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del principio del servicio al costo establecido en la Ley 7593 y así mismo cumplir con el artículo 20 de dicha ley, el cual se relaciona con la obligación de los prestadores de llevar contabilidades separadas por cada uno de los servicios públicos regulados o no.

En conjunto los beneficios de este sistema se ven reflejados tanto para los prestadores de servicio, como para los usuarios y el Ente Regulador, toda vez que mediante éste se incrementa la transparencia de la información, aumenta la credibilidad, disminuye la incertidumbre, se limita la discrecionalidad del regulador y sobre todo se reduce a un nivel razonable la asimetría de información, permitiendo el acceso oportuno a los datos, logrando así una gestión más eficiente y, por ende el cumplimiento del principio del servicio al costo.

En la actualidad se retoma como un requerimiento obligatorio para las ASADAS, suministrar los estados financieros regulatorios, así como las plantillas o ingresadores financieros, separados tanto por servicio como por cada una de las etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, etapas que se definieron conceptualmente en el informe IN-0044-IA-2021 que dio origen a la resolución RE-0009-IA-2021 del 25 de mayo del 2021 y que al ser recurrida, dio posteriormente origen a la resolución RE-0012-IA-2021 del 21 de junio de 2021 y RE-0197-JD-2021 del 23 de septiembre de 2021.

Las etapas desarrolladas en el informe IN-0044-IA-2021 experimentaron un cambio mediante el oficio de la Intendencia de Agua OF-0591-IA-2021 del 4 de octubre de 2021, el cual sirvió de base para el dictado de la resolución RE-0021-IA-2021 del 07 de octubre de 2021, referente a la adición y aclaración de la resolución RE-0009-IA-2021 del 25 de mayo de 2021. Estas etapas se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1

Etapas definidas para cada servicio

SERVICIO	***ETAPAS***
Acueducto	*− Captación* *− Conducción* *− Potabilización* *− Distribución* *− Comercialización* *− Actividades de apoyo*
Alcantarillado	*− Recolección* *− Tratamiento* *− Evacuación* *− Comercialización* *− Actividades de apoyo*
Riego y avenamiento	*− Captación* *− Conducción y distribución* *− Almacenamiento* *− Bombeo y rebombeo* *− Drenaje* *− Comercialización* *− Actividades de apoyo*
Hidrantes	*− Distribución* *− Comercialización* *− Actividades de apoyo*

Fuente: *RE-0021-IA-2021 del 07/09/2021*

La descripción detallada de cada una de estas etapas se encuentra en la resolución RE-0021-IA-2021 citada; igualmente se ubica en todos los ingresadores regulatorios que solicitan información separada por etapa de la cadena de valor y que formarán parte integrante de la resolución resultante del presente informe.

La cadena de valor como tal comprende toda la variedad de actividades que se requieren para que un producto o servicio transite a través de las diferentes etapas de producción, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la disposición final después de su uso. Se refiere a la desagregación por etapas en las actividades básicas que es preciso llevar a cabo para la prestación del servicio. Cada etapa representa una proporción del costo total del servicio regulado respectivo.

La cadena de valor como tal, es una herramienta diseñada por Michael Porter, la cual permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de la desagregación de sus actividades generadoras de valor. Se denomina así, ya que considera a las principales actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades, las cuales van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas.

2. MARCO JURÍDICO

a) Normativa aplicable

El artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública establecen que los actos de esta Autoridad Reguladora como ente público, se rigen por el principio de legalidad.

El artículo 5 inciso c) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) N°7593 y sus reformas, declaran el suministro de acueducto y alcantarillado, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes, como servicios públicos regulados por esta entidad.

El 24 de junio de 2008, se publicó en La Gaceta Nº121, la Ley de "Declaratoria del servicio de hidrantes como servicio público y reforma de leyes conexas", Ley Nº8641, mediante la cual se dispuso en su artículo 3 que, "la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos reconocerá, entre las estructuras tarifarias del servicio de acueducto, los costos y las inversiones necesarios para la instalación, el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los hidrantes. Los demás asuntos de este servicio se regularán conforme a lo establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Nº7593".

El artículo 6 inciso a) y d) de la Ley 7593 establece, que le corresponde a la Aresep la obligación de "a) regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de los servicios públicos para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida (…) d) fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos".

El artículo 14 incisos a) y c), de la Ley 7593 establece, entre las obligaciones de los prestadores de servicios públicos, la de "a) Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Reguladora en materia de prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en las leyes y los reglamentos respectivos (…) c) suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la información que les solicite, relativa a la prestación del servicio".

La Ley 7593 en su artículo 20 establece, "No serán objeto de las disposiciones de esta ley, los bienes y servicios de los prestadores que no estén dedicados a brindar un servicio público. Los prestadores de estos servicios llevarán contabilidades separadas que diferencien la actividad de servicio público de las que no lo son. En todo caso, los ingresos y costos comunes deberán consignarse de acuerdo con las normas técnicas que permitan una distribución que no perjudique la actividad del servicio público."

La Ley 7593 en su artículo 24 establece, "A solicitud de la Autoridad Reguladora, las entidades reguladas suministrarán informes, reportes, datos, copias de archivo y cualquier otro medio electrónico o escrito donde se almacene información financiera, contable, económica, estadística y técnica relacionada con la prestación del servicio público que brindan. Para el cumplimiento exclusivo de sus funciones, la Autoridad Reguladora tendrá la potestad de inspeccionar y registrar los libros legales y contables, comprobantes, informes, equipos y las instalaciones de los prestadores".

La Ley 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Aresep a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los prestadores de servicios públicos que incurran en las circunstancias ahí descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado (RIOF)", le corresponde a la Intendencia de Agua, "fijar los precios, tarifas y tasas de los servicios públicos bajo su competencia aplicando los modelos vigentes aprobados por la Junta Directiva (…), fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, tales como: inversiones realizadas, endeudamiento incurrido, niveles de ingreso percibido, costos y gastos efectuados, rentabilidad o utilidad neta, entre otros (…) y Establecer y mantener un sistema de seguimiento y registro del comportamiento del mercado de los sectores regulados y de los prestadores de tales servicios, así como mantener una base de datos completa, confiable y técnicamente organizada de todas las variables relevantes de la actividad regulada".

Para fijar las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, hidrantes y protección del recurso hídrico la Intendencia de Agua debe hacerlo en aplicación del principio de servicio al costo desarrollado en los artículos 3, 20, del 30 al 33 de la Ley 7593.

b) Aspectos Legales de las ASADAS

Sobre la delegación del AyA hacia las ASADAS, para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los servicios públicos:

La figura de la delegación tiene su fundamento jurídico en los artículos 84 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

La delegación forma parte de los mecanismos legales que permiten que una institución que forma parte de la Administración Pública, o una funcionaria o funcionario público, no asuma directamente una competencia que originalmente le corresponde ejercer, y la transfiere a otro ente o persona.

En el caso del AyA, consagrado este como ente rector de los sistemas de acueductos y alcantarillados, su Ley Constitutiva N°2726, artículo 2 inciso g), le otorgó la potestad de delegar la administración de tales servicios, mediante convenios con organismos locales y de acuerdo con los reglamentos respectivos.

Por ello, para que las ASADAS puedan brindar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, están necesariamente en la obligación de suscribir un convenio de delegación con el AyA; ya que no poseen un título habilitante propio y no existe una norma jurídica expresa que les permita hacerlo directa e independientemente.

Lo anterior se ratifica con el Reglamento de las ASADAS vigente, N°42582-S-MINAE, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°223, Alcance N°233, del 4 de setiembre de 2020, del cual se desprende en sus artículos 2 inciso 14, 6, 8, 28 inciso b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 inciso b), 99 y 105, la obligación de las ASADAS de suscribir el convenio de delegación con el AyA, con el fin de poder suministrar estos servicios.

El convenio de delegación viene a ser así, un contrato entre el AyA, titular del servicio en virtud de lo dispuesto en su Ley Constitutiva N°2726, y la comunidad representada por una Asada, mediante el cual la primera otorga la gestión del servicio bajo determinadas condiciones administrativas, técnicas y legales a la comunidad.

Por Resolución N°2007-08217 del 12 de junio del 2007, la Sala Constitucional declaró que los operadores de acueductos que no cuentan con convenio de delegación operan en condiciones de ilegalidad, y hasta de inconstitucional en algunos casos. El tema ha sido también abordado por la Procuraduría General de la República, quien en su dictamen C-236-2008 del 7 de julio de 2008, manifestó:

> *"(…) El Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto N°32529 de 02 de febrero de 2005, que rige a la fecha dispone en su artículo 3: 'Artículo 3: el A y A mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de su Junta Directiva, podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones N°218 del 08 de agosto de 1939, sus modificaciones y respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N°29496-J, publicado en La Gaceta N°95 del 21 de mayo del 2001. Asimismo, AyA facilitará a las futuras asociaciones el proyecto de estatutos y posteriormente el aval de los mismos, los que deberán ser presentados al Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción (…).// La Sala Constitucional ha destacado que la delegación de esa responsabilidad de administrar el sistema de acueductos y/o alcantarillados sanitarios, supone una clara concesión de gestión de servicio público (…). Así, en sentencia No. 3041-97 de las 16:00 hrs. del 3 de junio de 1997, se explicó: "La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, nº 2726 de 14*

de abril de 1961 y sus reformas, asigna a esa entidad autónoma el deber de 'resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable (...) para todo el territorio nacional...' (artículo 1, cuyos conceptos son reiterados en el numeral 2 inciso a). (…). Ahora bien, es palmaria la atribución que el mismo texto normativo brinda a AyA (en el pluricitado artículo 2, inciso g) de convenir, con organismos locales -como, por ejemplo, la Asociación de Desarrollo Integral del Cacao de Alajuela-, la administración de los servicios de acueductos y alcantarillados en determinados lugares del país (…).// resulta evidente que las asociaciones administradores de acueductos rurales, en cuanto administran por convenio con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ese servicio público, se encuentran, de derecho, en una posición de poder respecto de los usuarios y ejercen, para ese fin, una serie de competencias y funciones públicas, todo lo cual las hace sujetos pasivos del recurso de amparo contra particulares (artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N°2006-01651 de las dieciséis horas con treinta y nueve minutos del catorce de febrero del dos mil seis (…)”.

En conclusión, la entidad privada que no cuente con el respectivo convenio por medio del cual el AyA les delega la prestación de este, no estaría autorizada por el ordenamiento jurídico para prestar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

c) Sobre la naturaleza Jurídica de las Asadas:

La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N°7593 define en su artículo 3, inciso c) como prestador de los servicios públicos al “sujeto público o privado que presta servicios por concesión, permiso o ley”.

El anterior precepto conlleva a analizar la naturaleza jurídica de las ASADAS, con el fin de comprender su papel como prestadoras de los servicios públicos, sujetas a las regulaciones establecidas por la Autoridad Reguladora.

Así, conforme con lo dispuesto en el Reglamento vigente de las ASADAS, Decreto Ejecutivo N°42582-S-MINAE, artículos 6, 10 y 11, las ASADAS son entidades catalogadas como personas jurídicas de naturaleza privada, sometidas a la Ley de Asociaciones N°218:

> *“(…) Artículo 6. De la naturaleza de las ASADAS. Se reconoce jurídicamente la figura de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (en adelante ASADAS) como*

asociaciones privadas sin fines de lucro, que son las únicas responsables de la gestión comunitaria por delegación del AyA, de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales en Costa Rica, como actores clave en la gestión integrada del recurso hídrico. La única excepción a lo anterior será el régimen que se doten para sí mismos los territorios indígenas (…)".

"(…) Artículo 10. Sobre la Constitución de ASADAS. Las ASADAS podrán constituirse y registrarse conforme lo dispone la Ley de Asociaciones y su Reglamento. Para tal efecto el AyA facilitará el proyecto de estatutos, el cual pondrá a disposición en su sitio web, requiriéndose previo a su inscripción el visto bueno del AyA. Dicho trámite ante la institución es requerido también para la modificación de Estatutos.

Contará la ASADA con un plazo de tres meses a partir de la inscripción en el Registro Nacional, para la solicitud de firma del convenio de delegación para la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento de aguas residuales, de lo contrario, en razón de la imposibilidad legal para la prestación de dichos servicios, el AyA iniciará el trámite correspondiente para la declaratoria de extinción, regulada en el Artículo 13 inciso c) de la Ley de Asociaciones (…)"

"(…) Artículo 11. Requisitos para la constitución de ASADAS. Para constituirse como ASADA deberán cumplirse los requisitos para la conformación de asociaciones establecidos en la Ley 218 y su Reglamento, y contar con el visto bueno de AyA, previo a la presentación de documentos ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional.
El AyA, para otorgar el visto bueno a la constitución de ASADAS y la firma del convenio de delegación, deberá realizar un estudio técnico que considerará al menos, aspectos territoriales, capacidad organizativa, necesidad social y humana, oferta hídrica, legales, técnicos, ambientales, de riesgo y de eficiencia del servicio, que en conjunto determinen la factibilidad y pertinencia de su otorgamiento, para lo cual tendrá un plazo de tres meses para la rendición de los informes respectivos a partir del ingreso de la solicitud por la ASADA y quince días hábiles a partir de recibida la documentación completa, para que la Dirección Jurídica emita el visto bueno de los estatutos.

Para la revisión de reforma de estatutos, la Dirección Jurídica tendrá un plazo de 10 días hábiles (…)".

Por su parte, la Ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N°2627, establece en su artículo 2, inciso g):

> *"(…) Artículo 2.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: …*
> *g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo, tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.*
> *Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.*
> *Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.*
> *Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos (…)".*

En este orden de idea, el dictamen de la Procuraduría General de la República N°C-236-2008 indica que:

> *"(…) Las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados constituyen personas jurídicas de naturaleza privada, dado que su creación debe regirse por la Ley de Asociaciones. Por esta razón, la Procuraduría General mediante criterio OJ-066-2002 del 30 de abril de 2002, indicó que la constitución de dichas asociaciones (ASADA) debe realizarse con absoluto respeto al derecho de libre asociación. No obstante, también advirtió que su funcionamiento se encuentra sometido a los requisitos y requerimientos exigidos por la normativa que la regula, ya que les fue encomendado el ejercicio de una especial actividad que involucra la prestación de servicios públicos en beneficio de una colectividad (…)".*

La lectura de los anteriores preceptos permite entender, que la naturaleza jurídica de las ASADAS es la de ser entidades de derecho privado, regidas por la normativa privada y bajo los principios que regentan la actividad de los privados. Sin embargo, son también de interés público por la función que

cumplen en sus comunidades, de suministrar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en beneficio de una colectividad.

De esta manera, las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales de conformidad con el Decreto Ejecutivo N°42582-S-MINAE, en relación con la Ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N°2627 y la definición dada por la Ley N°7593, son prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que cuentan con la facultad de brindar estos servicios una vez suscrito el respectivo convenio de delegación que les habilita para suministrarlos por delegación del AyA.

II. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ASADAS EN CUANTO A NORMATIVA CONTABLE UTILIZADA

De acuerdo con el criterio emitido por el MEIC mediante oficio DM-OF-491-19 del 29 de octubre de 2019, las empresas PYME que se mencionan en la Ley N° 8262 Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y sus reformas, están amparadas bajo el régimen mercantil regidas por el Código de Comercio. Por lo anterior, es que dentro de la definición de PYMES no se puede incluir la figura jurídica (ASADAS), ya que en estas últimas se delega la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas comunales regidas por la Ley Nº218, Ley de Asociaciones, constituidas sin fines de lucro y con personería jurídica propia para que gestionen un servicio público de provisión de acceso al agua potable, por ende, para el MEIC no podría registrarlas con la condición Pyme en el marco de ley, no obstante se les debe reconocer como una organización de la economía social, y por ende podrían acceder a los mecanismos e instrumentos de apoyo que tutela el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El criterio técnico emitido el CCPCR por medio del oficio CCP-0230019 del 13 de enero de 2020, es claro en indicar que, una entidad para ser considerada para aplicar la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, denominada "NIIF para las PYMES", debe cumplir con lo indicado en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades, párrafo 1.2 el cual indica que:

> *“1.2 Las pequeñas y medianas entidades son entidades que:*
>
> *(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas; y*
>
> *(b) publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.*

Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia."

Mediante Decreto Ejecutivo N°42582-S-MINAE del 4 de setiembre del 2020 se estableció el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, el cual en su artículo 57 establece:

"(…)

a. *Gestión financiera-contable. Corresponde a la Junta Directiva de la ASADA, formalizar en sus libros legales y contables, según corresponda, los acuerdos tomados y acciones ejecutadas para garantizar que se lleve a cabo una efectiva gestión financiera y contable, ajustada a la normativa técnica y jurídica aplicable, así como a las disposiciones emitidas o validadas por AyA, debiendo cumplir para ello con las siguientes disposiciones:*

b. *Contratación de Servicios Contables: La Junta Directiva de la ASADA deberá contar con estados financieros actualizados periódicamente, para lo cual deberá contratar los servicios de un profesional en contabilidad debidamente incorporado al colegio profesional respectivo.*

c. *Remisión de estados financieros y otros informes: La Junta Directiva de la ASADA deberá enviar semestralmente al AyA, el estado de resultados, el balance general y el presupuesto anual.*

d. *Control de la Gestión Financiera: Las ASADAS deberán establecer y aplicar controles en su gestión financiera y de recaudación, que garanticen un manejo efectivo y eficiente de sus recursos, atendiendo lo establecido en las Normas de*
e. *Control Interno para los Sujetos Privados que Custodien o Administren, por Cualquier Título, Fondos Públicos.*

f. *Uso de los recursos: Las ASADAS podrán hacer uso de los recursos, activos, dineros recaudados por concepto de tarifas de los servicios brindados, donaciones y otros ingresos, destinándolos únicamente a las actividades de desarrollo o sostenibilidad propias de la prestación de los servicios, de la gestión de sus sistemas de acueducto y saneamiento de aguas residuales.*

g. *Registro contable de los activos: Las ASADAS registrarán a nivel contable la totalidad de los activos fijos que conforman sus sistemas de agua potable y aguas residuales, así como sus respectivas partidas contables conexas (depreciación acumulada al costo y revaluada, gasto por depreciación al costo y revaluada, amortizaciones, mejoras, deterioro, incluyendo lo relacionado con la revaluación de estos activos).*

h. *Manejo de Ingresos: Las ASADAS deberán mantener el dinero en cuentas, títulos y valores o fondos de inversión, en los Bancos del Sistema Bancario Nacional Público.*

i. *Registros Contables Actualizados: Es deber de las ASADAS mantener actualizada la contabilidad de sus actividades, debiendo establecer contabilidades separadas por cada servicio público que se preste (agua potable, hidrantes, saneamiento de aguas residuales y cualquier otra que se apruebe).*

El incumplimiento de esta disposición facultará al AyA para iniciar el proceso administrativo correspondiente, a fin de que se apliquen las sanciones establecidas en los artículos 33 y 33 bis de la Ley de Asociaciones sin perjuicio de otras acciones que se puedan tomar de conformidad con este Reglamento

j. *Pago de Seguros: Las ASADAS deberán destinar de sus ingresos un monto específico que cubra el pago de pólizas de seguros necesarios para daños a terceros para los componentes críticos del sistema. De igual forma, procurará contar con una póliza de seguro para las zonas de protección, donde se pueda hacer ese trámite.*

k. *Depreciación y Revaluación de Activos: La depreciación y revaluación de los activos deberá ser registrada en la contabilidad de la ASADA (…)".*

En virtud de lo indicado con anterioridad, las ASADAS son entidades de interés público, que administran fondos públicos y que por tanto están obligadas legalmente a rendir cuentas de su accionar, tanto a los usuarios de sus servicios como al AyA en su función de ente rector y titular de los servicios públicos que prestan, a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en su calidad de ente regulador del sector agua en nuestro país.

La obligación pública y legal de las ASADAS de rendir cuentas, las descalifica para poder aplicar las NIIF para las PYMES, por lo que en consecuencia a nivel contable las normas que deben aplicar corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera, las denominadas "NIIF full o NIIF completas".

Dado que en la actualidad existen alrededor de 1500 ASADAS, muchas de las cuales no elaboran sus estados financieros mensuales, ni siquiera en función de los principios de contabilidad generalmente aceptados, la Intendencia de Agua, decidió implementar la contabilidad regulatoria para estos operadores, tomando como base para análisis las ASADAS de más de 1000 abonados que por sus características caen dentro de la clasificación A y B, definida en el informe "IN-0109-IA-2021 Análisis de clúster en Asadas".

Hay que indicar que, la razón por la cual para efectos de diagnóstico se tomaron en cuenta las ASADAS con las características indicadas es por el hecho de que estas entidades al estar mejor organizadas podían suministrar con mayor facilidad la información financiera solicitada.

Las ASADAS que cumplen con los requisitos señalados son un total de 45 y se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 2

Listado de ASADAS analizadas

IDEO	***NOMBRE DE LA ASADA***
15	*SAN JOSE (PIZOTE) DE UPALA, ALAJUELA*
85	*SANTA ELENA DE MONTEVERDE DE PUNTARENAS*
114	*PLAYA TAMARINDO DE SANTA CRUZ, GUANACASTE*
169	*GUAYABO DE MOGOTE DE BAGACES, GUANACASTE*
552	*LOMAS Y BANDERA DE PARRITA, PUNTARENAS*
611	*PLAYA HERRADURA JACO DE TARCOLES DE GARABITO, PUNTARENAS*
638	*CHACHAGUA, PEÑAS BLANCAS SAN RAMON DE ALAJUELA*
673	*LLANO GRANDE DE CARTAGO*
691	*OROSI DE PARAISO, CARTAGO*
740	*LA SUIZA DE TURRIALBA, CARTAGO*

796	*COT DE OREAMUNO, CARTAGO*
885	*POAS Y BARRIO CORAZON DE JESUS DE ASERRI, SAN JOSE*
902	*SAN GABRIEL DE ASERRI, SAN JOSE*
947	*SAN PEDRO DE BARVA, HEREDIA*
1020	*PALMICHAL DE ACOSTA, SAN JOSE*
1081	*SABANILLA DE ALAJUELA*
1088	*SAN RAFAEL DE OJO DE AGUA ALAJUELA*
1111	*SAN ROQUE DE GRECIA, ALAJUELA*
1130	*ACUORO (PITAL-CENTENO DE OROTINA) DE SAN MATEO ALAJUELA*
1176	*RINCON DE ZARAGOZA DE PALMARES, ALAJUELA*
1223	*RIO BLANCO Y LIVERPOOL, LIMON DOS MIL*
1244	*TICABAN DE LA RITA DE POCOCI, LIMON*
1254	*TERESA TARIRE, SAN BOSCO Y BALASTRE DE LA RITA DE POCOCI, LI*
1302	*HEREDIANA DE GERMANIA DE SIQUIRRES, LIMON*
1366	*ARGENTINA, BARRIO EL CARMEN DE POCORA DE GUACIMO, LIMON*
1406	*ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO DEL TANQUE LA FORTUNA*
1421	*LOS CHILES DE AGUAS ZARCAS DE SAN CARLOS, ALAJUELA*
1430	*ACUEDUCTO ADMINISTRADOR DEL AGUA DE VENECIA*
1435	*ASADA PITAL*
1452	*ASADA LA LUCHA Y VEGA*
1475	*ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE BOCA DE ARENAL*
1496	*ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL INTEGRADO ALTOS DE CEDROS MONTERREY SANTA ROSA DE POCOSOL, SAN CARLOS*
1545	*BIJAGUA DE UPALA, ALAJUELA*
1567	*LOS SANTOS DE YOLILLAL DE UPALA, ALAJUELA*
1603	*SAN RAFAEL DE GUATUSO, ALAJUELA*
1633	*ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO DISTRITO HORQUETAS*

1689	*ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CAJÓN DE PÉREZ ZELEDÓN*
1750	*GUTIERREZ BRAWN DE SAN VITO DE COTO BRUS, PUNTARENAS*
2467	*SAN ANTONIO DE MOLLEJONES DE PEJIBAYE, PEREZ ZELEDON*
4157	*PUENTE DE PIEDRA DE GRECIA, ALAJUELA*
4211	*ACUEDUCTO ADMINISTRADOR DEL AGUA DE CEDRAL Y DULCE NOMBRE*
4234	*BUENA VISTA DE GUATUSO, ALAJUELA*
4504	*SAN PEDRO DE PEREZ ZELEDON, SAN JOSE*
4553	*CARACOL Y LA FORTUNA DE CORREDOR DE CORREDORES, PUNTARENAS*
4715	*SAN ISIDRO DE ALAJUELA*

Fuente: *SICEO*

A dichas ASADAS se les remitió el oficio OF-0221-IA-2021 del 15 de abril de 2021, solicitándoles los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020. Dichos estados financieros solicitados correspondían a: Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los estados financieros.

Del total de ASADAS de la lista, 35 respondieron al oficio señalado en el párrafo anterior, siendo que las normas contables aplicadas de acuerdo con las notas a los estados financieros corresponden a:

CUADRO Nº 3

Normativa contable utilizada por las ASADAS analizadas

TIPO DE NORMATIVA	***CANTIDAD DE ASADAS***	***% DEL TOTAL***
NIIF full	*12*	*34,29%*
NIC	*7*	*20,00%*
PCGA	*12*	*34,29%*
NIIF Pymes	*4*	*11,43%*
TOTAL	***35***	***100,00%***

Fuente: *Cálculos propios de la Intendencia de Agua*

Del cuadro anterior se deduce que, sólo un 34,29% del total de las ASADAS analizadas preparan sus estados financieros con base en las NIIF Full. Estas corresponden a:

CUADRO Nº 4

ASADAS que preparan sus estados financieros con base en las NIIF Full

IDEO	***NOMBRE DE LA ASADA***
85	*SANTA ELENA DE MONTEVERDE DE PUNTARENAS*
114	*PLAYA TAMARINDO DE SANTA CRUZ, GUANACASTE*
169	*GUAYABO DE MOGOTE DE BAGACES, GUANACASTE*
902	*SAN GABRIEL DE ASERRI, SAN JOSE*
1111	*SAN ROQUE DE GRECIA, ALAJUELA*
1302	*HEREDIANA DE GERMANIA DE SIQUIRRES, LIMON*
1421	*LOS CHILES DE AGUAS ZARCAS DE SAN CARLOS, ALAJUELA*
1430	*ACUEDUCTO ADMINISTRADOR DEL AGUA DE VENECIA*
1545	*BIJAGUA DE UPALA, ALAJUELA*
1603	*SAN RAFAEL DE GUATUSO, ALAJUELA*

1750	*GUTIERREZ BRAWN DE SAN VITO DE COTO BRUS, PUNTARENAS*
4234	*BUENA VISTA DE GUATUSO, ALAJUELA*

Fuente: *SICEO*

Los números anteriores reflejan igualmente que, 65,71% del total de ASADAS, no están cumpliendo a nivel contable con las NIIF completas, lo cual implica que, antes de la homologación solicitada en la contabilidad regulatoria para las ASADAS, debe haber un proceso previo de implementación de estas NIIF en un porcentaje significativo de ASADAS.

Dado que, en la actualidad, las ASADAS registran a nivel contable las transacciones, con base ya sea en el catálogo de cuentas desarrollado por el AyA para estas organizaciones o utilizando catálogos propios, en una primera etapa de la contabilidad regulatoria para estas entidades, se va a emplear el método denominado homologación, el cual consiste en agrupar o asignar los saldos de las partidas propias de los operadores, en función de las partidas regulatorias, cuya descripción o naturaleza, se encuentra en el Manual de Cuentas Regulatorio, el cual forma parte integral de la resolución resultante del presente informe.

Para efectos de homologación, existen los siguientes tipos de asignación:

1. *N:1 = Varias partidas del catálogo propio del operador, se homologan en una sola partida del catálogo regulatorio.*

2. *1: N = Una partida del catálogo propio del operador, se homologó con varias partidas del catálogo regulatorio, es decir la cuenta del operador se desagregó en varias partidas regulatorias.*

3. *1:1= La homologación fue directa.*

En el Anexo Nº 1 que forma parte integral del presente informe, se definen una serie de conceptos contables básicos que complementan al manual de cuentas regulatorio para las ASADAS.

III. CONCLUSIONES

1. *Las ASADAS como tales son entidades de interés público, que administran fondos públicos y que por tanto están obligadas desde el punto de vista letal a rendir cuentas de su accionar, tanto a los usuarios*

de sus servicios como al AyA en su función de ente rector y titular de los servicios públicos que prestan, a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en su calidad de ente regulador del sector agua (exceptuando a las municipalidades) en nuestro país.

2. *La obligación pública y legal de las ASADAS de rendir cuentas, las descalifica para poder aplicar las NIIF para las PYMES, por lo que en consecuencia a nivel contable las normas que deben aplicar corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera, las denominadas "NIIF full o NIIF completas".*

3. *Para efectos de diagnóstico de la situación actual de las ASADAS, se tomó como base de análisis 45 ASADAS que cuentan con más de 1000 abonados y que por sus características, se ubican en las categorías de ASADAS A y B, es decir son entidades que tienen un adecuado nivel operativo, administrativo, financiero y contable.*

4. *El mayor porcentaje de las ASADAS analizadas, preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas (34,29% del total), seguidas por acueductos comunales que siguen preparando sus estados financieros en función de los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados (PCGA), que corresponden igualmente a un 34,29% del total.*

5. *El 65,71% del total de ASADAS analizadas, no están cumpliendo a nivel contable con las NIIF completas, lo cual implica que, antes de la homologación solicitada en la contabilidad regulatoria para estas organizaciones, debe haber un proceso previo de implementación de estas NIIF en un porcentaje significativo de ASADAS.*

.

6. *En una primera etapa de la contabilidad regulatoria de las ASADAS, se va a llevar a cabo un proceso de homologación de los catálogos contables, de tal manera que no haya necesidad de hacer cambios de catálogos a nivel de los sistemas contables con los que preparan las ASADAS sus estados financieros.* (…)"

II. De conformidad con lo expuesto en los resultandos y considerandos precedentes, esta Intendencia de Agua considera que se requiere implementar la contabilidad regulatoria en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, hidrantes y actividades de protección del recurso hídrico prestados por las ASADAS, separados por etapas de la cadena de valor y establecer de manera unificada la estructura, descripción, periodicidad y orden de la información contable que estos prestadores de servicio público deben presentar ante esta Intendencia, tal y como se dispone.

POR TANTO:

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley N°7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública N°6227, en el Decreto Ejecutivo 29732-MP que es el Reglamento a la Ley N°7593, y en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado.

EL INTENDENTE DE AGUA
RESUELVE:

I. Implementar la contabilidad regulatoria en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, hidrantes y actividades de protección del recurso hídrico que prestan las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).

II. Una vez entrada en rigor la presente resolución se remitirá al AyA el listado de las ASADAS con las que se iniciará la implementación de la contabilidad regulatoria. El criterio de selección de estas ASADAS se basará en métodos estadísticos en función de las siguientes variables:

1. Variables administrativas

    a. Cantidad de personal
    b. Tiene sistema de facturación
    c. Tiene computadora
    d. Tiene oficina administrativa

2. Variables de mercado

    a. Abonados medidos
    b. Cantidad de abonados
    c. Facturación en colones

3. Variables de mercado

    a. Abonados medidos
    b. Cantidad de abonados
    c. Facturación en colones

4. Variables de calidad

    a. Cumple reglamento de agua
    b. Desinfección
    c. Reglamento Servicio al cliente

5. Variables de infraestructura

    a. Longitud de tuberías
    b. Número de sistemas

La fuente de información de estas variables corresponde al Sistema de Gestión de ASADAS (SAGA), el cual contempla una gran cantidad de preguntas en diferentes ejes temáticos. Este sistema es administrado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el levantamiento de información, así como la actualización, lo lleva a cabo la empresa Hidrogeotecnia.

Importante indicar que, el objetivo principal de la priorización de ASADAS a seleccionar es contar con información adecuada para el desarrollo e implementación de un nuevo modelo tarifario para estos operadores regulados.

III. A partir de la notificación al AyA sobre las ASADAS que darán inicio con la implementación de la contabilidad regulatoria; todas las ASADAS seleccionadas tendran un plazo máximo de 12 meses para elaborar y presentar sus estados financieros con base en las NIIF completas.

Partiendo de lo anterior, el AyA debe realizar el acompañamiento a aquellas ASADAS que no están preparando su contabilidad con base a las NIIF completas, de tal manera que se asegure que al cabo de los 12 meses indicados, todas las ASADAS hayan implementado en un 100% las NIIF señaladas. Para tales efectos, se recomienda a las ASADAS contratar únicamente contadores que estén capacitados para elaborar sus estados financieros con base en las NIIF completas. Igualmente, se contará con la colaboración de la ARESEP en aquellos casos en que sea necesario.

IV. Las ASADAS una vez implemnetadas las NIIF completas, deben de remitir al ente regulador la primera homologación de las partidas regulatorias, mediante los siguientes ingresadores:

- CRAS-001. Ingresador Financiero Agua - Acueducto
- CRAS-002. Ingresador Financiero Agua - Alcantarillado
- CRAS-003. Ingresador Financiero Agua - Hidrantes
- CRAS-004. Ingresador Financiero Agua - Protección del Recurso Hídrico
- CRAS-005. Ingresador Financiero Agua - Actividades no reguladas.

Esta primera homologación para el caso de las ASADAS que en la actualidad **preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas** debe ser entregada a más tardar seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. Esta primera homologación, no toma en cuenta las etapas de la cadena de valor del servicio respectivo.

Para aquellas ASADAS que en la actualidad **no preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas**, la primera homologación debe ser entregada seis meses despúes de terminar la implementación de dichas NIIF. Esta primera homologación, no toma en cuenta las etapas de la cadena de valor del servicio respectivo.

Se aclara que el ingresador CRAS-005. Ingresador Financiero Agua - Actividades no reguladas, sólo debe ser entregado en aquellos de venta o prestación de bienes y servicios de las ASADAS, no destinados a brindar un servicio público de acuerdo con el artículo 20 de la Ley N°7593, o que, si bien son regulados por la Autoridad Reguladora, la regulación no la hace directamente la Intendencia de Agua.

V. Las ASADAS deben de realizar la homologación tomando en cuenta lo siguiente:

1. La variable “ETAPA”, sólo será llenada en el momento en que los operadores hayan realizado todas las segregaciones de cuentas por etapas de la cadena de valor, solicitadas en Por Tantos siguientes.

2. Para aquellas ASADAS que que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, pero estos estados no están separados por cada uno de los servicios regulados que prestan, deben inicialmente hacer la separación de las partidas contables que no se puedan asociar directamente a un servicio específico, con base en el peso porcentual de los ingresos registrados en el mes anterior al mes de presentación de la primera homologación solicitada en el Por Tanto anterior.

3. La separación señalada en el punto anterior, igualmente aplica para el resto de las ASADAS que van a estar sujetas al proceso de implementación de las NIIF completas.

4. Esta separación utilizando el “driver” señalado, es únicamente para fines de la primera homologación, por lo que las ASADAS deben realizar los esfuerzos necesarios para que la separación de los estados financieros por cada uno de los servicios regulados, se realice en forma mensual de una manera estructurada y automatizada y que sea parte de la entrega de los estados financieros por parte del contador de la ASADA respectiva.

5. Con la finalidad de mantener la uniformidad y la comparabilidad de las partidas regulatorias entre periodos, para aquellas cuentas en las que se da la homologación de 1 a N, es decir una sola partida del operador, se separa en varias para efectos de homologación, los operadores deben abrir en sus catálogos contables las cuentas necesarias para que la asignación u homologación, se realice en forma directa, es decir 1 a 1.

6. En el caso de la homologación de los subpartidas pertenecientes a la cuenta regulatoria 5.3. Comerciales, las ASADAS con base en su experiencia deben determinar a cuáles subpartidas se les puede asignar valor, ya que puede haber subpartidas en las que normalmente no se realiza ningún movimiento; sin embargo, a nivel de salarios se puede hacer una estimación con base en las horas diarias, semanales y mensuales en las que los funcionarios de la ASADA realizan alguna labor relacionada con el área comercial. Para facilitar este proceso, se recomienda el uso de la bitácora que se describe en el Por Tanto XI de la presente resolución.

7. Para aquellas partidas que por su naturaleza deben ser distribuidas entre todos los servicios, se debe utilizar como “driver” en la primera homologación, el peso porcentual de los ingresos registrados en el mes anterior al mes de presentación de la primera homologación. Esto aplica tanto para las ASADAS que al momento de notificación de la presente resolución preparan sus estados financieros separados por cada uno de los servicios o si por el contrario no realizan esta separación.

8. Todas las homologaciones de cuentas deben ser realizadas en función de los manuales de cuentas regulatorios que forman parte integrante de la presente resolución, evitando utilizar de forma reiterativa la partida de “Otros”, según la cuenta madre a la que haga referencia. El uso de esta partida de “Otros” es de naturaleza extraordinaria, por lo que cada vez que un operador la utilice, debe presentar las justificaciones del caso.

9. Para el caso de las ASADAS que no tienen registrado a nivel contable, el costo actual y revaluado de los sistemas de acueducto y alcantarillado, deben aplicar el formulario denominado **"VALUACIÓN DE ACTIVOS"**, el cual está contenido en el archivo Excel llamado "Valuación de activos año 2021.xlsx", el cual forma parte integrante de la presente resolución. Se aclara que el usuario del formulario señalado, lo único que debe hacer es llenar las celdas que tienen el siguiente relleno: El primer campo que se debe llenar es el que solicita el tipo de cambio de venta del dólar del día en que se completa el formulario.

10. Cualquier duda, consulta, observación o comentario acerca de cómo realizar esta primera homolación, deben ser dirigidas al correo iagua@aresep.go.cr

VI. El AyA deberá presentar trimestralmente, ante la Intendencia de Agua, un informe acerca del avance de la implementación de las NIIF completas en las ASADAS propuestas en la primera etapa.. El primer informe de avance lo debe entregar tres meses después de notificada la presente resolución.

VII. En un plazo de seis meses contados a partir de la entrega de la primera homologación, las ASADAS que forman parte de la primera etapa, deben separar por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, las siguientes partidas:

a. Propiedad, planta y equipo.
b. Obras en construcción .
c. Documentos por pagar.
d. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias que forman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos (Propiedad, planta y equipo).
e. Cualquier otra partida del Balance de Situación que pueda ser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún "driver" o metodología de prorrateo.

Es responsabilidad del AyA, fiscalizar que todas las ASADAS presenten la separación de las cuentas indicadas. Igualmente, se contará con la colaboración de la ARESEP en aquellos casos en que sea necesario.

VIII. En el mismo plazo de seis meses citado anteriormente, una vez separadas las partidas señaladas por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, las ASADAS deberán presentar a la fecha de corte más cercana los siguientes ingresadores según correspondan, ingresadores que forman igualmente parte integral de la presente resolución:

- **a.** CRAS-024. Inversiones Transitorias y a Largo Plazo
- **b.** CRAS-034. Propiedad, planta y equipo.
- **c.** CRAS-029. Documentos por pagar – Servicio Deuda.
- **d.** CRAS-030. Activos recibidos en donación.
- **e.** CRAS-038. Registro Auxiliar de Activo.
- **f.** CRAS-043. Retiros, traslados, reclasificaciones de Activos.

IX. En un plazo de ocho meses contados a partir de la entrega de la primera homologación, las ASADAS deben separar por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales.

X. En un el mismo plazo de ocho meses citado anteriormente, las ASADAS deben presentar a la fecha de corte más cercana (fecha de los últimos financieros elaborados), los siguientes ingresadores que forman igualmente parte integral de la presente resolución:

- **a.** CRAS-011. Gastos del servicio de acueducto por etapas
- **b.** CRAS-012. Gastos del servicio de alcantarillado por sistema
- **c.** CRAS-013. Gastos del servicio de alcantarillado por etapas
- **d.** CRAS-014. Gastos del servicio de hidrantes por etapas
- **e.** CRAS-015. Gastos del servicio de protección del recurso hídrico
- **f.** CRAS-016. Ingresador Financiero - Estado Resultados por etapas servicio de acueducto
- **g.** CRAS-017. Ingresador Financiero - Estado Resultados por etapas servicio de alcantarillado
- **h.** CRAS-018. Ingresador Financiero - Estado Resultados por etapas servicio de hidrantes
- **i.** CRAS-019. Ingresador Financiero - Estado Resultados por etapas servicio de protección del recurso hídrico
- **j.** CRAS-020. Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de servicio de acueducto.
- **k.** CRAS-021. Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de alcantarillado
- **l.** CRAS-022. Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de hidrantes
- **m.** CRAS-023. Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de protección del recurso hídrico

Para efectos de prorrateo de partidas del Balance de Situación **regulatorio** que no puedan ser asignadas en forma directa a cada una de las etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, se debe utilizar como "driver", el peso porcentual de los activos pertenecientes a la partida de Propiedad, Planta y Equipo a la fecha de corte más cercana.

Como resultado de lo anterior, en el caso de los siguientes ingresadores, dado que algunas partidas del Balance de Situación regulatorio se van a cargar en forma directa a cada una de las etapas de la cadena de valor del servicio respectivo y otras utilizando un driver o metodología de prorrateo, se debe utilizar el rubro financiero denominado **"Ajuste para cierre"**, en el cual se debe colocar el monto en colones necesario para hacer que se cumpla la ecuación contable **Activo = Pasivo + Capital**:

a. CRAS-020 Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de acueducto
b. CRAS-021 Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de alcantarillado
c. CRAS-022 Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de hidrantes
d. CRAS-023. Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de protección del recurso hídrico

El uso del rubro "Ajuste para cierre", será de **naturaleza temporal** hasta que la asignación de partidas a cada etapa de la cadena de valor se vaya realizando de una forma directa, lógica y estructurada y se avance en el proceso de fijaciones tarifarias que tome en cuenta tarifas diferenciadas por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo.

Adicionalmente se aclara que, para el caso del ingresador CRAS-012. Gastos del servicio de alcantarillado por sistema, éste sólo debe ser llenado cuando una ASADA cuente con un sistema de gravedad y otro de bombeo y mixto independientes, es decir que no haya integración física entre ambos sistemas.

XI. Informar que todos los operadores deben presentar los siguientes ingresadores y en las fechas que se indican más adelante:

CODIGO DEL INGRESADOR	NOMBRE DEL INGRESADOR	PERIODICIDAD
CRAS-000	Información básica de la ASADAS	TRIMESTRAL
CRAS-001	Ingresador Financiero Agua - Acueducto	TRIMESTRAL
CRAS-002	Ingresador Financiero Agua - Alcantarillado	TRIMESTRAL
CRAS-003	Ingresador Financiero Agua - Hidrantes	TRIMESTRAL
CRAS-004	Ingresador Financiero Agua - Protección Recurso Hídrico	TRIMESTRAL
CRAS-005	Ingresador Financiero Agua - Actividades no reguladas	TRIMESTRAL
CRAS-006	Ingresador Financiero - Estado de Resultados	TRIMESTRAL
CRAS-007	Ingresador Financiero - Estado de Situación	TRIMESTRAL
CRAS-008	Ingresador Financiero - Flujo de Efectivo	TRIMESTRAL
CRAS-009	Ingresador Financiero - Cuentas Orden	TRIMESTRAL
CRAS-010	Ingresador Financiero - Estado de cambios en el patrimonio	TRIMESTRAL
CRAS-011	Gastos del servicio de acueducto por etapas	TRIMESTRAL
CRAS-012	Gastos del servicio de acueducto por sistema	TRIMESTRAL
CRAS-013	Gastos del servicio de alcantarillado por etapas	TRIMESTRAL
CRAS-014	Gastos del servicio de hidrantes por etapas	TRIMESTRAL
CRAS-015	Gastos del servicio de tarifa de protección del recurso hídrico	TRIMESTRAL
CRAS-016	Ingresador Financiero - Estado Resultados por etapas servicio de acueducto	TRIMESTRAL

CRAS-017	Ingresador Financiero - Estado Resultados por etapas servicio de alcantarillado	TRIMESTRAL
CRAS-018	Ingresador Financiero - Estado Resultados por etapas servicio de hidrantes	TRIMESTRAL
CRAS-019	Estado Resultados por etapas servicio de protección del recurso hídrico	
CRAS-020	Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de acueducto	TRIMESTRAL
CRAS-021	Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de alcantarillado	TRIMESTRAL
CRAS-022	Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de hidrantes	TRIMESTRAL
CRAS-023	Ingresador financiero - Estado Situación por etapas servicio de protección recurso hídrico	TRIMESTRAL
CRAS-024	Inversiones Transitorias y a Largo Plazo	TRIMESTRAL
CRAS-025	Documentos por pagar – Servicio Deuda	TRIMESTRAL
CRAS-026	Gastos Servicios Conexos	TRIMESTRAL
CRAS-027	Cuentas por Cobrar	TRIMESTRAL
CRAS-028	Estimación por incobrables	TRIMESTRAL
CRAS-029	Documentos por cobrar largo plazo	TRIMESTRAL
CRAS-030	Activos recibidos en donación	TRIMESTRAL
CRAS-031	Plan de mantenimiento de activos	ANUAL
CRAS-032	Plan de mantenimiento de activos - ejecutado	TRIMESTRAL
CRAS-033	Gasto por electricidad operativa	TRIMESTRAL
CRAS-034	Propiedad, planta y equipo	TRIMESTRAL
CRAS-035	Revaluación de Activos - 1	ANUAL
CRAS-036	Revaluación de Activos - 2	ANUAL
CRAS-037	Facturación sujeta a reclamos	TRIMESTRAL
CRAS-038	Registro Auxiliar de Activo	SEMESTRAL

CRAS-039	Plantilla de Indicadores	ANUAL
CRAS-040	Programa de Servicios Ambientales Hídricos (pagos)	ANUAL
CRAS-041	Gastos por servicios operativos y administrativos contratados	TRIMESTRAL
CRAS-042	Ingresos por transferencias del sector público y privado	TRIMESTRAL
CRAS-043	Retiros, traslados, reclasificaciones de Activos	TRIMESTRAL
CRAS-044	Gastos de combustible y lubricantes	TRIMESTRAL
CRAS-045	Contable salarios	TRIMESTRAL
CRAS-046	Gastos por transferencias al sector público y privado	TRIMESTRAL

Las fechas de entrega de los ingresadores anteriores corresponden a:

1. Para el primer trimestre del año bajo análisis presentarse el último día del mes de junio.
2. Para el segundo trimestre, el último día hábil del mes de setiembre.
3. Para el tercer trimestre, el último día hábil del mes de diciembre.
4. Para el cuarto trimestre, el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al año bajo análisis.

En el caso de los siguientes ingresadores que son de periodicidad anual, éstos deben ser presentados a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del año anterior al año a que hacen referencia.

a. CRAS-031. Plan de mantenimiento de activos
b. CRAS-035. Revaluación de Activos – 1
c. CRAS-035. Revaluación de Activos – 2

Lo anterior implica que si por ejemplo para la CRAS-031 el plan de mantenimiento de activos es para para el año 2022, entonces este ingresador se debe remitir a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del 2021.

En lo que corresponde a los ingresadores CRAS-001 al CRAS-005, se aclara que para lo relacionado a los gastos comerciales, en las siguientes subpartidas, de salarios y cuentas conexas, se deben registrar tanto la parte operativa como la administrativa:

a. 5.3.1.01. Sueldos y salarios
b. 5.3.1.02. Contribuciones sociales
c. 5.3.1.03. Prestaciones legales

XII. Las ASADAS deberán implementar una bitácora de control de horas laborales de los colaboradores de las ASADAS, con la finalidad de una mejor medición y asignación de los sueldos y salarios y partidas relacionadas (cargas sociales, prestaciones legales); la cual debe contener como mínimo los siguientes rubros:

1. Nombre de la ASADA
2. Fecha de elaboración de la bitácora
3. Nombre del colaborador
4. Puesto del colaborador
5. Desglose por días del mes respectivo
6. Separación por cada uno de los servicios prestados
7. Actividades realizadas
8. Número de horas dedicadas a cada actividad según el servicio específico.
9. Total de horas semanales dedicadas a cada uno de los servicios.

La finalidad básica de esta bitácora es, poder asignar de una mejor manera el tiempo que un colaborador de una ASADA, dedica a cada uno de los servicios que presta la entidad en la que labora e igualmente poder llenar el ingresador CRAS-044. Contable salarios.

XIII. A partir de la segunda entrega de los ingresadores CRAS-001 al CRAS-005, para aquellas partidas que deban ser asignadas entre todos los servicios y todas las etapas, se debe utilizar como “driver”, el peso porcentual de los activos pertenecientes a la partida de Propiedad, Planta y Equipo a la fecha de corte más cercana y separados por etapas de la cadena de valor.

XIV. Con respecto al ingresador CRAS-039. Plantilla de Indicadores, los operadores deben anexar la documentación electrónica respaldo necesaria para efectos de verificar el valor de los indicadores respectivos, por lo que se recomienda que dentro de las mismas plantillas anexen una hoja de las variables que conforman el numerador y el denominador de los indicadores y sus respectivas fuentes de origen.

XV. En los casos en que para un periodo determinado no se presentó ningún movimiento en una CRAS específica o esa CRAS no aplica para un operador respectivo, debe ser indicado en el oficio de remisión de los ingresadores del periodo al que corresponde la información remitida.

XVI. Todos los ingresadores de información complementaria comprendidos del CRAS-024 al CRAS-046, deben estar debidamente conciliados con los estados financieros regulatorios del período respectivo, sin excepción.

XVII. Remitir a la Intendencia de Agua, a más tardar el 31 de mayo de cada período, los estados financieros auditados o certificados, correspondientes al último periodo fiscal finalizado, período que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre.

XVIII. Todos los ajustes contables posteriores derivados de una auditoría externa, deben reflejarse en los ingresadores en los que estos ajustes hayan provocado alguna variación. Lo anterior implica que, todos los ingresadores correspondientes al IV trimestre del año respectivo, deben incluir los ajustes de auditoría respectivos.

XIX. Si una vez remitidas las homologaciones de las partidas regulatorias mediante los ingresadores CRAS-001 al CRAS-005, el operador respectivo debe realizar algún cambio por la incorporación de nuevas cuentas contables propias, antes de realizar la homologación debe solicitar la autorización al ente regulador. Con respecto a las homologaciones, los operadores pueden remitir todos los archivos anexos que consideren necesarios para dicho fin, pero estos archivos anexos no sustituyen a los ingresadores señalados, sino que su función es complementarlos.

XX. Las ASADAS deberán de tomar las previsiones necesarias a nivel de sus sistemas financiero y comercial para el momento en que se establezcan tarifas por etapas de la cadena de valor tanto para efectos de la venta de agua en bloque como para el resto de los consumidores finales (abonados domiciliares, empresariales, preferenciales, gobierno).

XXI. Bajo ninguna circunstancia de un periodo a otro se permitirá a los operadores el cambio de un “driver” para homologar partidas regulatorias, tanto para fines tarifarios como de fiscalizaciones, seguimientos o análisis financieros. Todo cambio de driver debe ser solicitado al ente regulador y se autorizará únicamente para casos excepcionales.

XXII. Como complemento del Por tanto anterior, los operadores deben siempre presentar junto a los ingresadores CRAS-001 al CRAS-005, los cálculos y documentación que respalde cada uno de los porcentajes utilizados en los

"driver" utilizados, de tal manera que se permita la trazabilidad de los algoritmos empleados para calcular cada uno de estos porcentajes. En los casos en que un porcentaje cambie significativamente de un periodo a otro, los operadores deben indicar en el oficio de remisión de los ingresadores, las razones o justificaciones de esta variación.

XXIII. Las ASADAS deben enviar la información solicitada en esta resolución al correo electrónico iagua@aresep.go.cr u otra que se indique formalmente. Si la información no se puede adjuntar por medio de correo electrónico, se debe utilizar una plataforma de alojamiento de archivos masivo (Dropbox, OneDrive u otros). Lo anterior se efectuará hasta que la Intendencia de Agua comunique por medio de un oficio a cada operador, la fecha para la cual deben cargar esta información en el Sistema de Información Regulatoria (SIR).

XXIV. Indicar al AyA y las ASADAS que, los formatos vigentes de los ingresadores señalados se encuentran disponibles en la siguiente página web institucional (www.aresep.go.cr) en el siguiente enlace: https://aresep.go.cr/agua-potable/informacion-regulatoria u otro que se indique formalmente.

Los operadores no podrán modificar, de manera unilateral, los formatos de los ingresadores establecidos por medio de la presente resolución. Cualquier modificación o mejora a los formatos que se considere conveniente realizar, incluso las solicitadas por las empresas, será gestionada a través de la Intendencia de Agua, mediante oficio formal que será comunicado la ASADA respectiva, y entrarán a regir el día hábil siguiente a partir de su notificación.

XXV. Indicar al AyA y las ASADAS que, los equipos técnicos de la Intendencia de Agua se encuentran a disposición para continuar con el acompañamiento en la implementación de la presente resolución y facilitar la transición hacia los nuevos requerimientos de información regulatoria.

XXVI. Indicar al AyA y las ASADAS que, es su obligación cumplir las condiciones establecidas en esta resolución, de previo a toda petición tarifaria que se presente ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a partir de la notificación de esta resolución, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 7593.

XXVII. Indicar al AyA y las ASADAS que, lo dispuesto y resuelto en la presente resolución, rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 en relación con el 345 de la Ley General de la Administración Pública, se informa que contra esta resolución caben los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Agua, a quien corresponde resolverlo; los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública, los recursos de revocatoria y el de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente al de notificación. El extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de la citada ley.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Marco Vinicio Cordero Arce, Intendente.—Solicitud N° 334887.—(IN2022631078).

RE-0034-IT-2022
San José, a las 13:30 horas del 11 de marzo de 2022

CONOCE EL INTENDENTE DE TRANSPORTE, DE OFICIO, LA CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA RESOLUCIÓN RE-0030-IT-2022 DICTADA A LAS 14:30 HORAS DEL 2 DE MARZO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL AJUSTE EXTRAORDINARIO DE OFICIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PERSONAS, MODALIDAD AUTOBÚS, A NIVEL NACIONAL, PARA EL I SEMESTRE 2022.

EXPEDIENTE ET-011-2022

RESULTANDOS:

I. Mediante la resolución RE-0060-JD-2021 del 19 de marzo de 2021, publicada en el Alcance Nº67 a La Gaceta N°60 del 26 de marzo de 2021, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), aprueba la metodología denominada: "Metodología para Fijación Extraordinaria de Tarifas para el Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, en la Modalidad Autobús".

II. El 1 de febrero de 2022, mediante el oficio OF-0102-IT-2022 la Intendencia de Transporte solicita al Departamento de Gestión Documental la apertura del expediente para tramitar la fijación tarifaria a nivel nacional para el servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, correspondiente al I semestre del 2022 (folio 1).

III. El 10 de febrero de 2022, la Intendencia de Transporte emite el Informe preliminar de fijación tarifaria de oficio a nivel nacional para el transporte público remunerado de personas, modalidad autobús, correspondiente al I semestre de 2022 IN-0053-IT-2022 (folios 22 al 52).

IV. El 10 de febrero de 2022, mediante el oficio OF-0131-IT-2022, la Intendencia de Transporte solicita a la Dirección General de Atención al Usuario la convocatoria a consulta pública de la fijación tarifaria a nivel nacional para el servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, correspondiente al I semestre del 2022, en la cual se recomienda un ajuste promedio general del 6,39% sobre las tarifas vigentes (folios 56 al 57).

V. La convocatoria a consulta pública se publicó en los diarios: La Teja y Diario Extra del 17 de febrero de 2022 (folios 120) y en La Gaceta N°32 del 17 de febrero de 2022 (folio 120). Se otorgó como plazo máximo para presentar posiciones a favor o en contra de la propuesta tarifaria el 23 de febrero de 2022, a las 16:00 horas.

VI. El 24 de febrero de 2022, mediante informe IN-0142-DGAU-2022, la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) remite el informe de oposiciones y coadyuvancias presentadas en la etapa de consulta pública (folios 123 al 124).

VII. El referido ajuste tarifario extraordinario fue analizado por la Intendencia de Transporte produciéndose el informe IN-0072-IT-2022 del 2 de marzo de 2022 (folios 125 al 177).

VIII. El 2 de marzo de 2022 fue resuelto el ajuste extraordinario del primer semestre de 2022 con la resolución RE-0030-IT-2022 (folios 178 al 271), publicada en el Alcance N°48 a La Gaceta N°44 del 7 de marzo de 2022.

IX. La Intendencia de Transporte, posterior al dictado y publicación de la resolución RE-0030-IT-2022, detectó un error material ya que en algunos casos se indicaron códigos incorrectos de rutas asociados a tarifas, por lo que se emitió el informe IN-0077-IT-2022 del 11 de marzo de 2022 (corre agregado al expediente).

X. Conforme a lo indicado en el informe IN-0077-IT-2022 del 11 de marzo de 2022 se emite el presente acto para corregir el error detectado.

CONSIDERANDOS:

I. Del informe IN-0077-IT-2022 del 11 de marzo de 2022, que sirve de fundamento a la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

"(…)

B. ANÁLISIS DEL ASUNTO

Conforme el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, (Ley 6227), en cualquier tiempo podrá la administración pública rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.

Revisada la resolución de marras, se logra comprobar que se dio un error material ya que en algunos casos fueron indicados códigos incorrectos de rutas que se asociaron a tarifas.

Así las cosas, en el siguiente cuadro se muestras los códigos correctos para cada fraccionamiento con sus respectivas tarifas:

Fraccionamiento	Distancia viaje (km)	Tarifa regular (colones)	Tarifa adulto mayor (colones)	Código ruta incorrecto	Código ruta correcto
SAN JOSE-MORAVIA-SAN BLAS-SAN RAFAEL	8,87	425	0	40-41-42	40
SAN JOSE-MORAVIA-LA ISLA	9,43	425	0	40-41-42	40
SAN JOSE-MORAVIA-LOS SITIOS	11,65	425	0	40-41-42	40
SAN JOSE-SAN ANTONIO DE CORONADO-ROMILIOS	10,85	425	0	40-41-42	40
SAN JOSE-DULCE NOMBRE DE CORONADO	12,2	425	0	40-41-42	40
SAN JOSE-MORAVIA-JARDINES	8,15	370	0	40-41-42	40
SAN JOSE-SAN ANTONIO DE CORONADO	10,6	370	0	40-41-42	40
SAN JOSE-MORAVIA-SAN RAFAEL	8,87	370	0	40-41-42	40
SAN JOSE-PEÑAS BLANCAS (SERVICIO DIRECTO)	295,5	5335	4000	505-505SD	505
TARIFA MINIMA	295,5	5335	4000	505-505SD	505
SAN JOSÉ-PEÑAS BLANCAS	295,5	5335	4000	505-505SD	505
SAN JOSÉ-LA CRUZ	276,69	4990	3745	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-LA ANGOSTURA Y VICEVERSA	211,85	3825	2870	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-ESPARZA Y VICEVERSA	205,45	3715	2785	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-CRUCE A BARRANCA Y VICEVERSA	198,05	3585	2690	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-CRUCE A MIRAMAR Y VICEVERSA	188,45	3405	2555	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-CRUCE A SARDINAL Y VICEVERSA	180,45	3260	2445	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-ENTRADA DE CHOMES	172,45	3105	2330	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-LAGARTO Y VICEVERSA	166,3	3015	2260	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-RANCHO HANIA Y VICEVERSA	155,45	2825	2120	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-LA IRMA Y VICEVERSA	151,43	2745	2060	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-LAS JUNTAS DE ABANGARES Y VICEVERSA	144,15	2605	1955	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-CAÑAS Y VICEVERSA	126,94	2290	1720	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-MONTENEGRO Y VICEVERSA	111,63	2010	1510	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-BAGACES Y VICEVERSA	103,69	1865	1400	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-PIJIJE Y VICEVERSA	92,25	1865	1400	505-505SD	505
PEÑAS BLANCAS-EL SALTO Y VICEVERSA	87,43	1865	1400	505-505SD	505
SANTA CRUZ-NOSARA	71,50	3 860	2895	536	533
SANTA CRUZ-OSTIONAL	57,46	3 100	2325	536	533
SANTA CRUZ-SAN JUANILLO	54,54	2 945	2210	536	533
SANTA CRUZ-CUAJINIQUIL	51,54	2 795	2095	536	533
SANTA CRUZ-VERACRUZ	51,34	2 775	2080	536	533
SANTA CRUZ-MARBELLA	46,22	2 495	1250	536	533

Fraccionamiento	Distancia viaje (km)	Tarifa regular (colones)	Tarifa adulto mayor (colones)	Código ruta incorrecto	Código ruta correcto
SANTA CRUZ-MANZANILLO	45,40	2 465	1235	536	533
SANTA CRUZ-LAGARTO	40,00	2 160	1080	536	533
SANTA CRUZ-VENADO	37,37	2 025	1015	536	533
SANTA CRUZ-PARAISO	32,80	1 775	890	536	533
SANTA CRUZ-LA CUESTA	30,90	1 660	830	536	533
SANTA CRUZ-CRUCE A FLORIDA	28,55	1 530	765	536	533
SANTA CRUZ-RIO SECO	27,06	1 470	735	536	533
SANTA CRUZ-LAS DELICIAS	22,83	1 240	0	536	533
SANTA CRUZ-27 DE ABRIL	19,36	1 050	0	536	533
SANTA CRUZ-JOSE GUTIERREZ	16,84	905	0	536	533
SANTA CRUZ-CAIMITO	14,30	780	0	536	533
SANTA CRUZ-SAN PEDRO	11,48	615	0	536	533
SANTA CRUZ-LAGUNILLA	8,45	455	0	536	533
SANTA CRUZ-PUENTE NEGRO	6,08	370	0	536	533
TARIFA MINIMA	0,00	370	0	536	533
SAN ISIDRO-EL ROBLE	8,6	285	0	141	140
SAN ISIDRO-LA GUARIA	7	280	0	141	140
SAN ISIDRO-LOS BAÑOS	9	280	0	141	140
SAN ISIDRO-LA PALMA	5,6	225	0	141	140
SAN ISIDRO-EL ALTO	6	225	0	141	140
SAN ISIDRO-HOYON	3,6	225	0	141	140
SAN JOSE-LA AURORA x LA PISTA	16,55	460	0	402-421	400
SAN JOSE-BARREAL-AURORA	11,7	390	0	402-421	400
SAN JOSE-URBANIZACION SANTA CECILIA	12,7	390	0	402-421	400
CIUDAD CORTES-CIUDAD NEILY	87,84	2390	1795	610	632-632A
CIUDAD CORTES-RIO CLARO	71,75	2140	1605	610	632-632A
CIUDAD CORTES-Kmto. 31	73,39	1820	1365	610	632-632A
CIUDAD CORTES-Kmto. 33	73,39	1820	1365	610	632-632A
CIUDAD CORTES-Kmto. 37	72,03	1805	1355	610	632-632A
CIUDAD CORTES-Kmto. 40	56,7	1820	1365	610	632-632A
CIUDAD CORTES-LA GUARIA	52,63	1820	1365	610	632-632A
CIUDAD CORTES-Kmto. 45	59,8	1510	1135	610	632-632A
CIUDAD CORTES-PIEDRAS BLANCAS	46,76	1510	755	610	632-632A
CIUDAD CORTES-FINCA ALAJUELA	43,24	1455	730	610	632-632A
CIUDAD CORTES-SALAMA	39,24	1275	640	610	632-632A
CIUDAD CORTES-VENECIA	37,25	1275	640	610	632-632A
CIUDAD CORTES-FINCA PUNTARENAS	36,6	1275	640	610	632-632A
CIUDAD CORTES-CIUDAD COLON	30,5	1275	640	610	632-632A
CIUDAD CORTES-TINOCO	25,64	995	500	610	632-632A
CIUDAD CORTES-OLLA CERO	19,69	965	0	610	632-632A
CIUDAD CORTES-PALMAR NORTE	11,72	715	0	610	632-632A
CIUDAD NEILY-RIO CLARO	16,09	500	0	610	632-632A
TARIFA MINIMA	0	500	0	610	632-632A
SAN ISIDRO-SAN JUAN DE DIOS	27,3	685	345	181	610
SAN ISIDRO-PLATANILLO	21	505	0	181	610
SAN ISIDRO-SAN CRISTOBAL (TINAMASTE)	17,2	430	0	181	610
SAN ISIDRO-LA PALMA	5,4	125	0	181	610
SAN ISIDRO-HOYON	3,5	125	0	181	610
PUNTARENAS-Bº EL CARMEN	2,16	280	0	614	617
PUNTARENAS-Bº 20 DE NOVIEMBRE	7,85	380	0	616	617
PUNTARENAS-EL COCAL	1,99	380	0	616	617

Fraccionamiento	Distancia viaje (km)	Tarifa regular (colones)	Tarifa adulto mayor (colones)	Código ruta incorrecto	Código ruta correcto
BUENOS AIRES-COLINAS	47,57	3420	1710	669	607
BUENOS AIRES-MAIZ	43,1	3050	1525	669	607
BUENOS AIRES-OJO DE AGUA	39,35	2750	1375	669	607
BUENOS AIRES-SAN ANTONIO	23,27	1510	0	669	607
BUENOS AIRES-TERRABA	18,2	1135	0	669	607
BUENOS AIRES-EL BRUJO	12,52	750	0	669	607
BUENOS AIRES-CEIBÓN	34	2340	1170	669	607
BUENOS AIRES-TERRABA	18,2	1135	0	669	607
BUENOS AIRES-BORUCA	29,18	1955	980	669	607
BUENOS AIRES-BELLA VISTA	26,58	1770	885	669	607
CARTAGO-PEÑA BLANCA	19	805	0	340	336
CARTAGO-LOAIZA	20,9	750	0	340	336
CARTAGO-CHARRARRA	18,54	750	0	340	336
CARTAGO-CACHI	16,9	680	0	340	336
CARTAGO-URASCA	15,7	565	0	340	336
PARAISO-CACHI	10,7	565	0	340	336
PARAISO-URASCA	9,5	415	0	340	336
PARAISO-AJENJAL	7,9	415	0	340	336
CARTAGO-PARAISO	6,2	335	0	340	336
TARIFA MINIMA	0	270	0	340	336
CARTAGO-EL HUMO	42,04	1875	940	340 A	336
CARTAGO-LAS VUELTAS	34,98	1540	770	340 A	336
CARTAGO-TUCURRIQUE	31,43	1440	720	340 A	336
CARTAGO-GUATUSO	20,01	925	0	340 A	336
TUCURRIQUE-EL HUMO	11,27	335	0	340 A	336
TARIFA MINIMA	0	270	0	340 A	336
CARTAGO-PIEDRA AZUL	17,95	885	0	341	336
CARTAGO-RIO REGADO	14,8	725	0	341	336
CARTAGO-Bº LA MINITA	13,4	675	0	341	336
CARTAGO-PARAISO	6,9	385	0	341	336
TARIFA MINIMA	0	295	0	341	336
PURISCAL-CRUCE A TABARCIA	8,82	260	0	102	155
PURISCAL-GUAYABO	7,7	260	0	102	155
PURISCAL-FILA DE MORA	6,15	260	0	102	155
PURISCAL-ESTERO	3,9	260	0	102	155
PURICAL-SAN ANTONIO	2,59	260	0	102	155
PURISCAL-SAN ANTONIO ABAJO	5,75	280	0	102 EXT	155
PURISCAL-FILA DE ACOSTA	18,85	580	0	102 EXT	155
PURISCAL-PALMICHAL	17,6	580	0	102 EXT	155
PURISCAL-TABARCIA	13,3	415	0	102 EXT	155
PURISCAL-JARIS DE MORA	8,97	245	0	129	155
PURISCAL-NARANJITO	4	170	0	129	155
TARIFA MINIMA	0	170	0	129	155
CIUDAD QUESADA-ESQUIPULAS-PITALITO-BUENOS AIRES	28,02	1325	665	206	282
SAN JOSE-UPALA x CAÑAS	237	4915	3685	1510	515
CAÑAS-SAN JOSE	170,5	3260	2445	1510	515
CAÑAS-UPALA	67,24	1765	1325	1510	515
CAÑAS-BIJAGUA	40,68	1035	520	1510	515
BIJAGUA-UPALA	26,56	725	365	1510	515
SAN JOSE-UPALA x CAÑAS	237	4915	3685	1510	515
SAN JOSE-UVITA-BAHIA	239,3	6095	4570	639	613
SAN JOSE-DOMINICAL	218,4	5090	3820	639	613
SAN JOSE-HATILLO	210,1	4310	3235	639	613
SAN JOSE-MATAPALO	203,4	4275	3205	639	613

Fraccionamiento	*Distancia viaje (km)*	*Tarifa regular (colones)*	*Tarifa adulto mayor (colones)*	*Código ruta incorrecto*	*Código ruta correcto*
SAN JOSE-SAVEGRE	*193,9*	*4080*	*3060*	*639*	*613*
SAN JOSE-QUEPOS	*174*	*4080*	*3060*	*639*	*613*
SAN JOSE-PARRITA	*150*	*2765*	*2075*	*639*	*613*
SAN JOSE-ESTERILLOS	*130*	*2570*	*1930*	*639*	*613*
SAN JOSE-SAN PABLO DE LEON CORTES	*78,9*	*2115*	*1585*	*154*	*100*
SAN JOSE-SAN MARCOS DE TARRAZU	*74,1*	*1985*	*1490*	*154*	*100*
SAN JOSE-SANTA MARIA DE DOTA	*67,5*	*1820*	*1365*	*154*	*100*
SAN JOSE-EL EMPALME	*30,7*	*1070*	*535*	*154*	*100*
CARTAGO-SAN PABLO DE LEON CORTES	*55,5*	*1640*	*1230*	*154*	*100*
CARTAGO-SAN MARCOS DE TARRAZU	*50,7*	*1530*	*1150*	*154*	*100*
CARTAGO-SANTA MARIA DE DOTA	*44,1*	*1395*	*700*	*154*	*100*
SAN PABLO DE LEON CORTES-SANTA MARIA DE DOTA	*12,1*	*435*	*0*	*156*	*144*
SAN PABLO DE LEON CORTES-SAN MARCOS DE TARRAZU	*5,51*	*290*	*0*	*156*	*144*
HEREDIA-CUBUJUQUI-SAN JORGE-PARQUE LOS ANGELES	*2,53*	*290*	*0*	*442*	*424*
SAN JOSE-SIQUIRRES x BRAULIO CARRILLO	*97,75*	*1855*	*1390*	*701-701SD*	*701*
SAN JOSE-SIQUIRRES x BRAULIO CARRILLO	*97,75*	*1855*	*1390*	*701-701SD*	*701*
SAN JOSE-SIQUIRRES x TURRIALBA	*108,6*	*2225*	*1670*	*701-701SD*	*701*

Es importante aclarar que las tarifas asignadas sí se encuentran correctas, por lo que solo procede corregir el código de las rutas asignados a esas tarifas del cuadro anterior, contenidas en el Por tanto I de la resolución RE-0030-IT-2022.

(…)”

II. Conforme con los resultandos y considerandos que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es realizar de oficio la corrección de error material en cuanto a los códigos de las rutas de algunas tarifas incluidas en el Por Tanto I de la resolución citada, tal y como se dispone.

POR TANTO:

Fundamentado en las facultades conferidas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley Nº 7593) y sus reformas, en el Decreto Ejecutivo 29732-MP Reglamento a la Ley 7593, en la Ley General de la Administración Pública (Ley Nº 6227) y el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados (RIOF).

EL INTENDENTE DE TRANSPORTE
RESUELVE:

I. Rectificar de oficio el error material detectado en el Por Tanto I de la resolución RE-0030-IT-2022 del 2 de marzo de 2022, para que se lean correctamente los códigos de las rutas asignados a las tarifas según el cuadro de la sección B del informe IN-0077-IT-2022 del 11 de marzo de 2022.

II. Mantener incólume todo lo demás resuelto en la resolución RE-0030-IT-2022.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

MGP. Edward Araya Rodríguez, Intendente de Transporte.—1 vez.—Solicitud N° 334886.—(IN2022631081).

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

INSTITUCIÓN BENEMÉRITA

La Junta de Protección Social comunica acuerdo JD-154 correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la sesión extraordinaria 15-2022, celebrada el 10 de marzo de 2022, que en lo conducente dice:

La Junta Directiva ACUERDA:

La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, de conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N° 28025-MTSS-MP, dispone:

Artículo 1.- Derogar las definiciones Jugada multi-sorteos, Jugadas en avance y jugada multi-sorteos en avance contempladas, contempladas en el artículo 1° del Reglamento para el Juego Nuevos Tiempos, publicado en el Alcance No. 270 a La Gaceta No.231 del 04 de diciembre del 2019 y sus reformas y en el artículo 1° del Reglamento para el Juego 3 Monazos, publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre del 2019 y sus reformas.

En consecuencia, a partir de la vigencia de esta derogatoria (17 de marzo al 3 de abril) no se podrán realizar este tipo de jugadas para los sorteos programados a partir del 04 de abril del 2022.

Evelyn Blanco Montero, Gerente, Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones.—1 vez.—Solicitud N° 334517.—(IN2022631453).

NOTIFICACIONES

MINISTERIO CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

RESOLUCIÓN Nº 005-R-TEL-2022-MICITT.—PODER EJECUTIVO.—San José, a las nueve horas y treinta y un minutos de fecha nueve de febrero de 2022.

El Presidente de la República y la Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones proceden a emitir el acto final correspondiente al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO SANCIONATORIO instaurado en contra de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, pudiendo abreviarse su aditamento como S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, en su carácter de concesionaria del derecho de uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, respectivamente, otorgados mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, y formalizado mediante los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006. El objeto del procedimiento administrativo instaurado contra la empresa citada fue determinar la verdad real de los hechos en relación con la presunta infracción por parte de la empresa concesionaria de las condiciones y obligaciones de la concesión de frecuencias respecto a los umbrales de cumplimiento de cobertura, área de cobertura y tiempo de transmisión de al menos doce (12) horas diarias de los Canales físicos 56, 58 y 60, con fundamento en los artículos 3, 22 inciso 1) subinciso b), de la Ley N° 8642, “Ley General de Telecomunicaciones”, y 99 del Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET, “Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones”; así como el presunto incumplimiento en el pago del canon de regulación, el canon de reserva del espectro radioeléctrico y la contribución especial parafiscal al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley N° 8642, “Ley General de Telecomunicaciones”, y el artículo 74 inciso g) del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, “Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones”. Asimismo se le imputó a la empresa citada el incumplimiento de las obligaciones tributarias con la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 4755, “Código de Normas y Procedimientos Tributarios” y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”, así como el eventual incumplimiento de las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Nº 17, “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS”, y la contribución al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) de conformidad con el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”.

Dicho procedimiento administrativo se tramitó en el expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002 de la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante el **Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP** de fecha 18 de julio de 2002, el Poder Ejecutivo otorgó -mediante la figura de la cesión- a favor de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, la concesión para el uso y explotación de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60); para ser empleados en el servicio de radiodifusión televisiva por suscripción (o codificado), de clase Comercial con un área aproximada de alcance de la radiodifusora: Clase A: 30 km, Clase B: 60 km, y con ubicación del transmisor principal en el Parque Nacional Volcán Irazú. (Folios 42, 51, y 556 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

SEGUNDO: Que mediante los **Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR** de las 8:00 horas; **N° 074-2006-CNR** de las 8:30 horas, y **N° 075-2006-CNR** de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, el Ministerio de Gobernación y Policía de ese entonces en representación del Poder Ejecutivo, y la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, celebraron los contratos de concesión mediante los cuales se establecieron las condiciones, deberes y obligaciones que debe cumplir la empresa respecto a la utilización de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) otorgados mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, así como las obligaciones y derechos correlativos a su explotación con la clase de servicio para radiodifusión televisiva por suscripción, de índole comercial y con un área aproximada de cobertura Clase A 30 km y Clase B 60 km. En la Cláusula Novena de dichos documentos contractuales, se estableció como plazo de la concesión veinte (20) años, a partir de la entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones, Decreto Ejecutivo N° 31608-G de fecha 24 de junio de 2004, y publicado en el Alcance Nº 28 al Diario Oficial La Gaceta Nº 125 de fecha 28 de junio de 2004. (Folios 43 a 48, 52 a 57, 125 a 130, 149 a 157, 276 a 281 y 332 a 337 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TERCERO: Que mediante el **oficio Nº 1619-SUTEL-2010** de fecha 08 de setiembre de 2010, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) remitió al Viceministerio de Telecomunicaciones el ***"Informe de Ocupación de Frecuencias de los Servicios de Radiodifusión Televisiva en Costa Rica"***, el cual se integra como parte de la fundamentación del presente acto, en donde apuntó, en lo que corresponde a los Canales físicos 56, 58 y 60 otorgados a favor de la empresa concesionaria T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, lo siguiente: *"**Canal 56, canal de numeración par para el valle central*** [sic] ***según nota CR 57 PNAF.** // Al canal 56 mediante el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 075-2006 CNR* [sic] *se le otorgó una zona de cobertura de Clase A: 30Km* [sic]-*Clase B: 60Km* [sic] *y se le autorizó la instalación de un transmisor en el Volcán*

Irazú (este punto de repetición dependiendo de la orientación de las antenas podría brindar cobertura para la mayor parte del Valle Central, la Zona Atlántica y la Zona Norte (ambas parcialmente)) [sic]. *Según las mediciones efectuadas, el canal 56 está cubriendo únicamente el 77% del valle central* [sic] *(23% de no cobertura). (…) //* ***Canal 58, canal de numeración par para el valle central*** [sic] ***según nota CR 57 PNAF.*** *Al canal 58 mediante el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 074-2006 CNR* [sic] *se le otorgó una zona de cobertura de Clase A: 30Km* [sic]-*Clase B: 60Km* [sic] *y se le autorizó la instalación de un transmisor en el Volcán Irazú (este punto de repetición dependiendo de la orientación de las antenas podría brindar cobertura para la mayor parte del Valle Central, la Zona Atlántica y la Zona Norte (ambas parcialmente))* [sic]. *Según las mediciones efectuadas, el canal 58 está cubriendo únicamente el 69% del valle central* [sic] *(31% de no cobertura). (…) //* ***Canal 60, canal de numeración par para el valle central*** [sic] ***según nota CR 57 PNAF.*** *Al canal 60 mediante el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 037-2006 CNR* [sic] *se le otorgó una zona de cobertura de Clase A: 30Km* [sic]-*Clase B: 60Km* [sic] *y se le autorizó la instalación de un transmisor en el Volcán Irazú (este punto de repetición dependiendo de la orientación de las antenas podría brindar cobertura para la mayor parte del Valle Central, la Zona Atlántica y la Zona Norte (ambas parcialmente))* [sic]. *Según las mediciones efectuadas, el canal 60 está cubriendo únicamente el 85%, del valle central* [sic] *(15% de no cobertura), además se detectó que dicho canal se encuentra transmitiendo señales de televisión digital en el Valle Central, Pital, Los Chiles y Guápiles. Las mediciones en el Valle Central, la Zona Norte y la Zona Atlántica (Guápiles) obedecen a transmisiones del servicio por suscripción, que muy posiblemente opera con un transmisor instalado en el Volcán Irazú. (…)"*. A partir de lo anterior, la SUTEL recomendó al Poder Ejecutivo, lo siguiente: *"(…)* ***64.*** *Canal 56, se recomienda al Poder Ejecutivo, según artículo 3, inciso i) de la ley N° 8642, modificar el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 075-2006 CNR* [sic] *para restringir la zona de cobertura de la concesión y el respectivo contrato para que este canal únicamente opere en el Valle Central con el transmisor ubicado en el Volcán Irazú. (…) //* ***66.*** *Canal 58, se recomienda al Poder Ejecutivo, según artículo 3, inciso i) de la ley N° 8642, modificar el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 074-2006 CNR* [sic] *para restringir la zona de cobertura de la concesión y el respectivo contrato para que este canal únicamente opere en el Valle Central con el transmisor ubicado en el Volcán Irazú. (…) //* ***68.*** *Canal 60, se recomienda al Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1 b), Ley N° 8642, cancelar el derecho de uso y explotación del canal Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 037-2006 CNR* [sic], *otorgado mediante concesión y el respectivo contrato. (...)"*. (Folios 609 a 695 del expediente administrativo Nº DCNR-TV-2014-002).

CUARTO: Que mediante el **Informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012** de fecha 30 de julio de 2012, la Contraloría General de la República solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones que se proceda con la emisión de dictámenes técnicos de adecuación y demás acciones que deben tomarse para la atención de los trámites según el Transitorio IV de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones; dentro de lo cual se comprendería, adecuaciones, reasignaciones y **revocaciones o extinciones de títulos habilitantes** otorgados antes de la entrada en vigencia de la normativa actual de los diferentes servicios radioeléctricos, como serían los concedidos a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA. (Folios 696 a 749 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

QUINTO: Que mediante el **oficio Nº 5173-SUTEL-DGC-2012** de fecha 14 de diciembre del 2012, el cual se integra como parte de la fundamentación del presente acto, la SUTEL remitió al Viceministerio de Telecomunicaciones el ***"Informe de ocupación de los canales de radiodifusión televisiva, bandas de 54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz y 614*** [sic, léase MHz] ***a 806 MHz"***, en el cual, señaló lo siguiente: *"**6. ANÁLISIS DE RESULTADOS // (…) 6.54. Análisis del canal 56 (Canal Matriz)** (…) En ninguno de los 10 puntos de medición ubicados en los centros de ciudades principales, en los cuales el RGLT* [sic, léase RLGT] *especifica una intensidad de campo de al menos 80 dBµV/m para este canal, se cumple esa condición. **De esta manera, en los núcleos de las ciudades principales, el canal 56 tiene cobertura en el 0% de los puntos medidos**. En los demás puntos, donde el requerimiento del RLGT es de 64 dBµV/m, el canal 56 cumple en 3 de los 28 sitios, **para un cumplimiento en el 10,71% de los sitios fuera de los centros de ciudades principales.** (…) // De los 38 puntos de medición a nivel nacional, 18 se encuentran dentro de la zona de cobertura especificada por el Contrato Concesión* [sic] *(Turrialba, Paraíso, Cartago, Volcán Irazú, Tres Ríos, Coronado, San José, Cerro Bebedero, Escazú, Aserrí, Heredia, Alajuela, Grecia, Naranjo, Siquirres, Guácimo, Guápiles y Sarapiquí). De estos 18 puntos, La* [sic] *señal del canal 56 cumple con la intensidad de campo eléctrico especificada en el RLGT en 4 de ellos (Volcán Irazú, Paraíso, Naranjo y Guápiles), por lo que tiene cobertura en el 22,22% de los sitios que se encuentran dentro del área de cobertura asignada a este canal. // Sin embargo, si se ajusta el área de cobertura a lo especificado en el PNAF, solamente 13 puntos de medición dentro del Valle Central estarían en el área de cobertura: Volcán Irazú, Paraíso, Cartago, Tres Ríos, Coronado, San José, Aserrí, Heredia, Escazú, Cerro Bebedero, Grecia, Naranjo, y Alajuela. De estos 13 puntos, el canal 56 cumple en Naranjo, Paraíso y Volcán Irazú, para un cumplimiento en el 23,08% de los puntos en el área de cobertura ajustada a lo especificado por el PNAF. // Este canal no tiene cobertura en sitios no permitidos por el Contrato de Concesión. (…) // **6.54.1. Análisis de potencia sobre el piso de ruido (CNR) para el canal 56.**(…) De acuerdo con el criterio de nivel de recepción de la tabla 1, el canal 56 tiene una señal "buena" en el Volcán Irazú y de "no cobertura" en el resto del territorio nacional. // **6.54.2. Análisis del contenido de la señal del canal 56.** No fue posible observar el contenido del canal 56 en ninguno de los sitios de medición mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1). Esto es congruente con las mediciones de intensidad de campo eléctrico y potencia de la señal sobre el piso de ruido, las cuales tuvieron un resultado de "no cobertura" en todos los casos. (…) // **6.56. Análisis del canal 58 (Canal Matriz)** (…) En ninguno de los 10 puntos de medición ubicados en los centros de ciudades principales, en los cuales el RGLT* [sic] *especifica una intensidad de campo de al menos 80 dBµV/m para este canal, se cumple esa condición. **De esta manera, en los núcleos de las ciudades principales, el canal 58 tiene cobertura en el 0% de los puntos medidos**. **En los demás puntos, donde el requerimiento del RLGT es de 64 dBµV/m, el canal 58 cumple en 6 de los 28 sitios, para un cumplimiento en el 21,43% de los sitios fuera de los centros de ciudades principales**. (…) // De los 38 puntos de medición a nivel nacional, 18 se encuentran dentro de la zona de cobertura especificada por el Contrato Concesión* [sic]*: Turrialba, Paraíso, Cartago, Volcán Irazú, Tres Ríos, Coronado, San José, Cerro Bebedero, Escazú, Aserrí, Heredia, Alajuela, Grecia, Naranjo, Siquirres, Guácimo, Guápiles y Sarapiquí. La señal del canal 58 cumple con la intensidad de campo eléctrico especificada en el RLGT en 6 de estos 18 puntos (Cerro Bebedero, Naranjo, Guácimo, Guápiles, Paraíso y Volcán Irazú), por lo que este canal tiene cobertura en el 33,33% de los*

sitios que se encuentran dentro del área de cobertura asignada mediante el Contrato de Concesión. // Si se ajusta el área de cobertura a lo especificado en el PNAF, solamente 13 puntos de medición dentro del Valle Central estarían en el área de cobertura: Volcán Irazú, Paraíso, Cartago, Tres Ríos, Coronado, San José, Aserrí, Heredia, Escazú, Cerro Bebedero, Grecia, Naranjo, y Alajuela. De estos 13 puntos, el canal 58 cumple en Cerro Bebedero, Naranjo, Paraíso y Volcán Irazú, ***para un cumplimiento en el 30,77% de los puntos en el área de cobertura ajustada a lo especificado por el PNAF****. // Los resultados obtenidos permiten verificar que el canal 58 tiene solamente un transmisor localizado en el Volcán Irazú, lo cual se apega al Contrato de Concesión para este canal. //* ***6.56.1. Análisis de potencia sobre el piso de ruido (CNR) para el canal 58.*** *(…) // De acuerdo con el criterio de nivel de recepción de la tabla 1, el canal 58 tiene una señal 'óptima' en el Volcán Irazú y 'o cobertura' en el resto del territorio nacional. (…) //* ***6.56.2. Análisis del contenido de la señal del canal 58.*** *// En todos los sitios donde fue detectada la señal para el canal 58, se pudo determinar, mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1), que se transmite efectivamente contenido, comprobándose que este canal no solo tiene señal al aire, sino que brinda el servicio de televisión abierta. La figura 281 muestra el contenido del canal 58 tomado en el sitio de medición del Volcán Irazú, donde se midió una potencia sobre piso de ruido de 53,62 dBm (cobertura 'óptima'). La figura muestra que a* [sic] *la imagen es nítida, y no es afectada por el ruido, lo cual concuerda con la medición de nivel de señal sobre piso de ruido. (…) //* ***6.58. Análisis del canal 60 (Canal Matriz)*** *(…) En ninguno de los 10 puntos de medición ubicados en los centros de ciudades principales, en los cuales el RGLT* [sic] *especifica una intensidad de campo de al menos 80 dBµV/m para este canal, se cumple esa condición.* ***De esta manera, en los núcleos de las ciudades principales, el canal 60 tiene cobertura en el 0% de los puntos medidos****.* ***En los demás puntos, donde el requerimiento del RLGT es de 64 dBµV/m, el canal 60 cumple en 4 de los 28 sitios, para un cumplimiento en el 14,28% de los sitios fuera de los centros de ciudades principales****. (…) // De los 38 puntos de medición a nivel nacional, 18 se encuentran dentro de la zona de cobertura especificada por el Contrato Concesión* [sic]*: Turrialba, Paraíso, Cartago, Volcán Irazú, Tres Ríos, Coronado, San José, Cerro Bebedero, Escazú, Aserrí, Heredia, Alajuela, Grecia, Naranjo, Siquirres, Guácimo, Guápiles y Sarapiquí. De estos 18 sitios donde el contrato de concesión especifica la cobertura, el canal 60 cumple con la intensidad de campo eléctrico especificado en el RLGT en 4 de ellos (Guápiles, Naranjo, Paraíso y Volcán Irazú), por lo que tiene cobertura en el 22,22% de los sitios dentro del área de cobertura designada por el Contrato de Concesión. // Sin embargo, si se ajusta el área de cobertura a lo especificado en el PNAF, solamente 13 puntos de medición dentro del Valle Central estarían en el área de cobertura: Volcán Irazú, Paraíso, Cartago, Tres Ríos, Coronado, San José, Aserrí, Heredia, Escazú, Cerro Bebedero, Grecia, Naranjo, y Alajuela. De estos 13 puntos, el canal 60 cumple en Naranjo, Paraíso y Volcán Irazú,* ***para un cumplimiento en el 23,08% de los puntos en el área de cobertura ajustada a lo especificado por el PNAF****. // Si se evalúa la cobertura de este canal en todo el Valle Central, de los 14 sitios de medición ubicados dentro de esta área geográfica, el canal 60 brinda cobertura en 3 de ellos, para un porcentaje de cobertura de 21,43% de los puntos de medición dentro del Valle Central. (…) //* ***6.58.1. Análisis de potencia sobre el piso de ruido (CNR) para el canal 60.*** *(…) // De acuerdo con el criterio de nivel de recepción de la tabla 1, el canal 60 tiene nivel de señal 'bueno' en el Volcán Irazú. El resto de sitios presenta un nivel de potencia sobre piso de ruido de 'no cobertura' (…) //* ***6.58.2. Análisis del contenido de la señal del canal 60*** *// En el único sitio donde se pudo observar el contenido de la programación del canal 60 fue en el Volcán Irazú. Se pudo*

determinar, mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1), que se transmite efectivamente contenido, comprobándose que este canal no solo tiene señal al aire, sino que brinda el servicio de televisión abierta. La figura 291 muestra el contenido del canal 60 tomado en el Volcán Irazú, donde se presenta una potencia sobre piso de ruido de 42 dBm (calidad buena). La figura muestra que a la imagen le falta nitidez, y se ve un poco afectada por el ruido, lo que es consecuente con la potencia de la señal sobre el ruido medida en ese sitio. También se comprueba el resultado de nivel de señal sobre piso de ruido de 'no cobertura' en el resto de las mediciones, ya que solo en el Volcán Irazú se pudo observar el contenido de la programación. Es importante anotar que, a pesar de que el canal 60 es un canal matriz, las transmisiones demuestran que está siendo usado como repetidor del canal 58. (...) ***7. ANÁLISIS DE OCUPACIÓN // 7.1. Análisis de ocupación de los canales de televisión según contratos y Acuerdos Ejecutivos // 7.2.3. Respeto*** [sic] ***a los canales 38 al 69 en la banda UHF*** *// (...) El porcentaje de* ***no cobertura del canal 56 (canal matriz) con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 23.0% a un 76.9% en el Valle Central.*** *(...) // En lo relacionado con el canal 58 (canal matriz), el porcentaje de* ***no cobertura con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 31.0% a un 69.2% en el Valle Central****. (...) //* ***En el caso del canal 60 (canal matriz), el porcentaje de no cobertura con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 15.0% a un 78.6% en el Valle Central".*** (El resaltado no corresponde al original). (Folios 750 a 909 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

SEXTO: Que en fecha 19 de julio de 2013, el Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones emitió el **Informe Técnico Nº MICITT-DER-INF-001-2013** de fecha 19 de julio de 2013 denominado *"Análisis de informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 5173-SUTEL-DGC-2012, sobre 'Ocupación de los Canales de radiodifusión televisiva, bandas de 54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz y 614 MHz a 806 MHz'"*, el cual se incorpora dentro de la fundamentación del presente acto. En dicho informe técnico, de interés para el caso en concreto, el citado Departamento concluyó y recomendó lo siguiente: *"****7. Conclusiones*** *(...) la cobertura de los canales (...) 56, 58, 60 (...) empeoró en más de un 20%* [con respecto a las mediciones realizadas en el 2010 por la SUTEL]. *(...)* ***8. Recomendaciones*** *(...) se proceda a la recuperación del espectro radioeléctrico que no esté siendo utilizado y asignarlo de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el objetivo de asegurar una competencia efectiva. (...)".* (Folios 1011 a 1030 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

SÉPTIMO: Que la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante **oficio N° 1825-SUTEL-SCS-2014** de fecha 28 de marzo de 2014, remitió al Viceministerio de Telecomunicaciones el dictamen técnico emitido mediante **oficio N° 1497-SUTEL-DGC-2014** de fecha 12 de marzo de 2014 denominado *"Dictamen Técnico sobre la adecuación de los títulos habilitantes de la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A* [sic], *Red de Televisión por suscripción de acceso inalámbrico (señal codificada)"*, aprobado por su Consejo mediante el Acuerdo Nº 013-018-2014, adoptado en la sesión ordinaria N° 018-2014, celebrada el día 19 de marzo de 2014, el cual se integra como parte de la fundamentación del presente acto, en donde dicha Superintendencia recomendó: *"(...) c) Recomendar al Poder Ejecutivo la aplicación del artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, para que se valore en un*

procedimiento administrativo la extinción del derecho de explotación otorgado en relación con el uso de los canales 56, 58 y 60 (…)". Lo anterior, con fundamento en las consideraciones, que para lo que interesa al presente análisis, en lo conducente se proceden a transcribir: *"**3.3 Mediciones realizadas en 2013 // En las mediciones efectuadas en 2013 se constató que la cobertura de los canales 56, 58 y 60 no cumple con los parámetros establecidos en el PNAF en ninguno de los puntos de medición**. (…) En este sentido, la empresa en mención actualmente no cuenta con puntos de transmisión para los canales 56, 58 y 60 (no opera la red de televisión por suscripción vía inalámbrica con señal codificada). // **(…) no se obtuvieron niveles de cobertura que cumplan con el umbral establecido en ninguno de los puntos de medición incluidos en el respectivo Contrato de Concesión, por lo que con base en dichos niveles, se considera que estos canales no se encuentran en operación.** (…) // **6. Sobre el pago del canon de reserva del espectro** (…) a pesar de que TV de San José UHF S.A.* [sic] *tiene otorgados canales 56, 58 y 60 atribuidos en el PNAF para el servicio de radiodifusión para televisión de acceso libre, dado que en título habilitante respectivo se otorgaron (…) para brindar el servicio de televisión por suscripción (lo cual hoy en día corresponde a la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público), se considera sujeto pasivo de este canon. // En este sentido, al día de hoy se han puesto a cobreo* [sic] *tres periodos, correspondientes al 2010, 2012 y 2013. Asimismo, está puesto al cobro el canon para el financiamiento del periodo 2014 pagadero este mismo año, con fecha limite* [sic] *el 15 de marzo. // Así las cosas, del registro de pagos recibidos por parte de los sujetos pasivos del canon actualizado al 31 de diciembre de 2013 por parte de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda (validado con la base de datos remitida por dicho Ministerio a esta Superintendencia mediante el oficio SDPEC-009-2014 del 05 de febrero de 2014), la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] *no ha cancelado ninguno de los periodos indicados. Al respecto, la suma del monto calculado para la empresa en mención para los periodos 2010, 2012 y 2013 asciende a ₡74.629.321,89 (setenta y cuatro millones seiscientos veintinueve mil trescientos veintiún colones con ochenta y nueve céntimos). // Finalmente, respecto al canon de reserva del espectro para el financiamiento del periodo 2014 la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] *debe cancelar ₡ 45.928.269,39 (cuarenta y cinco millones novecientos veintiocho mil doscientos sesenta y nueve con treinta y nueve céntimos). (…) // **7.1 Sobre la no operación de las frecuencias de los canales 56, 58 y 60 otorgados a la empresa TV de San José UHF S.A.*** [sic] *// (…) a través del artículo 99 del RLGT, se estableció que 'las estaciones al servicio de radiodifusión televisiva deberán cumplir con un mínimo de transmisión de doce horas diarias' con el fin de asegurar el beneficio de la población costarricense y el uso eficiente del espectro radioeléctrico, condición que evidentemente no se cumple por parte del concesionario de los canales 56, 58 y 60. // (…) de los evaluaciones realizadas por esta Superintendencia de conformidad con los artículos 101 y 105 del RLGT durante el 2013, se evidencia que los canales 56, 58 y 60 no se encuentran en utilización. Lo anterior refleja el incumplimiento de la normativa citada, por lo tanto procede por parte de esta Superintendencia recomendar al Poder Ejecutivo la apertura del respectivo procedimiento administrativo contra este concesionario para la recuperación del recurso escaso. (…) // **8. Conclusiones** (…) // **8.2 Ocupación del Espectro** // (…) A partir de los resultados de las mediciones efectuadas por esta Superintendencia durante los años 2010, 2012 y 2013 se evidenció el uso irregular del espectro (operación de un canal matriz con su propio contenido) y su posterior no uso. // **8.3 Sobre la operación de la red de la empresa TV de San José UHF S.A.* **[sic]** *(…) • La no operación de los citados canales, concesionados a la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] ***priva a la población costarricense del beneficio de contar con***

el contenido de programación en los canales de libre acceso otorgados en nuestro país. *(…)"*. (El subrayado es autoría propia). (Folios 02 a 17, 98 a 121, 245 a 272 y 305 a 328 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

OCTAVO: Que el Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico (en adelante pudiendo abreviarse como DAER), mediante el memorándum Nº MICITT-GAER-MEMO-026-2014 de fecha 17 de marzo de 2014, comunicó, entre otros, el **Informe Técnico N° MICITT-GAER-INF-031-2014** denominado *"Análisis de la concesión de la empresa T.V. de San José UHF S.A.* [sic] *(canal 56)"*, de fecha 14 de marzo de 2014, el cual se integra como parte de la fundamentación del presente acto; en el que se analizó la ocupación del espectro radioeléctrico del Canal físico 56, considerando los resultados del oficio Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012 emitido por la SUTEL. En dicho informe técnico el DAER concluyó y recomendó lo siguiente: *"**4. Conclusiones** // (…) • Que la protección constitucional del espectro radioeléctrico, su condición de recurso escaso y estratégico, que debe ser usado de manera óptima, eficiente, equitativa, no discriminatoria y transparente impiden considerar que el espectro radioeléctrico es un bien demanial 'como cualquier otro'. // • Que el Poder Ejecutivo puede otorgar frecuencias con una cobertura dada; sin embargo, el radiodifusor debe de cumplirla de manera real y le corresponderá a la SUTEL el verificarlo. // (…) • Que según las mediciones realizadas (del informe 1619-SUTEL-2010 y 5173-SUTEL-DGC-2012) (…) canal 56 de televisión tiene una no cobertura mayor al 75% de los puntos evaluados dentro del área designada por el Contrato de Concesión; por lo que estaría actuando de forma contraria a lo dispuesto en sus títulos habilitantes y el marco legal aplicable. // • Adicionalmente se está transmitiendo señal sin ningún tipo de contenido, esta situación contradice al RLGT (…) en su artículo 99 (…). Según el marco normativo (…) se debe prestar el servicio de radiodifusión televisiva de forma regular, transmitiendo un mínimo de doce horas diarias. // **5. Recomendaciones** // (…) • En el marco del ordenamiento del espectro radioeléctrico, y en vista de los principios rectores definidos en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), el presente informe técnico acoge el informe Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 en lo relativo al espectro concesionado a la empresa T.V. de San José UHF S.A. [sic] (canal 56), y se recomienda proceder como corresponda jurídicamente tomando en consideración que dicho concesionario no cuenta con la cobertura indicada por el Contrato de Concesión* [sic, léase en su lugar *Acuerdo Ejecutivo*] *Nº 2758-2002 MSP. (…)".* (Folios 18 a 31 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

NOVENO: Que mediante **oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014**, de fecha 03 de diciembre de 2014, denominado ***"Principales resultados del estudio de utilización de la banda destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHz)"***, el cual se integra como parte de la fundamentación del presente acto, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió al Poder Ejecutivo los resultados de las mediciones realizadas en 70 sitios distintos entre los meses de febrero y setiembre de 2014 para cada uno de los 67 canales existentes, estableciendo que: *"(…). Entre los canales 52 y 69, el promedio de puntos con cobertura es de tan solo 4,44%, y 16 canales (96 MHz) no tienen cobertura en ningún punto del territorio nacional (…)".* Asimismo se realizó una *"(…) comparación entre las obligaciones de cobertura según los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones realizadas en campo (…)",* señalando que *"(…) el 97% de las concesiones no cumplen con sus obligaciones contractuales*

establecidas en sus títulos habilitantes, siendo que únicamente los canales 8 y 10 cumplen con su obligación de cobertura (...)"; por ende como resultado respecto a los Canales físicos 56 (722 MHz a 728 MHz), 58 (734 MHz a 740 MHz) y 60 (746 MHz a 752 MHz) la empresa concesionaria T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, no ha cumplido con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante otorgado mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002. (Folios 1260 a 1266 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DÉCIMO: Que mediante el **oficio Nº 00177-SUTEL-SCS-2016** de fecha 07 de enero de 2016, recibido en el Viceministerio de Telecomunicaciones en igual fecha, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el **oficio Nº 08429-SUTEL-DGC-2015** de fecha 8 de diciembre de 2015 aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 008-067-2015, adoptado en la sesión ordinaria N° 067-2015, celebrada en fecha 17 de diciembre de 2015, denominado ***"Principales resultados del estudio de utilización de la banda destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHz)"***, sobre los resultados de las mediciones realizadas en 155 sitios distintos entre los meses de enero a setiembre del año 2015 para cada uno de los 67 canales existentes, la SUTEL señaló lo siguiente: *"(...) existe una deficiente utilización del espectro en la banda de radiodifusión televisiva, donde tal y como se señaló, los concesionarios actuales no logran alcanzar en promedio un cumplimiento del 12% respecto de sus obligaciones de cobertura establecidas en los respectivos títulos habilitantes, a pesar de las características favorables que presenta la banda en cuanto a propagación. (...)"* y se realizó una *"(...) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (...)",* señalando que *"(...). Entre los canales 52 y 69, el promedio de puntos de cobertura es del 2%. Además, se tiene que del total de 67 canales 24 de ellos presentan coberturas inferiores al 2%, de los cuales 10 canales (60 MHz) no cumplen con los niveles mínimos de cobertura en ningún punto del territorio nacional.(...)",* **dando como resultado respecto a los Canales físicos 56 (722 MHz a 728 MHz), 58 (734 MHz a 740 MHz) y 60 (746 MHz a 752 MHz), otorgados a la empresa concesionaria T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, reporta como porcentaje de cobertura un 0%, por lo que, a la luz de dichos resultados, se está en presencia de un eventual y aparente incumplimiento de las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante (Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002)**. (Folios 1267 a 1277 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

UNDÉCIMO: Que mediante el **oficio Nº 06700-SUTEL-SCS-2016** de fecha 12 de setiembre de 2016, recibido en el Viceministerio de Telecomunicaciones en igual fecha, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el **oficio N° 05817-SUTEL-DGC-2016** de fecha 10 de agosto de 2016 aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 039-048-2016, adoptado en la sesión ordinaria N° 048-2016, celebrada en fecha 31 de agosto de 2016, denominado ***"Informe sobre la recaudación del cano de reserva del espectro y estado de cuenta de concesionarios y permisionarios del espectro"***. En dicho informe la SUTEL indicó para el caso de marras, que a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA le correspondía pagar por concepto de canon 2015 la suma de ₡45 423 098,62 colones, de los cuales solo canceló el monto de ₡1 000 colones. En virtud de lo anterior, la

SUTEL señaló en dicho informe lo siguiente: *"**2.2 Pagos parciales (inferiores al calculado por SUTEL) por diferencia de interpretación** // Los concesionarios (…) TV de San José UHF S.A.* [sic] *(…) corresponden a casos en los cuales existen diferencias respecto al pago con lo indicado por la SUTEL. // En este sentido, debe señalarse que el artículo 63 de la Ley N° 8642 por una parte, señala que el monto 'por cancelar por parte de los concesionarios será calculado por la SUTEL considerando los parámetros' detallados, y por otra dispone que '[e]l monto por pagar por parte del contribuyente de este canon será determinado por este mediante una declaración jurada'. // Sobre este tema, es criterio de esta Dirección que la autodeterminación especificada en el artículo indicado, no se ajusta a la realidad considerada por la Ley al momento de la creación de la tasa, ya que el artículo 63 dispone expresamente los elementos que deben ser considerados por SUTEL para la determinación de dicha tasa. Asimismo, dicha norma para el caso de los contribuyentes se refiere únicamente al trámite de pago y no así a la determinación del cálculo de la suma a pagar. En otras palabras, la norma se refiere a la autonomía de cada contribuyente para presentar su declaración de pago, pero la misma se debe basar en el monto determinado por la SUTEL, en aplicación de los principios establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. // Así las cosas, no resulta aceptable para esta Superintendencia la interpretación que realizan los concesionarios indicados en cuanto a que son ellos, en su ámbito de autonomía, quienes disponen el monto a pagar, por cuanto no tendría lógica que esta Superintendencia sea la encargada de interpretar los parámetros dispuestos en la Ley y establecer la fórmula de cálculo necesaria. (…) // **4. 1. Sobre los concesionarios morosos según los datos remitidos por el Ministerio de Hacienda** // En la siguiente tabla se muestran los concesionarios que han presentado situaciones de no pago o pago parcial del canon en algún periodo puesto al cobro, ya sea por pago parcial del monto calculado por SUTEL o no pago, según los datos remitidos por el Ministerio de Hacienda, sobre los que se considera necesario solicitar al Poder Ejecutivo el inicio de los procedimientos aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 22 de la Ley N° 8642 (…)".* Sobre este punto la SUTEL indicó que, de conformidad con lo señalado por el Ministerio de Hacienda, se registró el no pago de los periodos 2010, 2012, 2013 y 2014, y el pago parcial del periodo 2015 por parte de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA. Debido a lo anterior, la SUTEL establece en dicho dictamen que: *"Tomando en consideración la importancia del correcto pago del canon del espectro radioeléctrico, se constituyó en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, que el atraso de al menos 3 meses en el pago de las tasas y cánones establecidos en dicha ley corresponde a una causal para la resolución del contrato de concesión. (…)"* Por ende recomienda al Poder Ejecutivo *"(…) proceda con la toma de acciones para la apertura de los procedimientos respectivos para la eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 22, inciso 1, subinciso d) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, para el caso de los concesionarios y permisionarios morosos del espectro incluyendo tanto a aquellos que han realizado pagos parciales como a los que no han realizado pago alguno (…)"* (Folios 1278 a 1290 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DUODÉCIMO: Que la Unidad de Control Nacional de Radio, mediante el **oficio Nº OF-MICITT-UCNR-2016-164** de fecha 13 de diciembre de 2016, le solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones una ampliación sobre el Informe Técnico N° 1497-SUTEL-DGC-2014 de fecha 12 de marzo de 2014 denominado *"Dictamen Técnico sobre la adecuación de los títulos habilitantes de la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A* [sic], *Red de Televisión por*

suscripción de acceso inalámbrico (señal codificada)", sobre los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) otorgados a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA. (Folios 49, 122, 274 y 329 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DECIMOTERCERO: Que mediante el **oficio Nº 00345-SUTEL-SCS-2017** de fecha 12 de enero de 2017, recibido en el Viceministerio de Telecomunicaciones en igual fecha, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el **oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016** de fecha 13 de diciembre de 2016 aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 009-074-2016, adoptado en la sesión ordinaria N° 074-2016, celebrada el día 19 de diciembre de 2016, denominado ***"Principales resultados del estudio de utilización de la banda destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHz)"***, sobre los resultados de las mediciones realizadas en 170 sitios distintos entre el mes de mayo al mes agosto del año 2016 para cada uno de los 67 canales existentes, señalando que: *"(...) Entre los canales 52 y 69, el promedio de puntos con cobertura es del 0,33% (...)"* y se realizó una *"(...) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (...)",* dando como resultado respecto los Canales físicos 56 (722 MHz a 728 MHz), 58 (734 MHz a 740 MHz) y 60 (746 MHz a 752 MHz), una cobertura a nivel nacional de 0%, por lo que nuevamente para el año 2016, conforme los datos de la SUTEL, la empresa concesionaria T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, aparentemente no cumplió con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante (Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002). (Folios 1291 a 1302 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DECIMOCUARTO: Que la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante el **oficio N° 01882-SUTEL-SCS-2017** de fecha 02 de marzo de 2017, comunicó al Viceministerio de Telecomunicaciones el dictamen técnico emitido mediante **oficio N° 01084-SUTEL-DGC-2017** de fecha 06 de febrero de 2017 denominado *"Reiteración de las recomendaciones para la apertura de un procedimiento administrativo para la eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 8642 por posibles incumplimientos de la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] *canales de televisión 56, 58 y 60"*, aprobado por su Consejo mediante Acuerdo Nº 011-016-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 016-2017, celebrada en fecha 22 de febrero de 2017, el cual se integra como parte de la fundamentación del presente acto, y es remitido en respuesta al oficio Nº OF-MICITT-UCNR-2016-164 de fecha 13 de diciembre de 2016. En dicho dictamen técnico la SUTEL señaló, en lo que interesa, lo siguiente: *"**2. Sobre el pago del canon de reserva del espectro** // (...) al día de hoy se han puesto a cobro cinco periodos, correspondientes al 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. De igual forma se encuentra próximo a salir a cobro el periodo correspondiente al año 2016. // Así las cosas, del registro de pagos recibidos por parte de los sujetos pasivos del canon actualizado al 01 de febrero de 2017 por parte de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, se extrae que la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] *no ha cancelado efectivamente ninguno de los periodos indicados (para los periodos 2014 y 2015 canceló ₡1.000 en cada uno). Al respecto, la suma del monto calculado para la empresa en mención para los pendientes asciende a ₡164.611.266,23 (ciento sesenta y cuatro millones seiscientos once mil doscientos sesenta y*

seis colones con veintitrés céntimos) en lo que respecta al canon en mención. (…) // Es conveniente reiterar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 22 de [sic] *inciso c) de la Ley N° 8642, la no cancelación de las tasas y cánones establecidos en dicha Ley, podría constituirse en una causal de revocación de la concesión para el titular. (…) //* ***3. Respecto al oficio OF-MICITT-UCNR-2016-164*** *// (…) es recomendable la apertura de un procedimiento de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 8642 para extinción del derecho de concesión, máximo considerando, entre otras cosas, lo ya manifestado en este oficio así como el incumpliendo* [sic, léase incumplimiento] *en las obligaciones contractuales h) y i)* [sic] *sobre la operación en forma regular con un mínimo de doce horas diarias y el interrumpir transmisiones por más de tres meses sin causa justificada y validada por la Administración Concedente (ver Contratos de Concesión de los canales citados), además del no pago de las tasas y cánones establecidos por Ley".* Finalmente, la SUTEL recomienda lo siguiente: *"(…)* ▪ *Reiterar al Poder Ejecutivo la necesidad de la apertura al amparo del artículo 22 de la Ley N° 8642 de los procedimientos administrativos relacionados con la posible recuperación de los canales 56, 58 y 60, otorgados a la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic]*, todo lo cual contribuya al fiel cumplimiento de los objetivos y principios establecidos por el ordenamiento vigente en telecomunicaciones, en especial la optimización de los recursos escasos".* (Folios 65 a 79, 131 a 143, 282 a 294 y 338 a 350 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DECIMOQUINTO: Que mediante el **oficio N° MICITT-DCNT-DNPT-OF-080-2019** de fecha 14 de marzo de 2019, el Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones de la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones previno a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud de la morosidad patronal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y con Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) así como la morosidad en el pago de sus obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda, a fin de que presentara certificaciones extendidas por dichas instituciones, en las que consten que la empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones, para lo cual se le otorgó el plazo de 10 días hábiles. (Folios 966 a 972 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DECIMOSEXTO: Que mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2019 el representante legal de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, remitió copia del *"Convenio de Pago"* de fecha 18 de marzo de 2019 suscrito con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el cual se comprometía a realizar pagos en tractos del monto que se adeudaba con esta institución. Sobre la morosidad con el FODESAF y la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda, la empresa no se pronunció. (Folio 973 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DECIMOSÉPTIMO: Que mediante el **oficio Nº MICITT-DCNT-UCNR-OF-022-2021** de fecha 08 de marzo de 2021, la Unidad de Control Nacional de Radio le solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones informe sobre la ocupación de frecuencias otorgadas a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cumplimiento de intensidad de señal en los puntos de medición, mediciones de las transmisiones y certificación del historial de las obligaciones materiales y formales que derivan del canon de reserva del espectro, canon de regulación y contribución parafiscal de la empresa. (Folios 1242 y 1243 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DECIMOCTAVO: Que mediante el **oficio Nº 04218-SUTEL-SCS-2021** de fecha 20 de mayo de 2021, recibido en el Viceministerio de Telecomunicaciones en igual fecha, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el **oficio N° 03762-SUTEL-DGC-2021** de fecha 07 de mayo de 2021, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 013-040-2021, adoptado en la sesión ordinaria N° 040-2021, celebrada el día 20 de mayo de 2021, denominado ***"Atención a solicitud de actualización de información requerida por el MICITT mediante oficio MICITT-DCNT-UCNR-OF-022-2021 respecto al uso de las frecuencias por parte de la empresa TV San José UHF S.A.*** [sic]***"***, en el que la SUTEL indicó lo siguiente: *"**1. Verificación del cumplimiento de la intensidad de señal.** // (…) se brinda el resultado de las mediciones que fueron llevadas a cabo por la Dirección General de Calidad, para la determinación del uso del espectro atribuido en el Plan Nacional de Atribución del Espectro* [sic] *(PNAF) para el servicio de radiodifusión televisiva (…) se obtiene que para los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) del título habilitante otorgado mediante Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR, N° 074-2006-CNR y N° 075-2006-CNR, todos de fecha 23 de octubre de 2006, por parte de la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A.* [sic]*, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704 no se cumplen con los umbrales de cobertura detallados en la tabla 1, lo cual representa un 0% de cumplimiento cobertura con respecto a la totalidad de los sitios evaluados. // Además, más allá del cumplimiento o no de los umbrales señalados, se extrae de las mediciones realizadas la no utilización de las frecuencias por parte de la empresa en cuestión, siendo que en todos los sitios de medición únicamente se detectó piso de ruido. // **2. Verificación del cumplimiento de la obligación de transmisión de un mínimo de doce (12) horas diarias.** // (…) Para la realización de las mediciones se utilizó una rutina automática de medición que registró en cada una de las 8 estaciones del SNGME 10 minutos continuos por cada hora durante las 24 horas del día, desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo de 2021, además, se adjunta como parte este informe los archivos con los resultados obtenidos de las mediciones en cada una de las estaciones de monitoreo del SNGME utilizadas de los cuales se extrae de forma consistente con lo señalado en la sección anterior, que no existe presencia de señal en los citados segmentos de frecuencias y por ende no se cumple con el tiempo de transmisión señalado. // **3. Verificación del cumplimiento del pago del canon de reserva del espectro, canon de regulación y contribución parafiscal** // (…) Sobre este particular, se han realizado las consultas respectivas a fin de valorar la aplicación de los citados cánones al servicio utilizado por la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A* [sic]*, por lo que una vez se cuente con el criterio, se procederá a complementar el presente informe técnico".* (Lo subrayado no es parte del original). En virtud de lo anterior, la SUTEL concluyó y recomendó lo siguiente: *"**4. Conclusiones** // De conformidad con los resultados descritos en el presente informe es posible concluir que el rango de frecuencias comprendido entre 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60); otorgadas a la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A.* [sic]*, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, no se encuentran en operación en el periodo evaluado*

*del 2021. // **5. Recomendaciones** (…) // **5.2.** Informar al Ministerio de Ciencia, [Innovación,[1]] Tecnología y Telecomunicaciones que los canales 56 (segmento de frecuencia 722 MHz a 728 MHz), 58 (segmento de frecuencia 734 MHz a 740 MHz) y 60 (segmento de frecuencia 746 MHz a 752 MHz) no se encuentran en utilización, por cuanto de las mediciones se extrae que únicamente se detecta el piso de ruido para los segmentos de espectro (…)"*. (Folios 1252 a 1256 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

DECIMONOVENO: Que mediante el **memorándum Nº MICITT-DCNT-UCNR-MEMO-008-2021** de fecha 20 de mayo de 2021, la Unidad de Control Nacional de Radio de la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, solicitó al Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico que emitiera criterio técnico respecto del dictamen técnico emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante el oficio N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021 aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 013-040-2021, adoptado en la sesión ordinaria N° 040-2021, celebrada el día 20 de mayo de 2021, denominado *"Atención a solicitud de actualización de información requerida por el MICITT mediante oficio MICITT-DCNT-UCNR-OF-022-2021 respecto al uso de las frecuencias por parte de la empresa TV de San José UHF S.A."*. (Folios 1257 y 1258 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO: Que el Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico mediante **memorándum Nº MICITT-DERRT-DAER-MEMO-088-2021** de fecha 10 de junio de 2021, comunicó el criterio técnico rendido mediante el **Informe Técnico N° MICITT-DERRT-DAER-INF-085-2021** de fecha 10 de junio de 2021 denominado *"Análisis técnico del uso y explotación de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) del concesionario TV SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic]*"* el cual se integra como parte de la fundamentación del presente acto, mediante el cual dicho Departamento concluyó y recomendó lo siguiente: *"**8. Conclusiones** // Según el análisis anterior, y de conformidad con las recomendaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones establecidas en los dictámenes técnicos Nº 1619-SUTEL-2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012, N° 1497-SUTEL-DGC-2014, N° 8453-SUTEL-DGC-2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016, N° 01084-SUTEL-DGC-2017, Nº 03505-SUTEL-DGC-2019 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021, este Departamento establece las siguientes conclusiones: //(…) De forma general, y según lo analizado en el presente informe técnico, los resultados contenidos en dichos oficios en cuanto a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de cobertura a partir de las mediciones de intensidad de campo realizadas por la SUTEL para cada año respectivamente, para el concesionario del* [sic] *canales físicos 56, 58 y 60 de televisión, resultan ser consistentes, y por ende se concluye por parte de este Departamento que existen técnicamente indicios de posible incumplimiento por parte de TV SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic] *de las obligaciones detalladas en el título habilitante para los canales 56, 58 y 60. // Del análisis de los dictámenes técnicos mencionados anteriormente, se concluye que los procedimientos o protocolos de medición empleados por la SUTEL han variado históricamente desde que se emitió el primer informe en el año 2010; se*

[1] Así denominado el Ministerio en la actualidad de conformidad con la Ley N° 9971, "Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación", emitida en fecha 11 de mayo de 2021 y publicada en el Alcance N° 106 al Diario Oficial La Gaceta N° 102 de fecha 28 de mayo de 2021.

han dado cambios en torno a los detalles y rigurosidad técnica del procedimiento aplicado, y que, al contemplar dichos protocolos la normativa técnica emanada por parte de la UIT, se asegura la precisión en las mediciones obtenidas y en la recolección de la información producto de dichas mediciones, por lo que es posible técnicamente reiterar por parte de este Departamento la existencia de los indicios de posible incumplimiento señalados en la conclusión anterior a partir de las mediciones realizadas con los procedimientos y protocolos implementados por la SUTEL. // El Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAE [sic]*), establece en su artículo 99 que las estaciones al servicio de radiodifusión sonora y televisiva deberán cumplir con un mínimo de transmisión de doce horas diarias, por lo tanto, los concesionarios de radiodifusión televisiva deben prestar el servicio de radiodifusión televisiva de forma regular, transmitiendo un mínimo de doce horas diarias; por lo que a partir de lo expuesto por la SUTEL en el informe 03762-SUTEL-DCG-2021* [sic]*, existe en apariencia un incumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo por parte de la empresa TV SAN JOSE UHF, S.A.* [sic]*, en los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) del título habilitante otorgado mediante Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP.// (…) En el dictamen técnico Nº 01497-SUTEL-DGC-2014* [sic]*, se recomendó la aplicación del artículo 22 de Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, y considerar la apertura de un procedimiento administrativo del derecho de explotación otorgado en relación con el uso de los canales 56, 58 y 60 de la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic]*, lo cual también es reiterado en el dictamen técnico Nº 03505-SUTEL-DGC-2019. // Según lo mencionado en los dictámenes técnicos Nº 01497-SUTEL-DGC-2014* [sic] *y Nº 03505-SUTEL-DGC-2019, la Superintendencia de Telecomunicaciones expone los elementos por los cuales a su criterio existen posibles vicios de nulidad en la emisión del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP; así como, los resultados de las mediciones mediante las cuales se concluye que existe un presunto uso ineficiente del recurso escaso. // De conformidad con lo mencionado en los dictámenes técnicos Nº 01497-SUTEL-DGC-2014* [sic]*, N° 01084-SUTEL-DGC-2017, en apariencia la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] *no ha cancelado ninguno de los periodos de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo que puede existir un incumplimiento de las obligaciones pecuniarias regulatorias atinentes; por lo que este Departamento resalta y recomienda al Departamento de Normas y Procedimientos [en Telecomunicaciones] la necesidad de verificar que la empresa TV SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic] *se encuentre al día con las obligaciones regulatorias, como pago de canon de regulación y reserva de espectro, así como del pago de otras obligaciones y cargas sociales pertinentes antes de continuar con la valoración del presente informe. // En virtud del análisis realizado en este informe y lo establecido en el PNAF, este Departamento concluye técnicamente que, los segmentos de 722 MHz a 728 MHz, de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz del concesionario TV SAN JOSE UHF, S.A.* [sic]*, se atribuyen actualmente para el servicio móvil para desarrollo de sistemas IMT. // El uso de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz, de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz (canales físicos 56, 58 y 60) que se indica en el título habilitante [Acuerdo Ejecutivo] N° 2758-2002 MSP de TV SAN JOSE UHF, S.A.* [sic]*, no se encuentra alineado técnicamente a lo dispuesto por la normativa vigente (Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET y sus reformas), ni tampoco a las disposiciones técnicas que figuraban en el Decreto Ejecutivo N° 27554-G, vigente al momento de la emisión del título habilitante en referencia, ya que en dicho Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP se asignan estos segmentos como 'Radiodifusión Televisiva por Suscripción', de ahí que este uso muestra indicios de*

encontrarse en roce con la normativa técnica aplicable: // • Se puede observar que los segmentos de frecuencias en estudio (de 722 MHz a 728 MHz, de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz), por su numeración 'par' de canal físico (56, 58 y 60, respectivamente), debían ser empleados por transmisores con cobertura del Valle Central. Esta restricción se estableció técnicamente para la protección contra interferencias de canal adyacente a las emisiones televisivas en general, para todos aquellos canales dentro del segmento de frecuencias de 614 MHz a 806 MHz. De conformidad con lo anterior, parece que las condiciones de cobertura que se consignan en el Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP, donde se señala que la zona de cobertura del canal concesionado corresponde a 'Clase A: 30 Km [sic] *y Clase B: 60Km* [sic]*' desde el sitio de transmisión Volcán Irazú, siendo que éstas se refieren a zonas geográficas dentro del Valle Central país* [sic]*; parecen técnicamente alineadas a las disposiciones sobre la zona de acción de los canales de televisión analógica que se indicaban en el Decreto Ejecutivo Nº 27554-G. // • Las frecuencias correspondientes a los canales físicos bajo análisis, se encontraban atribuidas al Servicio de Radiodifusión (Televisiva) en el Cuadro de Atribución de Frecuencias del Decreto Ejecutivo N° 27554-G; siendo que en dicho reglamento vigente en ese momento se acompañó esa atribución con la nota nacional CR 2.43, y con una serie de 'Normas técnicas'; normas que resultan atinentes a la operación de redes de televisión que, desde el punto de vista técnico, aplicaban única y específicamente para la operación de las redes analógicas de televisión de acceso libre o directo por parte de la población; es decir, el PNAF de aquel entonces reconocía únicamente las condiciones técnicas de las redes de radiodifusión televisiva bajo el estándar analógico NTSC/M, no así de redes que operaran en tecnologías o estándares distintos a ese. (…) Este Departamento concluye técnicamente y desde el punto de vista de optimización de los recursos escasos y uso eficiente del espectro radioeléctrico, que se deben realizar los actos administrativos, técnicos y jurídicos por parte del Poder Ejecutivo que correspondan para la situación de los canales físicos 56, 58 y 60, y debiéndose valorar jurídicamente lo recomendado por la SUTEL en los dictámenes técnicos analizados en el presente informe, respecto al recurso otorgado. // **9. Recomendaciones: // 1.** Se recomienda a la Dirección de Concesiones y Normas de* [sic] *Telecomunicaciones, del Viceministerio de Telecomunicaciones, valorar el presente criterio técnico, para proceder como jurídicamente corresponda en virtud de lo señalado por la Superintendencia de Telecomunicaciones [en] los dictámenes técnicos Nº 1619-SUTEL-2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012, N° 1497-SUTEL-DGC-2014, N° 8453-SUTEL-DGC-2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016, N° 01084-SUTEL-DGC-2017 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021, siendo que no existen razones de orden público o interés nacional que sustenten apartarse de la recomendación de la SUTEL, particularmente ante la existencia de indicios técnicos de posible incumplimiento de las obligaciones de cobertura establecidas en el título habilitante de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (canal físico 60), por parte del concesionario TV SAN JOSÉ UHF, S.A.; debido a que los elementos técnicos presentados y utilizados por la SUTEL, como fundamento para su recomendación son válidos técnicamente; y por lo tanto, constituyen indicios que podrían valorarse para la elaboración del proceso jurídico correspondiente. Todo lo anterior, resulta conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y al marco normativo vigente, y se encuentra alineada al principio rector de la optimización de los recursos escasos que se establece en el artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 8642. // **2.** El Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico recomienda al Departamento de Normas y*

Procedimientos en Telecomunicaciones verificar que la empresa TV SAN JOSÉ UHF, S.A [sic] *se encuentre al día con las obligaciones regulatorias, así como del pago de otras obligaciones y cargas sociales pertinentes".* (Folios 1398 a 1423 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO PRIMERO: Que por medio de consultas realizadas por la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones en fecha 15 de junio de 2021, a los sitios web de consulta pública sobre morosidad patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), se verificó que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentra morosa con el pago de las obligaciones con las instituciones citadas, infringiendo el mandato impuesto por los artículos 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y/o el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que establecen como requisito para el uso de concesiones otorgadas por parte de la Administración Pública, estar al día con el pago de las obligaciones con la CCSS y con FODESAF respectivamente. (Folios 1424 a 1426 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en fecha 15 de junio de 2021, por medio de consultas realizadas por la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones al sitio web de consulta pública de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en relación con el estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, se verificó que la misma se encontraba morosa en el pago de sus obligaciones tributarias así como que también ha sido omisa en la presentación de las declaraciones correspondientes al impuesto de ventas y de renta ante el Ministerio de Hacienda, lo anterior en contravención del mandato impuesto por los artículos 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 y 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, los cuales disponen que para tramitar u obtener cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, se requiere que la persona física o jurídica solicitante se encuentre al día con sus obligaciones tributarias. (Folios 1427 y 1428 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO TERCERO: Que en fecha 07 de julio de 2021, la Dirección de Concesiones y Normas de Telecomunicaciones emitió el Informe Técnico-Jurídico N° MICITT-DCNT-INF-016-2021, el cual se integra como parte de la fundamentación del presente acto administrativo, mediante el cual recomendó al Viceministro de Telecomunicaciones para que éste a su vez recomendara al Poder Ejecutivo, proceder con el nombramiento de un Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio, para investigar el presunto incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, en relación con: **a)** en el pago del canon de regulación, el canon de reserva del espectro y la contribución especial parafiscal al FONATEL, de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones; **b)** en las disposiciones contenidas en el artículo 74 de la Ley Nº 17, "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS", el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", el artículo 18 de la Ley N° 4755, "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, "Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal", sobre las deudas por concepto de las cuotas obrero patronales ante la CCSS y FODESAF, así como por concepto de los impuestos tributarios ante el Ministerio de Hacienda; **c)** respecto de los umbrales mínimos de cumplimiento de cobertura y transmisión de la concesión para el uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58), y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) que se encuentran concesionados a nombre de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704; y **d)** prestación del servicio de radiodifusión en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, según los contratos de concesión suscritos por parte de la referida empresa con el Estado. (Folios 1432 a 1507 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO CUARTO: Que el Viceministro de Telecomunicaciones mediante el oficio N° MICITT-DVT-D-142-2021 de fecha 16 de julio de 2021, acogió íntegramente los criterios técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de las dependencias técnica y jurídica del Viceministerio de Telecomunicaciones, referenciadas en los considerandos anteriores, por no existir razones de interés nacional ni de orden público para separarse de éste y en ese mismo acto, recomendó al Poder Ejecutivo acoger dichas recomendaciones, en cuanto a conformar un Órgano Director de Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, a fin de determinar la verdad real de los hechos sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias derivadas del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, en relación con: **a)** en el pago del canon de regulación, el canon de reserva del espectro y la contribución especial parafiscal al FONATEL, de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones; **b)** en las disposiciones contenidas en el artículo 74 de la Ley Nº 17, "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS", el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", el artículo 18 de la Ley N° 4755, "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, "Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal", respecto a deudas en los pagos para con las tres instituciones; **c)** respecto de los umbrales mínimos de cumplimiento de cobertura y transmisión de la concesión para el uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58), y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60); y **d)** prestación del servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias; lo que puede configurar causal de resolución de la concesión de conformidad con lo establecido en el artículo 22 inciso 1) de la Ley N° 8642, "Ley General de Telecomunicaciones". (Folios 1526 a 1528 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO QUINTO: Que no consta en el expediente administrativo correspondiente que la empresa **T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA**, haya cumplido con la prevención realizada mediante el oficio N° MICITT-DCNT-DNPT-OF-080-2019 de fecha 14 de marzo de 2019, en el plazo otorgado al efecto.

VIGÉSIMO SEXTO: Que mediante la **Resolución N° 016-2021-R-TEL-MICITT,** de las 14:30 horas de fecha 15 de julio de 2021, notificada en fecha 04 de agosto de 2021, el Poder Ejecutivo resolvió instaurar el Órgano Director encargado de instruir el procedimiento ordinario de acuerdo con los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, para la determinación de la verdad real de los hechos sujetos a investigación, y la procedencia o no de la revocación de la concesión otorgada mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, por el presunto incumplimiento de las obligaciones normativas y contractuales derivadas de la concesión para el uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58), y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60), que a continuación se indican:

a) El eventual incumplimiento de las condiciones y obligaciones de la concesión de frecuencias respecto a los umbrales de cumplimiento de cobertura, área de cobertura y transmisión de al menos doce (12) horas diarias de los Canales físicos 56, 58 y 60 en los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz, de 734 MHz a 740 MHz, y de 746 MHz a 752 MHz, con fundamento en los artículos 3, 22 inciso 1) subinciso b), y 99 del Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET, "Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones", y las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

b) El eventual incumplimiento en el pago del canon de regulación, el canon de reserva del espectro y la contribución especial parafiscal al FONATEL, de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones, y el artículo 74 inciso g) del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, y las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

c) El eventual incumplimiento de las obligaciones tributarias con la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 4755, "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, "Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal" y las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

d) El eventual incumplimiento de las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Nº 17, "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS", y la contribución al FODESAF de conformidad con el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", y las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

Además, en la **Resolución N° 003-2019-R-TEL-MICITT**, el Poder Ejecutivo instruyo al Órgano Director lo siguiente:

> *"**SEGUNDO**: Instruir al Órgano Director a emitir un informe sobre los resultados de la instrucción del procedimiento ordinario correspondiente, así como emitir la recomendación debidamente motivada al Poder Ejecutivo sobre la procedencia o no de alguna causal que amerite la revocación de la concesión para el uso y explotación de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58), y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60), otorgados a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704; por presunto incumplimiento de las obligaciones normativas y contractuales descritas en la presente resolución administrativa, así como cualquier otra causal que el Órgano Director detecte del estudio del expediente administrativo".*

(Folios 1531 al 1564 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que mediante el **oficio Nº ODPA-OF-TVSJU-01-2021** de fecha 06 de agosto de 2021, el ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO, le solicitó a la SUTEL lo siguiente:

> *"(...)*
>
> *Por medio de la resolución N° 016-2021-R-TEL-MICITT de la diez horas treinta y dos minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno* [sic, léase correctamente *de las 14:30 horas de fecha 15 de julio de 2021*], *el Poder Ejecutivo designó a los suscritos Licenciado Hubert Quirós Abarca, Licenciada Melissa Porras Acevedo, e Ingeniero Eder Aburto Boniche, como Órgano Director, a efecto de llevar a cabo el respectivo procedimiento administrativo ordinario contra la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F S.A., cédula jurídica número 3-101-283704, por el presunto incumplimiento de la prestación del servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias; el incumplimiento en el pago del canon de regulación, canon de reserva del espectro y contribución especial parafiscal al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones; así como del incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 18 de la Ley N° 4755, 'Código de Normas y Procedimientos Tributarios', y 18 bis de la Ley N° 9416, 'Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal'; 74 de la Ley Nº 17, 'Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS', y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, 'Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares' y de los*

umbrales de cumplimiento de cobertura y transmisión correspondiente a la concesión para el uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58), y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60), con base en los artículos, y las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

Con fundamento en las facultades concedidas para tal efecto y con la finalidad de aclarar algunos aspectos necesarios para determinar la procedencia de la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio, solicitamos respetuosamente, lo siguiente:

- *Información sobre el estado del cumplimiento del pago de la empresa concesionaria* ***T V DE SAN JOSÉ U H F S.A.****, cédula jurídica número 3-101-283704, relativo al canon de reserva del espectro y contribución especial parafiscal al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones.*

Dicho requerimiento, se hace con el fin específico de valorar el cumplimiento dado a las obligaciones adquiridas mediante disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.
Adicionalmente, se les solicita también remitir copia certificada del expediente administrativo de las concesiones otorgadas a la empresa señalada".

(Folios 1566 y 1567 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO OCTAVO: Que mediante la **Resolución Nº ODPA-RES-TVSJU-001-2021** de las 10:52 horas de fecha 31 de agosto del año 2021, el ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO realizó el INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO SANCIONATORIO Y TRASLADO DE CARGOS en contra de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, concesionaria del uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, respectivamente, a efectos de determinar su eventual responsabilidad respecto al supuesto incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, y en los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, relativos a los umbrales de cumplimiento de cobertura, área de cobertura y transmisión de al menos doce (12) horas diarias, en los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, respectivamente. Además, la presunta morosidad en el pago del canon de regulación, canon de reserva del espectro y contribución especial parafiscal al FONATEL, de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones, y el artículo 74 inciso g) del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, y las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las

9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006. Asimismo, el presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias con la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 4755, "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, "Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal", y el supuesto incumplimiento de las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Nº 17, "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS" y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares". De ser comprobada la comisión de dichas faltas por parte de la empresa encausada, se le aplicaría la revocación de la concesión de uso de frecuencia para radiodifusión otorgada mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, y la resolución de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006. Asimismo, en dicha resolución se convocó a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA a la COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA, a celebrarse en las instalaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, ubicadas en el Edificio Mira, en Zapote, San José, a 250 metros oeste de la entrada principal de Casa Presidencia, a partir de las 9:00 horas del día 01 de octubre de 2021, de conformidad con los términos señalados en los artículos 218 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. (Folios 1575 al 1604 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

VIGÉSIMO NOVENO: Que la Resolución Nº ODPA-RES-TVSJU-001-2021 de INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO SANCIONATORIO Y TRASLADO DE CARGOS, fue debidamente notificada a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA. Cabe indicar que la Resolución Nº ODPA-RES-TVSJU-001-2021 se realizó por medio de publicación por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta, a saber: en el Alcance N° 179 al Diario Oficial La Gaceta N° 175 de fecha viernes 10 de setiembre de 2021; en el Alcance N° 182 al Diario Oficial La Gaceta N° 176 de fecha martes 14 de setiembre de 2021 y en el Alcance N° 184 al Diario Oficial La Gaceta N° 177 de fecha miércoles 15 de setiembre de 2021. Lo anterior, debido a que no fue posible realizar la notificación correspondiente por no haberse encontrado la dirección física del domicilio social y representante legal indicada en el expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002 para recibir notificaciones, así como no fue posible encontrar el domicilio social y la dirección del Agente Residente y representante legal conforme a la dirección inscrita en el Registro Nacional, y que constan en el Registro Nacional de Telecomunicaciones. (Folios 1605, 1609 al 1614 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TRIGÉSIMO: Que mediante el oficio N° 08614-SUTEL-SCS-2021 de fecha 14 de setiembre de 2021, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico emitido mediante **oficio N° 08295-SUTEL-DGC-2021** de fecha 03 de setiembre de 2021, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-063-2021, adoptado en la sesión ordinaria N° 063-2021, celebrada en fecha 09 de setiembre de 2021, en el que se actualizó el estado de cumplimiento del canon de regulación, el canon de reserva del espectro y la contribución especial parafiscal a FONATEL por parte de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704. En dicho informe técnico, la SUTEL indicó lo siguiente:

"Posterior a la consulta realizada por la Dirección General de Calidad, la Unidad Jurídica modificó su criterio, donde tomó en cuenta lo contenido en la resolución N°005-2020-R-TEL-MICITT del 3 de junio de 2020 (declaratoria de lesividad) indicando que la empresa TV de San José UHF S.A. tiene habilitado un servicio de telecomunicaciones disponible al público, por el hecho de poder brindar servicios de televisión por suscripción, lo cual lo enmarca dentro de la definición del artículo 6 inciso 24) de la Ley General de Telecomunicaciones. Así las cosas, la Unidad Jurídica concluyó lo siguiente:

1. El Poder Ejecutivo mediante resolución N°005-2020-R-TEL-MICITT del 3 de junio de 2020, reconoce que existe el servicio de radiodifusión televisiva por suscripción (o codificado), habilitado a la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF concesionaria, y en consecuencia se indica que es un servicio de telecomunicaciones disponible al público.

2. Ante la presencia de un título habilitante con servicios de radiodifusión televisiva por suscripción, y al ser considerado como servicios de telecomunicaciones disponibles al público de acuerdo con lo señalado por el Poder Ejecutivo en la resolución N°005-2020-R-TEL-MICITT, lo que procede como bien lo señala la Dirección General de Calidad, es el pago de los cánones de reserva de espectro y el canon de regulación de acuerdo con los artículos 62 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones, además del pago de la contribución especial parafiscal de conformidad con el artículo 39 de la Ley General de Telecomunicaciones.

En virtud de lo anterior, tomando en cuenta el criterio de la Unidad Jurídica previamente referido, se procede a suministrar la información requerida por el órgano director del procedimiento administrativo. Se aclara que se brinda la información que se encuentra disponible relacionada con el estado del pago del canon de reserva del espectro radioeléctrico, siendo que la Dirección General de Operaciones no posee información respecto del canon de regulación y la contribución especial parafiscal a Fonatel, los cuales no fueron puestos al cobro dada la posición anterior existente a nivel institucional.

A continuación se presenta el detalle de la actualización del estado de pagos del canon de reserva del espectro de la empresa TV de San José UHF S.A. [sic] *actualizado al 31 de marzo de 2021:*

***Tabla 1.** Estado de pagos del canon de reserva del espectro de la empresa TV de San José UHF S.A.*

Periodo al Cobro	***Fecha límite de pago***	***Monto por pagar***	***Monto pagado***	***Fecha de pago***	***Diferencias de pagos por periodo***
2010	*15/03/2011*	*₡13.657.901*	*₡0*		*₡13.657.901*
2012	*15/03/2013*	*₡29.365.458*	*₡0*		*₡29.365.458*
2013	*15/03/2014*	*₡31.605.962*	*₡0*		*₡31.605.962*
2014	*15/03/2015*	*₡44.560.845*	*₡1000*	*16/03/2015*	*₡44.559.845*
2015	*15/03/2016*	*₡45.423.098*	*₡1000*	*15/03/2016*	*₡45.422.098*
2016	*15/03/2017*	*₡5.794.990*	*₡10.000*	*14/03/2017*	*₡5.784.990*
2017	*15/03/2018*	*₡8.980.693*	*₡10.000*	*15/03/2018*	*₡8.970.693*
2018	*15/03/2019*	*₡13.234.497*	*₡0*		*₡13.234.497*
2019	*15/03/2020*	*₡12.772.215*	*₡0*		*₡12.772.215*
2020	*15/03/2021*	*₡12.569.646*	*₡0*		*₡12.569.646*

Como aspecto adicional, se aclara que los montos pendientes no incluyen el cálculo de multas e intereses, y que la recaudación de este corresponde al Ministerio de Hacienda".

(Folios 1615 al 1617 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que mediante la Resolución Nº ODPA-RES-TVSJU-002-2021, las 9:15 horas de fecha 28 de setiembre de 2021, denominada "RESOLUCIÓN DE NUEVA DE [sic] FECHA PARA LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO SANCIONATORIO", publicada por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del jueves 07 de octubre de 2021, N° 194 del viernes 08 de octubre de 2021 y N° 195 del lunes 11 de octubre del 2021, se extendió el plazo de la comparecencia oral y privada indicada en la Resolución Nº ODPA-RES-TVSJU-001-2021, para que se realizara a partir de las nueve horas del día 23 de noviembre de 2021. La reprogramación de la comparecencia se debió al aumento de casos de COVID-19, así como a la celebración de la campaña de vacunación masiva establecida por el Poder Ejecutivo liderado por el Ministerio de Salud en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social para las fechas del 17 al 26 de setiembre de 2021, denominada "Vacunatón". (Folio 1618 a 1627 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que en fecha 23 de noviembre de 2021, al ser las 9:30 horas, el ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO llevó a cabo la COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA correspondiente, sin la presencia de ningún representante de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA. Cabe indicar que dicha empresa no asistió al señalamiento ni presentó justificación de su ausencia. (Folio 1628 a 1631 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TRIGÉSIMO TERCERO: Que por medio de consulta realizada en fecha 26 de noviembre de 2021, al sitio web de consulta sobre morosidad patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio instaurado en contra de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, verificó que la empresa citada se encuentra morosa en el pago de las obligaciones financieras con dichas instituciones. (Folios 1632 y 1633 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TRIGÉSIMO CUARTO: Que en fecha 26 de noviembre de 2021, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio instaurado en contra de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, realizó consulta a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda respecto al estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa citada, verificándose que ésta se encuentra morosa y omisa en sus obligaciones, lo anterior de conformidad con el mandato impuesto por el artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal que indican que para la emisión de cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, se requiere que la persona física o jurídica solicitante se encuentre al día con sus obligaciones tributarias o en su defecto que mantenga esta condición durante el tiempo de vigencia de la concesión. (Folio 1634 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TRIGÉSIMO QUINTO: Que el dictamen vinculante N° C-306-2015 de fecha 11 de noviembre de 2015 de la Procuraduría General de la República (en lo sucesivo PGR), aclara que ante una omisión en el bloque de legalidad relativa a cuál órgano le corresponde resolver lo relativo a las concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico, por un principio de paralelismo de las competencias, el competente para modificar o dejar sin efecto una norma o decisión jurídica es el facultado para emitirla, por lo que, es evidente la potestad que tuvo el correspondiente Órgano Director de conocer y resolver el Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio instaurado en contra de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, el cual se tramitó en el expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002. (Folios 1568 a 1574 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TRIGÉSIMO SEXTO: Que el artículo 22 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones de fecha 4 de junio de 2008, establece como causales de revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos lo siguiente:

> *"**ARTÍCULO 22.- Revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos***
>
> *Para efectos de esta Ley, son causales de resolución y extinción del contrato de concesión las siguientes:*
>
> ***1) La resolución del contrato de concesión procede por las siguientes causas:***
>
> ***a)** Cuando el concesionario no haya utilizado las frecuencias para el fin solicitado luego de un año de haber sido asignadas o de haberse concedido la prórroga. Este plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, previa recomendación del Consejo, a solicitud de parte y por motivos debidamente justificados.*
>
> ***b) Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito o fuerza mayor.*** (Énfasis agregado).
>
> ***c)** Incumplimiento en el pago de la contribución al Fondo Nacional de Telecomunicaciones y de las obligaciones impuestas de acceso, servicio universal y solidaridad.*
>
> *d) El atraso de al menos tres meses en el pago de las tasas y cánones establecidos en la presente Ley.*
>
> ***e)** No cooperar con las autoridades públicas en los casos a que se refiere el artículo 5 de esta Ley.*
>
> ***f)** La reincidencia de infracciones muy graves, de conformidad con el artículo 67 de esta Ley, durante el plazo de vigencia del título habilitante.*
>
> ***g)** El incumplimiento de brindar acceso inmediato de comunicaciones al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) en los términos y las disposiciones establecidos en la Ley contra la delincuencia organizada. Esta infracción será catalogada como muy grave, según lo establecido en el inciso a) del artículo 68 de esta Ley".*
>
> *La declaratoria de resolución del contrato estará precedida de un proceso administrativo que respetará las reglas del debido proceso. El titular de la concesión cuya resolución haya sido declarada por incumplimiento grave de sus obligaciones, estará imposibilitado para mantener nuevas concesiones de las previstas en esta Ley, por un plazo mínimo de tres años y máximo de cinco años, contado a partir de firmeza de la resolución.*

2) Las concesiones, las autorizaciones y los permisos se extinguen por las siguientes causales:

a) *El vencimiento del plazo pactado.*

b) *La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del Estado.*

c) *El rescate por causa de interés público.*

d) *El acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario. Este acuerdo deberá estar razonado debidamente tomando en consideración el interés público.*

e) *La disolución de la persona jurídica concesionaria.*

Cuando la extinción se produzca por causas ajenas al concesionario, quedará a salvo su derecho de percibir las indemnizaciones que correspondan según esta Ley y el contrato de concesión".

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que mediante oficio N° ODPA-OF-TVSJU-02-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo procedió a remitir a este Órgano Decisor, sea al Poder Ejecutivo conformado por el Presidente de la República y por la Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, de conformidad con el mandato impuesto en la Resolución N° 016-2021-R-TEL-MICITT de las 14:30 horas de fecha 08 de diciembre de 2021, la RECOMENDACIÓN FINAL contenida en el Informe de Recomendación N° ODPA-INF-TVSJU-001-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021, que contiene el análisis, las conclusiones y las recomendaciones resultado del procedimiento administrativo ordinario incoado en contra de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704. Dicho informe de recomendación se integra como parte de la fundamentación de la presente Resolución. (Folios 1635 a 1715 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002).

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que se han observado las prescripciones de ley, se han realizado las diligencias útiles y necesarias, y no se han advertido nulidades que afecten la validez de la presente resolución ni que pongan en indefensión a las partes.

CONSIDERANDO

PRIMERO: SOBRE LA COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO.

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones y el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y sus reformas. Por lo tanto, no puede salir del dominio del Estado y su planificación, administración y control se rige según lo establecido en la Constitución Política, los Tratados Internacionales, las leyes y reglamentos que al efecto se emitan, así como lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). 2015 – 2021 "Costa Rica: Una sociedad conectada", según lo estipula el artículo 10 de la citada Ley N° 8642.

El espectro radioeléctrico sólo podrá ser explotado por la Administración Pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca el legislador, según lo instituye el subinciso c) del inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, y en ejercicio de la competencia dispuesta en el artículo 10 párrafo tercero de la Ley General de Telecomunicaciones que dispone: *"El Poder Ejecutivo asignará, reasignará o rescatará las frecuencias del espectro radioeléctrico, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de atribución de frecuencias, de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria, de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto en esta Ley"*.

En adición a lo anterior, el artículo 130 de la Constitución Política establece:

> *"ARTÍCULO 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores".*

Por su parte, el artículo 140, de la Constitución Política dispone:

> *"ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:*
> *(...)*
> *8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas;*
> *(...)*
> *20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes.*
> *(...)".*

Ahora bien, con la suscripción del "Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)", aprobado mediante Ley N° 8622 de fecha 21 de noviembre de 2007, Costa Rica adquirió una serie de compromisos país, que implicaron la creación del Sector Telecomunicaciones, así como la emisión de un marco normativo acorde con las nuevas necesidades regulatorias. De esta forma en el año 2008 se promulgaron la "Ley General de Telecomunicaciones", Ley N° 8642 de fecha 04 de junio de 2008 y sus reformas (en adelante LGT) y la "Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones", Ley N° 8660 de fecha 13 de agosto de 2008 y sus reformas (en adelante LFMEPST), mediante las cuales, es clara la legislación en establecer una Rectoría en Telecomunicaciones que en este caso recae en el MICITT.

De esta manera, mediante el artículo 38 de la "Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones", Ley N° 8660 y sus reformas, el legislador creó la Rectoría en materia de Telecomunicaciones. Para la consecución de las funciones y los objetivos establecidos por la citada Ley, en el párrafo *in fine* del artículo 39 de la citada Ley se dispone de la constitución del Viceministerio de Telecomunicaciones, en los siguientes términos:

> *"El ministerio rector, para cumplir estas funciones y garantizar la calidad e idoneidad de su personal, contará con los profesionales y técnicos que requiera en las materias de su competencia. Dichos funcionarios estarán sujetos al régimen jurídico laboral aplicable a*

los de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Asimismo, podrá contratar a los asesores y consultores que necesite para el cumplimiento efectivo de sus funciones. La organización, las funciones y demás atribuciones se definirán reglamentariamente".

Precisamente, para dar cumplimiento a lo indicado en el párrafo que antecede, el legislador en el Transitorio I de la Ley Nº 9046, "Ley del Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", dispuso:

"TRANSITORIO I.-

Con la entrada en vigencia de la presente ley, las partidas presupuestarias previstas en la ley del presupuesto anual de la República, así como el personal, los activos, los pasivos y el patrimonio, en custodia o asignados al Viceministerio de Telecomunicaciones por ley, reglamento, donación, préstamo o por cualquier otra disposición para el cumplimiento de las labores del sector, serán transferidos al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que los asumirá definitivamente. El personal mantendrá las condiciones establecidas en el artículo 39 de la Ley N.º 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008".

Así las cosas, el legislador dispuso la existencia de un ente Rector en Telecomunicaciones, el cual, en un inicio recayó en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y posteriormente por medio de la Ley N° 9046, "Ley Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología" de fecha 25 de junio de 2012, se trasladó al hoy denominado Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Es así como la "Ley General de la Administración Pública", Ley N° 6227 (en adelante LGAP) en su numeral 23 dispone en lo conducente:

"Artículo 23.-

1.- Las carteras ministeriales serán:

a) (...)

ñ) Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones

(Así adicionado el inciso ñ por el artículo 104 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), Nº 7169 del 26 de junio de 1990.)
(Así reformado el inciso ñ) anterior por el artículo 25 de la Ley de Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, ley N° 9971 del 11 de mayo del 2021 [sic]*)*
(...)"

Es importante resaltar que el Viceministerio de Telecomunicaciones fue creado en virtud de una norma de rango legal, tal y como lo dispone el artículo 6 de la Ley N° 9046, mediante la cual se realizan dos importantes modificaciones a la Ley Nº 6227, Ley General de Administración Pública, a saber:

> ***"ARTÍCULO 6.-***
>
> *Refórmanse los incisos h) y ñ) del artículo 23 y el inciso 7) del artículo 47, y adiciónase un nuevo inciso 8) a este artículo de la Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas, para que en lo sucesivo se lean de la siguiente manera:*
>
> > ***'Artículo 23.-***
> >
> > ***1.-*** *Las carteras ministeriales serán:*
> > *(...)*
> > ***h)*** *Ambiente y Energía.*
> > *(...)*
> > ***ñ)*** *Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones'.*
> >
> > ***'Artículo 47.-***
> > *(...)*
> >
> > ***7.-*** *El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tendrá dos viceministros: uno encargado del sector ambiente y uno encargado del sector energía. En ausencia del ministro, lo sustituirá cualquiera de los dos viceministros. Las atribuciones asignadas en esta ley a los viceministros serán ejercidas por cada uno, dentro de sus respectivas áreas de acción.*
> >
> > ***8.-*** *El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones tendrá un Viceministerio de Telecomunicaciones y aquellos otros que se designen de conformidad con el inciso 1) del presente artículo'.*
>
> *(...)"*

A partir de lo anterior, el MICITT cuenta con un brazo técnico especializado denominado Viceministerio de Telecomunicaciones, creado por ley para atender el tema en específico. Por lo tanto, el legislador estableció las atribuciones que explícitamente le confirió la Ley Nº 8660, las cuales se encuentran enlistadas en el numeral 39 de la citada ley:

> *"El rector del sector será el ministro o la ministra de Ciencia, [Innovación,] Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a quien le corresponderán las siguientes funciones:*
>
> *a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones.*
> *b) Coordinar, con fundamento en las políticas del Sector, la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. El primer Plan que se dicte deberá establecer, como mínimo, el acceso para las personas físicas a opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar el acceso al servicio telefónico para las personas con necesidades sociales*

especiales, los habitantes de las zonas donde el servicio no sea financieramente rentable, o las personas que no cuenten con recursos suficientes
c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones.
d) Aprobar o rechazar el criterio técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sobre la adjudicación, prórroga, extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de las concesiones y los permisos de las frecuencias del espectro radioeléctrico. En el caso de que se separe de dicho criterio, el Poder Ejecutivo deberá justificar las razones de orden público o interés nacional que lo sustenten.
e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que in correspondan.
f) Realizar la declaratoria de interés público y dictar el decreto para la imposición de servidumbres forzosas o para la expropiación de los bienes necesarios para la operación de las redes públicas de telecomunicaciones
g) Representar al país ante las organizaciones y los foros internacionales de telecomunicaciones y en los relacionados con la sociedad de la información.
h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información.
i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza.
j) Brindar apoyo técnico al rector en materia de gestión integral de residuos en cuanto a la definición, clasificación y diseño de políticas de gestión de los residuos derivados de las actividades de telecomunicaciones. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 58 aparte b) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)
k) Las demás funciones que le asigne la ley.
(…)" (El resaltado no corresponde al original).

En concordancia, el artículo 2 de la LGT citada establece los objetivos de la Ley que debe desarrollar y concretar la Rectoría de Telecomunicaciones, los cuales se proceden a enumerar de seguido:

"*ARTÍCULO 2.- Objetivos de esta Ley*
Son objetivos de esta Ley:
a) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, en los términos establecidos en esta Ley.
b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de telecomunicaciones.
c) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran.
d) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con nuestra Constitución Política.
e) Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles.

f) Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico.
g) Asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos escasos.
h) Incentivar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que contenga mecanismos que garanticen los principios de transparencia, no discriminación, equidad, seguridad jurídica y que no fomente el establecimiento de tributos.
i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia.
j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados".

En adición a las competencias legales señaladas, la Procuraduría General de la República mediante el dictamen técnico Nº C-306-2015 de fecha 11 de noviembre de 2015 indicó que, conforme al principio de paralelismo de las competencias, corresponde al Poder Ejecutivo resolver acerca de las solicitudes de las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones, por ende le compete entonces al Poder Ejecutivo decidir la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de la verdad real de los hechos, y posible resolución de la concesión, y nombrar el Órgano director encargado de instruir el procedimiento administrativo procedente, así como adoptar la decisión final en su carácter de Órgano Decisor.

Por lo que, el Poder Ejecutivo, integrado por los suscritos, Presidente de la República en ejercicio y la Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones por disposición constitucional y desarrollo legal, es competente para conocer y resolver sobre los presuntos incumplimientos de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, respecto al no pago del impuesto anual de radiodifusión, de los cánones y contribuciones, el incumplimiento de cobertura y transmisión correspondiente a la concesión para el uso y explotación de los rangos de frecuencias indicados, el incumplimiento en realizar las actualizaciones tecnológicas establecidas por el Poder Ejecutivo (no sujeción al proceso de adecuación de los títulos habilitantes para la televisión digital terrestre), el incumplimiento de las obligaciones tributarias con la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, así como el incumplimiento de las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, hechos que constituyen una infracción a lo dispuesto en el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 1758, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), los artículos 22, 32, 49, 62 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones, los artículos 36, 74 incisos a), d) y g), 99 y 101 inciso e) del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAE, el artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", el artículo 18 de la Ley N° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS

Con base en la instrucción del procedimiento administrativo y el análisis del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002, así como la prueba recabada y en el Informe de Recomendación N° ODPA-INF-TVSJU-001-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021, rendido por el Órgano Director, este Órgano Decisor determina que se tienen por demostrados todos los hechos que constan en los resultandos de la presente Resolución, para efectos de la recomendación final de este procedimiento, los cuales se resumen en lo siguiente:

1. La Administración Concedente debe vigilar y verificar que, durante toda la vigencia de la concesión, el concesionario cumpla con las obligaciones contractuales y ante un eventual incumplimiento o anormalidad en la ejecución de la concesión por parte del concesionario, la Administración deberá tomar inmediatamente las medidas pertinentes en aras de que el bien común no se vea perjudicado y se logre una tutela efectiva del interés público.

2. La resolución contractual por incumplimiento tiene como presupuesto un comportamiento del concesionario que le es imputable y que es posterior a la celebración del contrato de concesión, rompiendo la composición de intereses de que el contrato es expresión.

3. Que con fundamento en los dictámenes técnicos de la SUTEL emitidos mediante los oficios Nº 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre de 2010; Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012; N° 1497-SUTEL-DGC-2014 de fecha 12 de marzo de 2014; N° 8453-SUTEL-DGC-2014, de fecha 03 de diciembre de 2014; Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 de fecha 8 de diciembre de 2015; N° 05817-SUTEL-DGC-2016 de fecha 10 de agosto de 2016; N° 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, N° 01084-SUTEL-DGC-2017 de fecha 06 de febrero de 2017 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021, donde constan las mediciones realizadas por la SUTEL, se tiene por establecido que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, ha incumplido con la obligación de cobertura del servicio de radiodifusión televisiva de conformidad con lo estipulado en el título habilitante. En este sentido, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo determinó contundentemente la medición de 0% de cobertura de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, respectivamente, lo que implica que no existen transmisiones de la señal de dichos canales, de parte de la empresa concesionaria T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, y por lo tanto se tiene por comprobado que dicha empresa no ha cumplido con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, según lo estipulado en el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

4. Además, se tiene por comprobado, que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, se encuentra morosa en el pago de sus obligaciones tributarias en el pago del Canon de Reserva del Espectro

Radioeléctrico por un monto de doscientos diecisiete millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos cinco colones exactos (₡217 943 305,00), adeudados por los periodos de los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como del Impuesto a las Personas Jurídicas por un monto de doscientos veintiocho mil cien colones exactos (₡228 100,00), adeudados por los periodos de los años 2020 y 2021. Además, presenta morosidad en el pago del Timbre Educación y Cultura por un monto doce mil colones exactos (₡12 000,00), adeudados por los periodos de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Aunado a lo anterior, dicha empresa también ha sido omisa en la presentación de las declaraciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas ante el Ministerio de Hacienda, lo anterior en contravención del mandato impuesto por los artículos 18 de la Ley N° 4755, "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, "Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal", así como de conformidad con el oficio N° 08295-SUTEL-DGC-2021 de fecha 03 de setiembre de 2021 en lo que respecta al canon de reserva del espectro.

5. Además, se verifica que no consta dentro del expediente administrativo que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, haya presentado debida justificación que compruebe caso fortuito o fuerza mayor para la no transmisión y uso de la concesión otorgada, por ende, se tiene por acreditado el incumplimiento a las condiciones del título habilitante otorgado, el contrato de concesión suscrito y el marco normativo aplicable.

6. Asimismo, se tiene por comprobado que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, se encuentra morosa con sus obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Nº 17, "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS". Asimismo, se tiene por verificado que dicha empresa también presenta morosidad con la contribución al FODESAF de conformidad con el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", obligaciones que ante su incumplimiento, podrán sobrevenir en la resolución contractual, lo anterior de conformidad con las revisiones que se realizaron a los portales electrónicos de ambas instituciones.

7. Que los incumplimientos por parte de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, han ocasionado una afectación al interés público procurado satisfacer por la Administración Concedente y un menoscabo al principio rectorial sectorial de optimización de los recursos escasos, así como el derecho fundamental que tienen los usuarios finales a obtener servicios de calidad y dentro del tiempo mínimo estipulado para los servicios de radiodifusión.

8. Que ningún representante legal o apoderado de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, se presentó a la comparecencia oral y privada programada, sin que tampoco se aportara oportunamente por la citada empresa concesionaria, justificación alguna para motivar o sustentar su no asistencia a la misma, por lo cual no se tuvieron elementos que justificaran la suspensión y reprogramación de ésta, así como un elenco probatorio adicional por considerar o que refuten, a los que constan en el expediente administrativo de marras.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS

Con base en la recomendación efectuada por parte del órgano director del procedimiento administrativo mediante el Informe de Recomendación Nº ODPA-INF-TVSJU-001-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021 y el análisis del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002, este Órgano Decisor determina que los siguientes hechos resultan no probados, para efectos del acto final de este procedimiento:

1. Que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, haya hecho uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, respectivamente, conforme a lo establecido en la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones y en el Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET, "Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones", así como en el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y en los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

2. Que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, haya presentado justificación que compruebe caso fortuito o fuerza mayor para la no transmisión y uso de la concesión otorgada.

3. Que se haya acreditado por parte de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704; el cumplimiento de las obligaciones prestacionales, contractuales y legales dispuestas en el artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones; el artículo 73 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET; el artículo 18 de la Ley N° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal; el artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS; el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares"; los numerales 8 y 8 bis del Decreto Ejecutivo N° 36774-MINAET, "Reglamento para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en Costa Rica" y las Cláusulas Cuarta y Quinta incisos a), c), d), e), f) y h) de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

4. Que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA haya presentado constancias de pago, justificación por el no pago o arreglos de pago que determinen las razones del incumplimiento en el pago de las deudas tributarias con la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda vinculadas al impuesto a las personas jurídicas, timbre de educación y cultura, así como del Canon de reserva del espectro; así como de las obligaciones obrero-patronales para con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

5. Respecto a la presunta morosidad de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, en el pago del canon de regulación, y contribución especial parafiscal al FONATEL, este Órgano Decisor no tiene por demostrada dicha morosidad por cuanto no se contó con la prueba suficiente que permitiera llegar a esa conclusión.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

I. SOBRE LA CONCESIÓN OTORGADA A LA EMPRESA T V DE SAN JOSÉ U H F S.A. MEDIANTE EL ACUERDO EJECUTIVO Nº 2758-2002 MSP DE FECHA 18 DE JULIO DE 2002.

Mediante Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP emitido en fecha 18 de julio de 2002, el Poder Ejecutivo otorgó -por medio de la figura jurídica de la cesión de frecuencias-, la concesión para el uso y explotación de los Canales 56 (722 MHz a 728 MHz), 58 (734 MHz a 740 MHz) y 60 (746 MHz a 752 MHz) de televisión, a favor de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA. Dicho acuerdo señala:

> *"Autorizar la CESIÓN del CANAL 56 de TELEVISIÓN, rango de frecuencias 722 MHz a 728 MHz, CANAL 58 de TELEVISIÓN, rangos de frecuencias 734 MHz a 740 MHz, CANAL 60 de TELEVISIÓN, rangos de frecuencias 746 MHz a 752 MHz, que hace GRUPO MASTERI S.A; con cédula jurídica No. 3-101-081953 a favor de T.V. DE SAN JOSÉ UHF S.A;* [sic] *con cédula jurídica No. 3-101-283704, con las siguientes características:*

1- SERVICIO:	***RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA POR SUSCRIPCIÓN***
2-CLASE:	*COMERCIAL*
3-INDICATIVO:	*TI-SJT*
4-CANALES:	*56-58-60*
5-FRECUENCIAS LÍMITES DE LOS CANALES:	*722 MHz a 728 MHz* *734 MHz a 740 MHz* *746 MHz a 752 MHz*
6-ANCHO DE CANAL:	*6 MHz*
7- FRECUENCIA CENTRAL DE LA PORTADORA DE AUDIO:	*727.75-739.75-751.75 MHz*
8- FRECUENCIA CENTRAL DE LA PORTADORA DE VIDEO:	*723.25-735.25-747.25 MHz*
9- POTENCIA DE LA PORTADORA DE VIDEO:	*1000 WATTS*
10- POTENCIA DE LA PORTADORA DE AUDIO:	*100 WATTS*
11-POLARIZACIÓN DE TRANSMISIÓN RADIADA:	*HORIZONTAL*
12- MODULACIÓN DE LA PORTADORA DE VIDEO:	*A.M.*
13- MODULACIÓN DE LA PORTADORA DE AUDIO:	*F.M.*
14-TIPO DE ANTENA:	*PANEL 12 DB*
15-ALTURA MÁXIMA DE LA ANTENA:	*45 METROS*
16-UBICACIÓN DEL TRANSMISOR PRINCIPAL:	*VOLCÁN IRAZÚ*
17-ÁREA APROXIMADA DE COBERTURA:	*CLASE A, 30 KM* *CLASE B, 60 KM*

***Queda entendido el concesionario de este Canal que es obligación de su parte observar la legislación vigente o la que en el futuro se dicte**, acatando las indicaciones de la Oficina de Control Nacional de Radio y que a partir de la publicación del presente acuerdo tendrá un plazo de seis meses para la puesta en funcionamiento del servicio de Radiodifusión Televisiva"*. (Énfasis agregado).
(...)".

El Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP emitido en fecha 18 de julio de 2002 fue formalizado mediante los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas (Canal físico 60), N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas (Canal físico 58) y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas (Canal físico 56), todos de fecha 23 de octubre de 2006, firmados por el representante, en ese momento, de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA y el señor Ministro a cargo del Ministerio de Gobernación y Policía, en ese entonces en calidad de representante del Poder Ejecutivo. Dentro de las cláusulas que se estipularon dentro de dicho contrato podemos señalar, para el interés de la presente resolución administrativa, las siguientes:

"(...)
***SEGUNDA.- OBJETO.** El presente contrato determina los límites de uso de la frecuencia concedida, y los derechos correlativos a su explotación.*
(...)

***QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.** El concesionario deberá:*
- ***a.)*** *Observar la legislación vigente o la que en el futuro se dicte en materia de concesión y operación de frecuencias de radio.*
- ***b.)*** *(...)*
- ***c.)*** *(...)*
- ***d.)*** *Mantener en óptimo funcionamiento técnico las estaciones, sin causar interferencias perjudiciales a otras estaciones.*
- ***e.)*** *Anunciar las transmisiones con sus letras de identificación, al menos una vez cada hora.*
- ***f.)*** *Procurar brindar una programación cuyo contenido informativo, cultural y recreativo, contribuya con la integración familiar, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de nuestros valores cívicos, artísticos, históricos y culturales, y el desarrollo sustentable.*
- ***g.)*** *(...)*
- ***h.)*** *Prestar el servicio de radiodifusión Televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce horas diarias, y no suspenderlo salvo fuerza mayor o causa justa debidamente comprobada.*
- ***i.)*** *No interrumpir por más de tres meses y sin causa justificada, los servicios que se encuentre obligado a prestar, de conformidad con el presente contrato.*
- ***j.)*** *(...)*

***SEXTA.- RESCISIÓN* [sic, léase Resolución] *CONTRACTUAL.** El Ministerio podrá iniciar gestiones para la cancelación de la concesión, cuando el concesionario infrinja la legislación vigente que rige la materia o incumpla con las obligaciones adquiridas en el presente contrato. Igual se hará en los casos de incumplimiento por causas subsanables de índole técnica o de oportunidad, a las que el concesionario no dé pronta solución.*
(...)" (Énfasis agregado).

De conformidad con lo anterior, y según las condiciones y obligaciones de la concesión otorgada a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, esta debía realizar el uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz, de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, respectivamente, para dar un servicio de telecomunicaciones en la cobertura asignada, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias y cumpliendo con las estipulaciones establecidas en el contrato de concesión, así como también, la obligación de no interrumpir por más de tres (3) meses **y sin causa justificada, los servicios que se encuentre obligado a prestar.**

II. ANÁLISIS DE LOS DICTÁMENES TÉCNICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL).

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 incisos d) y e) de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de fecha 05 de setiembre de 1996, modificada por la Ley N° 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 156 de fecha 13 de agosto de 2008 y en cumplimiento con la disposición N° 5.1.c.i del informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 de la Contraloría General de la República, el Órgano Regulador rindió los criterios técnicos respecto del uso y explotación de la concesión otorgada a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, los cuales serán analizados seguidamente, dado que constituyen los presupuestos de índole técnico que fundamentan la parte dispositiva de la presente resolución administrativa, dictados en ejercicio de sus funciones legales de comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas (artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones); de regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones (artículo 59 de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), así como velar por el cumplimiento de los derechos de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones y controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radioeléctrico y las emisiones radioeléctricas (incisos e) y g) del artículo 60 de la Ley N° 7593).

Adicionalmente estos dictámenes técnicos de la SUTEL, conforme a lo dispuesto en el numeral 39 inciso d) de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del Sector Telecomunicaciones, y 73 inciso d) de la Ley N° 7393, constituyen un requisito sine qua non del acto de extinción o revocación de las concesiones de espectro radioeléctrico dictado por el Poder Ejecutivo, al constituirse dicha Superintendencia en la Autoridad Reguladora Independiente establecida en el Anexo 13 del Capítulo 13 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos (TLC), Ley Nº 8622, aprobado inicialmente mediante referéndum y posterior a ello, suscrito formalmente por Costa Rica; entrando en rigor en fecha 21 de diciembre del 2007.

1. Oficio N° 1619-SUTEL-2010:

La SUTEL en fecha 08 de setiembre de 2010, mediante oficio N° 1619-SUTEL-2010 emitió el documento denominado *"Informe de ocupación de frecuencias de los servicios de radiodifusión televisiva en Costa Rica"*, en el que analizó la ocupación de las bandas de televisión

comprendidas en los rangos 614 MHz a 806 MHz, entre otras. Para elaborar el referido dictamen técnico, de previo identificó múltiples puntos de medición a lo largo de todo el país donde se realizarían las mediciones.
El equipo utilizado en las mediciones (folio 613 del expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002), fue el siguiente:

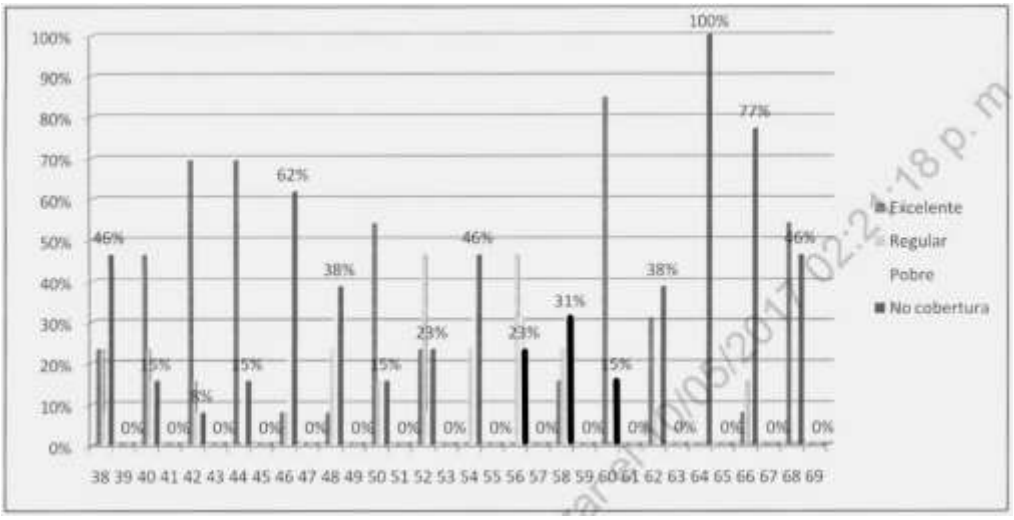
- Analizador de espectro portátil, marca Rhode & Schwartz, modelo PR100, que opera en el rango de frecuencias comprendido entre los 20 MHz y 7,5 GHz.
- Antenas direccional marca Rhode & Schwartz, modelo HE300 que opera en el rango de los 20 MHz y 7500 MHz.
- Analizador de espectros portátil marca Anritsu, modelo MS2711D que opera en el rango de frecuencias comprendido entre 100 kHz y 3 GHz,
- Antenas omnidireccionales y direccionales que operan en el rango de 50 MHz y 3 GHz.

En el proceso de medición se registraron las señales recibidas para los segmentos de frecuencias descritos anteriormente. En lo que corresponde a los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) otorgados a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, la SUTEL al realizar las mediciones de ocupación de espectro radioeléctrico señaló lo siguiente:

> *"**Concesionario T.V de San José UHF S.A*** [sic]
>
> ***Canal 56, canal de numeración par para el valle central*** [sic] ***según nota CR 57 PNAF.*** *Al canal 56 mediante el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 075-2006 CNR* [sic] *se le otorgó una zona de cobertura de Clase A: 30Km* [sic] *-Clase B: 60Km* [sic] *y se le autorizó la instalación de un transmisor en el Volcán Irazú (este punto de repetición dependiendo de la orientación de las antenas podría brindar cobertura para la mayor parte del Valle Central, la Zona Atlántica y la Zona Norte (ambas parcialmente))* [sic]. ***Según las mediciones efectuadas, el canal 56 está cubriendo únicamente el 77% del valle central*** [sic] ***(23% de no cobertura). (…)***
>
> ***Canal 58, canal de numeración par para el valle central*** [sic] ***según nota CR 57 PNAF.*** *Al canal 58 mediante el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 074-2006 CNR* [sic] *se le otorgó una zona de cobertura de Clase A: 30Km* [sic] *-Clase B: 60Km* [sic] *y se le autorizó la instalación de un transmisor en el Volcán Irazú (este punto de repetición dependiendo de la orientación de las antenas podría brindar cobertura para la mayor parte del Valle Central, la Zona Atlántica y la Zona Norte (ambas parcialmente))* [sic]. ***Según las mediciones efectuadas, el canal 58 está cubriendo únicamente el 69% del valle central*** [sic] ***(31% de no cobertura). (…)***
>
> ***Canal 60, canal de numeración par para el valle central*** [sic] ***según nota CR 57 PNAF.*** *Al canal 60 mediante el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 037-2006 CNR* [sic] *se le otorgó una zona de cobertura de Clase A: 30Km* [sic] *-Clase B: 60Km* [sic] *y se le autorizó la instalación de un transmisor en el Volcán Irazú (este punto de repetición dependiendo de la orientación de las antenas podría brindar cobertura para la mayor parte del Valle Central, la Zona Atlántica y la Zona Norte (ambas parcialmente))* [sic]. ***Según las mediciones efectuadas, el canal 60 está cubriendo***

> ***únicamente el 85%, del valle central*** [sic] ***(15% de no cobertura)****, además se detectó que dicho canal se encuentra transmitiendo señales de televisión digital en el Valle Central, Pital, Los Chiles y Guápiles. Las mediciones en el Valle Central, la Zona Norte y la Zona Atlántica (Guápiles) obedecen a transmisiones del servicio por suscripción, que muy posiblemente opera con un transmisor instalado en el Volcán Irazú. (…)"* (Énfasis agregado).

Según se desprende de la cita anterior, para el año de 2010 el Canal físico 56 estaba cubriendo el 77% del Valle Central, el Canal físico 58 el 69% del Valle Central y el Canal físico 60 estaba cubriendo el 85% del Valle Central, lo que se traduce en un 23%, un 31% y un 15% de no cobertura en cada caso particular conforme al orden expuesto. Tal y como se puede observar en el siguiente cuadro:



A raíz de los hallazgos encontrados en las mediciones realizadas, la SUTEL recomendó lo siguiente:

> *"**CAPITULO 6: Recomendaciones***
> *(…)*
> ***64.*** *Canal 56, se recomienda al Poder Ejecutivo, según artículo 3, inciso i) de la ley N° 8642, modificar el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 075-2006 CNR* [sic] *para restringir la zona de cobertura de la concesión y el respectivo contrato para que este canal únicamente opere en el Valle Central con el transmisor ubicado en el Volcán Irazú. (…)*
>
> ***66.*** *Canal 58, se recomienda al Poder Ejecutivo, según artículo 3, inciso i) de la ley N° 8642, modificar el Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 074-2006 CNR* [sic] *para restringir la zona de cobertura de la concesión y el respectivo contrato para que este canal únicamente opere en el Valle Central con el transmisor ubicado en el Volcán Irazú. (…)*
>
> ***68.*** *Canal 60, se recomienda al Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1 b), Ley N° 8642, cancelar el derecho de uso y explotación del canal Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 037-2006 CNR* [sic],

otorgado mediante concesión y el respectivo contrato. Lo anterior en vista de que el canal 60 opera como transmisor principal (matriz) del servicio televisivo por suscripción, incumpliendo con la asignación realizada en el PNAF que claramente destina esta banda a radiodifusión televisiva de acceso libre".

2. Oficio N° 5173-SUTEL-DGC-2012:

En fecha 14 de diciembre de 2012, la Dirección General de Calidad emitió el informe N° 5173-SUTEL-DGC-2012 *"Informe de ocupación de los canales de radiodifusión televisiva, bandas de 54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz* ***y 614 [MHz] a 806 MHz****".* Esto como parte de las atribuciones establecidas para dicho Órgano técnico, que con fundamento en el artículo 10 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, le corresponde la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas. Según se detalló en la sección 3 del documento de marras, el objetivo de este fue *"(...) determinar la ocupación real del espectro radioeléctrico de los canales de radiodifusión televisiva en el territorio nacional, así como el cumplimiento de las concesiones, contratos de concesión de estos servicios y lo dispuestos en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (...)".*

En lo que se refiere a la metodología de medición, en el documento se aclaró que las mediciones fueron recabadas entre el 10 de setiembre y el 26 de octubre de 2012 y que la toma de datos debía estar estandarizada para todos los canales, razón por la cual para los 67 canales analizados en los 38 sitios diferentes se siguió el *"Protocolo General de medición de señales electromagnéticas"*, que consta en la Resolución N° RCS-199-2012 de fecha 27 de junio de 2012, y también, el procedimiento Nº DGC-CA-PROC-12 *"Procedimiento de medición de intensidad de campo eléctrico".* Con ello, se aseguró la inclusión de las recomendaciones de UIT pertinentes a la medición de intensidad de campo eléctrico. Adicionalmente, dentro de la metodología se siguió el *"PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO DE MEDICIÓN DE COBERTURA DE LAS BANDAS DE AM, FM, Y TELEVISIÓN; y de ocupación de las bandas de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz y 3,5 GHz".*

Como parte de los resultados de las mediciones realizadas, la SUTEL indicó para el caso de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, lo siguiente:

*"**6. ANÁLISIS DE RESULTADOS***
(...)
6.54. Análisis del canal 56 (Canal Matriz)
(...)
En ninguno de los 10 puntos de medición ubicados en los centros de ciudades principales, en los cuales el RGLT [sic] *especifica una intensidad de campo de al menos 80 dBµV/m para este canal, se cumple esa condición.* ***De esta manera, en los núcleos de las ciudades principales, el canal 56 tiene cobertura en el 0% de los puntos medidos. En los demás puntos, donde el requerimiento del RLGT es de 64 dBµV/m, el canal 56 cumple en 3 de los 28 sitios, para un cumplimiento en el 10,71% de los sitios fuera de los centros de ciudades principales****.*

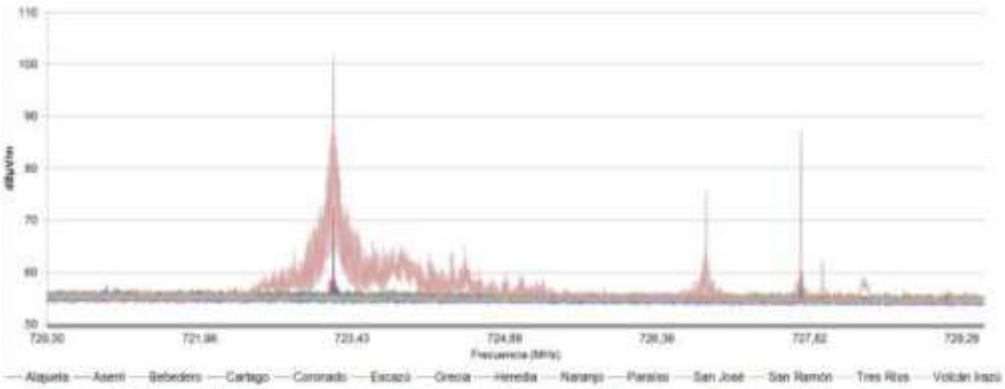


Figura 267. Intensidad de campo eléctrico del canal 56 en los sitios de medición del Valle Central.

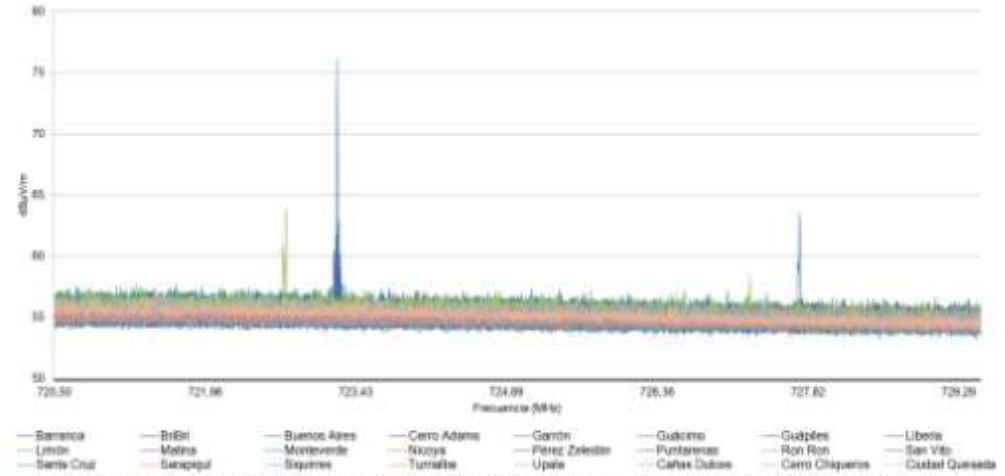


Figura 268. Intensidad de campo eléctrico del canal 56 en los sitios de medición fuera del Valle Central.

(…)

De los 38 puntos de medición a nivel nacional, 18 se encuentran dentro de la zona de cobertura especificada por el Contrato Concesión [sic] *(Turrialba, Paraíso, Cartago, Volcán Irazú, Tres Ríos, Coronado, San José, Cerro Bebedero, Escazú, Aserrí, Heredia, Alajuela, Grecia, Naranjo, Siquirres, Guácimo, Guápiles y Sarapiquí).* ***De estos 18 puntos, La*** [sic] ***señal del canal 56 cumple con la intensidad de campo eléctrico especificada en el RLGT en 4 de ellos (Volcán Irazú, Paraíso, Naranjo y Guápiles), por lo que tiene cobertura en el 22,22% de los sitios que se encuentran dentro del área de cobertura asignada a este canal.***

Sin embargo, si se ajusta el área de cobertura a lo especificado en el PNAF, solamente 13 puntos de medición dentro del Valle Central estarían en el área de cobertura: Volcán Irazú, Paraíso, Cartago, Tres Ríos, Coronado, San José, Aserrí, Heredia, Escazú, Cerro Bebedero, Grecia, Naranjo, y Alajuela. ***De estos 13 puntos, el canal 56 cumple en Naranjo, Paraíso y Volcán Irazú, para un cumplimiento en el 23,08% de los puntos en el área de cobertura ajustada a lo especificado por el PNAF.***

Este canal no tiene cobertura en sitios no permitidos por el Contrato de Concesión.
(…)

6.56. Análisis del canal 58 (Canal Matriz)

(…)

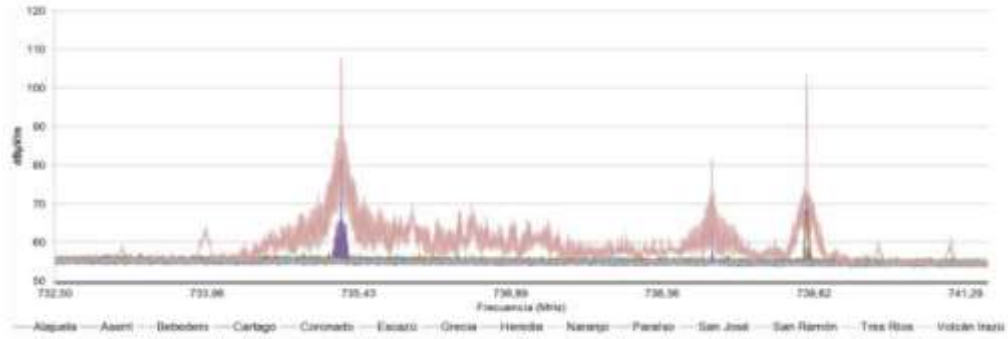


Figura 277. Intensidad de campo eléctrico del canal 58 en los sitios de medición del Valle Central.

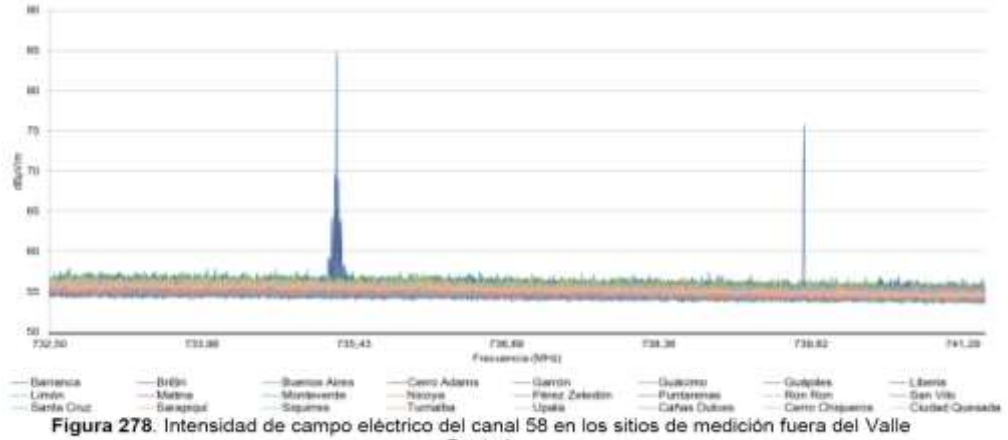


Figura 278. Intensidad de campo eléctrico del canal 58 en los sitios de medición fuera del Valle Central.

En ninguno de los 10 puntos de medición ubicados en los centros de ciudades principales, en los cuales el RGLT [sic] *especifica una intensidad de campo de al menos 80 dBµV/m para este canal, se cumple esa condición.* ***De esta manera, en los núcleos de las ciudades principales, el canal 58 tiene cobertura en el 0% de los puntos medidos. En los demás puntos, donde el requerimiento del RLGT es de 64 dBµV/m, el canal 58 cumple en 6 de los 28 sitios, para un cumplimiento en el 21,43% de los sitios fuera de los centros de ciudades principales.***

(…)

De los 38 puntos de medición a nivel nacional, 18 se encuentran dentro de la zona de cobertura especificada por el Contrato Concesión [sic]*: Turrialba, Paraíso, Cartago, Volcán Irazú, Tres Ríos, Coronado, San José, Cerro Bebedero, Escazú, Aserrí, Heredia, Alajuela, Grecia, Naranjo, Siquirres, Guácimo, Guápiles y Sarapiquí. La señal del canal 58 cumple con la intensidad de campo eléctrico especificada en el RLGT en 6 de estos 18 puntos (Cerro Bebedero, Naranjo, Guácimo, Guápiles, Paraíso y Volcán Irazú****), por lo que este canal tiene cobertura en el 33,33% de los sitios que se encuentran dentro del área de cobertura asignada mediante el Contrato de Concesión.***

Si se ajusta el área de cobertura a lo especificado en el PNAF, solamente 13 puntos de medición dentro del Valle Central estarían en el área de cobertura: Volcán Irazú, Paraíso, Cartago, Tres Ríos, Coronado, San José, Aserrí, Heredia, Escazú, Cerro Bebedero, Grecia,

Naranjo, y Alajuela. De estos 13 puntos, el canal 58 cumple en Cerro Bebedero, Naranjo, Paraíso y Volcán Irazú, para un cumplimiento en el 30,77% de los puntos en el área de cobertura ajustada a lo especificado por el PNAF.

Los resultados obtenidos permiten verificar que el canal 58 tiene solamente un transmisor localizado en el Volcán Irazú, lo cual se apega al Contrato de Concesión para este canal.
(...)

6.58. Análisis del canal 60 (Canal Matriz)
(...)
En ninguno de los 10 puntos de medición ubicados en los centros de ciudades principales, en los cuales el RGLT [sic] *especifica una intensidad de campo de al menos 80 dBµV/m para este canal, se cumple esa condición.* ***De esta manera, en los núcleos de las ciudades principales, el canal 60 tiene cobertura en el 0% de los puntos medidos. En los demás puntos, donde el requerimiento del RLGT es de 64 dBµV/m, el canal 60 cumple en 4 de los 28 sitios, para un cumplimiento en el 14,28% de los sitios fuera de los centros de ciudades principales.***

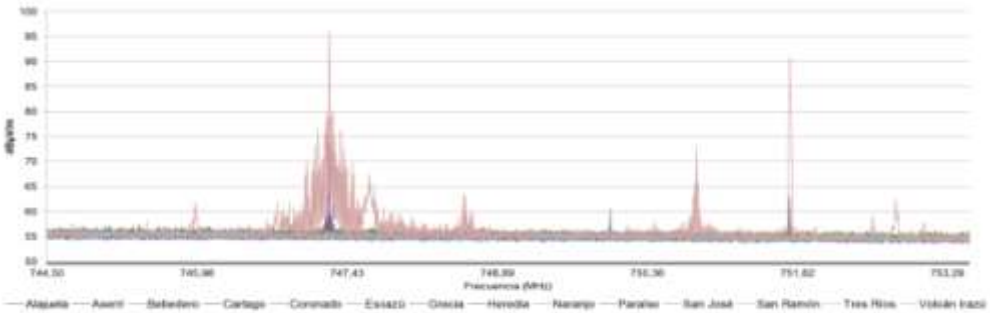


Figura 287. Intensidad de campo eléctrico del canal 60 en los sitios de medición del Valle Central.

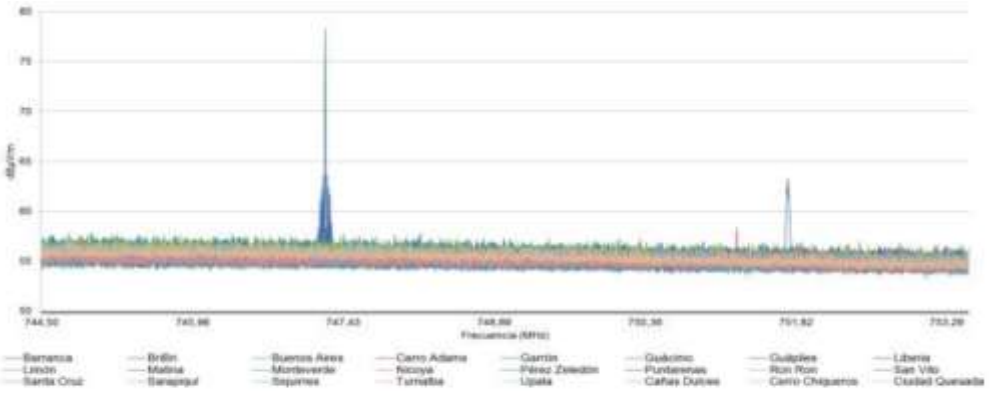


Figura 288. Intensidad de campo eléctrico del canal 60 en los sitios de medición fuera del Valle Central.

(...)

De los 38 puntos de medición a nivel nacional, 18 se encuentran dentro de la zona de cobertura especificada por el Contrato Concesión [sic]*: Turrialba, Paraíso, Cartago, Volcán Irazú, Tres Ríos, Coronado, San José, Cerro Bebedero, Escazú, Aserrí, Heredia, Alajuela, Grecia, Naranjo, Siquirres, Guácimo, Guápiles y Sarapiquí.* ***De estos 18 sitios***

donde el contrato de concesión especifica la cobertura, el canal 60 cumple con la intensidad de campo eléctrico especificado en el RLGT en 4 de ellos (Guápiles, Naranjo, Paraíso y Volcán Irazú), por lo que tiene cobertura en el 22,22% de los sitios dentro del área de cobertura designada por el Contrato de Concesión.

Sin embargo, si se ajusta el área de cobertura a lo especificado en el PNAF, solamente 13 puntos de medición dentro del Valle Central estarían en el área de cobertura: Volcán Irazú, Paraíso, Cartago, Tres Ríos, Coronado, San José, Aserrí, Heredia, Escazú, Cerro Bebedero, Grecia, Naranjo, y Alajuela. ***De estos 13 puntos, el canal 60 cumple en Naranjo, Paraíso y Volcán Irazú, para un cumplimiento en el 23,08% de los puntos en el área de cobertura ajustada a lo especificado por el PNAF.***

Si se evalúa la cobertura de este canal en todo el Valle Central, de los 14 sitios de medición ubicados dentro de esta área geográfica, el canal 60 brinda cobertura en 3 de ellos, para un porcentaje de cobertura de 21,43% de los puntos de medición dentro del Valle Central. (...)" (Énfasis agregado).

Con respecto a la cita anterior, se concluye que durante el intervalo de tiempo en el que se realizaron las mediciones de los Canales físicos 56, 58 y 60, la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA ha incumplido las obligaciones y condiciones de cobertura establecidas en el título habilitante. Aspecto que fue comprobado por el Órgano Director Administrativo de carácter sancionatorio, no encontrándose dentro del expediente administrativo prueba alguna que refute o cuestione dichos resultados. Así como tampoco, la empresa de marras presentó alegato o prueba que justifique dicho incumplimiento contractual.

En cuanto al análisis de potencia y contenido de las señales, el Órgano Regulador mediante su dictamen emitido mediante el oficio N° 5173-SUTEL-DGC-2012 estableció:

*"**6.54.1. Análisis de potencia sobre el piso de ruido (CNR) para el canal 56.***
(...)
De acuerdo con el criterio de nivel de recepción de la tabla 1, el canal 56 tiene una señal "buena" en el Volcán Irazú y de "no cobertura" en el resto del territorio nacional.

6.54.2. Análisis del contenido de la señal del canal 56.
No fue posible observar el contenido del canal 56 en ninguno de los sitios de medición mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1). Esto es congruente con las mediciones de intensidad de campo eléctrico y potencia de la señal sobre el piso de ruido, las cuales tuvieron un resultado de "no cobertura" en todos los casos. (...)

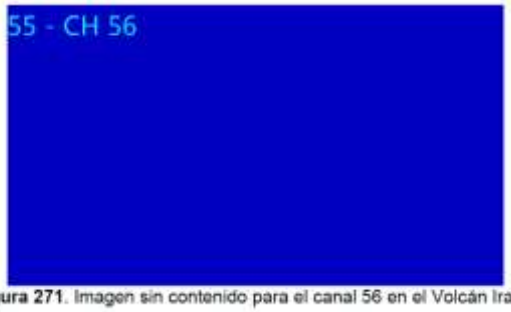


Figura 271. Imagen sin contenido para el canal 56 en el Volcán Irazú.

6.56.1. Análisis de potencia sobre el piso de ruido (CNR) para el canal 58.

(…)

De acuerdo con el criterio de nivel de recepción de la tabla 1, el canal 58 tiene una señal "óptima" en el Volcán Irazú ***y 'no cobertura' en el resto del territorio nacional.***

(…)

6.56.2. Análisis del contenido de la señal del canal 58.

En todos los sitios donde fue detectada la señal para el canal 58, se pudo determinar, mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1), que se transmite efectivamente contenido, comprobándose que este canal no solo tiene señal al aire, sino que brinda el servicio de televisión abierta. La figura 281 muestra el contenido del canal 58 tomado en el sitio de medición del Volcán Irazú, donde se midió una potencia sobre piso de ruido de 53,62 dBm (cobertura 'óptima'). La figura muestra que a la imagen es nítida, y no es afectada por el ruido, lo cual concuerda con la medición de nivel de señal sobre piso de ruido.



Figura 281. Imagen del contenido verificado para el canal 58 en El Volcán Irazú.

(…)

6.58.1. Análisis de potencia sobre el piso de ruido (CNR) para el canal 60.

(…)

De acuerdo con el criterio de nivel de recepción de la tabla 1, el canal 60 tiene nivel de señal "bueno" en el Volcán Irazú. ***El resto de sitios presenta un nivel de potencia sobre piso de ruido de 'no cobertura' (…)***

6.58.2. Análisis del contenido de la señal del canal 60

En el único sitio donde se pudo observar el contenido de la programación del canal 60 fue en el Volcán Irazú. Se pudo determinar, mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1), que se transmite efectivamente contenido, comprobándose que este canal no solo tiene señal al aire, sino que brinda el servicio de televisión abierta. La figura

291 muestra el contenido del canal 60 tomado en el Volcán Irazú, donde se presenta una potencia sobre piso de ruido de 42 dBm (calidad buena). La figura muestra que a la imagen le falta nitidez, y se ve un poco afectada por el ruido, lo que es consecuente con la potencia de la señal sobre el ruido medida en ese sitio. También se comprueba el resultado de nivel de señal sobre piso de ruido de 'no cobertura' en el resto de las mediciones, ya que solo en el Volcán Irazú se pudo observar el contenido de la programación. Es importante anotar que, a pesar de que el canal 60 es un canal matriz, las transmisiones demuestran que está siendo usado como repetidor del canal 58.



Figura 291. Imagen del contenido verificado para el canal 60 en el Volcán Irazú.

(...)"

Posteriormente, en el apartado 7. *"ANÁLISIS DE OCUPACIÓN"*, sección 7.1. *"Análisis de ocupación de los canales de televisión según contratos y Acuerdos Ejecutivos"*, subsección 7.2.3. *"Respeto* [sic] *a los canales 38 al 69 en la banda UHF"* se señaló que:

*"El porcentaje de **no cobertura** del canal 56 (canal matriz) con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 23.0% a un 76.9% en el Valle Central. (...)*

*En lo relacionado con el canal 58 (canal matriz), el porcentaje de **no cobertura** con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 31.0% a un 69.2% en el Valle Central.*
(...)
*En el caso del canal 60 (canal matriz), el porcentaje de **no cobertura** con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 15.0% a un 78.6% en el Valle Central".*

Este aumento en la **no cobertura** y por ende, el incremento en el incumplimiento de sus obligaciones prestacionales y contractuales, con respecto a mediciones del año 2010 se puede ver reflejado en la figura Nº 341 del dictamen técnico emitido mediante el oficio N° 5173-SUTEL-DGC-2012, de la siguiente manera:

"(...)

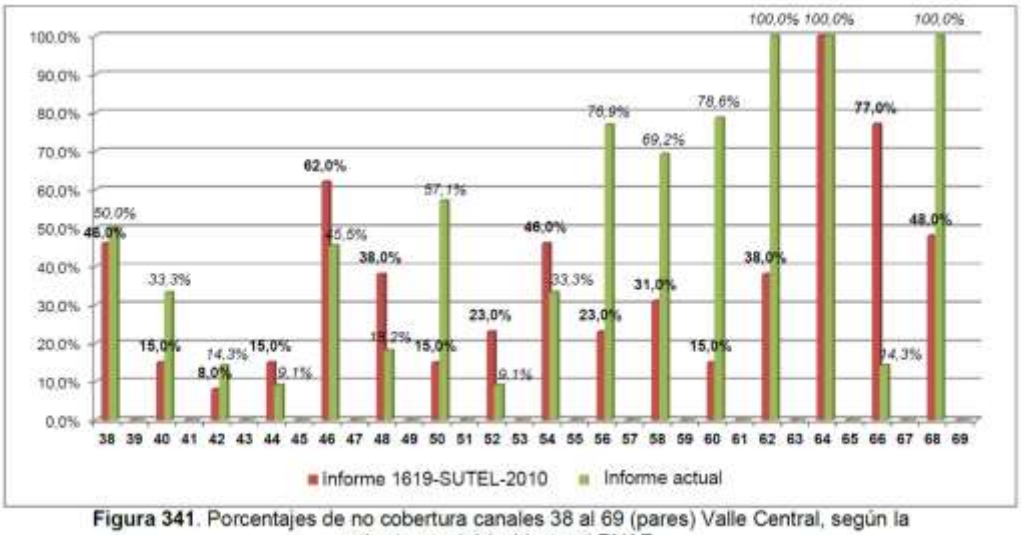


Figura 341. Porcentajes de no cobertura canales 38 al 69 (pares) Valle Central, según la cobertura establecida en el PNAF.

(...)"

A raíz de los **<u>porcentajes tan altos de no cobertura</u>** reflejados para los Canales físicos 56 (722 MHz a 728 MHz), 58 (734 MHz a 740 MHz) y 60 (746 MHz a 752 MHz) de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA se puede traer a colación lo expuesto por la Contraloría General de la República en la disposición 5.1 inciso c) del informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 y en donde se dispuso que ***"[e]l recurso que no se esté utilizando o sea empleado de forma no óptima deberá ser recuperado por parte del Poder Ejecutivo en el plazo inmediato, a través del respectivo procedimiento, sea reasignación o extinción de frecuencias****(...)"*.(Énfasis y subrayado agregado). Obligación que tiene su origen en lo dispuesto en el Legislador, al establecer en el marco sectorial de telecomunicaciones la obligación de la Administración Concedente de velar porque el recurso escaso y estratégico (espectro radioeléctrico), sea utilizado de forma eficiente y óptima, en pro de la satisfacción del interés colectivo o general. Así como también es parte de las obligaciones que se le impone a la Administración en materia de contratación pública, como parte del ejercicio de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales, exigiéndole a los funcionarios públicos, so pena de incurrir en una falta personal de responsabilidad administrativa, advertir y tomar las medidas jurídicamente procedentes cuando se está en presencia de un hecho o conducta de incumplimiento de un concesionario o contratista (artículo 100ter de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494).

3. Oficio N° 1497-SUTEL-DGC-2014:

En fecha 12 de marzo de 2014, la SUTEL emitió el criterio N° 1497-SUTEL-DGC-2014, acogido por el Consejo de la SUTEL por Acuerdo Nº 013-018-2014, adoptado en la sesión ordinaria N° 018-2014, celebrada el día 19 de marzo de 2014, denominado *"Dictamen Técnico sobre la adecuación de los títulos habilitantes de la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A* [sic], *Red de Televisión por suscripción de acceso inalámbrico (señal codificada)"*.

En dicho documento, la SUTEL indicó lo siguiente sobre las mediciones que se realizaron en el 2013:

> *"**3.3 Mediciones realizadas en 2013***
> *En las mediciones efectuadas en 2013 se constató que la cobertura de los canales 56, 58 y 60 no cumple con los parámetros establecidos en el PNAF en ninguno de los puntos de medición. (...)* ***En este sentido, la empresa en mención actualmente no cuenta con puntos de transmisión para los canales 56, 58 y 60 (no opera la red de televisión por suscripción vía inalámbrica con señal codificada)****.*
>
> *(...) no se obtuvieron niveles de cobertura que cumplan con el umbral establecido en ninguno de los puntos de medición incluidos en el respectivo Contrato de Concesión, por lo que con base en dichos niveles,* ***se considera que estos canales no se encuentran en operación.*** *(...)"* (Énfasis agregado).

En virtud de lo anterior, puede observarse que, en comparación con las mediciones realizadas en el año 2012, donde se reportaban amplios porcentajes de **no cobertura** (76,9%, 69,2% y 78,6%), para el 2013 se reportó la inexistencia de puntos de transmisión para los Canales físicos 56, 58 y 60.

Sobre las obligaciones de pago del canon de reserva del espectro, la SUTEL señaló:

> *"**6. Sobre el pago del canon de reserva del espectro***
> *(...) a pesar de que TV de San José UHF S.A.* [sic] *tiene otorgados canales 56, 58 y 60 atribuidos en el PNAF para el servicio de radiodifusión para televisión de acceso libre, dado que en título habilitante respectivo se otorgaron (...)* ***para brindar el servicio de televisión por suscripción (lo cual hoy en día corresponde a la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público), se considera sujeto pasivo de este canon.***
>
> *En este sentido,* ***al día de hoy se han puesto a cobro tres periodos, correspondientes al 2010, 2012 y 2013. Asimismo, está puesto al cobro el canon para el financiamiento del periodo 2014 pagadero este mismo año, con fecha límite el 15 de marzo.***
>
> *Así las cosas, del registro de pagos recibidos por parte de los sujetos pasivos del canon actualizado al 31 de diciembre de 2013 por parte de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda (validado con la base de datos remitida por dicho Ministerio a esta Superintendencia mediante el oficio SDPEC-009-2014 del 05 de febrero de 2014),* ***la empresa TV de San José UHF S.A.*** **[sic]** ***no ha cancelado ninguno de los periodos indicados. Al respecto, la suma del monto calculado para la empresa en mención para los periodos 2010, 2012 y 2013 asciende a ₡74.629.321,89 (setenta y cuatro millones seiscientos veintinueve mil trescientos veintiún colones con ochenta y nueve céntimos).***
>
> *Finalmente, respecto al canon de reserva del espectro para el financiamiento del periodo 2014 la empresa TV de San José UHF S.A. debe cancelar ₡ 45.928.269,39 (cuarenta y cinco millones novecientos veintiocho mil doscientos sesenta y nueve con treinta y nueve céntimos).*
> *(...)"* (Énfasis agregado).

Sobre la obligación de transmisión de doce horas diarias, de conformidad con lo que norma el artículo 99 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, la SUTEL indicó que:

> ***"7.1 Sobre la no operación de las frecuencias de los canales 56, 58 y 60 otorgados a la empresa TV de San José UHF S.A.*** [sic]
>
> *(...) a través del artículo 99 del RLGT, se estableció que 'las estaciones al servicio de radiodifusión televisiva deberán cumplir con un mínimo de transmisión de doce horas diarias'* ***con el fin de asegurar el beneficio de la población costarricense y el uso eficiente del espectro radioeléctrico, condición que evidentemente no se cumple por parte del concesionario de los canales 56, 58 y 60.***
>
> *(...) de las evaluaciones realizadas por esta Superintendencia de conformidad con los artículos 101 y 105 del RLGT durante el 2013,* ***se evidencia que los canales 56, 58 y 60 no se encuentran en utilización.*** *Lo anterior refleja el incumplimiento de la normativa citada, por lo tanto procede por parte de esta Superintendencia recomendar al Poder Ejecutivo la apertura del respectivo procedimiento administrativo contra este concesionario para la recuperación del recurso escaso. (...)"* (Resaltado no corresponde al original).

En dicho dictamen la SUTEL recomienda proceder como en derecho corresponda, con la apertura de un procedimiento administrativo que permita analizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP otorgado a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA y consecuentemente de los demás actos emitidos, en virtud de las siguientes conclusiones:

> *"(...)*
> ***8. Conclusiones*** *(...)*
>
> ***8.2 Ocupación del Espectro***
> *(...)*
>
> *A partir de los resultados de las mediciones efectuadas por esta Superintendencia durante los años 2010, 2012 y 2013 se evidenció el uso irregular del espectro (operación de un canal matriz con su propio contenido) y su posterior no uso.*
>
> ***8.3 Sobre la operación de la red de la empresa TV de San José UHF S.A.*** [sic]
> *(...)*
> - *La no operación de los citados canales, concesionados a la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] *priva a la población costarricense del beneficio de contar con el contenido de programación en los canales de libre acceso otorgados en nuestro país. (...)"*. (El subrayado es de autoría propia).

4. Oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014:

En fecha 3 de diciembre de 2014, la SUTEL mediante el oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014 presentó el informe *"Principales resultados del estudio de utilización de la banda destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHz)".* Como el nombre lo indica, el documento contempla los resultados de las mediciones realizadas en 70 sitios distintos entre los meses de febrero y setiembre de 2014 para cada uno de los 67 canales existentes.

En total, durante el proceso se registraron 4690 mediciones del servicio de radiodifusión televisiva a nivel nacional, las cuales dieron pie a la construcción de las gráficas **(figuras N° 6 y Nº 7 del oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014)** que se citan a continuación, y que indican el *"(...) porcentaje de cobertura de los canales de televisión a nivel nacional"* y una *"comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (...)":*

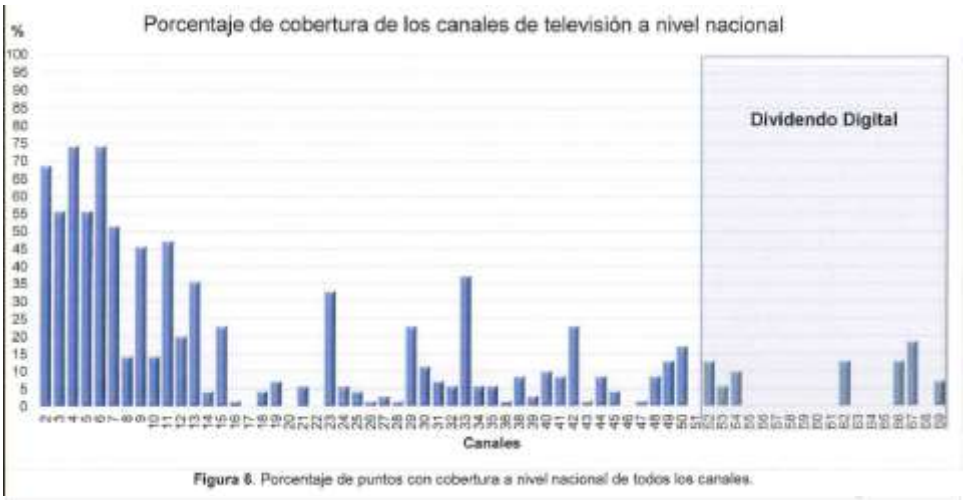


Figura 6. Porcentaje de puntos con cobertura a nivel nacional de todos los canales.

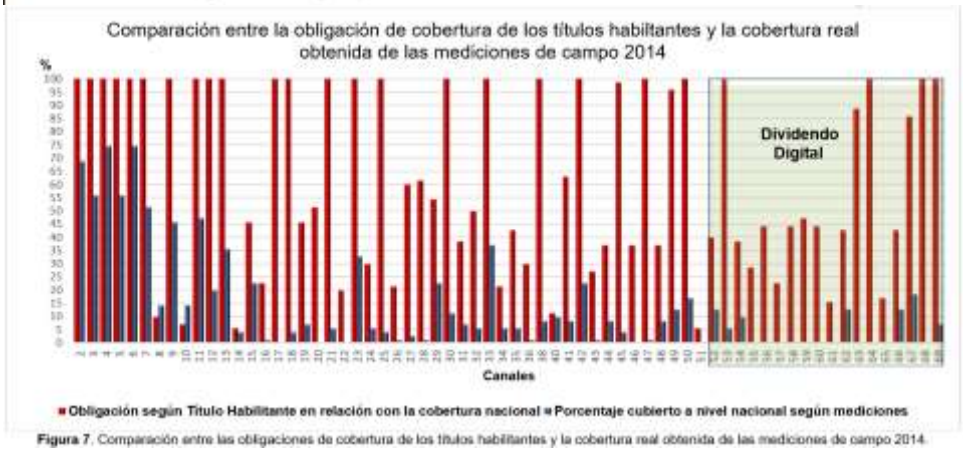


Figura 7. Comparación entre las obligaciones de cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo 2014.

Sobre los resultados obtenidos, la SUTEL estableció que: *"(...) Entre los canales 52 y 69, el promedio de puntos con cobertura es de tan solo 4,44%, y 16 canales (96 MHz) no tienen cobertura en ningún punto del territorio nacional (...)".* Asimismo se realizó una *"(...) comparación entre las obligaciones de cobertura según los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones realizadas en campo (...)",* señalando que *"(...) el 97% de las concesiones no cumplen con sus obligaciones contractuales establecidas en sus títulos habilitantes, siendo que únicamente los canales 8 y 10 cumplen con su obligación de cobertura (...)"*; por ende como resultado respecto a los Canales físicos 56 (722 MHz a 728 MHz), 58 (734 MHz a 740 MHz) y 60 (746 MHz a 752 MHz) de la empresa concesionaria T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, habría incumplido con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante otorgado mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002.

5. Oficio N° 08429-SUTEL-DGC-2015:

A través del acuerdo N° 008-067-2015 del Consejo de la SUTEL y comunicado mediante oficio N° 00177-SUTEL-SCS-2016, la SUTEL remitió el oficio N° 08429-SUTEL-DGC-2015 *"Principales resultados del estudio de utilización de la banda destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHz)"*.

Sobre los resultados de las mediciones realizadas en 155 sitios distintos entre los meses de enero a setiembre del año 2015 para cada uno de los 67 canales existentes, la SUTEL señaló lo siguiente:

> *"(…) existe una deficiente utilización del espectro en la banda de radiodifusión televisiva, donde tal y como se señaló, los concesionarios actuales no logran alcanzar en promedio un cumplimiento del 12% respecto de sus obligaciones de cobertura establecidas en los respectivos títulos habilitantes, a pesar de las características favorables que presenta la banda en cuanto a propagación. (…) se realizó una comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (…).* ***Entre los canales 52 y 69, el promedio de puntos de cobertura es del 2%.*** *Además, se tiene que del total de 67 canales 24 de ellos presentan coberturas inferiores al 2%, de los cuales 10 canales (60 MHz) no cumplen con los niveles mínimos de cobertura en ningún punto del territorio nacional.(…)"* (Énfasis agregado).

En este dictamen puede observarse, que tal y como lo refleja la **figura Nº 6**, que **el porcentaje de cobertura a nivel nacional de los Canales físicos 56, 58 y 60 es de 0%:**

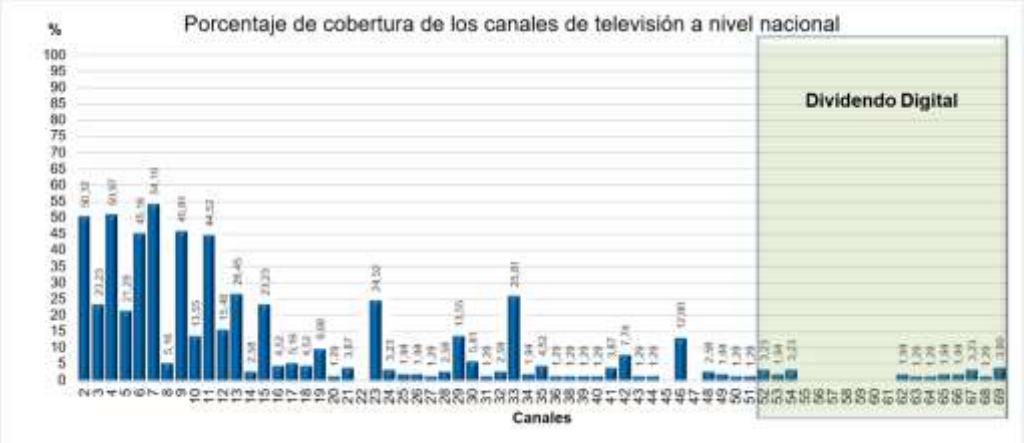


Figura 6. Porcentaje de puntos con cobertura a nivel nacional de todos los canales.

Del documento, se desprende que producto de las mediciones realizadas (121% de sitios medidos con respecto al año anterior), se tienen resultados de cobertura similares a los indicados en el oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014 para los Canales físicos 56, 58 y 60 (empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA), donde existe una clara diferencia entre las

obligaciones de cobertura del título habilitante y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo en 2015, advirtiéndose un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y prestacionales, tal y como se observa en la **Figura Nº 7**:

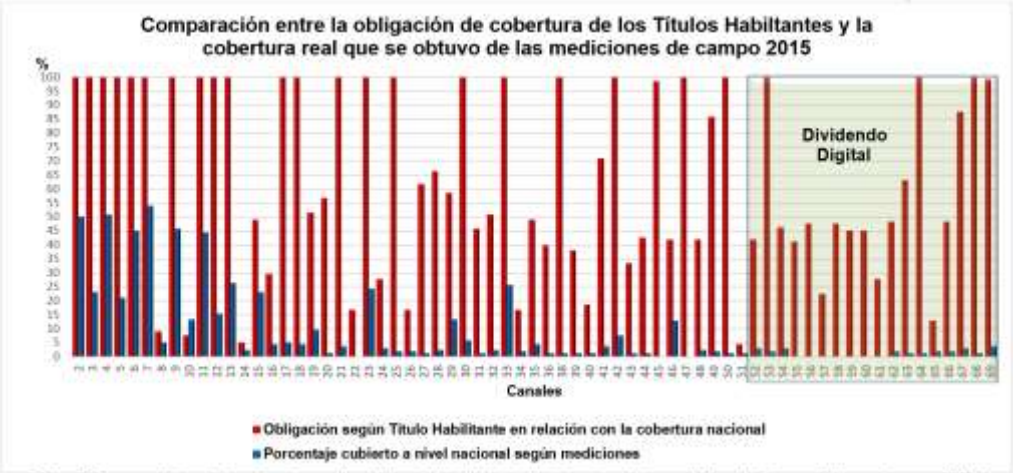


Figura 7. Comparación entre las obligaciones de cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo 2015.

Debe señalarse como dato importante que en comparación con las mediciones realizadas en 2014, respecto al Canal 58 físico (frecuencias de 734 MHz a 740 MHz), el porcentaje de cobertura aumentó de un **0%** a un **0.65%**, mientras que en los Canales físicos 56 (frecuencias de 722 MHz a 728 MHz) y 60 (frecuencias de 746 MHz a 752 MHz) se mantuvo en **0%**, tal y como se observa en la **figura Nº 10**:

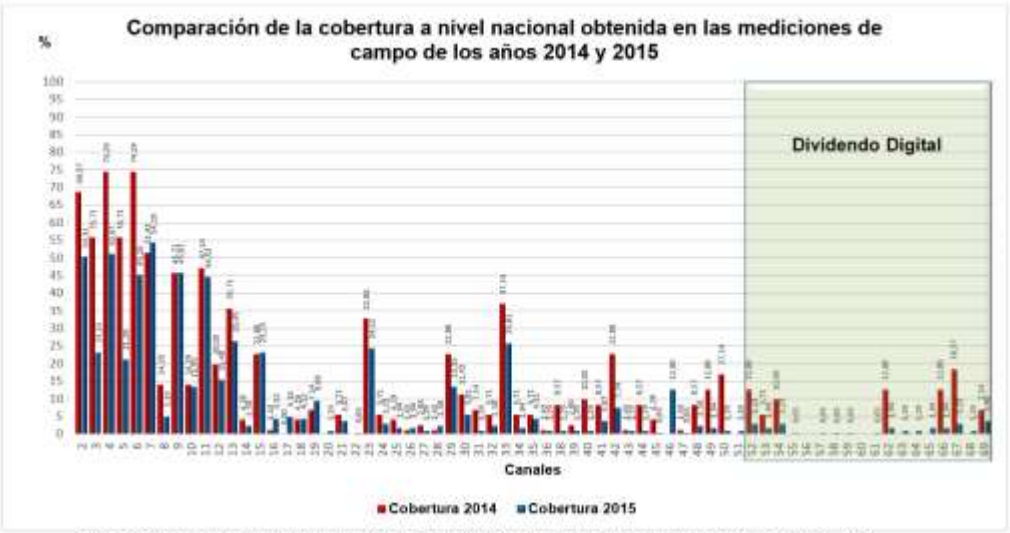


Figura 10. Comparación de la cobertura a nivel nacional obtenida en las mediciones de campo de los años 2014 y 2015.

Esta situación evidencia, a la luz de dichos resultados, que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA estaría incumpliendo con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante (Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002).

6. Oficio Nº 05817-SUTEL-DGC-2016:

Mediante el oficio Nº 06700-SUTEL-SCS-2016 de fecha 12 de setiembre de 2016, la SUTEL remitió el oficio N° 05817-SUTEL-DGC-2016 de fecha 10 de agosto de 2016 denominado *"Informe sobre la recaudación del canon de reserva del espectro y estado de cuenta de concesionarios y permisionarios del espectro"* el cual fue aprobado en sesión ordinaria N° 048-2016, celebrada en fecha 31 de agosto de 2016, mediante el Acuerdo N° 039-048-2016 de su Consejo.

En dicho dictamen técnico la SUTEL indicó para el caso de marras, los montos que le correspondían cancelar a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA por concepto de canon de reserva del espectro.

En este sentido, la SUTEL indicó que a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA le correspondía pagar por concepto de canon 2015 la suma de ₡45 423 098,62 colones, de los cuales solo canceló el monto de ₡1.000 colones. En virtud de lo anterior, la SUTEL señaló en dicho informe lo siguiente:

> *"**2.2 Pagos parciales (inferiores al calculado por SUTEL) por diferencia de interpretación***
>
> *Los concesionarios (...) TV de San José UHF S.A.* [sic] *(...) corresponden a casos en los cuales existen diferencias respecto al pago con lo indicado por la SUTEL.*
>
> *En este sentido, debe señalarse que el artículo 63 de la Ley N° 8642 por una parte, señala que el monto 'por cancelar por parte de los concesionarios será calculado por la SUTEL considerando los parámetros' detallados, y por otra dispone que '[e]l monto por pagar por parte del contribuyente de este canon será determinado por este mediante una declaración jurada'.*
>
> *Sobre este tema, es criterio de esta Dirección que la autodeterminación especificada en el artículo indicado, no se ajusta a la realidad considerada por la Ley al momento de la creación de la tasa, ya que el artículo 63 dispone expresamente los elementos que deben ser considerados por SUTEL para la determinación de dicha tasa. Asimismo, dicha norma para el caso de los contribuyentes se refiere únicamente al trámite de pago y no así a la determinación del cálculo de la suma a pagar. En otras palabras, la norma se refiere a la autonomía de cada contribuyente para presentar su declaración de pago, pero la misma se debe basar en el monto determinado por la SUTEL, en aplicación de los principios establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.*
>
> *Así las cosas, no resulta aceptable para esta Superintendencia la interpretación que realizan los concesionarios indicados en cuanto a que son ellos, en su ámbito de autonomía, quienes disponen el monto a pagar, por cuanto no tendría lógica que esta Superintendencia sea la encargada de interpretar los parámetros dispuestos en la Ley y establecer la fórmula de cálculo necesaria.*
>
> *(...)*

4.1. Sobre los concesionarios morosos según los datos remitidos por el Ministerio de Hacienda

En la siguiente tabla se muestran los concesionarios que han presentado situaciones de no

Concesionario	Periodos con pagos parciales o no pago[1]				
	2010	2012	2013	2014	2015
TV DE SAN JOSE UHF S.A.	No pagó	No pagó	No pagó	No pagó	Pago parcial

pago o pago parcial del canon en algún periodo puesto al cobro, ya sea por pago parcial del monto calculado por SUTEL o no pago, según los datos remitidos por el Ministerio de Hacienda, sobre los que se considera necesario solicitar al Poder Ejecutivo el inicio de los procedimientos aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 22 de la Ley N° 8642:
(...)".

Sobre este punto la SUTEL indicó que, de conformidad con lo señalado por el Ministerio de Hacienda, se registró el no pago de los periodos 2010, 2012, 2013 y 2014, y el pago parcial del periodo 2015 por parte de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA.

Debido a lo anterior, la SUTEL establece en dicho dictamen que: *"Tomando en consideración la importancia del correcto pago del canon del espectro radioeléctrico, se constituyó en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, que* ***el atraso de al menos 3 meses en el pago de las tasas y cánones establecidos en dicha ley corresponde a una causal para la resolución del contrato de concesión*** *(...)"* (énfasis agregado). Por ende recomendó a esta autoridad *"(...) proceda con la toma de acciones para la apertura de los procedimientos respectivos para la eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 22, inciso 1, subinciso d) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, para el caso de los concesionarios y permisionarios morosos del espectro incluyendo tanto a aquellos que han realizado pagos parciales como a los que no han realizado pago alguno (...)".*

7. Oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016:

A través del Acuerdo N° 009-074-2016 del Consejo de la SUTEL y comunicado mediante oficio N° 00345-SUTEL-SCS-2017, la SUTEL remitió el oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016 *"Principales resultados del estudio de utilización de la banda destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHz)".*

Para la elaboración del dictamen técnico emitido mediante el oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016, los datos fueron tomados mediante el empleo de los equipos del Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo de Espectro, entre los meses de mayo y agosto de 2016. Es importante señalar que, para la elaboración del informe, SUTEL menciona que en cada uno de los 170 puntos geográficos se evaluaron los 67 canales de televisión, incluyendo mediciones de verificación de la presencia de contenido (audio y video) de la señal, lo cual arrojó un total de 11 390 mediciones de radiodifusión.

Con los resultados obtenidos, SUTEL elaboró la siguiente imagen (**Figura Nº 7**) que se cita a continuación en la que se hace una comparación entre la obligación de cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida en 2016 y de la cual se desprende que para los Canales físicos 56, 58 y 60 a nivel nacional hay una clara diferencia entre la obligación de cobertura y la cobertura real:

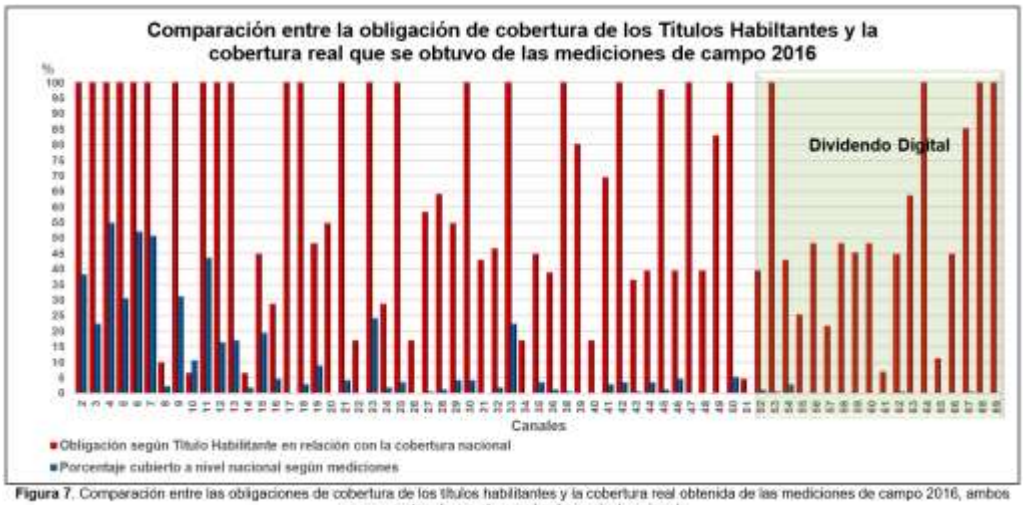


Figura 7. Comparación entre las obligaciones de cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo 2016, ambos con respecto a los puntos evaluados a nivel nacional.

Debe hacerse notar que, en esta medición realizada por la SUTEL, tal y como lo refleja la **Figura Nº 6**, el porcentaje de cobertura a nivel nacional del Canal físico 58 descendió de un **0.65%** a un **0%,** en comparación con las mediciones de 2015, y los Canales físicos 56 y 60 continúan en un **0%** de cobertura:

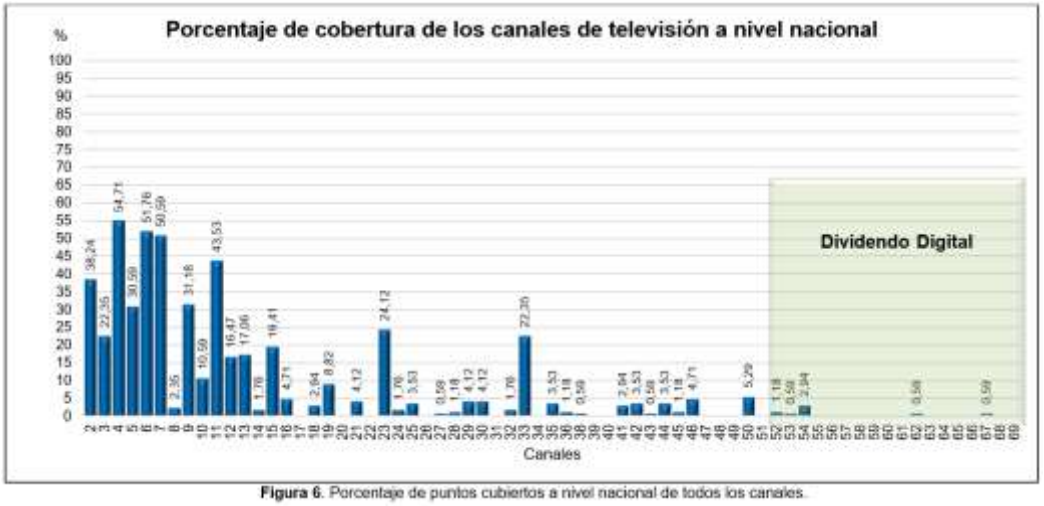


Figura 6. Porcentaje de puntos cubiertos a nivel nacional de todos los canales.

La SUTEL señala que *"(...) Entre los canales 52 y 69, el promedio de puntos con cobertura es del 0,33%"* y que se realizó una *"(...) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo",* dando como resultado respecto los Canales físicos 56 (722 MHz a 728 MHz), 58 (734 MHz a 740 MHz) y

60 (746 MHz a 752 MHz), una cobertura a nivel nacional de 0%, por lo que nuevamente para el año 2016, conforme los datos de la SUTEL, la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, no cumplió con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002.

8. Oficio N° 01084-SUTEL-DGC-2017:

Mediante el oficio N° 01882-SUTEL-SCS-2017 de fecha 02 de marzo de 2017, la SUTEL remitió el oficio Nº 01084-SUTEL-DGC-2017 de fecha 06 de febrero de 2017 denominado *"Reiteración de las recomendaciones para la apertura de un procedimiento administrativo para la eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 8642 por posibles incumplimientos de la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] *canales de televisión 56, 58 y 60"* el cual fue aprobado por su Consejo mediante Acuerdo Nº 011-016-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 016-2017, celebrada en fecha 22 de febrero de 2017.

En este documento, la SUTEL señaló lo siguiente:

> *"De seguido* ***se presentan los resultados de las mediciones en porcentajes de cobertura para los últimos tres años****, los cuales justifican la necesidad de iniciar de los procedimientos administrativos para la eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 8642,* ***por cuanto no existe justificación alguna para que se mantenga en vigencia el título habilitante correspondiente****.*
>
> ***Tabla 2.*** *Porcentaje de cobertura por año según mediciones*
> *(Cumplimiento respecto al título habilitante de los canales 56,58 y 60)*
>
> | *Canal* | *2014 (%)* | *2015 (%)* | *2016 (%)* |
> |---|---|---|---|
> | *56* | *0* | *0* | *0* |
> | *58* | *0* | *0* | *0* |
> | *60* | *0* | *0* | *0* |
>
> ***2. Sobre el pago del canon de reserva del espectro***
>
> *(...) al día de hoy se han puesto a cobro cinco periodos, correspondientes al 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. De igual forma se encuentra próximo a salir a cobro el periodo correspondiente al año 2016.*
>
> *Así las cosas, del registro de pagos recibidos por parte de los sujetos pasivos del canon actualizado al 01 de febrero de 2017 por parte de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, se extrae que la empresa TV de San José UHF S.A. no ha cancelado efectivamente ninguno de los periodos indicados (para los periodos 2014 y 2015 canceló ₡1.000 en cada uno).* ***Al respecto, la suma del monto calculado para la empresa en mención para los pendientes asciende a ₡164.611.266,23 (ciento sesenta y cuatro millones seiscientos once mil doscientos sesenta y seis colones con veintitrés céntimos) en lo que respecta al canon en mención.***
>
> *(...)*

Es conveniente reiterar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 22 inciso c) de la Ley N° 8642, la no cancelación de las tasas y cánones establecidos en dicha Ley, podría constituirse en una causal de revocación de la concesión para el titular.

(...)

3. Respecto al oficio OF-MICITT-UCNR-2016-164

(...) es recomendable la apertura de un procedimiento de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 8642 para extinción del derecho de concesión, máximo considerando, entre otras cosas, lo ya manifestado en este oficio así como el incumpliendo [sic, léase incumplimiento] *en las obligaciones contractuales h) y i)* [sic] *sobre la operación en forma regular con un mínimo de doce horas diarias y el interrumpir transmisiones por más de tres meses sin causa justificada y validada por la Administración Concedente (ver Contratos de Concesión de los canales citados), además del no pago de las tasas y cánones establecidos por Ley".* (Énfasis agregado).

Finalmente la SUTEL recomienda lo siguiente:

"• Reiterar al Poder Ejecutivo la necesidad de la apertura al amparo del artículo 22 de la Ley N° 8642 de los procedimientos administrativos relacionados con la posible recuperación de los canales 56, 58 y 60, otorgados a la empresa TV de San José UHF S.A. [sic]*, todo lo cual contribuya al fiel cumplimiento de los objetivos y principios establecidos por el ordenamiento vigente en telecomunicaciones, en especial la optimización de los recursos escasos".*

9. Oficio N° 03762-SUTEL-DGC-2021:

Por oficio Nº 04218-SUTEL-SCS-2021 de fecha 20 de mayo de 2021, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el oficio N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021 aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 013-040-2021, adoptado en la sesión ordinaria N° 040-2021, celebrada el día 20 de mayo de 2021, denominado *"Atención a solicitud de actualización de información requerida por el MICITT mediante oficio MICITT-DCNT-UCNR-OF-022-2021 respecto al uso de las frecuencias por parte de la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic]*".*

En dicho dictamen técnico la SUTEL presentó los resultados de las mediciones automáticas programadas del 1° de enero al 14 de marzo de 2021, en las estaciones fijas del Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo de Espectro (SNGME), indicando lo siguiente:

*"**1. Verificación del cumplimiento de la intensidad de señal.***

(...) se brinda el resultado de las mediciones que fueron llevadas a cabo por la Dirección General de Calidad, para la determinación del uso del espectro atribuido en el Plan Nacional de Atribución del Espectro [sic] *(PNAF) para el servicio de radiodifusión televisiva, según se detalla en la siguiente tabla (...)*

Tabla 2. Resultado de las mediciones para el servicio de radiodifusión televisiva, según la señal identificada por cada canal para las estaciones fijas del SNGME.

Canal	Heredia	Cartago	Pérez Zeledón	Liberia	Puntarenas	Upala	Corredores	Limón
56	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay
58	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay
60	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay	No hay

Nota: No hay implica que en el segmento de frecuencias únicamente se detectó el piso de ruido, por lo que no se determinó la presencia de alguna señal.

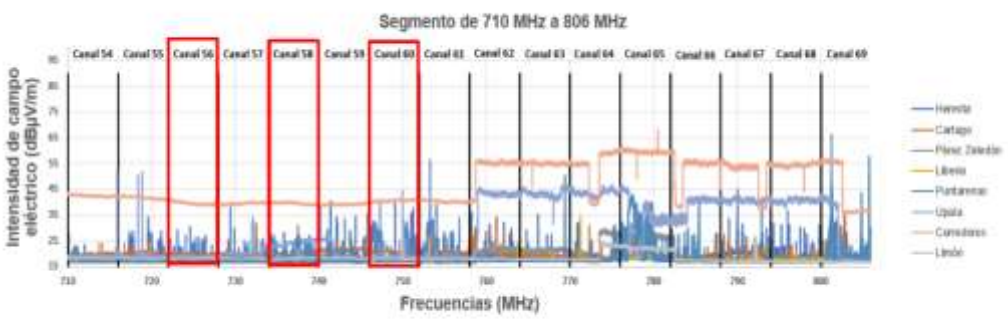
(...) se obtiene que para los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) del título habilitante otorgado mediante Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR, N° 074-2006-CNR y N° 075-2006-CNR, todos de fecha 23 de octubre de 2006, por parte de la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A. [sic], *con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704 no se cumplen con los umbrales de cobertura detallados en la tabla 1, lo cual representa un 0% de cumplimiento cobertura con respecto a la totalidad de los sitios evaluados.*

Además, más allá del cumplimiento o no de los umbrales señalados, se extrae de las mediciones realizadas la no utilización de las frecuencias por parte de la empresa en cuestión, siendo que en todos los sitios de medición únicamente se detectó piso de ruido*".*(Énfasis propio)

Sobre esto último se hace necesario mostrar la gráfica de los resultados obtenidos por la SUTEL para cada uno de los canales:

Apéndice 1

Resultados de las mediciones realizadas con las estaciones fijas del SNGME



De la grafica anterior, los segmentos resaltados en los cuadros rojos corresponden con los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) concesionados a la empresa TV DE SAN JOSE UHF S.A., con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704.

Sobre el cumplimiento de la obligación de transmisión de un mínimo de doce (12) horas diarias la SUTEL señaló:

*"**2. Verificación del cumplimiento de la obligación de transmisión de un mínimo de doce***

(12) horas diarias.

(...)

Para la realización de las mediciones se utilizó una rutina automática de medición que registró en cada una de las 8 estaciones del SNGME 10 minutos continuos por cada hora durante las 24 horas del día, desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo de 2021, además, se

adjunta como parte este informe los archivos con los resultados obtenidos de las mediciones en cada una de las estaciones de monitoreo del SNGME utilizadas de los cuales se extrae de forma consistente con lo señalado en la sección anterior, que no existe presencia de señal en los citados segmentos de frecuencias y por ende no se cumple con el tiempo de transmisión señalado".

Nuevamente la SUTEL reitera que no existe presencia de señal en los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) y que por ende no se cumple con la obligación con el tiempo de transmisión establecido por ley. Aspecto que se tiene como hecho probado, a partir de la fase de instrucción del procedimiento administrativo ordinario de carácter sancionatorio, y conforme a la prueba que consta en el expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002 bajo custodia del Viceministerio de Telecomunicaciones. Incumplimiento sobre el cual, la empresa T V DE SAN JOSÉ UHF S.A. no aportó elementos para justificarlo o refutarlo.

Sobre el cumplimiento del pago del canon de reserva de espectro, canon de regulación y contribución especial parafiscal, la SUTEL señala que *"(…) se han realizado las consultas respectivas a fin de valorar la aplicación de los citados cánones al servicio utilizado por la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A* [sic], *por lo que una vez se cuente con el criterio, se procederá a complementar el presente informe técnico".*

Finalmente, a raíz de las mediciones realizadas y el análisis presentado la SUTEL concluyó y recomendó lo siguiente:

*"**4. Conclusiones***

De conformidad con los resultados descritos en el presente informe es posible concluir que el rango de frecuencias comprendido entre 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60); otorgadas a la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A. [sic], *con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, no se encuentran en operación en el periodo evaluado del 2021.*

5. Recomendaciones
(…)
***5.2** Informar al Ministerio de Ciencia [Innovación,[2]] Tecnología y Telecomunicaciones que los canales 56 (segmento de frecuencia 722 MHz a 728 MHz), 58 (segmento de frecuencia 734 MHz a 740 MHz) y 60 (segmento de frecuencia 746 MHz a 752 MHz) no se encuentran en utilización, por cuanto de las mediciones se extrae que únicamente se detecta el piso de ruido para los segmentos de espectro".*

[2] Así denominado el Ministerio en la actualidad de conformidad con la Ley N° 9971, "Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación", emitida en fecha 11 de mayo de 2021 y publicada en el Alcance N° 106 al Diario Oficial La Gaceta N° 102 de fecha 28 de mayo de 2021.

III. INFORMES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

El Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico de la Dirección de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT, en ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 38166-MICITT, *"Reglamento de organización de las áreas que dependen de Viceministro (a) de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, [Innovación,] Tecnología y Telecomunicaciones"*, analizó las recomendaciones técnicas emitidas por la SUTEL y elaboró los criterios técnicos correspondientes.

1. Informe Técnico N° MICITT-DER-INF-001-2013:

La Dirección de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones (anteriormente denominada Dirección de Espectro Radioeléctrico, en adelante pudiendo abreviarse como DERRT) del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones emitió el Informe Técnico Nº MICITT-DER-INF-001-2013 de fecha 19 de julio de 2013 denominado *"Análisis de informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 5173-SUTEL-DGC-2012, sobre 'Ocupación de los canales de radiodifusión televisiva, bandas de 54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz y 614 MHz a 806 MHz'".*

En dicho informe el Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico, analizó la ocupación del concesionario T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA sobre el espectro radioeléctrico de los Canales físicos 56, 58 y 60, que le fueron concesionados por parte del Poder Ejecutivo.

En el apartado 6.4. del citado informe *"En cuanto a la ocupación",* tabla Nº 8, el DAER indica el porcentaje de cobertura y no cobertura para los Canales físicos 56, 58 y 60, tal como se cita a continuación:

"(...)

Tabla 8: *porcentaje de cobertura y no cobertura de los canales del 38 al 69 según informe 5173-SUTEL-DGC-2012*

Concesionario	***Canal***	***Porcentaje de no cobertura***	***Porcentajes de cobertura***	***Punto de transmisión***	***Cobertura según contrato***
(...)	*(...)*	*(...)*	*(...)*	*(...)*	*(...)*
TV de San José UHF [sic]	*56*	*77.78%*	*22.22%*	*Volcán Irazú*	*60 km de Volcán Irazú*
(...)	*(...)*	*(...)*	*(...)*	*(...)*	*(...)*
TV de San José UHF [sic]	*58*	*66.67%*	*33.33%*	*Volcán Irazú*	*60 km de Volcán Irazú*
(...)	*(...)*	*(...)*	*(...)*	*(...)*	*(...)*
TV de San José UHF [sic]	*60*	*77.78%*	*22.22%*	*Volcán Irazú*	*60 km de Volcán Irazú*
(...)	*(...)*	*(...)*	*(...)*	*(...)*	*(...)*

Fuente: Tomado de mediciones del informe 5173-SUTEL-DGC-2012 y datos de acuerdos ejecutivos y contratos de concesión respectivos

(...)"

Finalmente, de conformidad con las mediciones y resultados obtenidos por la SUTEL, el DERRT, dentro de lo que nos interesa, concluyó y recomendó lo siguiente:

> *"**7. Conclusiones***
>
> *(...) la cobertura de los canales (...) 56, 58, 60, (...) empeoró en más de un 20%* [con respecto a las mediciones realizadas en el 2010 por la SUTEL].
>
> ***8. Recomendaciones***
>
> *(...) se proceda a la recuperación del espectro radioeléctrico que no esté siendo utilizado y asignarlo de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el objetivo de asegurar una competencia efectiva. (...)".*

2. Informe Técnico N° MICITT-GAER-INF-031-2014:

Mediante el informe técnico N° MICITT-GAER-INF-031-2014 denominado *"Análisis de la concesión de la empresa T.V. de San José UHF S.A.* [sic] *(canal 56)"*, de fecha 14 de marzo de 2014, el Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico analizó la ocupación del espectro radioeléctrico del Canal 56, considerando los resultados del dictamen técnico emitido mediante oficio Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012 emitido por la SUTEL. En dicho informe técnico el DAER concluyó lo siguiente:

> *"**4. Conclusiones***
> *(...)*
> - *Que la protección constitucional del espectro radioeléctrico, su condición de recurso escaso y estratégico, que debe ser usado de manera óptima, eficiente, equitativa, no discriminatoria y transparente impiden considerar que el espectro radioeléctrico es un bien demanial 'como cualquier otro'.*
>
> - *Que el Poder Ejecutivo puede otorgar frecuencias con una cobertura dada; sin embargo, el radiodifusor debe de cumplirla de manera real y le corresponderá a la SUTEL el verificarlo.*
>
> *(...)*
> - *Que según las mediciones realizadas (del informe 1619-SUTEL-2010 y 5173-SUTEL-DGC-2012) (...)* ***canal 56 de televisión tiene una no cobertura mayor al 75% de los puntos evaluados dentro del área designada por el Contrato de Concesión; por lo que estaría actuando de forma contraria a lo dispuesto en sus títulos habilitantes y el marco legal aplicable.***
>
> - *Adicionalmente se está transmitiendo señal sin ningún tipo de contenido, esta situación contradice al RLGT (...) en su artículo 99 (...). Según el marco normativo (...), se debe prestar el servicio de radiodifusión televisiva de forma regular, transmitiendo un mínimo de doce horas diarias".*

A partir de lo anterior, el DAER recomendó:

"(...)
5. Recomendaciones
(...)

- *En el marco del ordenamiento del espectro radioeléctrico, y en vista de los principios rectores definidos en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), el presente informe técnico acoge el informe Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 en lo relativo al espectro concesionado a la empresa T.V. de San José UHF S.A. [sic] (canal 56**), y se recomienda proceder como corresponda jurídicamente tomando en consideración que dicho concesionario no cuenta con la cobertura indicada por el Contrato de Concesión*** [sic, léase en su lugar *Acuerdo Ejecutivo*] *Nº 2758-2002 MSP (...)".* (Énfasis agregado).

3. Informe Técnico N° MICITT-DERRT-DAER-INF-085-2021:

Mediante el criterio técnico N° MICITT-DERRT-DAER-INF-085-2021 denominado *"Análisis técnico del uso y explotación de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal Físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal Físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (canal físico 60) del concesionario TV SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic]*"* de fecha 10 de junio de 2021, el Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico analizó los dictámenes técnicos emitidos por la SUTEL mediante los oficios N° 1619-SUTEL-2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012, N° 1497-SUTEL-DGC-2014, N° 8453-SUTEL-DGC-2014, N° 08429-SUTEL-DGC-2015, N° 05817-SUTEL-DGC-2016, N° 09206-SUTEL-DGC-2016, N° 01084-SUTEL-DGC-2017 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021.

En este informe dicho Departamento señaló:

> *"**6.1 Análisis del oficio N° 1619-SUTEL-2010 con respecto a las mediciones de las señales de los canales 56, 58 y 60***
>
> *(...) la SUTEL indica que a los canales 56 y 58 se les debe restringir la operación de trasmisiones únicamente desde el sitio de transmisión Volcán Irazú. Además, sobre el canal 60, la SUTEL indica que, se debe cancelar a este canal el derecho de uso y explotación del canal habilitado a través del Contrato de Concesión* [sic, léase *de Uso de Frecuencia Radioeléctrica*] *N° 037-2006 CNR* [sic]*. Lo anterior en vista de que el canal 60 opera como transmisor matriz del servicio televisivo por suscripción, incumpliendo con la asignación realizada en el PNAF, dado lo anterior la SUTEL recomienda que se cancele el derecho de uso y de explotación del canal 60. De lo anterior, es posible interpretar que se tienen indicios técnicos de posible incumplimiento de obligaciones de cobertura por parte del operador TV SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic]
>
> ***6.2 Análisis del oficio N° 5173-SUTEL-DGC-2012 con respecto a las mediciones de las señales de los canales 56, 58 y 60***
>
> *(...) la SUTEL indica que los canales 56, 58 y 60, no estarían siendo utilizados según los parámetros establecidos en la normativa vigente en ese momento, según los resultados de las mediciones realizadas por esa Superintendencia en el año 2012. Dado esto, y que en las mediciones realizadas en el año 2010 (Oficio Nº 1619-SUTEL-2010), también se concluyó por parte de la SUTEL, que estos canales podrían no estar siendo utilizados adecuadamente por el concesionario (...)*
> *(...)*

Cabe señalar nuevamente, que al amparo de las normas de la UIT contempladas por la SUTEL en del [sic] *diseño y operativización de los procedimientos para medición y recolección de información de intensidad de campo, es posible interpretar que efectivamente existen indicios técnicos para indicar que, para las mediciones realizadas por la SUTEL ese año en particular, existe la posibilidad de incumplimiento técnico de las obligaciones de cobertura señaladas en el título habilitante para los canales 56, 58 y 60.*

6.3. Análisis del oficio N° 08453-SUTEL-DGC-2014 [sic]***, con respecto a las mediciones de las señales de los canales 56, 58 y 60.***

(...) en el oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014, la SUTEL resalta en las figuras 6 y 7, que los canales 56, 58 y 60, presentan un porcentaje de cobertura de 0%, por lo que se muestran indicios de no cobertura con respecto a sus obligaciones de cobertura de su título habilitante.

Dado lo anterior, es posible interpretar que las mediciones realizadas por SUTEL en el año 2014 para los canales 56, 58 y 60 dentro de la zona de cobertura otorgada, el concesionario podría haber incumplido la obligación de cobertura de señal detallada en los títulos habilitantes; la SUTEL indica que es un recurso no utilizado adecuadamente, por lo que ese Órgano técnico le recomienda al Poder Ejecutivo, la recuperación del bien demanial.
(...)

6.4 Análisis del oficio N° 08429-SUTEL-DGC-2015 con respecto a las mediciones de las señales de los canales 56, 58 y 60

(...) la SUTEL indica en el oficio N° 08429-SUTEL-DGC-2015, que los canales 56, 58 y 60, entre otros, parece tener una cobertura que podría incumplir con las obligaciones detalladas en su título habilitante; y por lo tanto, de acuerdo con el criterio de esa Superintendencia, se mantiene la situación de no uso del recurso otorgado para este canal en particular y se reitera por parte de este Departamento su interpretación de la existencia de indicios de un posible incumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones de cobertura detalladas en el título habilitante, para las mediciones realizadas por la SUTEL para este año en particular.

6.5 Análisis del oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016 con respecto a las mediciones de las señales de los canales 56, 58 y 60*.*

(...) según lo muestra el oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016 en las figuras 6, 7 y 10, los canales 56, 58 y 60, presentan un porcentaje de cobertura de 0%, por lo que la SUTEL indica que existen indicios de posible no cumplimiento en cuanto a la cobertura definido en su título habilitante.

De lo anterior, es posible interpretar nuevamente que existen indicios para señalar un posible incumplimiento de las obligaciones de cobertura detalladas en el título habilitante para este concesionario, para las mediciones realizadas por la SUTEL en este año en particular.

6.6. Análisis del oficio N° 01084-SUTEL-DGC-2017 con respecto a las mediciones de las señales de los canales 56, 58 y 60.

(...) la SUTEL reitera la recomendación al Poder Ejecutivo, para que se realice la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes, al amparo del artículo 22 de la Ley N° 8642, de conformidad con los indicios de no cobertura que se desprenden de las mediciones realizadas por ese Órgano técnico.

Adicional a la valoración técnica que realiza la SUTEL respecto a los niveles de intensidad y calidad de las señales de televisión, también realiza un estudio de pago de cánones y la contribución especial (...) por lo que la empresa parece no haber cumplido con el pago de las obligaciones de los períodos 2014 y 2015. Sobre este particular, este Departamento resalta y recomienda al Departamento de Normas y Procedimientos [en Telecomunicaciones] la necesidad de verificar que la empresa TV SAN JOSE UHF, S.A. [sic] *se encuentre al día con las obligaciones pecuniarias regulatorias atinentes, así como del pago de otras obligaciones y cargas sociales pertinentes, en aras de continuar con la valoración del presente informe.*

(...)

6.7 Análisis del oficio N° 03762-SUTEL-DGC-2021 con respecto a las mediciones de las señales de los canales 56, 58 y 60

(...) la SUTEL reitera la recomendación al Poder Ejecutivo, para que se realice la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes, al amparo del artículo 22 de la Ley N° 8642, de conformidad con los indicios de no cobertura que se desprenden de las mediciones realizadas por ese Órgano técnico.

(...) y de conformidad con lo expuesto por la SUTEL en su dictamen técnico N° 03762-SUTEL-DGC-2021, existe en apariencia un incumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 99 del (...) Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAE[T]), por parte de la empresa TV SAN JOSE UHF, S.A [sic]*, en los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) del título habilitante otorgado mediante Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP.*

(...) este Departamento reitera, resalta y recomienda al Departamento de Normas y Procedimientos [en Telecomunicaciones] la necesidad de verificar que la TV SAN JOSE UHF, S.A. [sic] *se encuentre al día con las obligaciones pecuniarias regulatorias, así como del pago de otras obligaciones y cargas sociales pertinentes, en aras de continuar con la valoración del presente informe.*
(...)"

Como podemos observar del análisis realizado por el DAER, sobre los resultados obtenidos de la operación de los Canales físicos 56, 58 y 60 por parte de la SUTEL en los diferentes periodos, y en la que para todos los casos se tiene que hay resultados que indican que no cobertura, esto es, no se evidencia la prestación del servicio de telecomunicaciones por parte de la empresa en los referidos canales y consecuentemente, un incumplimiento de las obligaciones de cobertura

establecidas en el título habilitante conferido por el Poder Ejecutivo, así como de un incumplimiento al tiempo mínimo de trasmisión establecido por ley y de falta de pago de los cánones establecidos por Ley.

Finalmente, dicho Departamento concluyó y recomendó:

> *"**8. Conclusiones***
>
> *Según el análisis anterior, y de conformidad con las recomendaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones establecidas en los dictámenes técnicos Nº 1619-SUTEL-2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012, N° 1497-SUTEL-DGC-2014, N° 8453-SUTEL-DGC-2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016, N° 01084-SUTEL-DGC-2017, Nº 03505-SUTEL-DGC-2019 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021, este Departamento establece las siguientes conclusiones:*
> *(...)*
> *De forma general, y según lo analizado en el presente informe técnico, los resultados contenidos en dichos oficios en cuanto a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de cobertura a partir de las mediciones de intensidad de campo realizadas por la SUTEL para cada año respectivamente, para el concesionario del canales físicos 56, 58 y 60 de televisión, resultan ser consistentes, y por ende se concluye por parte de este Departamento que existen técnicamente indicios de posible incumplimiento por parte de TV SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic] *de las obligaciones detalladas en el título habilitante para los canales 56, 58 y 60.*
>
> ***Del análisis de los dictámenes técnicos mencionados anteriormente, se concluye que los procedimientos o protocolos de medición empleados por la SUTEL han variado históricamente desde que se emitió el primer informe en el año 2010; se han dado cambios en torno a los detalles y rigurosidad técnica del procedimiento aplicado, y que, al contemplar dichos protocolos la normativa técnica emanada por parte de la UIT, se asegura la precisión en las mediciones obtenidas y en la recolección de la información producto de dichas mediciones, por lo que es posible técnicamente reiterar por parte de este Departamento la existencia de los indicios de posible incumplimiento señalados en la conclusión anterior a partir de las mediciones realizadas con los procedimientos y protocolos implementados por la SUTEL.***
>
> *El Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAE[T]), establece en su artículo 99 que las estaciones al servicio de radiodifusión sonora y televisiva deberán cumplir con un mínimo de transmisión de doce horas diarias, por lo tanto, los concesionarios de radiodifusión televisiva deben prestar el servicio de radiodifusión televisiva de forma regular, transmitiendo un mínimo de doce horas diarias.; por lo que a partir de lo expuesto por la SUTEL en el informe 03762-SUTEL-DCG-2021* [sic]*, existe en apariencia un incumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo por parte de la empresa TV SAN JOSE UHF, S.A.* [sic]*, en los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) del título habilitante otorgado mediante Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP.*
> *(...)*

En el dictamen técnico Nº 01497-SUTEL-DGC-2014 [sic]*, se recomendó la aplicación del artículo 22 de Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, y considerar la apertura de un procedimiento administrativo del derecho de explotación otorgado en relación con el uso de los canales 56, 58 y 60 de la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic]*, lo cual también es reiterado en el dictamen técnico Nº 03505-SUTEL-DGC-2019.*

Según lo mencionado en los dictámenes técnicos Nº 01497-SUTEL-DGC-2014 [sic] *y Nº 03505-SUTEL-DGC-2019, la Superintendencia de Telecomunicaciones expone los elementos por los cuales a su criterio existen posibles vicios de nulidad en la emisión del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP; así como, los resultados de las mediciones mediante las cuales se concluye que existe un presunto uso ineficiente del recurso escaso.*

De conformidad con lo mencionado en los dictámenes técnicos Nº 01497-SUTEL-DGC-2014* [sic], *N° 01084-SUTEL-DGC-2017, en apariencia la empresa TV de San José UHF S.A.* [sic] *no ha cancelado ninguno de los periodos de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo que puede existir un incumplimiento de las obligaciones pecuniarias regulatorias atinentes; por lo que este Departamento resalta y recomienda al Departamento de Normas y Procedimientos [en Telecomunicaciones] la necesidad de verificar que la empresa TV SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic] *se encuentre al día con las obligaciones regulatorias, como pago de canon de regulación y reserva de espectro, así como del pago de otras obligaciones y cargas sociales pertinentes antes de continuar con la valoración del presente informe**.

En virtud del análisis realizado en este informe y lo establecido en el PNAF, este Departamento concluye técnicamente que, los segmentos de 722 MHz a 728 MHz, de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz del concesionario TV SAN JOSE UHF, S.A. [sic]*, se atribuyen actualmente para el servicio móvil para desarrollo de sistemas IMT.*

El uso de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz, de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz (canales físicos 56, 58 y 60) que se indica en el título habilitante N° 2758-2002 MSP de TV SAN JOSE UHF, S.A. [sic]*, no se encuentra alineado técnicamente a lo dispuesto por la normativa vigente (Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET y sus reformas), ni tampoco a las disposiciones técnicas que figuraban en el Decreto Ejecutivo N° 27554-G, vigente al momento de la emisión del título habilitante en referencia, ya que en dicho Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP se asignan estos segmentos como 'Radiodifusión Televisiva por Suscripción', de ahí que este uso muestra indicios de encontrarse en roce con la normativa técnica aplicable:*

- *Se puede observar que los segmentos de frecuencias en estudio (de 722 MHz a 728 MHz, de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz), por su numeración 'par' de canal físico (56, 58 y 60, respectivamente), debían ser empleados por transmisores con cobertura del Valle Central. Esta restricción se estableció técnicamente para la protección contra interferencias de canal adyacente a las emisiones televisivas en general, para todos aquellos canales dentro del segmento de frecuencias de 614 MHz a 806 MHz. De conformidad con lo anterior, parece que las condiciones de cobertura que se consignan en el Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP, donde se señala que la zona de cobertura del canal concesionado corresponde a 'Clase A: 30 Km* [sic] *y Clase B: 60Km* [sic]*' desde el sitio de transmisión Volcán Irazú, siendo que éstas se refieren*

a zonas geográficas dentro del Valle Central país; parecen técnicamente alineadas a las disposiciones sobre la zona de acción de los canales de televisión analógica que se indicaban en el Decreto Ejecutivo Nº 27554-G.

- *Las frecuencias correspondientes a los canales físicos bajo análisis, se encontraban atribuidas al Servicio de Radiodifusión (Televisiva) en el Cuadro de Atribución de Frecuencias del Decreto Ejecutivo N° 27554-G; siendo que en dicho reglamento vigente en ese momento se acompañó esa atribución con la nota nacional CR 2.43, y con una serie de 'Normas técnicas'; normas que resultan atinentes a la operación de redes de televisión que, desde el punto de vista técnico, aplicaban única y específicamente para la operación de las redes analógicas de televisión de acceso libre o directo por parte de la población; es decir, el PNAF de aquel entonces reconocía únicamente las condiciones técnicas de las redes de radiodifusión televisiva bajo el estándar analógico NTSC/M, no así de redes que operaran en tecnologías o estándares distintos a ese.*

(...)

Este Departamento concluye técnicamente y desde el punto de vista de optimización de los recursos escasos y uso eficiente del espectro radioeléctrico, que se deben realizar los actos administrativos, técnicos y jurídicos por parte del Poder Ejecutivo que correspondan para la situación de los canales físicos 56, 58 y 60, y debiéndose valorar jurídicamente lo recomendado por la SUTEL en los dictámenes técnicos analizados en el presente informe, respecto al recurso otorgado.

9. Recomendaciones:

1. *Se recomienda a la Dirección de Concesiones y Normas de* [sic] *Telecomunicaciones, del Viceministerio de Telecomunicaciones, valorar el presente criterio técnico, para proceder como jurídicamente corresponda en virtud de lo señalado por la Superintendencia de Telecomunicaciones los dictámenes técnicos Nº 1619-SUTEL-2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012, N° 1497-SUTEL-DGC-2014, N° 8453-SUTEL-DGC-2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016, N° 01084-SUTEL-DGC-2017 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021, siendo que no existen razones de orden público o interés nacional que sustenten apartarse de la recomendación de la SUTEL, particularmente ante la existencia de indicios técnicos de posible incumplimiento de las obligaciones de cobertura establecidas en el título habilitante de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (canal físico 60), por parte del concesionario TV SAN JOSÉ UHF, S.A.* [sic]*; debido a que los elementos técnicos presentados y utilizados por la SUTEL, como fundamento para su recomendación son válidos técnicamente; y por lo tanto, constituyen indicios que podrían valorarse para la elaboración del proceso jurídico correspondiente. Todo lo anterior, resulta conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y al marco normativo vigente, y se encuentra alineada al principio rector de la optimización de los recursos escasos que se establece en el artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 8642.*

2. *El Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico recomienda al Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones verificar que la empresa TV SAN JOSÉ UHF, S.A* [sic] *se encuentre al día con las obligaciones regulatorias, así como del pago de otras obligaciones y cargas sociales pertinentes".* (Énfasis propio).

IV. DE LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA.

Mediante la Resolución de inicio del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio y Traslado de Cargos, Resolución Nº ODPA-RES-TVSJU-001-2021, de las diez horas cincuenta y dos minutos de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno, notificada en tiempo y forma a la parte mediante publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, realizada por tres (3) veces consecutivas en el Alcance N° 179 al Diario Oficial La Gaceta N° 175 de fecha viernes 10 de setiembre de 2021, en el Alcance N° 182 al Diario Oficial La Gaceta N° 176 de fecha martes 14 de setiembre de 2021 y en el Alcance N° 184 al Diario Oficial La Gaceta N° 177 de fecha miércoles 15 de setiembre de 2021, y mediante la cual se citó a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA a la Comparecencia Oral y Privada, de conformidad con los artículos 218 y 309 de la LGAP, teniendo como finalidad la evacuación de las pruebas para encontrar la verdad real respecto a los hechos investigados en contra de dicha empresa.

Al ser las 09 horas 30 minutos del día 23 de noviembre de 2021, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo llevó a cabo la comparecencia oral y privada, en ausencia de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual no se presentó ni aportó justificación alguna para la no asistencia a la misma, por lo que no se tuvieron elementos de juicio que justificaran la suspensión de ésta.

Debido a la ausencia de los representantes de la empresa a la comparecencia, no se realizó por parte de ésta la etapa de alegatos de apertura, de igual forma de previo a la realización de ésta, no se recibió alegato alguno sobre los hechos imputados. Asimismo, la parte citada no presentó ninguna prueba de previo a la realización de la comparecencia ni durante la misma, por lo que el Órgano Director del Procedimiento Administrativo no procedió a evacuar prueba de parte.

Por lo anterior, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo se avocó al análisis de la prueba documental recabada en el expediente administrativo N° DCNR-TV-2014-002, para realizar su recomendación a este Órgano Decisor.

V. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE USO Y EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN.

El espectro radioeléctrico, en su condición de bien de dominio público, sólo puede ser explotado por la Administración Pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca el legislador, según lo instituye el artículo 121 inciso 14) subinciso c) de la Constitución Política que señala:

> *"**Artículo 121.-***
> *(...)*
> *14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.*
> *No podrán salir definitivamente del dominio del Estado*

a) (...)
b) (...)
c) Los servicios inalámbricos
Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa (...)".

Debido a lo anterior, las concesiones de uso y explotación del espectro radioeléctrico sólo confieren a su titular, el derecho de explotar o de hacer uso de éste en los términos y las condiciones técnicas estipuladas en el respectivo título habilitante, sin que se genere derecho alguno de dominio sobre éste.

Sobre el particular la Sala Constitucional mediante Resolución Nº 04569–2008 de fecha 26 de marzo de 2008, señaló en lo conducente:

"(...) ***El constituyente originario dispuso que los servicios inalámbricos o, más concretamente, el uso y explotación del espectro radioeléctrico o electromagnético, puede darse en un régimen de competencia y libre concurrencia, dado que, puede ser explotado por la administración pública o por particulares esa 'o' disyuntiva refuerza la libre competencia o concurrencia que admite el constituyente originario y la constitución económica****. Ahora bien, lo que sí exige el constituyente originario para que un particular explote ese bien del demanio público constitucional es una ley general que permita otorgar concesiones administrativas o una concesión especial conferida por la Asamblea Legislativa.* ***Ha sido, pues, el deseo del Constituyente que los particulares participen de la explotación de este bien, siempre y cuando, se cumplan con las condiciones estipuladas en la propia Norma Fundamental****. Cabe resaltar que de la atenta lectura de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente se desprende con meridiana claridad que el Grupo Social Demócrata y la Comisión de reformas del Unió Nacional, presentaron una segunda moción -a lo que sería el artículo 121, inciso 14), de la Constitución- el 10 de mayo de 1949 a las 16 horas que, en lo conducente, indicaba lo siguiente:*
(....)

*Esa moción, que se inspiró en una reforma parcial al artículo 73, inciso 15), de la Constitución de 1871 introducida por la Ley No. 33 de 28 de junio de 1937 -la cual, a su vez, tuvo sustento en la Ley ordinaria no vigente, al ser derogada sobrevenidamente por la Constitución de 1949, No. 34 de 10 de abril de 1920, cuyo artículo 1° dispuso que La telegrafía a y la telefonía a inalámbricas que son servicios de utilidad pública, se declaran monopolios del Estado ( ) -, fue desestimada por los Constituyentes de 1949, desechándose, por lo tanto, que los servicios inalámbricos fueran declarados monopolio del Estado y, por consiguiente, cualquier reserva pública sobre el particular. Por lo anterior, el constituyente originario, finalmente, optó por la redacción actual la que, evidentemente, no califica los servicios inalámbricos de utilidad pública ni los declara monopolio del Estado. Consecuentemente, queda absolutamente descartado que la intención del constituyente originario haya sido que los servicios inalámbricos fueran sometidos a un régimen monopólico público***".*** (Énfasis agregado).

Por otra parte, en lo que atiende a los intereses superiores inmersos en el adecuado uso y explotación del espectro radioeléctrico, resulta de suma relevancia señalar lo establecido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución Nº 00062–2011 de las 09:25 horas de fecha 27 de enero de 2011, en la que estableció en relación con los bienes demaniales, que, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público:

> *"(...) Así, lo que define la naturaleza jurídica de los bienes demaniales es su destino o vocación, en tanto se afectan y están al servicio del uso público, ya que, precisamente se afectan para darles un destino público especial en el que se encuentre comprometido el interés público, en la forma como lo define el artículo 261 del Código Civil (...). En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud norma expresa. Así, se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen a la 'Nación', con lo cual, conforma parte del patrimonio público (...)".*

De esta forma el espectro radioeléctrico es un bien demanial que presenta características específicas, sujeto a un régimen jurídico particular, en el cual por su naturaleza, no puede salir del dominio del Estado y su planificación, administración y control se rige según lo establecido en la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y reglamentos que al efecto se emitan, así como lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, según lo estipula el artículo 10 de la citada Ley N° 8642.

La misma Sala Constitucional ha indicado en su Resolución Nº 11715-2017 de las 15:05 horas de fecha 26 de julio de 2017, respecto al espectro radioeléctrico que:

> *"Dentro del dominio público, entendido como el conjunto de bienes de titularidad de los entes públicos y destinados al uso y aprovechamiento común o a la prestación de servicios públicos, es posible distinguir entre el dominio público constitucional y el dominio público infra constitucional.* ***El dominio público constitucional está conformado por aquellos bienes que el constituyente dispone que le pertenecen a la Nación y que no pueden salir definitivamente del dominio del Estado (artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política). Dentro de los bienes que la Constitución Política califica como "propios de la Nación", figuran los denominados "servicios inalámbricos", expresión comprensiva del denominado espectro electromagnético o radioeléctrico.*** *El espectro electromagnético o radioeléctrico, de conformidad con el párrafo 2° del artículo 121, inciso 14, inciso c), de la Constitución Política, puede ser explotado por las administraciones públicas o por los particulares mediante una concesión administrativa otorgada de conformidad con una ley general o en virtud de una concesión especial otorgada por tiempo limitado por la Asamblea Legislativa. En cuanto a este tema, este Tribunal ha señalado lo siguiente:*
>
> > *'(...) De conformidad a lo establecido en el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Pública, los servicios inalámbricos son bienes demaniales, los cuales se encuentran fuera del comercio de los hombres de manera que solo pueden ser explotado por los particulares mediante acto legislativo o concesión y el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Por sentencia número 5386-93 de las dieciséis horas*

> *del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, la Sala Constitucional determinó que los servicios inalámbricos que se prestan mediante un servicio de dominio público constituyen un bien de la Nación, afectado al servicio público. La propia Constitución le da esta categoría al espectro electromagnético, en el artículo 121 inciso 14.). Tales bienes son imprescriptibles e inalienables, y su explotación sólo pueden hacerla los concesionarios según las condiciones determinadas por ley.(...).'* (Énfasis agregado).

Precisamente, en el numeral 10 de la Ley General de Telecomunicaciones se le otorga al Estado la potestad de asignar, reasignar o rescatar *"(…) las frecuencias del espectro radioeléctrico, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de atribución de frecuencias, de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria, de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto en esta Ley".*

Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 44 de la Ley N° 8100, Ley denominada *"Aprueba la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra el 22 de diciembre de 1992) y el instrumento de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto 1994),"* se establece que el espectro radioeléctrico debe ser usado por cada Estado miembro con racionalidad y mejor aprovechamiento para toda la población, con el fin de garantizar un uso adecuado y efectivo del espectro radioeléctrico, en aras del bienestar de la colectividad, asegurando además, el desarrollo de los sectores más vulnerables y la libre participación en términos de igualdad dentro del mercado de las telecomunicaciones.

Aunado a lo anterior, la Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 3 inciso i) dispone el principio rector de: *"Optimización de los recursos escasos: asignación y utilización de los recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios".*

Al respecto, la Procuraduría General de la República mediante su dictamen vinculante Nº C-063-98, de fecha 01 de abril de 1998, en lo conducente manifestó:

> *"(…) los organismos públicos que tienen a su cargo la administración de bienes demaniales, por las mismas peculiaridades que caracteriza a éstos, deben velar por su protección y resguardarlos de cualquier pretensión ilegítima de apropiarse de ellos, sin importar que hayan sido otorgados en concesión a determinados particulares. De tal forma, corresponde a la Administración velar porque el bien demanial (espectro) sea explotado de manera eficiente y conforme al bloque de legalidad, siendo que de existir una situación irregular que ponga en entredicho la titularidad de la concesión, debe recurrir a los instrumentos legales y figuras establecidas en el marco normativo para proceder de conformidad. (…)".*

Es por ello por lo que, podemos afirmar que el espectro radioeléctrico tiene un destino diferente, por estar afectado a un uso común, en este sentido el *"dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares*

y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud [de] norma expresa". (Sala Constitucional, sentencia Nº 2301-91, de fecha 06 de noviembre de 1991).

Es menester considerar, por ende, que las concesiones para el uso y explotación del espectro radioeléctrico sólo confieren a su titular, el derecho de explotar o hacer uso de éste en los términos y condiciones estipuladas en el ordenamiento jurídico. Y, por el contrario, frente al incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico y su título habilitante el ordenamiento sectorial dispone normativamente por consecuencia la resolución y extinción del contrato de concesión en el caso concreto, conforme a los términos definidos por el ordinal 22 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Telecomunicaciones.

El principal efecto del otorgamiento de una concesión y por ende de la celebración de un contrato es precisamente su fuerza obligatoria, la cual *"(…) se traduce en el imperativo de que las partes den cumplimiento, de buena fe, a las obligaciones surgidas del acuerdo de voluntades, así como a aquellas que emanan de la naturaleza de las obligaciones pactadas o que por ley pertenecen a ellas".*[3] De manera que, de la emisión de estos actos administrativos, surge el deber, tanto para la administración como para el concesionario, de cumplir de buena fe con todas y cada una de las obligaciones emanadas directamente del contrato y de aquellas que surgen de su naturaleza misma.

El Estado requiere asegurar que el recurso escaso y estratégico, como lo es el espectro radioeléctrico, sea utilizado por una persona física o jurídica que cuente con la capacidad para operar la red, y el interés de ir adaptando sus redes a las nuevas tendencias, a fin de suministrar un servicio de calidad a los usuarios finales.
La concesión pública se considera desde el punto de vista clásico e imperante como el acto jurídico por el cual una Administración Pública transfiere temporal y limitadamente parte de sus potestades o facultades a un sujeto particular, sea persona física o jurídica, para su coparticipación activa en la satisfacción de los intereses públicos.

Se recalca que, la concesión tiene como fin último la satisfacción de los intereses públicos, esto es, colectivos, y están por encima de un interés particular o meramente comercial, en especial, por cuanto como se indicó anteriormente, el acceso al servicio de radiodifusión comporta una naturaleza de derecho fundamental. Por lo cual la concesionaria a partir de la transferencia parcial de las potestades públicas a su favor se eleva a la categoría de sujeto calificado como instrumento de satisfacción de intereses públicos.[4]

En este sentido, la intervención pública debe basarse, en todo caso, en una definición objetiva de lo que se considera interés general y en un análisis objetivo de la necesidad de intervención. Dicha intervención se materializa, entre otras formas, mediante la imposición de obligaciones jurídicas concretas a los operadores privados presentes en el mercado, obligaciones que llevan

---

[3] RODRÍGUEZ (Libardo). "Los efectos del incumplimiento de los contratos administrativos", Revista de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, N° 5 (enero-junio 2009), p. 344.
[4] Jiménez Meza Manrique. Derecho Constitucional y Administrativo. IV Edición. Editorial Jurídica Continental. 2012. Págs. 191-192.

aparejados derechos bien definidos para los usuarios, como lo sería en este caso concreto, la prestación del servicio conforme a la Ley y la normativa *infra* legal aplicable, el título de concesión y su contrato en tanto es obligación por parte de los concesionarios garantizar que los usuarios finales dispongan de la mayor cantidad de transmisiones de radiodifusión televisiva.[5]

Así, por ejemplo, el artículo 3 inciso c) de la LGT dispone el principio rector de beneficio del usuario el cual determina el *"establecimiento de garantías y derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio".*

Y por su parte el ordinal 49 inciso 1) de la LGT en lo conducente señala el deber de los operadores de *"Operar las redes y prestar los servicios en las condiciones que establezcan el título habilitante respectivo, así como la ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten".*

Lo cual redunda, en el tema que, siendo el fin público perseguido de la concesión para el uso y explotación de los Canales físicos 56, 58 y 60, el prestar un servicio de telecomunicaciones a favor de los usuarios finales, por lo que, siendo un servicio de interés público, implica la obligación del Estado de ponderar el interés general sobre el interés particular.

Por otra parte, con el fin de que se cumplan dichas obligaciones, es que la Administración debe de cumplir con el principio de control de los procedimientos, el cual es uno de los principios generales de la contratación administrativa que se encuentran regulados en la Sección Segunda del Capítulo I de la Ley de Contratación Administrativa y desarrollados en la jurisprudencia costarricense de la siguiente forma:

Principio de control de los procedimientos. Principio, según el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. De manera tal que las partes deben cumplir con las condiciones pactadas en el contrato administrativo siempre tomando en cuenta lo dispuesto en la normativa de contratación administrativa, así como sus principios generales (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 998-1998, 16 de febrero de 1998, 11:30 horas.).[6]

De conformidad con esta función, la Administración debe vigilar y verificar que, durante toda la vigencia de la concesión, el concesionario cumpla con las obligaciones contractuales. Esto quiere decir que, ante un eventual incumplimiento o anormalidad en la ejecución de la concesión por parte de la concesionaria, la Administración deberá tomar inmediatamente las medidas pertinentes en aras de que el bien común no se vea perjudicado. Esto es así porque la ejecución contractual, ejecutada en tiempo y forma, se traduce en la tutela efectiva del interés público.

Ahora bien, el incumplimiento de un concesionario en cuanto a las obligaciones convenidas con la Administración Pública acarrea consecuencias jurídicas que podrían afectar o revocar el título habilitante otorgado.

---

[5] Montero Pascual Juan José. La actividad administrativa de Regulación. Pág. 23.

[6] Principios desarrollados en la jurisprudencia constitucional. Poder Judicial, Sala Constitucional, Escuela Judicial – 1 ed. – San José, C.R.: Departamento de Artes Gráficas, 2014. p. 22

El incumplimiento contractual se puede definir de la siguiente manera:

> *"Hay incumplimiento de las obligaciones jurídicas cuando el deudor no cumple lo debido ya sea porque no previó adecuadamente su capacidad de cumplimiento, es decir creyó en un inicio poder obligarse y poder cumplir con dichas obligaciones, pero luego por diversas circunstancias que le son imputables no puede hacerlo (negligencia). Es consecuencia de la mala fe o la negligencia del obligado y por ende no produce la satisfacción del interés del acreedor que debió haber quedado satisfecho con el cumplimiento de la prestación".*[7]

Asimismo, el Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado:

> *"En síntesis, el objeto del contrato, está constituido por la obligación impuesta contractualmente, que implica una prestación, que constituye siempre una conducta de dar, hacer no hacer algo. Ahora bien, si el objeto del contrato es siempre la obligación de una prestación debida, entonces, se cumple con el objeto del contrato, realizando la conducta o comportamiento obligado. La idea contraria, es decir, la falta de ejecución de la prestación debida; implica el incumplimiento del objeto del contrato".*[8]

En similar sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conceptualiza el incumplimiento contractual de la siguiente forma:

> *"(…) el incumplimiento contractual significa no ejecutar determinada prestación en los términos originalmente pactados. El incumplimiento, específicamente en cuanto a contratos administrativos se refiere, está referido (sic) a un modo anormal de extinción de tales convenios, y puede ser imputable tanto a la Administración como al contratista".*[9]

Tomando estos conceptos, la omisión de la obligación de prestación *"(…) hace referencia al caso en el cual no se consigue el objetivo de la obligación porque (…) no se recibe prestación alguna, o mejor, absolutamente nada en relación con la obligación pactada. Se trata de la inejecución absoluta de la obligación (…)"*[10], resultando que en virtud del incumplimiento contractual por parte de la concesionaria, en la ejecución de sus obligaciones y condiciones prestacionales, esta se expone a sanciones o la resolución de su contrato y por ende la consecuente revocación de su título habilitante, según sea la magnitud de sus incumplimientos de acuerdo con la norma transgredida.

De este modo la Administración Concedente posee en virtud de la ley, la facultad de resolver un contrato o revocar una concesión unilateralmente, facultad que está implícita en todo contrato administrativo, aunque no se encuentre establecido en éste. Esto implica que, en la contratación administrativa, la Administración Pública puede extinguir por sí misma el contrato por razones de incumplimiento de la concesionaria, siempre que la Administración pueda imputarle a este último su incumplimiento en lo pactado, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, de conformidad con el procedimiento regulado en la Ley General de la Administración Pública, mediante el cual se valora y constata la procedencia de la resolución del contrato.

---

[7] JIMÉNEZ (Jorge). "Caso fortuito y fuerza mayor diferencia conceptual", Revista de Ciencias Jurídicas, N° 123, (setiembre-diciembre 2010), p. 79.
[8] Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Resolución N° 83, del 07 de octubre de 2014, 11 horas.
[9] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 1205, del 15 de marzo de 1996, 9 horas.
[10] RODRÍGUEZ, ópp. cit, p. 178.

El fundamento de estas prerrogativas de la Administración Pública, lo detalla muy acertadamente SAYAGUEZ LASO (Enrique) en el siguiente párrafo:

> *"En general admítase que la administración puede declarar unilateralmente la rescisión del contrato por incumplimiento, sin necesidad de acudir a la vía judicial, aunque nada se hubiera estipulado al respecto. Esta solución se justifica por el interés público de que la ejecución de los servicios se paralice, lo cual ocurriría finalmente si la administración tuviera que aguardar el pronunciamiento de la justicia. Pero el acto declarando la rescisión está sujeto a los recursos administrativos y contenciosos, que permiten controlar la regularidad de la resolución dictada".*[11]

Es decir, el incumplimiento injustificado del contratista genera un evidente daño al interés público, por lo que resulta que la Administración deba realizar un proceso, de manera que siempre se proteja dicho interés, lo cual se debe lograr con un procedimiento administrativo tramitado por la misma Administración.

La Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su reglamento regulan el incumplimiento contractual sin definirlo conceptualmente, en este sentido el artículo 11 de la LCA establece a la Administración el Derecho de rescisión y resolución unilateral, de la siguiente manera:

> *"**Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral.** Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso.*
> *(...)"*

En este mismo orden de ideas el artículo 204 del Decreto Ejecutivo Nº 33411-H, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula la resolución del contrato por incumplimientos del concesionario, al señalar:

> *"**Artículo 204.—Resolución contractual.** La Administración, podrá resolver unilateralmente los contratos por motivo de incumplimiento imputable al contratista. (...)"*

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha estimado que la resolución del contrato administrativo por incumplimiento es:

> *"(...) el modo de disolución anormal de un contrato en razón de una causa sobreviniente, que corresponde al incumplimiento de una de las partes y que extingue retroactivamente el contrato, resolución que puede ser declarada exoficio por la Administración cuando es el contratista el que incumple con sus obligaciones y sin perjuicio, en ambos casos, del control de legalidad que deberá ejercer el juez competente".*[12]

---

[11] SAYAGUEZ LASO (Enrique). Tratado de Derecho Administrativo I, Montevideo, Ediciones De Palma, 1953, p. 578.
[12] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 1205, del 15 de marzo de 1996, 9 horas.

En este sentido la resolución contractual por incumplimiento tiene como presupuesto un comportamiento de la concesionaria que le es imputable y que es posterior a la celebración del contrato, rompiendo la composición de intereses de que el contrato es expresión.

En cuanto a la razón del incumplimiento BRENES CÓRDOBA (Alberto), señalaba que *"(...) la voluntariedad del incumplimiento puede ser culposa o dolosa. En el primer caso está ausente la voluntad de causar perjuicio al acreedor, mientras que en el segundo caso, la inejecución ha sido de mala fe".*[13]

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia apoya la concepción de que el dolo contractual se constituye con el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato, teniendo el deudor la intención de no cumplir.[14]

Ahora bien, pueden darse eximentes o razones que justifiquen el incumplimiento contractual por parte de la concesionaria, por eso el ordenamiento jurídico prevé dichas situaciones siempre y cuando el afectado haga de conocimiento a la Administración de dicha situación.

Tomando en cuenta esto, y dado que el ordenamiento jurídico costarricense establece que uno de los requisitos para que proceda la resolución contractual por incumplimiento es que la concesionaria sea imputable de la falta que se le atribuye, resulta indispensable considerar si existe alguna causa que lo exonere de culpabilidad. Imputación de responsabilidad por incumplimiento contractual que se acreditó a la empresa T V DE SAN JOSÉ UHF SOCIEDAD ANÓNIMA, a partir de la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio, y las pruebas que constan en el expediente administrativo.

Dado el caso de que no existe ningún eximente que justifique el incumplimiento por parte de la concesionaria, es de proceder por parte de la Administración la resolución del contrato y por ende la revocación de la concesión otorgada, llevando a cabo el procedimiento respectivo y cumpliendo a cabalidad con el principio del debido proceso, tal y como lo señala el Tribunal Contencioso Administrativo, procedimiento que ya fue instruido por parte del Órgano Director Administrativo de carácter sancionatorio:

> *"IV.- DE LA POTESTAD MODIFICADORA Y EXTINTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATOS SUSCRITOS POR ELLA. (...) Sin embargo, estas potestades de variación, modificación, rescisión o extinción del contrato administrativo que posee la administración tienen límites, los que se encuentran consagrados en la legislación vigente de cada ordenamiento. Así, uno de tales límites a esa potestad, lo constituye el procedimiento administrativo que debe llevar a cabo la Administración, previo al dictado del acto final que modificará o extinguirá la relación entre las partes ya constituida; y con él se garantiza al administrado el cumplimiento del principio del debido proceso, y así los derechos derivados de él, con el fin de que el acto que lo culmina no sea nulo ni vulnere tal derecho. Dentro de ellos se encuentran: el conocimiento del traslado de los cargos, los derechos de audiencia y defensa, y el de doble instancia entre otros".*[15]

---

[13] BRENES CÓRDOBA (Alberto). Tratado de los Contratos, San José, Juricentro, 1985, p. 33
[14] Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 34, del 22 de marzo de 1991, 14 horas 25 minutos.
[15] Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Resolución N° 19, del 22 de febrero del 2006, 15 horas 40 minutos.

De forma similar, dicho Tribunal ha recalcado la importancia del debido proceso en el procedimiento de resolución contractual, basándose en lo ya dicho por la Sala Constitucional:

> *"En esta inteligencia al procedimiento deben incorporarse las diversas manifestaciones y garantías del principio constitucional del debido proceso, dispuesto por el canon 39 de la Carta Magna. El tema ya ha sido de vasto análisis por parte de la Sala Constitucional, quien en su amplia jurisprudencia sobre este particular ha sostenido que deben converger en la especie, una serie de garantías elementales, que permitan al particular ejercer su derecho de defensa y que ofrezcan una certeza de que la decisión que en definitiva adopte la entidad pública, es el resultado de una ponderación objetiva del caso, y no una voluntad antojadiza y arbitraria (entre otras, resoluciones, 243-98, 3929-96, 632-99 y 2376-98). Dentro de estos elementos mínimos indicados, se impone el derecho de defensa, como eje central del debido proceso y en virtud del cual, acude a la parte pasiva del procedimiento, el derecho de asistencia letrada, acceso irrestricto al expediente administrativo y sus piezas, incluidas las pruebas, oportunidad razonable y proporcional de formular los alegatos, derecho a una resolución motivada y el derecho de impugnación de las resoluciones cuando la ley así lo disponga".*[16]

El objeto del procedimiento de resolución contractual consiste en determinar que los hechos en virtud de los cuales se instruye realmente pueden ser imputados al supuesto responsable y por ende, imponerle las consecuencias jurídicas que de antemano dispone el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, debemos recordar que en un ámbito normativo la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, dispone los mecanismos de regulación de las telecomunicaciones comprendiendo lo relativo al uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

Por lo anterior, están sometidas a su ámbito de aplicación normativo, el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la operación de redes de telecomunicaciones; y en adición la misma LGT, dispone una regulación especial en lo que atiende a la figura de la concesión para el uso y explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que habilita la operación de redes de telecomunicaciones. Particularmente, el artículo 11 de la LGT dispone, lo siguiente:

> *"**Artículo 11. Concesiones:***
> *Se otorgará concesión para el uso y la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones. Dicha concesión habilitará a su titular para la operación y explotación de la red. (...) La concesión se otorgará para un área de cobertura determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la utilización eficiente del espectro radioeléctrico".* (Énfasis agregado).

En concordancia, el Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones (RLGT), en su artículo 5 inciso 7) define la concesión como *"El acto jurídico mediante el cual el Poder Ejecutivo otorga a una persona física o jurídica el derecho para usar y explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones".* Y, en su artículo 21 dicho reglamento dispone que: *"La concesión se otorgará para un área de cobertura determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la utilización eficiente del espectro radioeléctrico (...)".*

[16] Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Resolución N° 206, del 05 de octubre del 2011, 11 horas 30 minutos.

Resultando de acuerdo con los extremos normativos expuestos, que dentro de estas obligaciones se encuentra el deber jurídico de cumplir las condiciones dispuestas en el título de concesión, con inclusión de las condiciones de cobertura habilitadas. Condiciones de cobertura que restringen *"(...) la libertad de acción del obligado en cuanto le niega el derecho de omitir la conducta prescrita o el de ejecutar la prohibida, y solo le concede el de hacer lo que le mande omitir o el omitir lo que le veda"*.[17]

Parafraseando al Profesor ORTIZ ORTIZ (Eduardo), podemos indicar en relación con este deber jurídico, lo siguiente:

> *"El deber no corresponde a lo que esta ordenado o impuesto, sino a lo que está prohibido. La restricción de la libertad apuntada como esencial del mismo, positivamente corresponde a la prohibición de hacer algo, a la imposibilidad jurídica de hacerlo. Hay una restricción de la libertad, porque hay algo que no se puede hacer, que es la omisión de una conducta autorizada.*
>
> *Según este resultado, pueden darse las siguientes definiciones del derecho subjetivo y del deber: es derecho subjetivo la autorización (de conducta), dada por la norma jurídica, que produce en el sujeto la posibilidad de hacer u omitir lícitamente algo. Es deber la prohibición (de conducta) impuesta por la norma jurídica, que produce en el sujeto la necesidad jurídica, de no hacer algo o la imposibilidad de hacerlo".*[18] (Énfasis agregado).

El objeto del procedimiento de resolución contractual consiste en determinar que los hechos en virtud de los cuales se instruye realmente pueden ser imputados al supuesto responsable y por ende, imponerle las consecuencias jurídicas que de antemano dispone el ordenamiento jurídico.

Señalado todo lo anterior, el Órgano Director del Procedimiento analizó los incumplimientos cometidos por la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, análisis que se integra como parte de la fundamentación de la presente Resolución Administrativa, y que evidencian el incumplimiento injustificado de las relaciones contractuales, prestacionales y legales por parte de la citada concesionaria.

VI. SOBRE LA RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA POR SUSCRIPCIÓN

Dado que el Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, mediante el cual el Poder Ejecutivo otorgó -mediante la figura de la cesión- a favor de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, la concesión para el uso y explotación de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60); para ser empleados en el servicio de **radiodifusión televisiva por suscripción (o codificado)**, es importante traer a colación el tipo de servicio radioeléctrico concesionado.

---

[17] GARCÍA MAYNES (Eduardo). Lógica del Juicio Jurídico, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 15 y 16.
[18] ORTIZ ORTIZ (Eduardo). Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II, p. 217.

De conformidad con lo que indica el artículo 6 inciso 24) de la Ley General de Telecomunicaciones los servicios de telecomunicaciones disponibles al público se definen como:

> *"**24) Servicios de telecomunicaciones disponibles al público:*** servicios *que se ofrecen al público en general, a cambio de una contraprestación económica".*

En concordancia con lo anterior la Procuraduría General de la República en el Dictamen vinculante Nº C-089-2010 de fecha 30 de abril de 2010 indicó:

> *"En el concepto de servicios disponibles al público va implícito el pago por el servicio recibido. Ergo, para recibir el servicio el usuario debe cubrir una tarifa, sin que pueda recibirlos en forma gratuita. Gratuidad que se postula en la radiodifusión de acceso libre, puesto que cualquiera puede recibir el servicio a partir de la tenencia del aparato correspondiente sin tener que cubrir suma alguna por esa recepción".*

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado por medio de su Resolución Nº 2017011212 de las 12:15 horas de fecha 14 de julio de 2017, que un servicio disponible al público se caracteriza como:

> *"(…) una actividad económica de interés general (artículo 74 de la Ley No. 7593), se genera en consecuencia el pago de una prestación a favor del proveedor del servicio y surge entre ambos sujetos –el prestatario y el usuario o cliente del servicio- una relación contractual mercantil que se encuentra dentro del ámbito de regulación del derecho privado, en virtud de la actividad desarrollada, la celebración de un acto de comercio y la naturaleza de la obligación pecuniaria que se genera por la actividad comercial (precio o tarifa)".*

Anteriormente, el Reglamento de Radiocomunicaciones (Decreto Ejecutivo N° 31608-G) definía en su artículo 1 el *"Servicio de televisión por suscripción"* como el que se presta *"(…) a través de redes cableadas, **utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico**, o directamente del satélite, por el que, mediante contrato con proveedores autorizados de la señal se distribuye programación de audio y video asociado, de manera continua a los suscriptores que realicen un pago periódico de una cantidad preestablecida y revisable"*. (Énfasis agregado).

Actualmente, el servicio de televisión por suscripción lo encontramos definido normativamente en el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, artículo 5 de la siguiente forma:

> *"**31. Servicio de Televisión por Suscripción:** Aquel servicio final que se realiza a través de redes cableadas, **utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico**, o directamente del satélite, por el que, mediante contrato con proveedores autorizados de la señal se distribuye programación de audio y video asociado, de manera continua a los suscriptores que realicen un pago periódico de una cantidad preestablecida y revisable".* (Énfasis agregado).

Asimismo, el artículo 133 del Reglamento a la LGT establece los alcances de este servicio indicando:

> *"**Artículo 133.-Alcances.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 8642 Ley General de Telecomunicaciones será de aplicación lo dispuesto en esta normativa a los servicios de televisión o audio por suscripción, cuando para la prestación del servicio requieran del uso del espectro radioeléctrico. En el caso de transmisión de televisión inalámbrica los concesionarios procurarán brindar este servicio a la totalidad del territorio nacional, o bien ciudades o núcleos importantes de población. Para la transmisión de video y audio asociado o de audio a través de una red, no será necesaria la concesión cuando tenga exclusivamente fines de comunicación interna y no sean objeto de comercialización directa o indirecta, siempre que no contravenga disposiciones técnicas y normativas vigentes en materia de telecomunicaciones".*

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia definió la televisión por suscripción en su Resolución N° 2008-014921 de las 14:54 horas de fecha 8 de octubre de 2008, de la siguiente manera:

> *"TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN. Los servicios de televisión, desde un punto de vista técnico, suponen la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea. Se distingue entre la televisión abierta, que se caracteriza porque su señal puede ser recibida libremente por cualquier persona en el área de cobertura de la estación **y la televisión por suscripción o cerrada, en la cual la señal, independientemente, de la tecnología de transmisión, está orientada a ser recibida, única o restringidamente, por las personas autorizadas para la recepción (suscriptor)**".* (Énfasis agregado).

Asimismo, sobre las modalidades de la televisión por suscripción, la Sala Constitucional señaló en su Resolución N° 2010015055 de las 14:47 horas de fecha 08 de setiembre de 2010, lo siguiente:

> *"(…) La televisión por suscripción, actualmente, se subdivide en las siguientes modalidades: a) Televisión satelital o DTH ('direct to home') o directa al hogar, la cual permite la recepción exclusiva e individual de señalas transmitidas, emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero, por medio de redes satelitales especiales de difusión directa, con el uso consiguiente del espectro electromagnético a través de antenas parabólicas con decodificadores, hasta los equipos terminales de recepción individual. b) Televisión por cable, la cual tiene por característica que la señal es recibida por el usuario o consumidor –suscriptor- a través de un medio físico o alámbrico de distribución –redes de fibra óptica, cable coaxial o IP (protocolo IP o IPTV) con utilización de los servicios de Internet u otras-, destinado exclusivamente para ese fin o compartido para prestar otros servicios de telecomunicaciones. **Debe advertirse que la televisión por suscripción ha adquirido gran aceptación a nivel mundial, frente a la televisión abierta, por cuanto las personas (usuarios y consumidores del servicio) encuentran mayores opciones, libertad y amplitud de contenidos, con lo cual constituye una verdadera alternativa para el goce efectivo de los derechos al ocio digno y a la información**".* (Énfasis agregado).

La Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la Resolución N° RCS-109-2015 aprobada por su Consejo mediante acuerdo N° 025-034-2015, adoptado en la sesión ordinaria N° 034-2015, celebrada en fecha 1º de julio de 2015 señaló sobre los servicios de televisión por suscripción, lo siguiente:

> *"**35.** Que mediante informe de la Dirección General de Mercados identificado bajo el oficio Nº 4502-SUTEL-DGM-2012 del 31 de octubre del 2012, se consideró que los servicios de televisión por suscripción corresponden a servicios de telecomunicaciones a los cuales se les debe aplicar las disposiciones regulatorias respectivas. De esta forma dispuso: (...)*
>
> > *'i. El servicio de televisión por suscripción ha sido designado como un servicio de telecomunicaciones por el Consejo de la Superintendencia General de Telecomunicaciones* [sic] *(...)*
> >
> > *iii. **Las empresas que brindan el servicio de televisión por suscripción son operadores y explotadores de redes donde tecnológicamente es posible brindar otros servicios de telecomunicaciones, por lo tanto son operadores de redes públicas de telecomunicaciones.** Asimismo, brindan servicios de telecomunicaciones disponibles al público. (...), lo que también los obliga a cancelar el canon de regulación y la contribución parafiscal a Fonatel por el servicio de televisión por suscripción'.*
>
> *37. Que en el mencionado informe (Nº 4502-SUTEL-DGM-2012) se recomendó lo siguiente:*
>
> > *'i. Declarar el servicio de televisión por suscripción como un servicio de telecomunicaciones en el transporte de las señales de televisión en las redes públicas de telecomunicaciones según el artículo 6 inciso 19) y 24) de la Ley General de Telecomunicaciones. Y declarar al servicio de contenido televisivo como un servicio de información'.*
>
> *38. Que mediante Acuerdo 031-070-2012 de la sesión ordinaria Nº 070-2012 celebrada el día 7 de noviembre del 2012, el Consejo de la SUTEL estableció en los Considerandos lo siguiente:*
>
> > *'i Que en criterio del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el servicio de televisión por suscripción es un servicio de telecomunicaciones'".* (Énfasis agregado).

Por lo tanto, el Consejo de la SUTEL resuelve *"1. Definir el servicio de Televisión por Suscripción como servicio de telecomunicaciones, independientemente de los canales de acceso (redes cableadas e inalámbricas basadas en protocolo IP, Redes HFC y Redes satelitales). (...) 3. Disponer que en lo sucesivo deben exigirse las mismas obligaciones para todos los operadores y proveedores que brinden servicios de telecomunicaciones de la misma naturaleza, sea en este caso los servicios de televisión por suscripción (**independientemente de la tecnología de acceso**)".* (Énfasis agregado).

En este sentido, la televisión por suscripción, en la cual la señal, independientemente, de la tecnología de transmisión, está orientada a ser recibida, única o restringidamente, por las personas autorizadas para la recepción (suscriptor), los cuales deben de realizar un pago por el servicio recibido.

Finalmente y de conformidad con todo lo señalado, podemos indicar que el servicio de radiodifusión televisiva por suscripción habilitado a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, corresponde a un servicio de telecomunicaciones disponible al público, ya que se le habilitó el uso de los segmentos de frecuencias 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) para brindar servicios de telecomunicaciones comerciales, hacia terceros a cambio de una contraprestación económica.

VII. SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA.

Al realizarse el análisis técnico de los resultados provistos por la SUTEL, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo identificó que los resultados de cobertura fueron recabados por medio de procedimientos previamente definidos y estandarizados, siguiendo las recomendaciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Lo anterior, en congruencia con el artículo 10 de la Ley N° 8642, donde se establece la importancia de utilizar las recomendaciones de la UIT en mediciones de señales electromagnéticas:

> *"**ARTÍCULO 10.- Definición de competencias***
> *Corresponde al Poder Ejecutivo dictar el Plan nacional de atribución de frecuencias. En dicho Plan se designarán los usos específicos que se atribuyen a cada una de las bandas del espectro radioeléctrico, **para ello se tomarán en consideración las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)** y de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel). (...)* (Lo resaltado no es parte del original=.

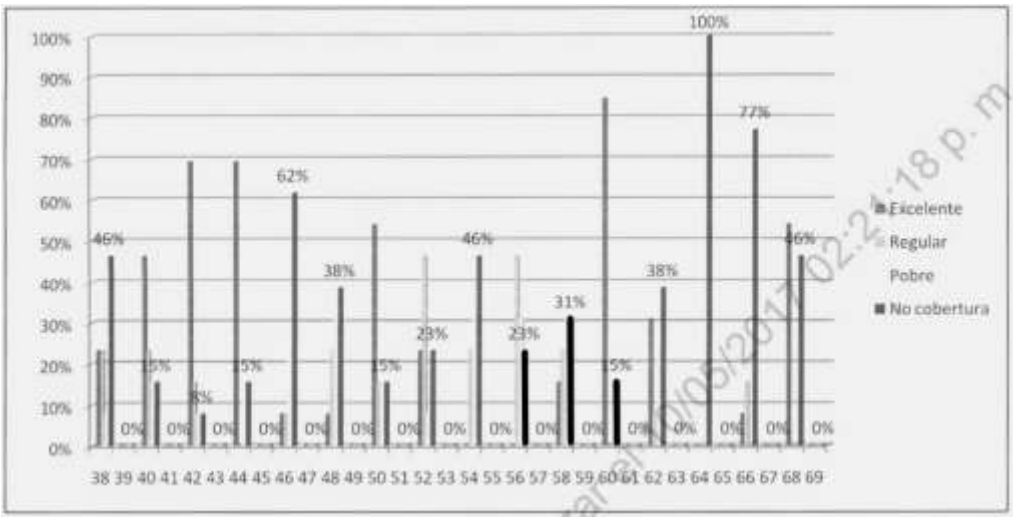
En ejercicio de las competencias legales designadas para la Superintendencia de Telecomunicaciones esta puede entonces identificar posibles incumplimientos de los deberes jurídicos de los operadores de red o proveedores de servicios, infracciones a la ley, así como cualquier situación anómala que requiera corrección.

Al respecto, debemos considerar que el artículo 49 de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, dispone:

> *"**ARTÍCULO 49.- Obligaciones de los operadores y proveedores***
> *Los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones:*
> ***1)** Operar las redes y prestar los servicios en las condiciones que establezcan el título habilitante respectivo, así como la ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten.*
> ***2)** Cumplir las obligaciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad que les correspondan, de conformidad con esta Ley.*

3) *Respetar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y atender sus reclamaciones, según lo previsto en esta Ley.*
4) *Adoptar y aplicar los procedimientos y las soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros.*
5) *Las demás que establezca la ley".*

Ahora bien, sobre el caso en particular evidenció la SUTEL, mediante el informe Nº 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre 2010, que el Canal físico 56 está cubriendo el 77% del Valle Central, el Canal físico 58 el 69% del Valle Central y el Canal físico 60 está cubriendo el 85% del Valle Central, lo que se traduce en un 23%, un 31% y un 15% de no cobertura, respectivamente. Tal y como se puede observar en el siguiente cuadro:



La SUTEL en el dictamen técnico Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre 2012, señaló que en ninguno de los 10 puntos de medición ubicados en los centros de ciudades principales, en los cuales el RLGT especifica una intensidad de campo de al menos 80 dBμV/m para los Canal físicos 56, 58 y 60, se cumple esa condición.

Y con respecto al análisis de ocupación según los títulos habilitantes otorgados a la concesionaria, sobre los Canales físicos 56, 58 y 60, la SUTEL señaló:

"El porcentaje de no cobertura del ***canal 56 (canal matriz) con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 23.0% a un 76.9% en el Valle Central****. (…)*
En lo relacionado con el ***canal 58 (canal matriz), el porcentaje de no cobertura con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 31.0% a un 69.2% en el Valle Central****.*
(…)

> *En el caso del* ***canal 60 (canal matriz), el porcentaje de no cobertura con respecto a las mediciones del año 2010 aumentó de un 15.0% a un 78.6% en el Valle Central****".* (Énfasis agregado).

Este aumento en la **no cobertura** con respecto a mediciones del año 2010 se puede ver reflejado en la figura Nº 341 del *supra* citado dictamen emitido mediante oficio N° 5173-SUTEL-DGC-2012, y que fue incluida en la presente Resolución Administrativa.

Sobre el análisis de contenido del Canal físico 56, el dictamen N° 5173-SUTEL-DGC-2012, indicó:

> *"No fue posible observar el contenido del canal 56 en ninguno de los sitios de medición mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1). Esto es congruente con las mediciones de intensidad de campo eléctrico y potencia de la señal sobre el piso de ruido, las cuales tuvieron un resultado de "no cobertura" en todos los casos".*

En el dictamen técnico emitido mediante oficio N° 1497-SUTEL-DGC-2014, la SUTEL señaló que, en comparación con las mediciones realizadas en el año 2012, donde se reportaban grandes porcentajes de no cobertura (76.9%, 69.2% y 78.6%), **para el 2013 se reportó la inexistencia de señales de transmisión para los Canales físicos 56, 58 y 60**, incumpliendo con su obligación de cobertura y con el tiempo mínimo de transmisión.

Asimismo, mediante el informe Nº 8453-SUTEL-DGC-2014 de fecha 03 de diciembre 2014, se identificó que: *"(...) Entre los canales 52 y 69, el promedio de puntos con cobertura es de tan solo 4,44%, y 16 canales (96 MHz) no tienen cobertura en ningún punto del territorio nacional (...)".* Asimismo se realizó una *"(...) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (...)",* señalando que *"(...) el 97% de las concesiones no cumplen con sus obligaciones contractuales establecidas en sus títulos habilitantes, siendo que únicamente los canales 8 y 10 cumplen con su obligación de cobertura (...)"*; por ende como resultado respecto a los Canales físicos 56 (722 MHz a 728 MHz), 58 (734 MHz a 740 MHz) y 60 (746 MHz a 752 MHz) la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, no ha cumplido con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante otorgado mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, lo cual puede verse en las **Figuras N° 6 y Nº 7** del dictamen oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014, citado *supra,* y que fueron incluidas en la presente Resolución Administrativa.

Por su parte, en el informe Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 de fecha 08 de diciembre 2015, se desprende que producto de las mediciones realizadas (121% de sitios medidos con respecto al año anterior), se tienen resultados de cobertura similares a los indicados en el oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014 para para los Canales físicos 56, 58 y 60 (empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA), donde existe una clara diferencia entre las obligaciones de cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo en 2015, tal y como se observa en la **Figura Nº 7** de dicho criterio. Asimismo, debe señalarse que, en comparación con las mediciones realizadas en 2014, **respecto al Canal 58 físico**

(frecuencias de 734 MHz a 740 MHz), el porcentaje de cobertura aumento de un 0% a un 0,65%, mientras que en los Canales físicos 56 (frecuencias de 722 SUTEL a 728 MHz) y 60 (frecuencias de 746 MHz a 752 MHz) se mantuvo en 0% (Figura Nº 10).

En el informe N° 058-SUTEL-DGC-2016 de fecha 10 de agosto de 2016 la SUTEL indicó para el caso de marras, los montos que le correspondían cancelar a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA por concepto de canon de reserva del espectro señalando que, de conformidad con lo indicado por el Ministerio de Hacienda, se registró el no pago de los periodos 2010, 2012, 2013 y 2014, y el pago parcial del periodo 2015, esto sin menospreciar la actualización realizada mediante el oficio N° 08295-SUTEL-DGC-2021 de fecha 03 de setiembre de 2021, que indicó el no pago desde la fecha indicada (2010) hasta la fecha de emisión de dicho oficio, excepto por pagos parciales mínimos, por lo que el no pago del canon de reserva se ha mantenido como una falta por el transcurso del tiempo de la concesión por parte del concesionario hasta la fecha.

Debe hacerse notar que, en esta medición realizada por la SUTEL, tal y como lo refleja la **Figura Nº 6**, el porcentaje de cobertura a nivel nacional del Canal físico 58 descendió de un **0,65%** a un **0%,** en comparación con las mediciones de 2015, y los Canales físicos 56 y 60 continúan en un **0%** de cobertura. Es decir que, hay un no uso del espectro radioeléctrico asignado a la empresa concesionaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones.

Mediante el informe N° 01084-SUTEL-DGC-2017 de fecha 06 de febrero de 2017, la SUTEL señaló que, que el porcentaje de cobertura para los últimos tres (3) años ha sido de 0% en las mediciones realizadas a los Canales físicos 56, 58 y 60, situación que se acreditó, no existiendo elementos por parte del Poder Ejecutivo para separarse del dictamen técnico emitido por parte de la SUTEL, respecto al incumplimiento contractual.

Por lo que, se concuerda con la SUTEL que en la especie existe un incumplimiento *"(…)* ***en las obligaciones contractuales h) y i) sobre la operación en forma regular con un mínimo de doce horas diarias y el interrumpir transmisiones por más de tres meses sin causa justificada y validada por la Administración Concedente (ver Contratos de Concesión de los canales citados), además del no pago de las tasas y cánones establecidos por Ley".*** (Énfasis agregado).

Y en el dictamen técnico emitido mediante oficio N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021 la SUTEL presentó los resultados de las mediciones automáticas programadas del 1° de enero al 14 de marzo de 2021, señalando que para los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) no se cumplen con los umbrales de cobertura, lo cual representa un **0%** de cumplimiento de cobertura con respecto a la totalidad de los sitios evaluados. Asimismo, se reitera que no existe presencia de señal en los segmentos de frecuencias referidos y que por ende no se cumple con el tiempo de transmisión establecido por ley.

En este sentido según ha sido señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII, Resolución Nº 00024-2016 de fecha 29 de febrero de 2016:

"El derecho administrativo sancionatorio, es entendido como la normativa que utiliza la Administración Pública ante la presunta conducta o hecho que vincula a la trasgresión de una disposición administrativa como supuesto de hecho, una pena o sanción administrativa. Actualmente, los postulados de orden penal son utilizables dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de manera matizada, esto es, su aplicación no es plena como sí ocurre en los procesos penales. Lo anterior se justifica en la naturaleza y fines diversos que se presentan entre la potestad sancionatoria penal y la administrativa. (Sobre el tema, resolución No. 8193-2000 del 13 de septiembre del 2000, emitida por la Sala Constitucional). Así, el principio de legalidad en materia sancionatoria implica como garantía material la necesidad de una precisa tipificación de las conductas consideradas ilícitas y de las sanciones previstas para su castigo y como garantía formal, que dicha revisión se realice en norma con rango de ley formal, sin perjuicio de que no se encuentre excluida la posibilidad de que cuando la ley defina el núcleo básico calificado como ilícito y los límites impuestos a la actividad sancionatoria, el reglamento desarrolle tales previsiones, actuando como complemento indispensable y dentro de los límites fijados por la norma legal. (Garberí Llobregal (José) y Buitrón Ramírez (Guadalupe). EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Volumen 1, 4a edición ampliada y actualizada. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 2001. p. 51, 52 y 56)".

Ahora bien, respecto a la cobertura, el empleo de los segmentos frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56); de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58) y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60) y por consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, se tiene que cada uno de los dictámenes técnicos emitidos por la SUTEL en el período comprendido entre los años 2010 y 2021, resultan ser consistentes al indicar de forma general que **se evidenció una cobertura deficiente y/o inexistente** durante el período en el que se realizaron las mediciones en los puntos específicos localizados dentro de la zona en la que los Canales físicos 56, 58 y 60 otorgados a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA debían tener cobertura, lo cual conlleva a establecer una duda razonable sobre si ésta se encuentra cumpliendo con las obligaciones derivadas del título que la habilitaba para explotar una concesión de radiodifusión televisiva por suscripción, o dicho de otra forma se establece en grado de probabilidad el incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el título habilitante dentro de las cuales se encuentran los parámetros en términos de calidad del servicio; esto aunado con el incumplimiento de los pagos correspondientes al canon de reserva del espectro radioeléctrico.

Por otro lado, con respecto a los informes técnicos N° MICITT-DER-INF-001-2013 de fecha 19 de julio de 2013, N° MICITT-GAER-INF-031-2014 de fecha 14 de marzo de 2014 y N° MICITT-DERRT-DAER-INF-085-2021 de fecha 10 de junio de 2021 también considerados dentro del presente análisis, los mismos contemplan los análisis que el Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico ha realizado sobre los criterios emitidos por la SUTEL respecto a los Canales físicos 56, 58 y 60 de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, y en los que dicho Departamento llega a la conclusión de que hay indicios importantes y suficientes relativos al incumplimiento en las obligaciones de cobertura establecidas en el título habilitante, de tiempo de transmisión mínimo y de pago de cánones, por lo que dicho Departamento prohíja así a la SUTEL en sus dictámenes técnicos.

Ahora bien, como se señaló anteriormente, mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, se le otorgó a la empresa la concesión de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, respectivamente, dicho Acuerdo Ejecutivo fue perfeccionado por los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

De conformidad con dichos títulos habilitantes, la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA tenía dentro de las obligaciones contraídas con el otorgamiento de su concesión, las siguientes:

a) La prestación de los servicios de radiodifusión televisiva por suscripción, con transmisiones desde el Volcán Irazú, con un área aproximada de cobertura de Clase A: 30 km y Clase B: 60 km.

Esta obligación se ve respaldada de conformidad con lo estipulado en las cláusulas tercera y quinta de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, y lo que señalan los artículos 74 inciso a) y 101 inciso e) del RLGT:

> *"**Artículo 74.-Obligaciones Generales del Titular del Título Habilitante.** Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones impuestas bajo la Ley General de Telecomunicaciones o cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias, u otras obligaciones contraídas de manera particular en el respectivo título habilitante, su titular estará obligado a:*
>
> ***a)** Prestar los servicios autorizados, de manera continua, de acuerdo a* [sic] *los términos, condiciones y plazos establecidos en la ley, este Reglamento, el respectivo título habilitante y las resoluciones que al efecto dicte la SUTEL;*
> *(...)*
> ***Artículo 101.-Utilización de las frecuencias.** Las frecuencias de radiodifusión se explotarán de acuerdo a* [sic] *las siguientes reglas:*
> *(...)*
> ***e)** Deben explotarse de acuerdo a* [sic] *su naturaleza y según se determina en este Reglamento".*

En relación con estas obligaciones la SUTEL en sus dictámenes técnicos emitidos mediante oficios Nº 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre de 2010, Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012, N° 1497-SUTEL-DGC-2014 de fecha 12 de marzo de 2014, N° 8453-SUTEL-DGC-2014 de fecha 03 de diciembre de 2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 de fecha 8 de diciembre de 2015, N° 05817-SUTEL-DGC-2016 de fecha 10 de agosto de 2016, N° 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, N° 01084-SUTEL-DGC-2017 de fecha 06 de febrero de 2017 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021 evidencia que la concesionaria ha desatendido la cobertura establecida en su título habilitante para con el área de cobertura, estableciendo mediciones que reportan el **0%** de cobertura.

Este incumplimiento de cobertura por parte de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, también violenta la obligación que tiene el concesionario de prestar el servicio de radiodifusión televisiva habilitado en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, y de no suspenderlo salvo fuerza mayor o causa justa debidamente comprobada, situación esta última que no se logró acreditar conforme a la prueba que consta en autos.
Esta obligación se encuentra pactada en la cláusula quinta inciso h) de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006 y se fundamenta en el artículo 99 del RLGT, que establece:

> *"**Artículo 99.- Tiempo mínimo de transmisión.** Las estaciones al servicio de radiodifusión sonora y televisiva deberán cumplir con un mínimo de transmisión de doce horas diarias, debiendo notificar a la SUTEL su horario".*

Dentro de los dictámenes rendidos por la SUTEL mediante oficios N° 1497-SUTEL-DGC-2014 de fecha 12 de marzo de 2014, N° 01084-SUTEL-DGC-2017 de fecha 06 de febrero de 2017 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021, este Órgano Regulador señala en específico que el concesionario está incumpliendo con dicha obligación, al indicar que:

> *"(…) de las evaluaciones realizadas por esta Superintendencia de conformidad con los artículos 101 y 105 del RLGT durante el 2013, se evidencia que los canales 56, 58 y 60 no se encuentran en utilización.*
>
> *(…) es recomendable la apertura de un procedimiento de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 8642 para extinción del derecho de concesión, máximo considerando, entre otras cosas, lo ya manifestado en este oficio así como el incumpliendo* [sic, léase incumplimiento] *en las obligaciones contractuales h) y i) sobre la operación en forma regular con un mínimo de doce horas diarias y el interrumpir transmisiones por más de tres meses sin causa justificada y validada por la Administración Concedente (ver Contratos de Concesión de los canales citados)*
>
> *(…) que no existe presencia de señal en los citados segmentos de frecuencias y por ende no se cumple con el tiempo de transmisión señalado".*

Resaltar en este punto, que el incumplimiento del tiempo mínimo de programación de doce horas y de los umbrales de cobertura dispuestos, repercuten sobre las condiciones relativas a los parámetros relativos a la calidad del servicio por parte del concesionario conforme a sus obligaciones contractuales así dispuestas.

b) Cumplimiento de pago del canon de reserva del espectro, canon de regulación y contribución especial parafiscal

La empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA es concesionaria de frecuencias para el servicio de radiodifusión televisiva el cual corresponde a un servicio de telecomunicaciones, por ende, debe de contribuir al canon de regulación y canon de reserva del espectro, durante la vigencia del plazo de la concesión.

Asimismo, con el fin de cumplir con los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, referidos en el artículo 32 de la Ley N° 8642, la empresa está obligada a cancelar la contribución especial parafiscal al FONATEL de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 8642 citado *supra*.
Al respecto, si bien la cláusula cuarta de los respectivos Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, plasmó de forma errónea, la obligación del pago del impuesto anual de radiodifusión (aplicable al servicio de radiodifusión de acceso libre y gratuito) por parte de la empresa, en vista de que el servicio habilitado (disponible al público) presupone un servicio de telecomunicaciones que le corresponde el pago de las obligaciones señaladas en los artículos 32, 62 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones según lo señalado por el mismo Órgano regulador en sus dictámenes técnicos y la información de acceso público divulgada por dicha autoridad, la cual ha sido referenciada *ut supra* en la presente Resolución.

De esta forma la Procuraduría General de la República (órgano asesor del Estado) en el dictamen vinculante N° C-089-2010 de fecha 30 de abril de 2010, relativo a la aplicación del canon del artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, indicó lo siguiente sobre los servicios de radiodifusión de acceso libre:

> *"(…) son servicios que pueden ser recibidos libremente por el público,* ***'sin pago de derechos de suscripción'*** *y cuyas señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea. En los términos de la Ley General de Telecomunicaciones, estos servicios* ***no pueden ser considerados servicios de telecomunicaciones disponibles al público****, por lo que no se les aplica el régimen correspondiente. (…)"* (Énfasis agregado).

De conformidad con lo anterior, la PGR resalta que aquel servicio de radiodifusión televisiva que se dé sin pago de derechos de suscripción, no corresponde a un servicio de telecomunicaciones disponible al público, por ende y para el caso que nos ocupa, en virtud de que el servicio otorgado a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA es radiodifusión televisiva por suscripción, el cual tiene la calificación de ser un servicio disponible al público a cambio de una contraprestación económica, le corresponde el pago del canon de regulación, canon de reserva del espectro. y contribución especial parafiscal.

En ese mismo sentido, es una obligación de la empresa concesionaria de radiodifusión el pago de los cánones y tasas, tal y como lo señala el artículo 74 inciso g) del Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET, denominado Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones (RLGT):

> *"**Artículo 74.-Obligaciones Generales del Titular del Título Habilitante.***
> *(…)*
> *g) Pagar oportunamente los cánones,* ***tasas*** *y demás obligaciones establecidos* [sic] *en la ley o en su respectivo título habilitante;*
> *(…)"*

Por su parte, el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET de fecha 22 de setiembre de 2008) referido *ut supra*, dispone en su artículo 102 la obligación de: *"(…) ajustarse en todo a lo establecido en el contrato de concesión (…)"*; y siendo que, de conformidad con las disposiciones normativas *supra* citadas y la cláusula incluida en los contratos de concesión, existe la obligación de pago del canon de reserva del espectro, del canon de regulación y de la contribución especial parafiscal, el incumplimiento de pago de los mismos constituye una causal normativa que compele a la Administración Concedente para aplicar el *ius puniendi estatal.*

Tal y como consta mediante los dictámenes técnicos emitidos mediante oficios N° 1497-SUTEL-DGC-2014 de fecha 12 de marzo de 2014, N° 05817-SUTEL-DGC-2016 de fecha 10 de agosto de 2016 y N° 01084-SUTEL-DGC-2017 de fecha 06 de febrero de 2017, actualizado mediante oficio N° 08295-SUTEL-DGC-2021 de fecha 03 de setiembre de 2021, la SUTEL indicó la morosidad de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA en cuanto al pago del canon de reserva del espectro, señalando que se encuentra con pendientes de pago de sus obligaciones correspondientes a los periodos que van del 2010 al 2020.

Ahora bien, según el reporte histórico de montos por pagar del canon de reserva del espectro radioeléctrico de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA que consta en la página http://www.sutel.go.cr/consulta-canonespectro/2?nombre=%27%27&cedula=3101283704 de la SUTEL, la empresa adeuda los siguientes montos:

sutel
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Reporte histórico de montos por pagar del canon de reserva del espectro para TV DE SAN JOSE UHF S.A.

Seguidamente se muestra un detalle de los pagos históricos realizados por el contribuyente consultado para el canon de reserva del espectro:

Periodo al cobro	Fecha límite de pago	Monto por pagar	Monto pagado	Fecha de pago	Diferencia de pagos por periodo
2010	15/03/2011	¢13.657.901	¢0		¢13.657.901
2012	15/03/2013	¢29.365.458	¢0		¢29.365.458
2013	15/03/2014	¢31.605.962	¢0		¢31.605.962
2014	15/03/2015	¢44.560.845	¢1.000	16/03/2015	¢44.559.845
2015	15/03/2016	¢45.423.098	¢1.000	15/03/2016	¢45.422.098
2016	15/03/2017	¢5.794.990	¢10.000	14/03/2017	¢5.784.990
2017	15/03/2018	¢8.980.693	¢10.000	15/03/2018	¢8.970.693
2018	15/03/2019	¢13.234.497	¢0		¢13.234.497
2019	15/03/2020	¢12.772.215	¢0		¢12.772.215
2020	15/03/2021	¢12.569.646	¢0		¢12.569.646

En necesario indicar en este punto que la SUTEL señaló en su dictamen técnico emitido mediante oficio N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021, sobre el pago del canon de reserva del espectro, canon de regulación y contribución especial parafiscal lo siguiente:

*"**3. Verificación del cumplimiento del pago del canon de reserva del espectro, canon de regulación y contribución parafiscal***
(...) Sobre este particular, se han realizado las consultas respectivas a fin de valorar la aplicación de los citados cánones al servicio utilizado por la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF S.A, por lo que una vez se cuente con el criterio, se procederá a complementar el presente informe técnico".

Cabe indicar que, el ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, mediante el **oficio Nº ODPA-OF-TVSJU-01-2021** de fecha 06 de agosto de 2021, solicitó a la SUTEL lo siguiente:

"(...)

Por medio de la resolución N° 016-2021-R-TEL-MICITT de la diez horas treinta y dos minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo designó a los suscritos Licenciado Hubert Quirós Abarca, Licenciada Melissa Porras Acevedo, e Ingeniero Eder Aburto Boniche, como Órgano Director, a efecto de llevar a cabo el respectivo procedimiento administrativo ordinario contra la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F S.A., cédula jurídica número 3-101-283704, por el presunto incumplimiento de la prestación del servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias; el incumplimiento en el pago del canon de regulación, canon de reserva del espectro y contribución especial parafiscal al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones; así como del incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 18 de la Ley N° 4755, "Código de Normas y Procedimientos Tributarios", y 18 bis de la Ley N° 9416, "Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal"; 74 de la Ley Nº 17, "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS", y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares" y de los umbrales de cumplimiento de cobertura y transmisión correspondiente a la concesión para el uso y explotación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz (Canal físico 56), de 734 MHz a 740 MHz (Canal físico 58), y de 746 MHz a 752 MHz (Canal físico 60), con base en los artículos, y las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

Con fundamento en las facultades concedidas para tal efecto y con la finalidad de aclarar algunos aspectos necesarios para determinar la procedencia de la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio, solicitamos respetuosamente, lo siguiente:

Información sobre el estado del cumplimiento del pago de la empresa concesionaria T V DE SAN JOSÉ U H F S.A., cédula jurídica número 3-101-283704, relativo al canon de reserva del espectro y contribución especial parafiscal al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), de conformidad con los artículos 32, 62 y 63 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones.

Dicho requerimiento, se hace con el fin específico de valorar el cumplimiento dado a las obligaciones adquiridas mediante disposiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, y los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas; N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006".

Como se indicó anteriormente, respecto a la solicitud realizada mediante el oficio Nº ODPA-OF-TVSJU-01-2021, mediante el oficio N° 08614-SUTEL-SCS-2021 de fecha 14 de setiembre de 2021, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico emitido mediante **oficio N° 08295-SUTEL-DGC-2021** de fecha 03 de setiembre de 2021, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-063-2021, adoptado en la sesión ordinaria N° 063-2021, celebrada en fecha 09 de setiembre de 2021, en el que se actualizó la información sobre el estado de cumplimiento del canon de regulación, el canon de reserva de espectro y la contribución especial parafiscal al FONATEL por parte de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704. En dicho informe técnico, la SUTEL indicó lo siguiente:

"Posterior a la consulta realizada por la Dirección General de Calidad, la Unidad Jurídica modificó su criterio, donde tomó en cuenta lo contenido en la resolución N°005-2020-R-TEL-MICITT del 3 de junio de 2020 (declaratoria de lesividad) indicando que la empresa TV de San José UHF S.A. tiene habilitado un servicio de telecomunicaciones disponible al público, por el hecho de poder brindar servicios de televisión por suscripción, lo cual lo enmarca dentro de la definición del artículo 6 inciso 24) de la Ley General de Telecomunicaciones. Así las cosas, la Unidad Jurídica concluyó lo siguiente:

'1. El Poder Ejecutivo mediante resolución N°005-2020-R-TEL-MICITT del 3 de junio de 2020, reconoce que existe el servicio de radiodifusión televisiva por suscripción (o codificado), habilitado a la empresa TV DE SAN JOSÉ UHF concesionaria, y en consecuencia se indica que es un servicio de telecomunicaciones disponible al público.

2.Ante la presencia de un título habilitante con servicios de radiodifusión televisiva por suscripción, y al ser considerado como servicios de telecomunicaciones disponibles al público de acuerdo con lo señalado por el Poder Ejecutivo en la resolución N° 005-2020-R-TEL-MICITT, lo que procede como bien lo señala la Dirección General de Calidad, es el pago de los cánones de reserva de espectro y el canon de regulación de acuerdo con los artículos 62 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones, además del pago de la contribución especial parafiscal de conformidad con el artículo 39 de la Ley General de Telecomunicaciones.

En virtud de lo anterior, tomando en cuenta el criterio de la Unidad Jurídica previamente referido, se procede a suministrar la información requerida por el órgano director del procedimiento administrativo. Se aclara que se brinda la información que se encuentra disponible relacionada con el estado del pago del canon de reserva del espectro radioeléctrico, siendo que la Dirección General de Operaciones no posee información respecto del canon de regulación y la contribución especial parafiscal a Fonatel, los cuales no fueron puestos al cobro dada la posición anterior existente a nivel institucional.

A continuación se presenta el detalle de la actualización del estado de pagos del canon de reserva del espectro de la empresa TV de San José UHF S.A. actualizado al 31 de marzo de 2021:

Tabla 1. *Estado de pagos del canon de reserva del espectro de la empresa TV de San José UHF S.A.*

Periodo al Cobro	***Fecha límite de pago***	***Monto por pagar***	***Monto pagado***	***Fecha de pago***	***Diferencias de pagos por periodo***
2010	*15/03/2011*	*₡13.657.901*	*₡0*		*₡13.657.901*
2012	*15/03/2013*	*₡29.365.458*	*₡0*		*₡29.365.458*
2013	*15/03/2014*	*₡31.605.962*	*₡0*		*₡31.605.962*
2014	*15/03/2015*	*₡44.560.845*	*₡1000*	*16/03/2015*	*₡44.559.845*
2015	*15/03/2016*	*₡45.423.098*	*₡1000*	*15/03/2016*	*₡45.422.098*
2016	*15/03/2017*	*₡5.794.990*	*₡10.000*	*14/03/2017*	*₡5.784.990*
2017	*15/03/2018*	*₡8.980.693*	*₡10.000*	*15/03/2018*	*₡8.970.693*
2018	*15/03/2019*	*₡13.234.497*	*₡0*		*₡13.234.497*
2019	*15/03/2020*	*₡12.772.215*	*₡0*		*₡12.772.215*
2020	*15/03/2021*	*₡12.569.646*	*₡0*		*₡12.569.646*

Como aspecto adicional, se aclara que los montos pendientes no incluyen el cálculo de multas e intereses, y que la recaudación de este corresponde al Ministerio de Hacienda".

Según lo anterior, la SUTEL en el oficio N° 08295-SUTEL-DGC-2021 solamente suministró al Órgano Director, información respecto al estado del pago del canon de reserva del espectro radioeléctrico, debido a que la Dirección General de Operaciones de ese Órgano Regulador indicó que no posee información respecto del canon de regulación y la contribución especial parafiscal al FONATEL.

Por otra parte, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo en fecha 26 de noviembre de 2021, realizó una consulta a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda respecto al estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa citada, verificándose que ésta se encuentra morosa y omisa en sus obligaciones, según se detalla en las siguientes imágenes:

Imagen 1. Deudas por impuestos (1)



Deudas por impuestos y sanciones ante la Dirección General de Tributación

310128370421 T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA

Impuesto	Periodo	Monto	Gestión de Cobro
Timbre Educación y Cultura	12/2014	₡9.000,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Timbre Educación y Cultura	12/2015	₡750,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Timbre Educación y Cultura	12/2016	₡750,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Timbre Educación y Cultura	12/2017	₡750,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Timbre Educación y Cultura	12/2018	₡750,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2010	₡13.657.901,00	COBRO ADMINISTRATIVO

1 | 2 | 3

Imagen 2. Deudas por impuestos (2)



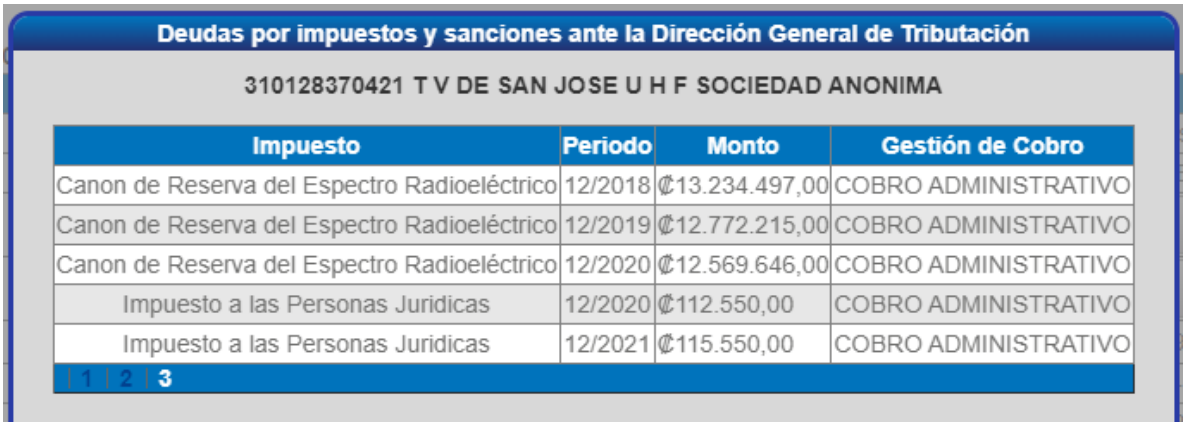
Deudas por impuestos y sanciones ante la Dirección General de Tributación

310128370421 T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA

Impuesto	Periodo	Monto	Gestión de Cobro
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2012	₡29.365.458,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2013	₡31.605.962,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2014	₡44.559.845,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2015	₡45.422.098,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2016	₡5.784.990,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2017	₡8.970.693,00	COBRO ADMINISTRATIVO

1 | 2 | 3

Imagen 3. Deudas por impuestos (3)



Deudas por impuestos y sanciones ante la Dirección General de Tributación

310128370421 T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA

Impuesto	Periodo	Monto	Gestión de Cobro
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2018	₡13.234.497,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2019	₡12.772.215,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico	12/2020	₡12.569.646,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Impuesto a las Personas Juridicas	12/2020	₡112.550,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Impuesto a las Personas Juridicas	12/2021	₡115.550,00	COBRO ADMINISTRATIVO

1 | 2 | 3

En la citada consulta se logró establecer que específicamente la morosidad de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, en el pago del Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico es de doscientos diecisiete millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos cinco colones exactos (₡217 943 305,00), adeudados por los periodos de los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo anterior configura una violación a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 8642, Ley General de las Telecomunicaciones, el artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, que indican que para la emisión de cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, se requiere que la persona física o jurídica solicitante se encuentre al día con sus obligaciones tributarias.

En vista de lo anterior, la sanción más grave a la que se podría exponer el concesionario es la relativa a la eventual revocación del título habilitante de concesión, la cual podría sobrevenir por el incumplimiento de la normativa jurídica aplicable y de las condiciones contractuales

pactadas en el contrato de concesión, con la inclusión de la falta de pago oportuna del canon de reserva del espectro, del canon de regulación y de la contribución especial parafiscal, de conformidad con las estipulaciones del artículo 22 incisos b) y d) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, que en lo conducente disponen:

> *"**ARTÍCULO 22.-Revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos***
> *Para efectos de esta Ley, son causales de resolución y extinción del contrato de concesión las siguientes:*
> ***1.** La resolución del contrato de concesión procede por las siguientes causas:*
> *(...)*
> ***b) Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión**, excepto si se comprueba caso fortuito o fuerza mayor.*
> *(...)*
> ***d) El atraso de al menos tres meses en el pago de las tasas y cánones establecidos en la presente Ley**. (...)".* (Énfasis agregado).

Por lo anterior, podemos establecer el incumplimiento de las obligaciones materiales de índole tributario dispuestas en la Ley General de Telecomunicaciones, lo procedente sería, en atención de las formalidades *"ad processum"* que correspondan y verificados los hechos expuestos por medio de las diligencias de trámite que referimos *ut supra*, declarar la extinción del título de concesión y por ende la resolución de la relación contractual de conformidad con las estipulaciones antes señaladas, y lo dispuesto en el artículo 22 inciso b) de la Ley Nº 8642.

c) Pago de obligaciones tributarias con la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda

El artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 y el artículo 18 bis la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, indican que, para la emisión de cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, se requiere que la persona física o jurídica solicitante se encuentre al día con sus obligaciones tributarias, y en razón de este mandato, por ende, en consecuencia se requiere que la concesionaria mantenga dicha condición durante todo el plazo en que se encuentre vigente la concesión, so pena de incumplir con esta normativa. A saber, dichos artículos señalan:

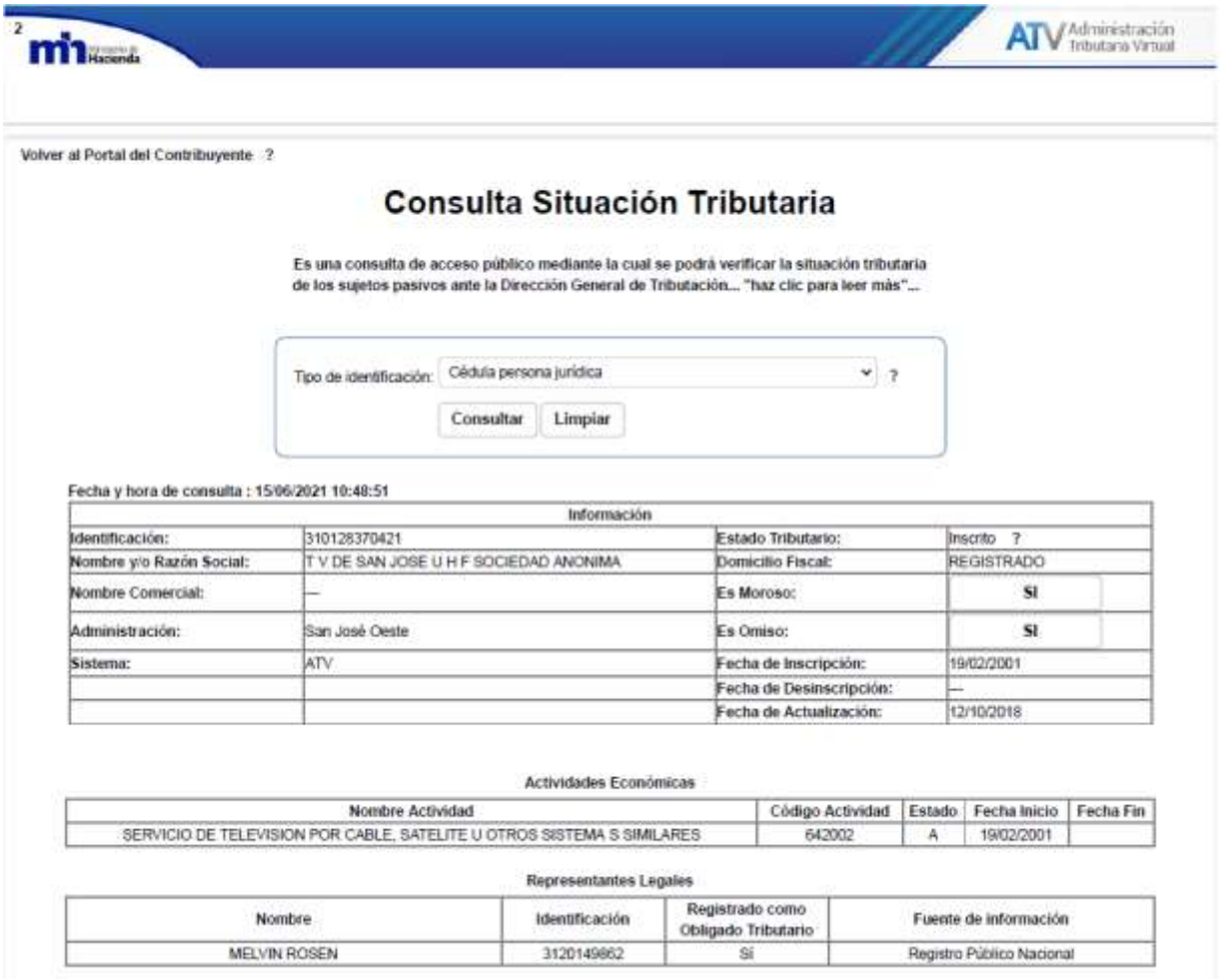
> *"**Artículo 18.-** Obligaciones. Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales establecidos por el presente Código o por normas especiales".*
>
> *"**Artículo 18 bis.- Gestión de trámites estatales***
> *Toda persona física o jurídica que desee obtener o tramitar cualquier régimen de exoneración o incentivo fiscal, cualquier proceso de contratación pública, **cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, ante la Administración central o entes descentralizados, deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales**, **así como en la presentación de las declaraciones tributarias** a las que estuviera obligada ante las dependencias del Ministerio de Hacienda. (...)"* (Énfasis agregado).

La Sala Constitucional ha señalado al respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales lo siguiente:

> *"El cumplimiento de las obligaciones tributarias es esencial para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. No solo el cumplimiento de la obligación consistente en sumas de dinero, también aquellas que se refieren al suministro de información sin la cual la Administración Tributaria no podría cumplir sus fines de control, garantía del cumplimiento de la obligación principal por los sujetos pasivos. En ese sentido, las sentencias citadas, expresan:*
>
> *'(...) la obligación constitucional de contribuir a las cargas públicas supone no solo el efectivo pago de impuestos, sino también el deber de suministrar a la Administración información atinente a su situación fiscal, de manera que aquélla cuente con elementos suficientes para corroborar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ahora bien, pueden presentarse casos en los que la Administración Tributaria considere que la información aportada por el contribuyente en cuanto a su situación tributaria no es cierta o esté incompleta. En tales supuestos, aquella puede aplicar determinados criterios objetivos que le permitan presumir con razonabilidad, la verdad real de la cuantía de la deuda, o bien, su inexistencia. Sobre este aspecto, la Sala ha señalado:*
>
> > *'(...)* ***existe un evidente interés público consistente en que los contribuyentes cumplan en forma exacta y ajustada a la ley con sus obligaciones tributarias, siendo de esta manera, el pago justo de los impuestos, un principio de acatamiento obligatorio para los habitantes y el Estado.*** *Las razones expuestas justifican el deber de los contribuyentes de proveer la información necesaria con el objeto de acreditar las situaciones jurídicas tributarias que les conciernan. Por otra parte, el orden constitucional dispone y tutela los principios esenciales y las garantías fundamentales de los contribuyentes. Lo anterior también determina un equilibrio en el orden público, en el cual, justo pago, buena fe, legalidad, objetividad, técnica y razonabilidad, entre otros, son parámetros que no sólo protegen a las personas, sino que además, aseguran la existencia del sistema tributario como fuente de recursos para la realización de los intereses de la sociedad y la democracia. La Administración debe contar con medios efectivos de control, pues de lo contrario, la evasión y no el pago sería la regla, con el eventual perjuicio para toda la sociedad. (Sentencia de la Sala Constitucional No. 4940-2012 de las 15:37 horas del 18 de abril de 2012). (el resaltado no es del original)'".*[19]

De esta forma por medio de consulta realizada en fecha 15 de junio de 2021, por parte del Órgano Director Administrativo de carácter sancionatorio, al sitio web de consulta sobre morosidad de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda respecto al estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, se verificó que la misma se encuentra morosa en sus obligaciones de pago y presentación de declaraciones tributarias, como podemos observar en la siguiente imagen:

[19] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2019002130, del 08 de febrero de 2019, 9:15 horas.



Volver al Portal del Contribuyente ?

Consulta Situación Tributaria

Es una consulta de acceso público mediante la cual se podrá verificar la situación tributaria de los sujetos pasivos ante la Dirección General de Tributación... "haz clic para leer más"...

Tipo de identificación: Cédula persona jurídica ?

Consultar Limpiar

Fecha y hora de consulta : 15/06/2021 10:48:51

Información			
Identificación:	310128370421	Estado Tributario:	Inscrito ?
Nombre y/o Razón Social:	T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA	Domicilio Fiscal:	REGISTRADO
Nombre Comercial:	—	Es Moroso:	SI
Administración:	San José Oeste	Es Omiso:	SI
Sistema:	ATV	Fecha de Inscripción:	19/02/2001
		Fecha de Desinscripción:	—
		Fecha de Actualización:	12/10/2018

Actividades Económicas

Nombre Actividad	Código Actividad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, SATELITE U OTROS SISTEMA S SIMILARES	642002	A	19/02/2001	

Representantes Legales

Nombre	Identificación	Registrado como Obligado Tributario	Fuente de información
MELVIN ROSEN	3120149862	Si	Registro Público Nacional

Imagen 4. Consulta situación tributaria

El desglose de dicha morosidad lo podemos ver en las siguientes imágenes:



Deudas por impuestos y sanciones ante la Dirección General de Tributación

310128370421 T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA

Impuesto	Periodo	Monto	Gestión de Cobro
Timbre Educación y Cultura	12/2014	₡9.000,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Timbre Educación y Cultura	12/2015	₡750,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Timbre Educación y Cultura	12/2016	₡750,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Timbre Educación y Cultura	12/2017	₡750,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Timbre Educación y Cultura	12/2018	₡750,00	COBRO ADMINISTRATIVO
Impuesto a las Personas Jurídicas	12/2020	₡112.550,00	COBRO ADMINISTRATIVO

1 2

Imagen 5. Deudas por impuestos (1)

Impuesto	Periodo	Monto	Gestión de Cobro
Impuesto a las Personas Jurídicas	12/2021	₡115.550,00	COBRO ADMINISTRATIVO

1 2

Imagen 6. Deudas por impuestos (2)

Datos Omiso (declaraciones sin presentar)

3101283704 21 T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA

Impuesto	Periodo	Actualización
Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas)	12/2014	30/06/2020
Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas)	11/2014	30/06/2020
Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas)	10/2014	30/06/2020
Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas)	09/2014	30/06/2020
Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas)	08/2014	30/06/2020
Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas)	07/2014	30/06/2020
Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas)	06/2014	30/06/2020

Imagen 7. Declaraciones sin presentar

Además, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo en fecha 26 de noviembre de 2021, realizó una consulta a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda respecto al estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa citada, verificándose que a la fecha la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-283704, aún se encuentra morosa y omisa con sus obligaciones.

Aunque no se define en nuestro ordenamiento sectorial alguna causal que determine la extinción de las concesiones debido a la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias de forma específica, se realiza la verificación por parte del MICITT, en consideración al artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y al artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, citados.

d) Pago de obligaciones sociales con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

El artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Pública, determina entre otros extremos, los siguientes:

> *"**Artículo 74.-***
> *(...)*
> *Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley.*
>
> *1.- La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y esta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, **concesiones** o licencias. **Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración***

Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

(…)

En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, *el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o* ***no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual.*** *Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia.*

(…)

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las obligaciones con la seguridad social". (Énfasis agregado).

Según fue indicado por la Procuraduría General de la República mediante su dictamen vinculante Nº C-207-2014 del 26 de junio de 2014, en relación con la norma legal *supra* citada, su objetivo es *"(…) asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social a través de la debida inscripción y cotización de los particulares e instituciones públicas, incluidas las municipalidades, al régimen administrado por la CCSS. Asimismo, con la finalidad de alcanzar ese objetivo, obliga a la Administración Pública a constatar que los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas gestionen ante ella los trámites administrativos indicados en ese artículo, estén debidamente inscritos (en la modalidad que les corresponda) y se encuentren al día con el pago de sus obligaciones (…)".*

Sobre este pago en fecha 14 de marzo de 2019 la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones había prevenido a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante el oficio N° MICITT-DCNT-DNPT-OF-080-2019, en virtud de la morosidad patronal que mantenía con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sobre esta situación la empresa presentó mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2019 ante el Viceministerio de Telecomunicaciones, *"Convenio de Pago"* de fecha 18 de marzo de 2019 suscrito con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el cual se comprometía a realizar pagos en tractos del monto que se adeudaba.

A pesar de lo anterior, por medio de consulta realizada en fecha 15 de junio de 2021, por parte del Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones, al sitio web de consulta sobre morosidad patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social, se verificó que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, se encuentra nuevamente como morosa con esta institución, como seguidamente se puede observar:

Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV
No. PM37495964
Patrono Moroso (Inactivo)

Al ser las 10:46 AM del 15/06/2021 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA	3101283704

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA MOROSA Y SU ESTADO ES INACTIVO, LA DEUDA CORRESPONDE A RUBROS DE LA CAJA Y LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, NO INCLUYE LA DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES (I.N.A, I.M.A.S, A.S.F.A. Y BANCO POPULAR)

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
3101283704	T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA	OFI. CENTRALES

---------- Última Línea ----------

Imagen 8. Constancia de la CCSS

El monto adeudado por la empresa se puede observar en la siguiente imagen:



Imagen 9. Desglose de monto adeudado

Ahora bien, el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares señala:

*"**Artículo 22.-***

Los patronos y las personas que realicen, total o parcialmente, actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fodesaf, conforme a la ley. Será requisito estar al día en el pago de las obligaciones que dispone esta Ley, para realizar los trámites administrativos siguientes:

a) La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y esta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela, o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones,

> ***concesiones**, licencias y patentes. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley general de la Administración Pública como en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N.º 8508".* (Énfasis agregado).

Además, por medio de consulta realizada en fecha 15 de junio de 2021, por parte del Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones, al sitio web de consulta sobre morosidad del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), se verificó que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, se encuentra como morosa con esta institución, como se observa en la siguiente imagen:



MTSS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES — FODESAF

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
DEPARTAMENTO GESTION DE COBRO
Teléfono: 2547-3600, Fax: 2222-2370

15/06/2021
10:47:26

PAGUE EN LINEA BCR, PAGO DE SERVICIOS, CUOTAS Y PLANES, EL SERVICIO DE COBRO FODESAF
NUMERO DE SERVICIO: 2031012837040001001

Con base en la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social la cual se encuentra en los registros del sistema de información de patronos morosos que lleva el Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cédula 03101283704 registrada por la CCSS a nombre del patrono T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA reporta los rubros abajo estipulados por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a Ley 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares":

Segregado	Nombre	Estado	Periodos	Arreglo
2-03101283704-001-001	T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA	ASADO CON LA DESAF ...	2.505.996,20	0,00

Total deuda por planillas	2.505.996,20
Total deuda por arreglos	0,00
Monto total de la deuda	2.505.996,20

Los datos de este documento están basados en un archivo de información generado el 15/06/2021 3:17:55
Deuda calculada con base en el último reporte de información suministrado por la C.C.S.S.

Una deuda se origina con FODESAF cuando los patronos cancelan atrasadas las planillas a la CCSS, ésta transfiere a FODESAFlos datos de la deuda correspondiente al 5% de todos los sueldos y salarios reportados a la CCSS.
Esta situación genera una deuda entre el patrono y FODESAF, solamente por dicho rubro.

FIRMADO DIGITALMENTE

15/06/2021 MTSS MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Imagen 10. Constancia FODESAF

Al tenor de lo expuesto, podemos entonces concluir que nuestro ordenamiento sectorial dispone a partir de las disposiciones del ordinal 49 incisos 1) y 3) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, el deber de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones de *"(…)* ***1)*** *Operar las redes y prestar los servicios en las condiciones que establezcan el título habilitante respectivo, así como la ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten (…)"* y *"(…)* ***3)*** *Respetar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y atender sus reclamaciones, según lo previsto en esta Ley (…)";* a partir de lo cual se realiza la verificación por parte del MICITT, en consideración concordante con el último párrafo del artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Asimismo, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo en fecha 03 de diciembre de 2021, realizó una consulta al sitio web de consulta sobre morosidad de la Caja Costarricense del Seguro Social, y verificó que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, aún se encuentra como morosa con esta institución, como se observa en la siguiente imagen:

Imagen 11. Constancia de la CCSS

Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV
No. PM43798799
Patrono Moroso (Inactivo)

Al ser las 9:30 AM del 03/12/2021 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA	3101283704

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA MOROSA Y SU ESTADO ES INACTIVO, LA DEUDA CORRESPONDE A RUBROS DE LA CAJA Y LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, NO INCLUYE LA DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES (I.N.A, I.M.A.S, A.S.F.A. Y BANCO POPULAR)

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
3101283704	T V DE SAN JOSE U H F SOCIEDAD ANONIMA	OFI. CENTRALES

---------- Última Línea ----------

**Este documento es válido solo por el dia de hoy.

**Este es un documento digital, por lo tanto cuando se imprima pierde validez del mismo.

**En caso que necesite verificar el documento digital puede accesar a la página web:, www.ccss.sa.cr- Consulta de Patrono al dia, y digitar el consecutivo del documento , su tipo y número de identificación asociado.

Al tenor de lo expuesto, podemos entonces concluir que nuestro ordenamiento sectorial dispone a partir de las disposiciones del ordinal 49 incisos 1) y 3) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, el deber de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones de *"1) Operar las redes y prestar los servicios en las condiciones que establezcan el título habilitante respectivo, así como la ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten*" y *"(...) 3) Respetar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y atender sus reclamaciones, según lo previsto en esta Ley";* a partir de lo cual se realiza la verificación por parte del MICITT, en consideración concordante con el último párrafo del artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES QUE ACREDITAN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

Como se analizó anteriormente, según los dictámenes emitidos mediante los oficios Nº 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre de 2010, Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012, N° 1497-SUTEL-DGC-2014 de fecha 12 de marzo de 2014, N° 8453-SUTEL-DGC-2014, de fecha 03 de diciembre de 2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 de fecha 8 de diciembre de 2015, N° 05817-SUTEL-DGC-2016 de fecha 10 de agosto de 2016, N° 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, N° 01084-SUTEL-DGC-2017 de fecha 06 de febrero de 2017 y N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021; donde constan las mediciones realizadas por la SUTEL, se tiene por comprobado que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, no ha cumplido con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, ya que de las mediciones realizadas la SUTEL se logró comprobar que el porcentaje de ocupación de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz es del 0% desde el año 2014, lo que implica que no existen transmisiones de la señal de los Canales físicos 56, 58 y 60, operados por la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA.

En cuanto a lo anterior, también se debe señalar que no consta en el expediente administrativo analizado, alguna justificación de la empresa que pudiera representar una causal eximente del incumplimiento contractual por parte de la concesionaria.

Asimismo, quedó comprobado que la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, ha incumplido con el pago del Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico, y que a la fecha adeuda la suma de doscientos diecisiete millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos cinco colones exactos (₡217 943 305,00), adeudados por los periodos de los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, se comprobó el incumplimiento de la empresa citada, en sus obligaciones tributarias con la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 4755, "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, "Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal".

Adicionalmente, dentro de los incumplimientos de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, indicados en la Resolución N° 016-2021-R-TEL-MICITT de las 14:30 horas de fecha 15 de julio de 2021 del Poder Ejecutivo, se encuentra el hecho de que la citada empresa presenta un incumplimiento de las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Nº 17, "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS", y 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", hechos que constituyen una infracción a lo dispuesto en las citadas normas jurídicas, situación que el Órgano Director del Procedimiento Administrativo tuvo por demostrada.

En vista de los incumplimientos señalados por parte de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, los cuales han ocasionado una afectación al interés público de la Administración Concedente y un menoscabo al principio sectorial de optimización de los recursos escasos, se recomendó a este Poder Ejecutivo como Órgano Decisor aplicar lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones y aplicar la sanción correspondiente a dichos incumplimientos. A saber, dicho artículo norma, en lo que nos interesa, lo siguiente:

> *"**ARTÍCULO 22.- Revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos***
> *Para efectos de esta Ley, son causales de resolución y extinción del contrato de concesión las siguientes:*
> *1) La resolución del contrato de concesión procede por las siguientes causas:*
> *(...)*
> *a) Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito o fuerza mayor.*
> *(...)"*

Aunado a lo anterior el artículo 36 del Reglamento a la LGT señala:

> *"**Artículo 36.- Extinción, caducidad y revocación de las concesiones.** Son causales de revocación y extinción de los contratos de concesión, las señaladas en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones.*
>
> *El procedimiento para la extinción, caducidad y revocación de las concesiones será el procedimiento ordinario establecido en el Libro II de la Ley General de Administración Pública, Nº 6227, del 2 de mayo de 1978, y sus reformas".*

Es así, como a través del procedimiento administrativo incoado, en contra de la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo, cumpliendo con los principios de legalidad y del debido proceso, el cual tuvo como finalidad encontrar la verdad real de los hechos respecto a la responsabilidad de la empresa concesionaria en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones como concesionaria de los Canales físicos 56, 58 y 60, llegó a la decisión que recomendó a este Órgano Decisor. Recomendación sobre la cual, este Poder Ejecutivo no encuentra razones de orden técnico, jurídico, o de interés público para separarse de ésta.

Conforme a lo expuesto, considera este Órgano Decisor que ha quedado demostrado que efectivamente la empresa concesionaria T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA ha incumplido con sus obligaciones en cuanto a la utilización del recurso según las condiciones establecidas en el título habilitante otorgado, contratos de concesión y la normativa vigente y aplicable, tanto en el pago correspondiente al Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico por los periodos del 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como con el deber de trasmitir por doce (12) horas diarias y brindar la cobertura según lo que dispuesto mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, y formalizado mediante los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006. Y por último el incumplimiento en sus obligaciones tributarias materiales y formales ante la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y las contribuciones obrero-patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

POR TANTO,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA
Y TELECOMUNICACIONES

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1. - ACOGER, en todos sus extremos, la recomendación emitida mediante el informe N° ODPA-INF-TVSJU-001-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021 emitida por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo de carácter sancionatorio instaurado por este Poder Ejecutivo, contra la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, así como **APROBAR** los dictámenes técnicos emitidos por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante los oficios Nº 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre de 2010; Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012; N° 1497-SUTEL-DGC-2014 de fecha 12 de marzo de 2014, aprobado por su Consejo mediante el Acuerdo Nº 013-018-2014, adoptado en la sesión ordinaria N° 018-2014, celebrada el día 19 de marzo de 2014; N° 8453-SUTEL-DGC-2014, de fecha 03 de diciembre de 2014; Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 de fecha 8 de diciembre de 2015, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 008-067-2015, adoptado en la sesión ordinaria N° 067-2015, celebrada en fecha 17 de diciembre de 2015; N° 05817-SUTEL-DGC-2016 de fecha 10 de agosto de 2016, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 039-048-2016, adoptado en la sesión ordinaria N° 048-2016, celebrada en fecha 31 de agosto de 2016; N° 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 009-074-2016, adoptado en la sesión ordinaria N° 074-2016, celebrada el día 19 de diciembre de 2016; N° 01084-SUTEL-DGC-2017 de fecha 06 de febrero de 2017, aprobado por su Consejo mediante Acuerdo Nº 011-016-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 016-2017, celebrada en fecha 22 de febrero de 2017; N° 03762-SUTEL-DGC-2021 de fecha 07 de mayo de 2021, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 013-040-2021, adoptado en la sesión ordinaria N° 040-2021, celebrada

el día 20 de mayo de 2021 y N° 08295-SUTEL-DGC-2021 de fecha 03 de setiembre de 2021, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-063-2021, adoptado en la sesión ordinaria N° 063-2021, celebrada el día 09 de setiembre de 2021; dada la ausencia de razones de orden público o interés nacional para separarse de dichas recomendaciones y **REVOCAR LA CONCESIÓN PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RANGOS DE FRECUENCIAS DE 722 MHz a 728 MHz; DE 734 MHz a 740 MHz Y DE 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los CANALES FÍSICOS 56, 58 Y 60**, respectivamente, y por ende **EXTIGUIR** el Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, mediante el cual se otorgó dicha concesión a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, formalizada mediante los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, en vista de la acreditación del incumplimiento de la empresa con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias; por acreditarse el incumplimiento en la cobertura establecida en el título habilitante, y contratos de concesión referidos; por acreditarse el incumplimiento en el pago del Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico de los periodos del 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, conforme al régimen jurídico aplicable. Además, por acreditarse el incumplimiento de la citada empresa concesionaria de las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, así como las obligaciones contractuales dispuestas en las Cláusulas Cuarta y Quinta incisos a) c), d), e), f) y h) de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

ARTÍCULO 2. - RESOLVER LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE USO DE FRECUENCIA RADIOELÉCTRICA N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, celebrados entre el Poder Ejecutivo y la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, en vista de la acreditación del incumplimiento de la empresa con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias; por acreditarse el incumplimiento en la cobertura establecida en el título habilitante, y contratos de concesión referidos; por acreditarse el incumplimiento en el pago del Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico de los periodos del 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, obligación dispuesta en el numeral 63 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones; el artículo 18 de la Ley N° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Además, por acreditarse el incumplimiento de la citada empresa concesionaria de las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, así como las obligaciones

contractuales dispuestas en las Cláusulas Cuarta y Quinta incisos a) c), d), e), f) y h) de los Contratos de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006.

ARTÍCULO 3. - DECLARAR LA DISPONIBILIDAD para los efectos declarativos registrales procedentes de los segmentos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, para su futura asignación, conforme a los procedimientos legales dispuestos por el ordenamiento jurídico sectorial de las telecomunicaciones vigente.

ARTÍCULO 4. - INFORMAR a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA que, en vista de la revocación de la concesión de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60 y la extinción del Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002, a partir de la firmeza de la presente Resolución no podrá hacer uso de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, respectivamente. Lo anterior de conformidad con el artículo 65 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe expresamente explotar redes de telecomunicaciones de manera ilegítima, so pena de exponerse a la aplicación del régimen sancionatorio correspondiente.

ARTÍCULO 5. - ADVERTIR a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, que la firmeza de la presente resolución de revocación de la concesión, y extinción del título habilitante otorgado no provoca la extinción de las deudas tributarias pendientes de pago del Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico de los periodos del 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, por lo que se mantiene pendiente su obligación de pago. Asimismo, no la exime de las eventuales obligaciones de cumplir con los adeudos pendientes que ha futuro se adviertan por parte de las autoridades competentes respecto al pago de montos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente, procedimientos que, en el caso de aplicar, resultan independientes de la presente gestión.

ARTÍCULO 6. - INFORMAR a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA sobre su derecho a recurrir la presente Resolución, mediante el recurso de reposición el cual deberá ser presentado ante el Poder Ejecutivo en el plazo de máximo e improrrogable de tres (3) días hábiles contado a partir del quinto día hábil siguiente a la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la presente Resolución, debiendo presentar su escrito en el Despacho Ministerial de Ciencia, Innovación Tecnología y Telecomunicaciones, sito en San José, Zapote, 250 metros oeste de la entrada principal de Casa Presidencial, Edificio Mira, primer piso. Lo anterior de conformidad con el artículo 346 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública.

ARTÍCULO 7. - NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa T V DE SAN JOSÉ U H F SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-283704, por medio de publicación por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta, y que esta misma sea notificada a la Superintendencia de Telecomunicaciones con el fin de ser inscrita en el Registro

Nacional de Telecomunicaciones, en relación con la extinción del Acuerdo Ejecutivo Nº 2758-2002 MSP de fecha 18 de julio de 2002 y la revocación de los CONTRATOS DE CONCESIÓN DE USO DE FRECUENCIA RADIOELÉCTRICA N° 037-2006-CNR de las 8:00 horas, N° 074-2006-CNR de las 8:30 horas, y N° 075-2006-CNR de las 9:00 horas, todos de fecha 23 de octubre de 2006, así como la disponibilidad de los rangos de frecuencias de 722 MHz a 728 MHz; de 734 MHz a 740 MHz y de 746 MHz a 752 MHz, correspondientes a los Canales físicos 56, 58 y 60, para su futura asignación.

ARTÍCULO 8. - Rige cinco (5) días hábiles después de la última publicación en el Diario Oficial *La Gaceta*.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega Castillo.—O. C. N° 4600060633.—Solicitud N° 001-2022.—(IN2022629885).

RESOLUCIÓN Nº 006-2021-R-TEL-MICITT.—PODER EJECUTIVO.—San José, a las diez horas y cincuenta minutos de fecha 06 de abril de 2021.

El Presidente de la República y la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones proceden a emitir el acto final correspondiente al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ORDINARIO instaurado en contra de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA, pudiendo abreviarse su aditamento como S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, en su carácter de concesionaria del derecho de uso y explotación del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz (correspondiente al Canal Físico 51), cuyo objetivo fue determinar la verdad real de los hechos en relación con el presunto incumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico, así como de los deberes jurídicos dispuestos mediante Acuerdo Ejecutivo N° 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002; correspondientes al posible incumplimiento en el pago del impuesto establecido en el artículo 18 inciso c) de la Ley N° 1758, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos); así como del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 74 de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); de los umbrales de cumplimiento de cobertura y transmisión dispuestos a nivel legal, y reglamentariamente que se tramita en el expediente administrativo Nº GCP-703-2013 del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, el Poder Ejecutivo otorgó mediante la figura de la cesión, a favor de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, la concesión para el uso y explotación del rango de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, correspondiente al Canal físico 51 para el servicio de radiodifusión

televisiva de acceso libre para la transmisión de programación de índole Comercial, con el indicativo TI-DSY, con transmisor principal ubicado en el Cerro Ron Ron en Ciudad Quesada, y con un área aproximada de cobertura de 25 km. (Folios 56 y 57 del expediente administrativo NºGCP-703-2013).

SEGUNDO: Que mediante el oficio Nº 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre de 2010, la SUTEL remitió al Viceministerio de Telecomunicaciones el "*Informe de Ocupación de Frecuencias de los Servicios de Radiodifusión Televisiva en Costa Rica*", mediante el cual apuntó, en lo que corresponde al Canal físico 51 otorgado a favor de la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., lo siguiente: *"(…) Los canales (…) 51, (…) que están atribuidos para ser utilizados en zonas rurales presentan un* ***100% de no cobertura*** *en todas las mediciones realizadas en el pacífico sur* [sic]*, lo que hace evidente la necesidad de realizar ajustes en los títulos habilitantes de los concesionarios para restringir sus coberturas y licitar estos canales a nuevos interesados en esta región. (…)"* (El resaltado es nuestro). Más adelante en cuanto a las mediciones realizadas en la Zona Norte (apartado 3.5. del citado informe), dicho órgano regulado estableció que: "*(…) Los canales (…) 51, (…) que están atribuidos para ser utilizados en zonas rurales presentan un* ***100% de no cobertura*** *en todas las mediciones realizadas en la zona norte, lo que hace evidente la necesidad de realizar ajustes en los títulos habilitantes de los concesionarios para restringir sus coberturas y licitar estos canales a nuevos interesados en esta región. (…)"* (El resaltado es nuestro). A partir de lo anterior, la SUTEL recomendó al Poder Ejecutivo, extinguir el derecho de uso y explotación del Canal 51 (rango de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz) otorgado mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, en los siguientes términos dentro de sus conclusiones: *"(…) 59. Canal 51, se recomienda que el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1 a), Ley N° 8642, cancelar el derecho de uso y explotación del canal Acuerdo Ejecutivo N° 3094-2002 MSP, otorgado mediante concesión y el respectivo contrato. Lo anterior en vista de que el canal 51, que opera como transmisor principal (matriz), no se encuentra en operación"*. (Folios 58 a 144 del expediente administrativo Nº GCP-703-2013).

TERCERO: Que mediante el Informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 denominado "Informe sobre la Gestión de Espectro Radioeléctrico ante la Apertura de las Telecomunicaciones" de fecha 30 de julio de 2012, la Contraloría General de la República instruyó a la Superintendencia de Telecomunicaciones y a la Rectoría de Telecomunicaciones a *"Identificar conjuntamente todos los casos en resulta requerida una adecuación de los títulos habilitantes (o la corrección de la ya efectuadas), así como la reasignación, revocación o extinción de las concesiones, autorizaciones o permisos otorgados, lo mismo que la recuperación y devolución de frecuencias; de acuerdo con el marco jurídico aplicable, los títulos habilitantes respectivos y en razón de uso, servicios, cobertura u otros. En esta identificación deberán considerarse todas las asignaciones otorgadas (incluyendo las de radiodifusión), las necesidades de recuperación prioritarias (…)"*. (Folios 145 a 198 del expediente administrativo Nº GCP-703-2013).

CUARTO: Que mediante el oficio Nº 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012, la SUTEL remitió al Viceministerio de Telecomunicaciones el "*Informe de ocupación de los canales de radiodifusión televisiva, bandas de 54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz y 614 MHz a 806 MHz*", en el cual, en el apartado de Análisis de Resultados, indicó que: *"**6.49. Análisis del canal 51 (Canal Matriz)** (…) De los 38 puntos de medición a nivel nacional, únicamente 4 se encuentran dentro de la zona de cobertura especificada por el Acuerdo Ejecutivo* [refiriéndose al Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002]*: Cerro Ron Ron, Ciudad Quesada, San Ramón y Naranjo. La señal del canal 51 no cumple en ninguno de estos 4 sitios con la intensidad de campo eléctrico especificado en el RLGT, por lo que tiene cobertura en el 0% de los sitios que se encuentran dentro del área de cobertura asignada a este canal. De hecho, no es posible identificar ninguna portadora en ninguno de los puntos de medición. // Los resultados obtenidos evidencian que el canal 51 no tiene ningún sitio de transmisión en operación en el territorio nacional y por lo tanto no se encuentra utilizando las frecuencias concesionadas. (…) // 6.49.2. **Análisis del contenido de la señal del canal 51** // No fue posible observar el contenido del canal 51 en ninguno de los sitios*

de medición mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1). Esto es congruente con las mediciones de intensidad de campo eléctrico y potencia de la señal sobre el piso de ruido, las cuales tuvieron un resultado de 'no cobertura' en todos los casos. (…) // ***7. ANÁLISIS DE OCUPACIÓN // 7.1. Análisis de ocupación de los canales de televisión según contratos y Acuerdos Ejecutivos // 7.2.3. Respecto*** [sic] ***a los canales 38 al 69 en la banda UHF //*** *(…) // Para el canal 51 (canal matriz), los porcentajes de no cobertura en ambas mediciones se han mantenido en un 100%, lo que comprueba que este canal no está siendo utilizado. (…) A partir de los resultados obtenidos mediante el presente informe y el del año 2010 (1619-SUTEL-2010), se comprobó que dicho canal no se encuentra en utilización, por lo tanto, se debería iniciar el procedimiento administrativo para recuperar el canal 51 aplicando lo dispuesto por el artículo 22 de la LGT y permitir la disponibilidad formal de dicho espectro"* (Lo subrayado no es parte del original). De lo anterior, se reiteró al Poder Ejecutivo la necesidad de iniciar el procedimiento administrativo procedente para la posible revocación del título habilitante de concesión otorgado y por ende proceder con la recuperación del segmento de frecuencias del Canal físico 51 con fundamento en lo estipulado en el artículo 22 inciso 1) subinciso b) de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones. (Folios 199 a 358 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

QUINTO: Que mediante oficio Nº 4732-SUTEL-SCS-2013 de fecha 20 de setiembre de 2013, recibido en el Viceministerio de Telecomunicaciones en fecha 23 de setiembre de 2013, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico emitido mediante oficio N° 4599-SUTEL-DGC-2013 de fecha 13 de setiembre de 2013, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013, adoptado en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada en fecha 18 de setiembre de 2013, mediante el cual, la SUTEL reiteró la recomendación al Poder Ejecutivo de proceder con la apertura del procedimiento administrativo correspondiente en contra de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., de conformidad con las disposiciones del artículo 22 inciso 1) sub inciso b) de la Ley Nº 6842, Ley General de Telecomunicaciones, y proceder con la recuperación a favor del

Estado del Canal físico 51 (rango de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz), por cuanto a criterio de la SUTEL de las mediciones efectuadas aparentemente se demuestra la no utilización del recurso asignado. En lo que interesa en dicho dictamen técnico la Superintendencia manifestó:

> *"(…) según lo dispuesto en el artículo 74 sobre las 'Obligaciones Generales del Titular del Título Habilitante'* [refiriéndose al Reglamento a Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET]*, específicamente en relación con lo establecido en sus incisos a) y d) al referirse a '**Prestar los servicios autorizados, de manera continua, de acuerdo a los términos, condiciones y plazos establecidos en la ley, este Reglamento, el respectivo título habilitante,** y las resoluciones que al efecto dicte la SUTEL' y a 'Cumplir con el plan mínimo de expansión de los servicios previstos en su título habilitante en los plazos establecidos (…)'. (El resaltado es intencional) (…) // Según el PNAF vigente se establece que el segmento de frecuencias UHF de 614 MHz a 806 MHz se atribuye para el desarrollo del servicio de radiodifusión televisiva de acceso libre o como comúnmente son llamados 'canales de televisión de libre acceso', los cuales pueden ser accedidos sin limitaciones por la población costarricense. Cabe mencionar, que el canal 51 (692 MHz a 698 MHz) se encuentra comprendido dentro del segmento de frecuencias de UHF señalado.* ***No obstante, en vista de la no operación del canal 51 concesionado a la empresa Canal Cincuenta y Uno S.A., se priva a la población costarricense del beneficio de contar con el contenido de programación en los canales de libre acceso otorgados en nuestro país.*** *// En este sentido, a través del artículo 99 del RLGT, se estableció que 'las estaciones al servicio de radiodifusión televisiva deberán cumplir con un mínimo de transmisión de doce horas diarias'* ***con el fin de asegurar el beneficio de la población costarricense y el uso eficiente del espectro radioeléctrico, condiciones que evidentemente no se cumple por parte del concesionario del canal en estudio****. (…)".* (El resaltado no corresponde al original).

(Folios 01 a 11 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

SEXTO: Que mediante el memorándum Nº MICITT-GCP-MEMO-151-2013 de fecha 10 de octubre de 2013, el Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones (DNPT) solicitó al Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico (DAER) emitir el criterio técnico sobre el dictamen técnico emitido mediante el oficio Nº 4599-SUTEL-DGC-2013 emitido por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. (Folio 12 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

SÉTIMO: Que mediante el Informe Técnico N° MICITT-GAER-INF-046-2014, de fecha 02 de mayo de 2014, denominado "*Análisis técnico de la concesión de Canal Cincuenta y Uno S.A. (canal 51)*", el Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico recomendó a la señor Viceministro de Telecomunicaciones para que recomendara a su vez al Poder Ejecutivo lo siguiente: "• *En el marco del ordenamiento del espectro radioeléctrico, y en vista de los principios rectores definidos en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), el presente informe técnico acoge el informe N° 5173-SUTEL-DGC-2012, en lo relativo al espectro radioeléctrico concesionado a Canal Cincuenta y Uno S.A. (Canal 51, desde 692 MHz a 698 MHz), y se recomienda proceder como corresponda jurídicamente tomando en consideración que dicho concesionario* ***no cumple con la cobertura requerida****, y la no suscripción del respectivo contrato de concesión según lo dispuesto en el transitorio II del ya derogado reglamento de radiocomunicaciones* [sic] *Decreto* [sic] *N° 31608-G y sus reformas*". (El resaltado es nuestro). (Folios 13 a 24 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

OCTAVO: Que mediante oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014, de fecha 03 de diciembre de 2014, denominado "*PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE LA BANDA DESTINADA A SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA (54 MHz A 72 MHz, 76 MHz A 88 MHz, 174 MHz A 216 MHz, 470 MHz A 608 MHz, Y 614 MHz A 806 MHz)",* remitió al Poder Ejecutivo los resultados de las mediciones realizadas en 70 sitios distintos entre los meses de febrero y setiembre de 2014 para cada uno de los 67 canales existentes, y se realizó una *"(…) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo para el año 2014 para cada uno de los canales(…)",* dando como resultado, para el caso que nos ocupa, que respecto al Canal físico 51 (frecuencias de 692 MHz a 698 MHz) que la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., no cumplió con las obligaciones de cobertura

establecidas en el respectivo título habilitante (Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002). (Folios 359 a 365 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

NOVENO: Que mediante oficio N° 08429-SUTEL-DGC-2015, de fecha 08 de diciembre de 2015, denominado "*PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE LA BANDA DESTINADA A SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA (54 MHz A 72 MHz, 76 MHz A 88 MHz, 174 MHz A 216 MHz, 470 MHz A 608 MHz, Y 614 MHz A 806 MHz)"*, la SUTEL remitió al Poder Ejecutivo los resultados de las mediciones realizadas en 155 sitios distintos entre los meses de enero a setiembre del año 2015 para cada uno de los 67 canales existentes, y se realizó una *"(…) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (…)",* dando como resultado respecto al Canal físico 51 (frecuencias de 692 MHz a 698 MHz), que nuevamente para el año 2015, la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., no cumplió con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante (Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002). (Folios 366 a 375 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DÉCIMO: Que mediante oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, denominado "*PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE LA BANDA DESTINADA A SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA (54 MHz A 72 MHz, 76 MHz A 88 MHz, 174 MHz A 216 MHz, 470 MHz A 608 MHz, Y 614 MHz A 806 MHz)"*, la SUTEL remitió al Poder Ejecutivo los resultados de las mediciones realizadas en 170 sitios distintos entre el mes de mayo al mes agosto del año 2016 para cada uno de los 67 canales existentes, y se realizó una *"(…) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (…)",* dando como resultado respecto al Canal 51 (frecuencias de 692 MHz a 698 MHz), que nuevamente para el año 2016, la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., no cumplió con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante (Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002). (Folios 376 a 386 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

UNDÉCIMO: Que mediante el oficio N° 2552-SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017, recibido en el Viceministerio de Telecomunicaciones esa misma fecha, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico emitido mediante oficio N° 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada en fecha 15 de marzo de 2017, en el cual, reiteró la necesidad de apertura del procedimiento administrativo correspondiente en contra de a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA para la aplicación del artículo 22 inciso 1) sub incisos a) y b) de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, en vista que la citada empresa concesionaria aparentemente no ha estado cumpliendo la cobertura establecida en el título habilitante para el Canal físico 51, respecto a los mínimos de intensidad de señal definidos en el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, y el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, durante los años 2014, 2015 y 2016, en la totalidad de los puntos evaluados por esa Superintendencia. (Folios 25 a 27 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DUOCÉCIMO: Que mediante el memorándum Nº MICITT-DCNT-DNPT-MEMO-058-2019 de fecha 21 de marzo de 2019, el Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones le solicitó al Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico la actualización del Informe Técnico Nº MICITT-GAER-INF-046-2014 de fecha 02 de mayo de 2014, a la luz del oficio Nº 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, emitido por la SUTEL. (Folios 31 y 32 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DÉCIMO TÉRCERO: Que por medio del memorándum N° MICITT-DERRT-DAER-MEMO-056-2019, de fecha 03 de abril de 2019, el Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico remitió al Departamento de Normas y Procedimientos en

Telecomunicaciones el Informe Técnico N° MICITT-DERRT-DAER-INF-057-2019, de fecha 03 de abril de 2019, denominado *"Análisis técnico sobre condiciones de cobertura del Canal 51 de televisión por parte del operador Canal Cincuenta y Uno S.A."*, el cual se integra dentro de la fundamentación de la presente resolución, el Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico, recomendó *"(…) valorar el presente criterio técnico, para proceder según corresponda desde la perspectiva legal, en virtud de lo señalado por la Superintendencia de Telecomunicaciones [en] los oficios N° 01619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre del 2010, Nº 05173-SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre del 2012 , N.º 04599-SUTEL-DGC-2013 del 13 de setiembre del 2013, Nº 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre del 2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre del 2015, Nº 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016 y N° 02024-SUTEL-DGC-2017 del 8 de marzo del 2017, siendo que no existen razones de orden público o interés nacional que sustenten apartarse de la recomendación de la SUTEL, específicamente sobre la posible existencia de indicios técnicos de incumplimiento de las obligaciones de cobertura establecidas en el título habilitante del canal 51 de televisión, para el concesionario Canal Cincuenta y Uno, S.A., al momento de llevar a cabo las mediciones reportadas en los citados criterios técnicos".* (Folios 33 a 49 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DÉCIMO CUARTO: Que mediante el memorándum Nº MICITT-DCNT-DNPT-MEMO-062-2019 de fecha 26 de marzo de 2019, el Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones, le solicitó al Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico, información sobre si la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. se encuentra al día con el pagó al impuesto de radiodifusión. (Folios 50 y 51 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DÉCIMO QUINTO: Que mediante el memorándum N° MICITT-DERRT-DAER-MEMO-052-2019, de fecha 29 de marzo de 2019, se informó que el último pago que consta a nombre del concesionario "CANAL CINCUENTA Y UNO S.A.", correspondiente a la frecuencia de Canal físico 51 (692 MHz a 698 MHz), fue realizado mediante el entero

RS-078-12correspondiente al año 2012, por lo que según los registros de ese Departamento, la empresa citada mantiene un deuda por el impuesto de radiodifusión de ₡840.000.00 correspondiente a los años de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. (Folios 52 a 54 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DÉCIMO SEXTO: Que por medio de consultas realizadas por la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones en fecha 27 de marzo de 2020, a los sitios web de consulta pública sobre morosidad patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), se verificó que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., se encuentra morosa en el pago de las obligaciones con ambas instituciones citadas, la anterior consulta se realiza de conformidad con el mandato impuesto por los artículos 74 inciso 1) de la Ley N° 17, "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS", y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", que establecen como requisito para el otorgamiento de permisos por parte de la Administración Pública o concesiones y durante el plazo de duración de éstas, estar al día con el pago de las obligaciones con la CCSS y con FODESAF respectivamente. (Folios 387 y 388 el expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DÉCIMO SÉTIMO: Que en fecha 27 de marzo de 2020, por medio de consulta realizada por la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones al sitio web de consulta pública de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en relación con el estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., se verificó que la misma no ha presentado las declaraciones correspondientes del impuesto de ventas y de renta ante el Ministerio de Hacienda desde el año 2012, lo anterior de conformidad con el mandato impuesto por el artículo 18 de la Ley N° 4755, "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, "Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal", los cuales disponen que para tramitar u obtener cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos,

se requiere que la persona física o jurídica solicitante se encuentre al día con sus obligaciones tributarias. (Folios 390 y 391 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DÉCIMO OCTAVO: Que en fecha 30 de marzo de 2020, la Dirección de Concesiones y Normas de Telecomunicaciones emitió el Informe Técnico-Jurídico N° MICITT-DCNT-INF-027-2020, mediante el cual recomendó al Viceministro de Telecomunicaciones para que éste a su vez recomendara al Poder Ejecutivo, proceder con el nombramiento de un Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio, para investigar el presunto incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, en relación con el incumplimiento en el pago del impuesto establecido en el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 1758, “Ley de Radio (Servicios Inalámbricos)”, así como del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 74 de la Ley Nº 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”, el artículo 18 de la Ley N° 4755, “Código de Normas y Procedimientos Tributarios” y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal” respecto de las deudas que sostiene con estas instituciones y finalmente, el incumplimiento en cuanto a los umbrales mínimos de cumplimiento de cobertura y transmisión de la concesión para el uso y explotación del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, correspondiente al Canal físico 51, que se encuentra concesionado a nombre de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., con cédula de persona jurídica N° 3-101-236933. (Folios 392 a 456 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

DÉCIMO NOVENO: Que mediante Resolución N° 004-2020-R-TEL-MICITT, de las 14:00 horas de fecha 29 de abril de 2020, el Poder Ejecutivo de conformidad con los artículos 4, 60, 89 inciso 1), 90, 214, 229, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319 de la Ley General de la Administración Pública e inciso 1) *in fine* del artículo 22 de la Ley N° 8642, “Ley General de Telecomunicaciones”, en concordancia

con el artículo 36, 74 y 99 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, “Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones”, el artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y/o el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; el artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal; procedió a designar a los funcionarios que constituirían el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio, instaurado en contra de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, pudiendo abreviarse su aditamento S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, con el fin de dar cumplimiento al debido proceso y determinar la verdad real de los hechos respecto del presunto incumplimiento de las obligaciones y condiciones que debía cumplir la citada concesionaria respecto del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, correspondiente al Canal físico 51, según los criterios técnicos de SUTEL, de la dependencia técnica y jurídica del Viceministerio de Telecomunicaciones, así como cualquier otra falta que el Órgano Director detectase en el estudio del expediente administrativo durante el procedimiento. (Folios 462 a 479 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO: Que mediante el oficio N° 09891-SUTEL-SCS-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020, la Secretaría del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones comunicó al Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionador que, mediante el Acuerdo N° 020-078-2020, adoptado por el Consejo Directivo del Órgano Regulador en la sesión ordinaria N° 076-2020 celebrada el 02 de noviembre de 2020, se aprobó el oficio N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, el cual se integra a la fundamentación de la presente resolución administrativa, en donde dicha Superintendencia acordó por unanimidad: ***“PRIMERO:*** *Dar por recibido, acoger el oficio 09268-SUTEL-DGC-2020, de fecha 15 de octubre del 2020 y los adjuntos al informe antes indicado, así como los archivos obtenidos para el presente estudio, por medio del cual la Dirección General de Calidad presenta para consideración del Consejo la propuesta de respuesta al requerimiento realizado por el Órgano Director del procedimiento administrativo,*

*solicitada mediante nota MICITT-ODPA-C51-OF-0001-2020, sobre la actualización de los criterios técnicos emitidos mediante oficio 01619-SUTEL-2010, de fecha 08 de setiembre del 2010, oficio número 05173-SUTEL- DGC-2012, de fecha 14 de diciembre del 2012; oficio número 04599-SUTEL-DGC-2013, de fecha 13 de setiembre del 2013, aprobado por el Consejo de SUTEL mediante el acuerdo del Consejo 017-050-2013, adoptado en la sesión ordinaria 050-2013, celebrada el 18 de setiembre del 2013; oficio número 08453- SUTEL-DGC-2014, de fecha 03 de diciembre del 2014; oficio 08429-SUTEL-DGC-2015, de fecha 08 de diciembre del 2015; oficio número 09206-SUTEL-DGC-2016, de fecha 13 de diciembre del 2016 y oficio número 02024-SUTEL-DGC-2017, de fecha 08 de marzo del 2017, aprobado por el Consejo de SUTEL mediante acuerdo del Consejo 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria 024-2017, celebrada el 15 de marzo del 2017, relativos a la utilización de las frecuencias de radiodifusión televisiva otorgadas a la empresa Canal Cincuenta y Uno, S. A. // **SEGUNDO:** Aprobar la remisión del presente acuerdo, el oficio 09268-SUTEL-DGC-2020, de fecha 15 de octubre del 2020, y los adjuntos al informe antes indicado, así como los archivos obtenidos para el presente estudio, como dictamen técnico, al ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EMPRESA CANAL CINCUENTA Y UNO, S. A., del Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones. // **TERCERO:** Remitir al ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EMPRESA CANAL CINCUENTA Y UNO, S. A., del Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, una copia certificada de este acuerdo."* Dicho Acuerdo fue certificado por parte del señor Luis Alberto Cascante Alvarado en su condición de Secretario del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. (Folios 526 a 532 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO PRIMERO: Que mediante Auto de Traslado de Cargos N° MICITT-ODPA-CANAL51-AUTO-001-2020, de las 08:00 horas de fecha 25 de noviembre del año 2020, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio, realizó la imputación de cargos en contra de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, que en lo que interesa eran relativos a las siguientes causas:

"*(…) el presunto incumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico, los deberes jurídicos dispuestos mediante Acuerdo Ejecutivo N° 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002; lo relativo al posible incumplimiento en el pago del impuesto establecido en el artículo 18 inciso c) de la Ley N° 1758, Ley de Radio* [sic, léase *(Servicios Inalámbricos)*], *así como del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 74 de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y de los umbrales de cumplimiento de cobertura y transmisión del canal físico 51 (692 MHz a 698 MHz) que se encuentran concesionados* [sic] *a nombre de la empresa CANAL CINCUENTA y UNO S.A. con cédula de persona jurídica N° 3-101-236933, (…)*". (Folios 550 a 560 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en fecha 26 de noviembre del año 2020, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio realizó dos intentos de notificación del Auto de Traslado de Cargos N° MICITT-ODPA-CANAL51-AUTO-001-2020, en Ciudad Quesada, específicamente en el domicilio social de la empresa, situado en Alajuela, cantón Quesada, Barrio San Vicente de Paul, 250 metros al sur del Hogar de Ancianos en el edificio del Centro de Comunicaciones, no encontrándose ubicada actualmente la citada empresa en dicha dirección física. Así como se procedió a notificar en otra dirección facilitada por un trabajador del edificio del Centro de Comunicaciones sea 200 metros al este, del Cementerio de Ciudad Quesada, sin embargo, al llegar al lugar se encontró un lote sin edificaciones y con rótulo de venta, por lo que no fue factible realizar la notificación. (Folio 561 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en vista de lo indicado en el resultando anterior, y por haber sido infructuosa la notificación personal en sus supuestas oficinas a los representantes legales de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio procedió a realizarse la notificación a la parte interesada del Auto de Traslado de Cargos N° MICITT-ODPA-CANAL51-AUTO-001-2020 de las 08:00 horas de fecha 25 de

noviembre del año 2020, así como de la Resolución N° MICITT-ODPA-CANAL51-RES-001-2020 de las 15:45 horas de fecha 03 de diciembre de 2020, (en donde se fijó la realización de la audiencia Oral y Privada para las 9:000 horas de fecha 16 de febrero de 2021), mediante tres (3) publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, a saber: en el Diario Oficial La Gaceta N° 297 de fecha Lunes 21 de diciembre de 2020, N° 298 de fecha Martes 22 de diciembre de 2020 y N° 299 de fecha Miércoles 23 de diciembre de 2020; y en el Diario Oficial La Gaceta N° 290 de fecha Jueves 10 de diciembre de 2020, N° 291 de fecha Viernes 11 de diciembre de 2020 y N° 292 de fecha Lunes 14 de diciembre de 2020, respectivamente. (Folios 567 a 575 y 581 a 593 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO CUARTO: Que por medio de consultas realizadas por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio en fecha 15 de febrero de 2021, a los sitios web de consulta pública sobre morosidad patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), se verificó que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., continúa en su condición de morosidad en el pago de las obligaciones con las instituciones citadas, lo anterior de conformidad con el mandato impuesto por los artículos 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y/o el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que establecen como requisito para el otorgamiento de concesiones por parte de la Administración Pública, o durante la vigencia de los mismos, estar al día con el pago de las obligaciones con la CCSS y con FODESAF respectivamente. (Folios 594 y 595 el expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO QUINTO: Que en fecha 15 de febrero de 2021, el Órgano Director de Procedimiento Administrativo Sancionatorio realizó consulta al sitio web de consulta pública de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en relación con el estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., verificándose que la misma no ha presentado las

declaraciones correspondientes del impuesto de ventas y de renta ante el Ministerio de Hacienda, lo anterior de conformidad con el mandato impuesto por el artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, los cuales disponen que para tramitar u obtener cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, o durante la ejecución de dicha concesión se requiere que la persona física o jurídica se encuentre al día con sus obligaciones tributarias. (Folio 596 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO SEXTO: Que el día 16 de febrero de 2021, al ser las 9:00 horas, se realizó la audiencia oral y privada respectiva. Sin embargo, no se apersonó ninguno de los representantes de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. ni en su defecto apoderados, por lo que se dio inicio y cierre a la audiencia, finalizando con el levantamiento del Acta de Comparecencia Oral y Privada, al ser las 9 horas 48 minutos del día 16 de febrero de 2021. (Folios 597 y 598 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO SÉTIMO: Que mediante el Informe N° ODPA-INF-CANAL51-001-2021 de fecha 17 de febrero de 2021 el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio procedió a remitir a este Órgano Decisor, las conclusiones y recomendaciones, respecto del estudio y análisis del expediente administrativo N° GNP-703-2013 y el Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio instaurando en contra de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, a fin de cumplir con el mandato impuesto mediante la Resolución N° 004-2020-R-TEL-MICITT de las 14:00 horas de fecha 29 de abril de 2020, recomendación que se integra dentro de la fundamentación de la presente resolución administrativa. En dicho informe el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio concluyó y recomendó al Poder Ejecutivo en calidad de Órgano Decisor lo siguiente:

“Una vez cumplida la instrucción de Poder Ejecutivo, por parte de este Órgano Director de Procedimiento, dispuesto para encontrar la verdad real de los hechos relacionados a la posible no utilización del recurso asignado incumpliendo el mínimo de transmisión de 12 horas diarias, establecido en el artículo 99 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones supracitado, en el cual supuestamente había incurrido la concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con el segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, y habiendo agotado todas las etapas del procedimiento administrativo ordinario regulado en la Ley General de la Administración Pública y garantizándose durante todo su desarrollo el derecho de defensa y debido proceso a la parte, procede a concluir:

1. Que con fundamento en las mediciones realizadas por la SUTEL por medio de los informes N° 1619-SUTEL-2010 con fecha 08 de setiembre de 2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre de 2012, 4549-SUTEL-DGC-2013 del 13 de setiembre de 2013, aprobado mediante el oficio N° 4732-SUTEL-SCS-2013 que fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013 adoptado en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre de 2013, N° 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre de 2014, N° 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre de 2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016, el informe N° 02024-SUTEL-DGC-2017 del 08 de marzo de 2017, aprobado mediante el oficio N° 2552- SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017 el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada el 15 de marzo de 2017, el oficio N° 09891-SUTEL-SCS-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020, mediante el cual la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico emitido mediante oficio N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL N° 020-076-2020, adoptado en la sesión ordinaria N° 076-2020, celebrada el 02 de noviembre de 2020, se determinó contundentemente el registro de 0% de cobertura del Canal físico 51, frecuencias 692 MHz a 698 MHz, de parte de la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

2. Según los informes N° 1619-SUTEL-2010 con fecha 08 de setiembre de 2010, N° 5173- SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre de 2012, 4549-SUTEL-DGC-2013 del 13 de setiembre de 2013, aprobado mediante el oficio N° 4732-SUTEL-SCS-2013 que fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013 adoptado en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre de 2013, N° 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre de 2014, N° 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre de 2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016, el informe N° 02024-SUTEL-DGC-2017 del 08 de marzo de 2017, aprobado mediante el oficio N° 2552-SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017 el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada el 15 de marzo de 2017, el oficio N° 09891-SUTEL-SCS-2020 de

fecha 03 de noviembre de 2020, mediante el cual la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico emitido mediante oficio N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL N° 020-076-2020, adoptado en la sesión ordinaria N° 076-2020, celebrada el 02 de noviembre de 2020, donde constan las mediciones realizadas por la SUTEL, ***se tiene por comprobado que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, no ha cumplido con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, ya que de las mediciones realizadas por la SUTEL, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo logró acreditar que el porcentaje de ocupación del segmento de frecuencias comprendido de 692 MHz a 698 MHz es del 0%, lo que implica que no existen transmisiones de la señal del Canal físico 51.***

3. ***No consta dentro del expediente administrativo que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA haya hecho uso y explotación del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz (Canal físico 51), ni que haya realizado transmisiones entre los años 2010 a la fecha de emisión del presente informe de recomendación.***

4. ***No consta dentro del expediente administrativo que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA haya presentado justificación que compruebe caso fortuito o fuerza mayor para la no transmisión y uso de la concesión otorgada, por ende, se tiene por acreditado el incumplimiento a las condiciones del título habilitante otorgado, el contrato de concesión suscrito y el marco normativo aplicable.***

5. Que mediante el memorándum N° MICITT-DERRT-DAER-MEMO-052-2019, de fecha 29 de marzo de 2019, se informó que el último pago que consta a nombre del concesionario 'CANAL CINCUENTA Y UNO S.A.', correspondiente a la frecuencia de Canal físico 51 (692 MHz a 698 MHz), fue realizado mediante el entero RS-078-12, efectuado por el concesionario y correspondiente al año 2012, por lo que según los registros de ese Departamento, la empresa citada mantiene un deuda por el impuesto de radiodifusión de ₡840.000.00 correspondiente a los años de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 6. ***Los incumplimientos por parte de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., han ocasionado una afectación al interés público de la Administración y un menoscabo al principio de optimización de los recursos escasos, por lo que se debe acudir a lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones y aplicar la sanción correspondiente a dichos incumplimientos.***

7. En vista de la ausencia de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. a la comparecencia oral y privada, la cual no se presentó ni aportó justificación alguna para la no asistencia a la misma, [sic] *no se tuvieron elementos de juicio que justificaran la suspensión y reprogramación de la misma* [sic].

8. ***Se constató que, por medio de consulta realizada en fecha 15 de febrero de 2021, al sitio web de consulta sobre morosidad patronal de la Caja***

Costarricense de Seguro Social, y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), [sic] ***la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. se encuentra MOROSA en el pago de las obligaciones con las instituciones citadas. Configurándose, por tanto, como una causal de incumplimiento por parte de la empresa sobre lo concesionado.***

RECOMENDACIONES

PRIMERO: REVOCAR LA CONCESIÓN PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DEL RANGO DE FRECUENCIAS 692 MHz a 698 MHz (CANAL 51 FÍSICO), otorgado a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA mediante el ACUERDO EJECUTIVO Nº 3094- 2002-MSP de fecha 02 de octubre de 2002, en vista del incumplimiento de la empresa con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias y la morosidad por el no pago de los impuestos de radiodifusión de los periodos 2010 a 2021, con fundamento en los artículos 3, 22 inciso b), y 99 de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 1758, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos). (…)" (El resaltado no corresponde al original).

(Folios 599 a 625 del expediente administrativo N° GCP-703-2013).

VIGÉSIMO OCTAVO: Que se han observado las prescripciones de la ley, se han realizado las diligencias útiles y necesarias, y no se han advertido nulidades que afecten la validez del presente caso ni que pongan en indefensión a las partes.

CONSIDERANDO

PRIMERO: SOBRE EL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA

La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 121 dispone las atribuciones que le corresponden a la Asamblea Legislativa, entre ellas la que interesa para el desarrollo de esta Resolución:

"Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

(…)

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:

(…)

c) Los servicios inalámbricos;

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y ***c)*** *anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la* ***ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.***

(…)" (Resaltado es propio)

Como recurso natural que es, el espectro radioeléctrico posee las características de los bienes demaniales, es decir, son aquellos que por su naturaleza o por decisión de la Asamblea Legislativa, por una votación de al menos dos terceras partes de sus miembros, están afectados a un uso público, esto es, cuentan con una vocación al servicio general o colectivo; por lo que son inalienables, imprescriptibles y están fuera del comercio de los hombres.

Al respecto, la Sala Constitucional mediante su Voto Nº 02408 de las 16:13 horas de fecha 21 de febrero de 2007, sostuvo que:

"Son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela (…)."

De manera que resulta evidente que los bienes públicos, y con ellos el espectro radioeléctrico, tienen un destino diferente, por estar afectados a un uso común, y en el caso particular de los servicios inalámbricos, específicamente ha establecido la jurisprudencia constitucional, lo siguiente:

> *"Los servicios inalámbricos no constituyen un bien que el particular tenga el derecho innato a usarlo o que ejerza sobre el mismo algún tipo de derechos o que el Estado tenga la obligación de ponerlo a disposición del particular, lo que ocurre es que si el Estado a bien lo tiene y estima que puede disponer de ese bien para que sea explotado por el particular o bien por la misma Administración lo realice mediante la correspondiente concesión administrativa o legislativa otorgada en forma temporal, según el caso, en virtud que las ondas etéreas forman parte del espectro el cual es un bien demanial perteneciente a la Nación*." (Voto Nº 06053-2002 de las 14:38 horas del 19 de junio de 2002).

Lo anterior conjuga con lo establecido por la Procuraduría General de la República en el Dictamen vinculante Nº C-017-2000, de fecha 31 de enero de 2000, donde ese órgano asesor del Estado sostiene al respecto que *"Conforme lo dispuesto en el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política y lo ha desarrollado la jurisprudencia constitucional y administrativa, el espectro electromagnético constituye un bien del Estado. Como tal es un bien demanial (…)."*

El espectro radioeléctrico se encuentra entonces sometido a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, y, en consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. (Sala Constitucional, Sentencia Nº 5976-93 de 15:45 horas de fecha 16 de noviembre de 1993).

Por otra parte, en el marco del Derecho Internacional Público mediante el Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC), Ley Nº 8622, aprobado inicialmente mediante referéndum y posterior a ello, suscrito formalmente por Costa Rica; dicho Tratado Internacional entró en vigor en fecha 21 de diciembre del 2007.

Específicamente, en el Anexo 13 del Capítulo 13 del TLC, se desarrollan los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de telecomunicaciones. Dentro de estos compromisos adquiridos se establecieron una serie de "Principios Regulatorios", tanto en relación con la Autoridad Reguladora de los servicios del sector telecomunicaciones, como en la asignación del recurso escaso (v.gr. el espectro radioeléctrico), el cual en lo conducente dispone:

> *"**Independencia de la Autoridad Reguladora***
>
> *Costa Rica establecerá o mantendrá una autoridad reguladora para los servicios de telecomunicaciones, que será independiente de todo proveedor de servicios de telecomunicaciones, y no responderá ante ellos. Costa Rica asegurará que su autoridad reguladora para los servicios de telecomunicaciones esté autorizada a imponer sanciones efectivas para hacer cumplir las medidas domésticas relacionadas a las obligaciones establecidas en este Anexo.* ***Esta autoridad reguladora podrá incluir jurisdicción sobre la administración del espectro****, servicio universal, fijación de tarifas y otorgamiento de licencias para nuevos participantes al mercado. Las decisiones y los procedimientos de la autoridad reguladora serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado."*
>
> *"**4. Asignación y Utilización de Recursos Escasos***
>
> ***Costa Rica asegurará que los procedimientos para la asignación y utilización de recursos escasos, incluyendo frecuencias****, números y los derechos de vía, sean administrados de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria, por una autoridad doméstica competente.*

La República de Costa Rica emitirá licencias directamente a los proveedores del servicio para el uso del espectro, ***de conformidad con el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política de la República de Costa Rica****."*

Así las cosas, se procedió posteriormente a crear formalmente en el derecho interno costarricense el Sector Telecomunicaciones y se le asignó a este Ente Rector Sectorial un conjunto de competencias especificas en materia de telecomunicaciones. Lo anterior de conformidad con las disposiciones de los artículos 38 y 39 de la Ley N° 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, los cuales disponen en lo conducente:

"ARTÍCULO 38.- Sector Telecomunicaciones

Créase el Sector Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones.

ARTÍCULO 39.- Rectoría del Sector Telecomunicaciones

El rector del sector será el ministro o la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a quien le corresponderán las siguientes funciones:

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 10° de la Ley 'Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología', N° 9046 del 25 de junio de 2012)

a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones.

b) Coordinar, con fundamento en las políticas del Sector, la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. El primer Plan que se

dicte deberá establecer, como mínimo, el acceso para las personas físicas a opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar el acceso al servicio telefónico para las personas con necesidades sociales especiales, los habitantes de las zonas donde el servicio no sea financieramente rentable, o las personas que no cuenten con recursos suficientes.

c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones.

d) Aprobar o rechazar el criterio técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sobre la adjudicación, prórroga, extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de las concesiones y los permisos de las frecuencias del espectro radioeléctrico. En el caso de que se separe de dicho criterio, el Poder Ejecutivo deberá justificar las razones de orden público o interés nacional que lo sustenten.

e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan.

f) Realizar la declaratoria de interés público y dictar el decreto para la imposición de servidumbres forzosas o para la expropiación de los bienes necesarios para la operación de las redes públicas de telecomunicaciones.

g) Representar al país ante las organizaciones y los foros internacionales de telecomunicaciones y en los relacionados con la sociedad de la información.

h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información.

i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza.

j) Brindar apoyo técnico al rector en materia de gestión integral de residuos en cuanto a la definición, clasificación y diseño de políticas de gestión de los residuos derivados de las actividades de telecomunicaciones.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 58 aparte b) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)

k) Las demás funciones que le asigne la ley.

El ministerio rector, para cumplir estas funciones y garantizar la calidad e idoneidad de su personal, contará con los profesionales y técnicos que requiera en las materias de su competencia. Dichos funcionarios estarán sujetos al régimen jurídico laboral aplicable a los de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Asimismo, podrá contratar a los asesores y consultores que necesite para el cumplimiento efectivo de sus funciones. La organización, las funciones y demás atribuciones se definirán reglamentariamente."

De igual forma el legislador creó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) en calidad de Regulador de las Telecomunicaciones, a través de los artículos 6 inciso 27) de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, 45 y 59 de la referida Ley N° 8660, Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones; así como el artículo 59 de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP); estableciéndose como un órgano de desconcentración máxima de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia Nº 011210-2008 de las 15:00 horas de fecha 16 de julio del 2008, resaltó los fines que se procuraban por el legislador, al dotar a la SUTEL del grado de desconcentración máxima, señalando las siguientes consideraciones:

> *"En suma, este Tribunal Constitucional estima que la configuración de la SUTEL como una institución autónoma, dotada de autonomía política, o de un órgano desconcentrado en grado máximo, adscrito a la ARESEP, es una opción del legislador en el ejercicio de su libertad de configuración, siendo lo importante que sendas instituciones, esto es, la descentralización en segundo grado y la desconcentración máxima tienen por fin garantizar el ejercicio de una competencia técnica y exclusiva de manera objetiva, independiente, técnica y apolítica."*

Según se desprende, el legislador otorgó entonces a dicho Órgano regulador, amplias competencias mediante los artículos 1 y 2 inciso d) de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones y el artículo 59 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) los cuales establecen que corresponde a la SUTEL entre otros, regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, siendo de este modo, el criterio técnico de la SUTEL un requisito de validez para las diversas decisiones que deben ser adoptadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Ministerio en su condición de Rector de las Telecomunicaciones en el país.

En este sentido, el criterio técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones es un requisito de validez por disposición normativa para cualquier decisión respecto a la apertura de un procedimiento administrativo sobre la situación jurídica de un concesionario de espectro radioeléctrico, como lo es la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA. Dicho de otra forma, el criterio de Órgano Regulador se instituye en un requisito *sine qua non* para que sea adoptada la decisión final por el Poder Ejecutivo.

Al respecto, la Procuraduría General de la República en su dictamen vinculante Nº C-306-2015 de fecha 11 de noviembre de 2015, entre otros aspectos, determinó:

> *"En efecto, de las normas específicas sobre concesión antes indicadas se desprende* ***que corresponde a la Superintendencia emitir criterios técnicos sobre diversas decisiones que deben ser adoptadas tanto por el***

Poder Ejecutivo como por el Ministerio en su condición de Rector de las Telecomunicaciones en el país. *En particular, debe rendir un dictamen técnico para la caducidad y extinción de las concesiones y, por paralelismo de las competencias, para la resolución de éstas, todo conforme el inciso d) del artículo 73 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (…).*

Criterio técnico que, ciertamente, no puede considerarse como la recomendación que puede dar el órgano director al concluir la instrucción del procedimiento. Por mandato legal, el criterio técnico de SUTEL es parte del procedimiento, ya que el Poder Ejecutivo debe necesariamente contar con ese criterio para tomar la decisión de otorgar una concesión y, en su caso, para extinguirla. ***En ese sentido, el criterio técnico puede ser considerado una formalidad sustancial, cuya inexistencia es susceptible de viciar el procedimiento administrativo****."* (El resaltado es de autoría propia).

Complementariamente la Contraloría General de la República mediante su Informe Nº DFOE-IFR-IF-06-2012 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en lo conducente, indicó:

"(…) que con la finalidad de que el Poder Ejecutivo proceda a resolver los referidos casos, ***es requisito sine qua non contar con el informe técnico de SUTEL*** *para cada uno de ellos, por lo cual solicita remitir el criterio técnico para todos y cada uno y en los que se incluyan también una serie de especificaciones que se indicaron en dicho oficio (…)."* (El Resaltado es nuestro).

Y de manera particular, en lo que atiende al servicio de radiodifusión televisiva de acceso libre, debemos considerar que este servicio de telecomunicaciones se encuentra sujeto a un régimen jurídico mixto, es decir, le resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), Ley Nº 1758, así como las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, en lo que atiende a la materia de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico.

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República mediante su dictamen vinculante Nº 110-2016 de fecha 10 de mayo 2016, indicó, lo siguiente:

> *"Ahora bien, cabe aclarar que el artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones sujeta las redes de radiodifusión a sus estipulaciones en materia de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y régimen sectorial de la competencia. Por consiguiente, en estos ámbitos no puede considerarse que exista una situación de vacío normativo. Ergo, en esas materias no se presenta la necesidad de integrar el ordenamiento a efecto de llenar el vacío. Sencillamente, el legislador decidió regular las redes de radiodifusión de acceso libre en materia de planificación, administración y control, sustrayendo estos ámbitos de la regulación de la Ley de Radio y consecuentemente, de las normas especiales que esta establezca.*
>
> ***Así, planificación, administración y control de la red de radiodifusión, se rigen por la Ley de Telecomunicaciones y ello con independencia de que se trate de la radiodifusión abierta o de la radiodifusión digital. Sobre estos ámbitos el operador jurídico no tiene que integrar el ordenamiento, porque el propio legislador decidió cómo se regían esos temas, sujetándolos a la Ley General de Telecomunicaciones. Por ende, lo que corresponde es aplicar sus disposiciones."*** (Resaltado es propio).

Ahora bien, teniendo clara la aplicación de la LGT al servicio de radiodifusión televisiva de acceso libre, al menos en lo que atiende a la materia de planificación, control y administración del espectro radioeléctrico, procedemos a resaltar un conjunto de objetivos dispuestos en dicho cuerpo legal. Específicamente el artículo 2 de la LGT, respecto a los objetivos sectoriales, en lo conducente reza:

"(...)
a) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, en los términos establecidos en esta Ley.
(...)

d) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con nuestra Constitución Política.

e) Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles.

(...)
i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia.

(...)"

Del mismo modo, en su artículo 8 la Ley General de Telecomunicaciones también ha dispuesto una pluralidad de objetivos particulares vinculados con el uso y explotación del espectro radioeléctrico -en su condición de bien demanial constitucional del Estado costarricense- sujeto a una adecuada planificación, administración y control estatal. En lo conducente dispone el referido ordinal, lo siguiente:

"Artículo 8.- Objetivos de la planificación, la administración y el control

Los objetivos de la planificación, la administración y el control del espectro radioeléctrico son los siguientes:

a) Optimizar su uso de acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la tecnología.

b) Garantizar una asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria.

c) Asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales."

Al respecto, la Procuraduría General de la República en su dictamen Nº C-003-2013 de fecha 15 de enero del año 2013, en relación con estos objetivos indicó, lo siguiente:

"En ese ámbito, ***interesa destacar la sujeción de las redes que dan soporte a la radiodifusión a la planificación, administración y control del espectro radioeléctrico. Por ende, al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, a las metas, los objetivos y políticas del sector de telecomunicaciones; sometimiento a los principios que informan estas funciones. Conforme el artículo 8 de la Ley General****, reiteramos, estas funciones responden a los objetivos de optimizar el uso del espectro radioeléctrico, garantizar su asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria y que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales. Objetivos que son derivación de los contenidos en el artículo 2 de la Ley y de los principios esenciales del sector de las telecomunicaciones. No puede dejarse de lado que la optimización de los recursos escasos, entre los cuales se encuentra el espectro, se refiere a la asignación y utilización de estos recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, transparente, no discriminatoria y para asegurar una competencia efectiva y la expansión y mejora de redes y servicios (artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones)."* (Resaltado es propio).

Por lo anterior, cualquier decisión que deba adoptarse en materia de radiodifusión televisiva debe necesariamente considerar la efectiva tutela de los derechos de los usuarios finales, los intereses de mercado que permitan una competencia efectiva entre los concesionarios para asegurar la disponibilidad de los servicios, así como garantizar que todas sus etapas ocurran de forma transparente, equitativa y no discriminatoria.

Y en un ámbito técnico, resulta trascendental que todos los concesionarios cuenten con las condiciones requeridas para brindar el servicio de radiodifusión televisiva abierta y gratuita, con la mayor cobertura y calidad, asegurándose su continuidad en la prestación, así como que dicho servicio pueda llegar a todos los usuarios del país.

De igual forma, la LGT dispone un conjunto de principios jurídicos rectores en materia de servicios de telecomunicaciones, que orientan la prestación del servicio de radiodifusión televisiva de acceso libre y gratuito. Al respecto, según lo ha indicado el doctrinante Robert Alexy los principios *"son normas que ordenan que algo debe hacerse en la mayor medida fáctica y jurídicamente posible. Las posibilidades jurídicas, además de depender de reglas, están esencialmente determinadas por otros principios opuestos, hecho que implica que los principios pueden y deben ser ponderados. Los derechos que se basan en principios son derechos prima facie."*[1]

Sobre el particular, la normativa sectorial a través de la Ley General de Telecomunicaciones contempla en su numeral 3 incisos b), c), f), g) e i), un conjunto de principios rectores que orientan la aplicación de este cuerpo normativo, con inclusión del servicio de radiodifusión televisiva de acceso libre, el cual se constituye por disposición normativa en una actividad privada de interés público, a tenor del artículo referido ut supra 29, el cual en lo que nos interesa determina:

"(...)

[1] ISLAS MONTES (Roberto). Anuario de derecho constitucional latinoamericano año XVII, Montevideo. 2011. Páginas 397 a 412, ISSN 1510-4974.

a) Universalidad: prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad y precio.

b) Solidaridad: establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables.

c) Beneficio del usuario: establecimiento de garantías y derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio.
(...)

f) Competencia efectiva: establecimiento de mecanismos adecuados para que todos los operadores y proveedores del mercado compitan en condiciones de igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio del Derecho constitucional y la libertad de elección.

g) No discriminación: trato no menos favorable al otorgado a cualquier otro operador, proveedor o usuario, público o privado, de un servicio de telecomunicaciones similar o igual.
(...)

i) Optimización de los recursos escasos: asignación y utilización de los recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios.

(...)"

Sobre los objetivos y principios expuestos, es importante considerar lo indicado por la Procuraduría General de la República mediante su dictamen vinculante Nº 110-2016 de fecha 10 de mayo 2016, al indicar que:

> *"(…) las redes de radiodifusión se regulan por la Ley Telecomunicaciones y deben sujetarse a los objetivos y principios que rigen las telecomunicaciones. De modo que el uso de una frecuencia para radiodifusión no podría otorgarse si ese uso no satisface el objetivo de optimizar el espectro radioeléctrico y su explotación racional, eficiente, transparente y no discriminatoria.* ***En ese sentido, la Ley General de Telecomunicaciones, sus objetivos y principios enmarcan el otorgamiento de las concesiones para radiodifusión, las que deben satisfacer los citados objetivos.***
>
> *Con lo cual la Procuraduría reconoce la preeminencia de la Ley General de Telecomunicaciones en la regulación del espectro y de las redes para explotarlo.* ***En esos ámbitos, la Ley de Radio solo es aplicable cuando una norma de rango legal así lo dispone****."* (Resaltado es propio).

En igual sentido, la Procuraduría General de la República mediante el dictamen vinculante Nº C-003-2013 de fecha 15 de enero 2013, indicó que: *"(...) uno de los principios fundamentales que rigen el sector de las telecomunicaciones es la optimización de los recursos escasos, que se refiere a la asignación y utilización de estos recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, transparente, no discriminatoria, para asegurar una competencia efectiva y la expansión y mejora de redes y servicios (artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones). La Ley General de Telecomunicaciones tiene como objeto establecer los mecanismos de regulación de las telecomunicaciones, comprensivo del uso y explotación de las redes."*

Por lo cual, dichos principios rectores se erigen como un marco orientador de la conducta administrativa, para asegurar la continuidad del servicio en los términos de calidad establecidos en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las condiciones particulares definidas en los títulos habilitantes de concesión de los prestadores de servicio tal y como ha sido señalado en un ámbito jurisdiccional: su preservación se constituye en una obligación jurídica indeclinable de toda autoridad pública, a fin de establecer las garantías necesarias para que la población pueda continuar disfrutando oportunamente del acceso a los servicios de telecomunicaciones.

SEGUNDO: SOBRE LA COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO PARA LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Tal y como se apuntó en la sección anterior, con la firma del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC), aprobado mediante Ley N° 8622 de fecha 21 de noviembre de 2007, Costa Rica adquirió una serie de compromisos país, que implicaron la creación del Sector Telecomunicaciones, así como la emisión de un marco normativo acorde con las nuevas necesidades regulatorias. De esta forma en el año 2008 se promulgaron la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642 (en adelante LGT) y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660 de fecha 13 de agosto de 2008 y sus reformas (en adelante LFMEPST), mediante las cuales, es clara la legislación en establecer una Rectoría en Telecomunicaciones que recae en MICITT.

Con la génesis del sector telecomunicaciones *supra* indicada, mediante el artículo 38 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660 y sus reformas, el legislador creó la Rectoría en materia de Telecomunicaciones. Para la consecución de las funciones y los objetivos establecidos por la citada Ley, en el párrafo *in fine* del artículo 39 de la citada Ley se dispone de la constitución del Viceministerio de Telecomunicaciones, en los siguientes términos:

“El ministerio rector, para cumplir estas funciones y garantizar la calidad e idoneidad de su personal, contará con los profesionales y técnicos que requiera en las materias de su competencia. Dichos funcionarios estarán sujetos al régimen jurídico laboral aplicable a los de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Asimismo, podrá contratar a los asesores y consultores que necesite para el cumplimiento efectivo de sus funciones. La organización, las funciones y demás atribuciones se definirán reglamentariamente”.

Precisamente, para dar cumplimiento a lo indicado en el párrafo que antecede, el legislador en el Transitorio I de la Ley Nº 9046, Ley del Traslado del Sector de Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio de Ciencia y Tecnología, dispuso:

“TRANSITORIO I.-

Con la entrada en vigencia de la presente ley, las partidas presupuestarias previstas en la ley del presupuesto anual de la República, así como el personal, los activos, los pasivos y el patrimonio, en custodia o asignados al Viceministerio de Telecomunicaciones por ley, reglamento, donación, préstamo o por cualquier otra disposición para el cumplimiento de las labores del sector, serán transferidos al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que los asumirá definitivamente. El personal mantendrá las condiciones establecidas en el artículo 39 de la Ley N.º 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008”.

Es decir, el legislador dispuso la existencia de un ente Rector en Telecomunicaciones, que en un inicio estuvo en el Ministerio de Ambiente y Energía, y que posteriormente por medio de la Ley N° 9046 denominada “Ley Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología” de fecha 25 de junio de 2012, se trasladó al Ministerio de Ciencia y Tecnología adicionándole en el nombre Telecomunicaciones. Es así como la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 (en adelante LGAP) en su numeral 23 dispone en lo conducente:

"Artículo 23.-

1.- Las carteras ministeriales serán:

a) (…)

ñ) Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones.

(Así adicionado el inciso ñ por el artículo 104 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), Nº 7169 del 26 de junio de 1990. Posteriormente, este mismo inciso fue reformado por el artículo 6° de la Ley de Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N° 9046 del 25 de junio de 2012. El artículo 11 de la ley afectante modifica además la denominación del Ministerio en la forma vista)".

Es importante resaltar que el Viceministerio de Telecomunicaciones fue creado en virtud de una norma de rango legal, tal y como lo dispone el artículo 6 de la Ley N° 9046, mediante la cual se realizan dos importantes modificaciones a la Ley Nº 6227, Ley General de Administración Pública, a saber:

"ARTÍCULO 6.-

Refórmanse los incisos h) y ñ) del artículo 23 y el inciso 7) del artículo 47, y adiciónase un nuevo inciso 8) a este artículo de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas, para que en lo sucesivo se lean de la siguiente manera:

'Artículo 23.-

***1.-** Las carteras ministeriales serán:*
(…)
***h)** Ambiente y Energía.*
(…)
***ñ)** Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones'".*

"Artículo 47.-
(…)

***7.-** El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tendrá dos viceministros: uno encargado del sector ambiente y uno encargado del sector energía. En ausencia*

del ministro, lo sustituirá cualquiera de los dos viceministros. Las atribuciones asignadas en esta ley a los viceministros serán ejercidas por cada uno, dentro de sus respectivas áreas de acción.

***8.-** El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones tendrá un Viceministerio de Telecomunicaciones y aquellos otros que se designen de conformidad con el inciso 1) del presente artículo".*

Sea que, el MICITT cuenta con un brazo técnico especializado denominado Viceministerio de Telecomunicaciones, creado por ley para atender el tema específico.

En concordancia con lo transcrito, el artículo 2 de la LGT citada establece los objetivos de la Ley que debe desarrollar y concretar la Rectoría de Telecomunicaciones que son:

"*ARTÍCULO 2.- Objetivos de esta Ley*
Son objetivos de esta Ley:
a) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, en los términos establecidos en esta Ley.
b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de telecomunicaciones.
c) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran.
d) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con nuestra Constitución Política.
e) Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles.
f) Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico.
g) Asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos escasos.
h) Incentivar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que contenga mecanismos que garanticen los principios de transparencia, no discriminación, equidad, seguridad jurídica y que no fomente el establecimiento de tributos.

i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia.
j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados".

En adición a las competencias legales señaladas, mediante el dictamen técnico Nº C-306-2015 de fecha 11 de noviembre de 2015 la Procuraduría General de la República indicó, que conforme al principio de paralelismo de las competencias, corresponde al Poder Ejecutivo resolver las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, compete entonces al Poder Ejecutivo decidir la apertura de procedimiento de resolución, y en su caso nombrar el órgano director encargado de instruir el procedimiento, así como adoptar la decisión final.

Por lo que, el Poder Ejecutivo conformado con el Presidente de la República y la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones por disposición de Ley son competentes para conocer y resolver sobre el presunto incumplimiento de la empresa CANAL CINCUNETA Y UNO S.A., con cédula de persona jurídica N° 3-101-236933, respecto a las obligaciones y condiciones de uso del Canal físico 51 (rango de frecuencia de 692 MHz a 698 MHz), según los criterios técnicos de SUTEL, los criterios técnicos y jurídicos de las dependencias del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT, así como cualquier otra falta que el Órgano Director de Procedimiento Administrativo Sancionatorio detectase en el estudio del expediente administrativo y en la ejecución del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio respectivo.

TERCERO: SOBRE EL INFORME N° DFOE-IFR-IF-6-2012 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2012, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resulta necesario indicar como antecedente y con el fin de que forme parte del análisis jurídico del caso en estudio y que se resuelve mediante el presente acto, la solicitud expresa por parte de la Contraloría General de la República, por lo que se transcribe en lo conducente el punto 5.1.c.i del Informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 de fecha 30 de julio del 2012:

> "*Identificar conjuntamente todos los casos en los que resulta requerida una adecuación de los títulos habilitantes (o corrección de las ya efectuadas), así como la reasignación,* ***revocación o extinción de las concesiones****, autorización de los permisos otorgados, lo mismo que la recuperación y devolución de frecuencias; de acuerdo con el marco jurídico aplicable, los títulos habilitantes respectivos y en razón de uso, servicios, cobertura u otros. En esta identificación deberán considerarse todas las asignaciones otorgadas (incluyendo las de radiodifusión), las necesidades de recuperación prioritarias y tener en cuenta además las recomendaciones contenidas en el 'informe técnico sobre el uso y asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica' elaborado por la SUTEL en mayo del 2009"*. (Énfasis agregado).

De acuerdo con lo anterior, es evidente la necesidad de análisis de los casos indicados con el fin de identificar el procedimiento administrativo correspondiente; de igual manera es necesario hacer referencia al punto 5.1.f.ii del informe referido ut supra, tal y como a continuación se transcribe:

> *"Identificar y revisar, por parte del MINAET todas las adecuaciones de títulos habilitantes tramitadas, con el fin de determinar si las adecuaciones ya efectuadas son contestes con lo estipulado en el PNAF y demás normas de ordenamiento, determinar la validez del acto administrativo o correcciones que eventualmente procedan y, si es el caso, iniciar un proceso de nulidad de dichas adecuaciones. Lo anterior con la debida consideración del criterio técnico de la SUTEL. En el caso de que se separe de dicho criterio, deberá justificar las razones de orden público o de interés nacional que lo sustente."* (Énfasis agregado).

De esta forma se evidencia la necesidad y responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de lograr un equilibrio en la administración y el uso eficaz del espectro radioeléctrico, fundamento por el cual se busca realizar los procedimientos administrativos que resulten procedentes para lograr dicho fin.

CUARTO: ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Tal y como se indicó líneas arriba, por medio de la promulgación de la Ley N° 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones (LFMEPST), se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones como órgano técnico del Sector, definiendo su rol y competencias, en el Capítulo XI a la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, las cuales establecieron en los siguientes artículos respectivamente, para lo que interesa lo siguiente:

> *"**Artículo 60.- Obligaciones fundamentales de la Sutel**: Son obligaciones fundamentales de la Sutel:*
>
> *a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.*
>
> *(…)*
>
> *e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones.*
>
> *f) Asegurar, en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no discriminatoria, el acceso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones.*
>
> *g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales y los recursos de numeración, conforme a los planes respectivos.*
>
> *(…)"*

“Artículo 73. Funciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)
(…)
d) Otorgar las autorizaciones, así como realizar el procedimiento y rendir los dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo, para el otorgamiento, la cesión, la prórroga, la caducidad y la extinción de las concesiones y los permisos que se requieran para la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, así como cualquier otro que la ley indique.
e) Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de interferencias perjudiciales (…).

“ARTÍCULO 10.- Definición de competencias:
(…)
A la Sutel le corresponderá la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales”.

De manera tal, que la SUTEL es el órgano regulador establecido por ley tiene la función de velar por el uso eficiente del espectro radioeléctrico, verificando que se cumplan los usos expresamente establecidos en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y sus reformas. Asimismo, es el órgano encargado de llevar el registro de las frecuencias otorgadas, por ende, para el Poder Ejecutivo resulta un requisito de validez valorar las recomendaciones técnicas emanadas de ese órgano regulador, como se indica en el artículo 80 inciso a) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos:

“Artículo 80.- Registro Nacional de Telecomunicaciones
La Sutel establecerá y administrará el Registro Nacional de Telecomunicaciones. Dicho Registro será de carácter público y su regulación se hará por reglamento.
Deberán inscribirse en el Registro:

a) Las concesiones y autorizaciones otorgadas para la operación de las redes de telecomunicaciones y para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. (…)"

En razón de la competencia de dispuesta legalmente para la SUTEL de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los operadores de redes y proveedores de servicios dispuesta en el artículo 60 inciso e) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley Nº 7593, le corresponde llevar a cabo la fase de investigación preliminar, ya que es el órgano definido por la Ley para identificar la posible existencia de hechos que se configuran en causales para resolver la concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico.

La llamada investigación preliminar no constituye una etapa del procedimiento administrativo. Como su nombre lo indica, es preliminar a éste, lo antecede. Su objeto es servir de insumo para que el jerarca tome la decisión de iniciar un procedimiento. Por consiguiente, puede ser un medio para recopilar elementos de prueba que permitan adoptar posteriormente la decisión de apertura del procedimiento. En ese sentido, puede constituirse en un instrumento para una toma mejor motivada de la decisión:

"Sobre el particular, la Sala ha mantenido el criterio de que una correcta inteligencia del carácter y fundamentos del debido proceso exige admitir que, de previo a la apertura de un procedimiento administrativo, en ocasiones es indispensable efectuar una serie de indagaciones preliminares, pues la Administración –con anterioridad a la apertura del expediente administrativo– podría requerir la realización de una investigación previa, por medio de la cual se pueda no solo individualizar al posible responsable de la falta que se investiga, sino también determinar la necesidad de continuar con las formalidades del procedimiento, si se encuentra mérito para ello. El caso prototipo ocurre cuando, sin intervención de las partes interesadas, se evacuan ciertas pruebas durante la investigación preliminar (...)". (Sala Constitucional, resolución Nº 9125-2003 de las 9:21 horas de fecha 29 de agosto de 2003).

Mediante resolución Nº 13512-2003 de 11:42 horas de fecha 28 de noviembre de 2003 la misma Sala Constitucional expresó:

> *"(…) En cuanto a este tema, esta Sala ha considerado como constitucionalmente válido que las administraciones públicas puedan efectuar una serie de indagaciones previas, a efectos de reunir los elementos de juicio apropiados para descartar o confirmar la necesidad de iniciar formalmente procedimiento administrativo en un caso concreto".* (Sala Constitucional, Resolución Nº 11176-2011 de 12:35 horas de fecha 19 de agosto de 2011).

La Ley General de Telecomunicaciones define a la Superintendencia de Telecomunicaciones como el órgano encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, artículo 6 inciso 27). En tanto que la Ley de la ARESEP dispone en su artículo 59 dispone:

> ***"Artículo 59.- Superintendencia de Telecomunicaciones***
> *Corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones; para ello, se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.*
>
> *La Sutel es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; tendrá personalidad jurídica instrumental propia, para administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, realizar la actividad contractual, administrar sus recursos y su presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones.*
>
> *La Sutel será independiente de todo operador de redes y proveedor de servicios de telecomunicaciones y estará sujeta al Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y a las políticas sectoriales correspondientes."* (Énfasis agregado).

Por otra parte, la citada norma legal dispone que a la SUTEL le corresponde la función de vigilancia e inspección, la cual es desarrollada en el artículo 76:

> *"**Articulo 76.-Inspección***
>
> *Con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, así como las demás obligaciones que se impongan por medio de esta Ley, la Sutel podrá inspeccionar las condiciones de uso y explotación de las redes y los servicios de telecomunicaciones, así como los demás equipos, aparatos e instalaciones. De igual manera, corresponderá a la Sutel la inspección de las redes de radiodifusión y televisión, cuando estas sirvan de soporte para ofrecer servicios de telecomunicaciones.*
>
> *Los funcionarios de la Sutel, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, serán considerados autoridad pública y podrán solicitar el apoyo necesario de la Fuerza Pública.*
>
> *Los operadores y proveedores estarán obligados a permitir a los inspectores el acceso a sus instalaciones y, además, que dichos funcionarios lleven a cabo el control de los elementos afectos a las redes o servicios y de los documentos que deban tener.*
>
> *A los operadores de redes y proveedores de servicios de; telecomunicaciones que presten el servicio en forma ilegítima, se les aplicarán las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales correspondientes.*
> ***La Sutel podrá efectuar cualquier acción directa de supervisión, verificación, inspección o vigilancia respecto de los operadores y proveedores, quienes estarán obligados a prestarle total colaboración, para facilitarle las labores que le faculta esta Ley".*** (Énfasis agregado).

Dicha competencia ha sido asignada por la Ley a SUTEL para que la ejerza a nombre propio, en forma definitiva e independiente de cualquier otro organismo público. Dado que se trata de su propia competencia y que ésta es un poder-deber, se sigue que la Superintendencia puede ejercer de oficio todas y cada una de esas funciones. Lo cual también es conteste con las disposiciones supra legales contenidas en la Ley Nº 8622, la cual en su Capítulo IV. Principios Regulatorios numeral 2. Independencia de la Autoridad Reguladora, entre otros extremos dispone que "*Esta autoridad reguladora podrá incluir jurisdicción sobre la administración del espectro, servicio universal, fijación de tarifas y otorgamiento de licencias para nuevos participantes al mercado. Las decisiones y los procedimientos de la autoridad reguladora serán imparciales con respecto a todos los participantes del mercado."* Resulta entonces que el artículo 60 de la Ley Nº 7593 se intitule "Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)". Y entre estas obligaciones se encuentra la fiscalización y control del ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.

QUINTO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS

Con base en la instrucción del procedimiento administrativo y el análisis del expediente administrativo N° GNP-703-2013 bajo custodia del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, los criterios técnicos y jurídicos, este Órgano Decisor determina que resultan como hechos probados del procedimiento administrativo sancionatorio incoado en contra de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA los siguientes:

1. Que el espectro radioeléctrico sólo puede ser explotado por la Administración Pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca el legislador, según lo instituye el artículo 121 inciso 14) subinciso c) de la Constitución Política. Por lo que, las concesiones de uso y explotación del espectro radioeléctrico sólo confieren a su titular, el derecho y su correlativa

obligación de explotar o de hacer uso de éste en los términos y las condiciones técnicas estipuladas en el respectivo título habilitante, así como lo dispuesto en la normativa vigente.

2. Que mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, el Poder Ejecutivo otorgó mediante la figura de la cesión, a favor de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, la concesión para el uso y explotación del rango de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, Canal físico 51 para el servicio de radiodifusión televisiva de acceso libre para la transmisión de programación de índole Comercial, con el indicativo TI-DSY, con transmisor principal ubicado en el Cerro Ron Ron en Ciudad Quesada, y con un área aproximada de cobertura de 25 km.

3. Que conforme lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1 subapartados a) y b) de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones se dispone que son causales de revocación de la concesión *"Cuando el concesionario no haya utilizado las frecuencias para el fin solicitado luego de un año de haber sido asignadas o de haberse concedido la prórroga. (…),"* y el "*Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito o fuerza mayor."*

4. Que el artículo 8 incisos b) y c) de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones define dentro de los objetivos de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente.

5. Que el artículo 29 la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, determina que el aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad privada de interés público.

6. Que el artículo 49 de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, dispone como parte de las obligaciones de los concesionarios, como lo es la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA lo siguiente:

"ARTÍCULO 49.- Obligaciones de los operadores y proveedores

Los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones:

1) *Operar las redes y prestar los servicios en las condiciones que establezcan el título habilitante respectivo, así como la ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten. (…)"*

7. Que el Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones (en adelante RLGT), emitido en fecha 22 de setiembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 186 del 26 de setiembre de 2008 y sus reformas, en su artículo 5 inciso 7) define la concesión como "*El acto jurídico mediante el cual el Poder Ejecutivo otorga a una persona física o jurídica el derecho para usar y explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones."*

8. Que el artículo 21 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET dispone que: "*La concesión se otorgará para un área de cobertura determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, (…)".*

9. Que el artículo 99 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, se establece como obligación de las personas físicas o jurídicas concesionarios del servicio de radiodifusión televisiva la siguiente: *"Artículo 99.-Tiempo mínimo*

de transmisión. Las estaciones al servicio de radiodifusión sonora y televisiva deberán ***cumplir con un mínimo de transmisión de doce horas diarias****, debiendo notificar a la SUTEL su horario."* (El resaltado no corresponde al original).

10. Que, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, otorgado a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, dicha empresa concesionaria debe cancelar mediante entero a favor del Gobierno, el impuesto establecido en el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 1758, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), resultando que el incumplimiento de esta obligación pecuniaria deviene en una causal para extinguir el título de concesión otorgado.

11. Que, de conformidad con las disposiciones del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encontrarse en estado de "'Patrono Moroso'" constituye una causal de incumplimiento contractual, en relación con los títulos habilitantes de concesión otorgados por la Administración Pública, por lo que debe procederse a su revocación.

12. Como parte de sus competencias propias, corresponde a SUTEL vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, velando por el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones y, controlando el uso del espectro radioeléctrico. En general, supervisando, verificando, inspeccionando y vigilando los operadores y proveedores, como así lo dejó en manifiesto el criterio vinculante N° C-306-2011 emitido en fecha 11 de noviembre de 2015 por la Procuraduría General de la República, mediante el cual brinda su criterio vinculante en cuanto a las funciones que corresponden al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones dentro del procedimiento administrativo que debe instaurarse para la revocación y extinción de concesiones, conforme lo establecido por la Ley General de Telecomunicaciones.

13. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones en ejercicio de sus facultades dispuestas en los artículos 59, 60 y artículo 73 inciso d) y e) de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y 10 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones realizó verificaciones del cumplimiento de las obligaciones de transmisión derivadas del título habilitante el Acuerdo Ejecutivo N° 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002 conferido por el Poder Ejecutivo, resultados comunicados al Poder Ejecutivo mediante los oficios N° 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre de 2010; N° 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012; N° 4599-SUTEL-DGC-2013 de fecha 13 de setiembre de 2013, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013, adoptando en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada en fecha 18 de setiembre de 2013; Nº 8453-SUTEL-DGC-2014 de fecha 03 de diciembre de 2014; Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 de fecha 08 de diciembre de 2015; Nº 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016; N° 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptando en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada en fecha 15 de marzo de 2017; N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 020-076-2020, adoptado en la sesión ordinaria N° 076-2020, celebrada en fecha 02 de noviembre de 2020, en donde determinó que no se reportan transmisiones de la señal del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz (correspondiente al Canal físico 51), otorgado a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., esto es, comprobó mediante mediciones de campo la no utilización del segmento de frecuencias mencionado, el cual constituye una causal de cancelación de la concesión, según el ordenamiento jurídico sectorial.

14. Que ha quedado debidamente demostrado, según consultas a los sitios web de consulta pública sobre morosidad patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., se encuentra morosa en el pago de las obligaciones con las instituciones citadas, lo anterior de conformidad con el mandato impuesto por los artículos 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que establecen obligación para los concesionarios (como lo sería la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA) estar al día con el pago de las obligaciones con la CCSS y con FODESAF respectivamente, so pena de la revocación o cancelación de la concesión conferida por el Estado.

15. Que ha quedado debidamente demostrado, según consultas al sitio web de consulta pública de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en relación con el estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. que dicha concesionaria no ha presentado las declaraciones correspondientes del impuesto de ventas y de renta ante el Ministerio de Hacienda, lo anterior de conformidad con el mandato impuesto por el artículo 18 de la Ley N° 4755 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, los cuales disponen que para tramitar u obtener cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, o durante la vigencia de los mismos se requiere que la persona física o jurídica se encuentre al día con sus obligaciones tributarias.

16. Que, de conformidad con el memorándum N° MICITT-DERRT-DAER-MEMO-052-2019, de fecha 29 de marzo de 2019, el Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT informó que el último pago que consta a nombre de la concesionaria

CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., correspondiente al Canal físico 51 (segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz), fue realizado mediante el entero N° RS-078-12 correspondiente al año 2012, por lo que según los registros de ese Departamento, la empresa citada mantiene una deuda por el impuesto de radiodifusión de ₡840.000.00 correspondiente a los años de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

SEXTO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS

Para efectos de la emisión de la presente resolución, y con miras a determinar verdad real de los hechos imputados a la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, de relevancia para el caso en concreto, este Órgano Decisor tiene que no se han podido demostrar los siguientes hechos:

1. Que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO, S.A. haya hecho uso del rango de frecuencias concesionado sea de 692 MHz a 698 MHz, correspondiente al Canal físico 51, desde el año 2010 y hasta la actualidad, según sus obligaciones prestacionales, legales y reglamentarias dispuestas para todos los concesionarios del servicio de radiodifusión televisiva.
2. Que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO, S.A. haya realizado gestiones relativas al trámite de arreglos de pago o similares para poner al día los montos adeudados ante la CCSS, FODESAF o el Ministerio de Hacienda y el canon de radiodifusión.
3. Que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA haya cumplido con sus obligaciones prestacionales, legales y reglamentarias derivadas del Título Habilitante conferido por el Poder Ejecutivo mediante el mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, dispuestas en la Ley N° 1758, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, y el Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, así como el artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja

Costarricense de Seguro Social, el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

SÉTIMO: SOBRE EL FONDO

A. TÍTULO HABILITANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 3094-2002 MSP CONFERIDO A LA EMPRESA CANAL CINCUENTA Y UNO S.A.

Mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, el Poder Ejecutivo le otorgó a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, el derecho de uso y explotación de espectro radioeléctrico en los siguientes términos:

TIPO DE SERVICIO:	*RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA*
CLASE:	*COMERCIAL*
INDICATIVO:	*TI-DSY*
CANAL:	*51*
FRECUENCIA LIMITE DEL CANAL:	*692 MHz A 698 MHz*
ANCHO DE CANAL:	*6 MHz*
FRECUENCIA CENTRAL DE LA PORTADORA DE AUDIO:	*697,75 MHz*
FRECUENCIA CENTRAL DE LA PORTADORA DE VIDEO:	*693,25 MHz*
POTENCIA DE LA PORTADORA DE AUDIO:	*10 WATTS*
POTENCIA DE LA PORTADORA DE VIDEO:	*100 WATTS*
POLARIZACIÓN DE TRANSMISIÓN RADIAL:	*HORIZONTAL*
MODULACIÓN DE LA PORTADORA DE AUDIO:	*F.M.*
MODULACIÓN DE LA PORTADORA DE VIDEO:	*A.M.*
TIPO DE ANTENA:	*PANEL*
ALTURA APROXIMADA DE LA ANTENA:	*30 METROS*
UBICACIÓN DE LOS TRANSMISORES	*CIUDAD QUESADA, CERRO RON RON*
ÁREA APROXIMADA DE COBERTURA:	*25 KM*

Este Acuerdo Ejecutivo nunca fue formalizado mediante el Contrato de Concesión de Uso de Frecuencia Radioeléctrica.

De lo que se desprende que, la concesionaria efectivamente está habilitada para explotar el espectro con fines comerciales. No obstante, tal y como consta en el expediente administrativo N° GCP-703-2013 bajo custodia del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT, así como en los hechos probados de la presente Resolución administrativa, la concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. dejó de explotar el segmento de frecuencias vinculada al Canal físico 51 desde el año 2010, según consta en los criterios técnicos emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones en cuanto a las mediciones realizadas en sitio del uso del segmento de frecuencias otorgado. De ahí que se proceda con el análisis de los resultados de estos estudios, los cuales forman parte integral de la fundamentación de la presente Resolución administrativa.

B. Análisis de los Dictámenes Técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso d) y e) de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de fecha 05 de setiembre de 1996, modificada por la Ley N° 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 156 de fecha 13 de agosto de 2008 y en cumplimiento de la disposición N° 5.1.c.i del Informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 de la Contraloría General de la República, el Órgano Regulador rindió los criterios técnicos respecto del uso y explotación de la concesión otorgada a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA, los cuales serán analizados seguidamente.

1. **Oficio N° 1619-SUTEL-2010:**

Mediante este oficio, la SUTEL recomendó al Poder Ejecutivo, extinguir el derecho de uso y explotación del Canal físico 51 (rango de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz) otorgado mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, en los siguientes términos: *"(…) 59. Canal 51, se recomienda que el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1 a), Ley N° 8642, cancelar* [sic] *el derecho de uso y explotación del canal* [sic] *Acuerdo Ejecutivo N° 3094-2002 MSP, otorgado mediante concesión y el respectivo contrato* [sic]*. Lo anterior en vista de que el canal 51, que opera como transmisor principal (matriz), no se encuentra en operación".*

Lo anterior debido a que no está siendo utilizado el segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, en los términos y condiciones del Acuerdo Ejecutivo N° 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, en la zona rural, pero tiene concesión para Ciudad Quesada, Cerro Ron Ron, 25 km.

2. **Oficio N° 5173-SUTEL-DGC-2012:**

En fecha 14 de diciembre de 2012, la Dirección General de Calidad de la SUTEL emitió el dictamen técnico N° 5173-SUTEL-DGC-2012 "*Informe de ocupación de los canales de radiodifusión televisiva, bandas de 54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz y 614 MHz a 806 MHz*". Esto como parte de las atribuciones establecidas para dicho órgano técnico que, con fundamento en el artículo 10 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, le corresponde la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas. Según se detalló en la sección 3 del documento de marras, el objetivo de este fue *"(…) determinar la ocupación real del espectro radioeléctrico de los canales de radiodifusión televisiva en el territorio nacional, así como el cumplimiento de las concesiones, contratos de concesión de estos servicios y lo dispuestos en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, (…)".*

En cuanto al caso particular del Canal físico 51, la SUTEL indicó en dicho dictamen técnico lo siguiente: *"(…) se comprobó que dicho canal no se encuentra en utilización, por lo tanto, se debería iniciar el procedimiento administrativo para recuperar el canal 51 aplicando lo dispuesto por el artículo 22 de la LGT y permitir la disponibilidad formal de dicho espectro (…)".* Se reiteró, además, al Poder Ejecutivo proceder con la recuperación del segmento de frecuencias correspondiente al Canal físico 51.

En este sentido, el dictamen técnico emitido mediante el oficio N° 5173-SUTEL-DGC-2012, presenta la siguiente tabla donde se señalan los canales que no se encuentran en uso en el país:

"(…)

Tabla 10. Listado de canales y concesionarios que no se encuentran en uso en el país

Concesionario	***Canales***
Canal Cincuenta y Uno S.A.	*51*

(…)"

3. Oficio N° 4599-SUTEL-DGC-2013

Mediante el dictamen técnico emitido mediante el oficio N° 4599-SUTEL-DGC-2013 de fecha 13 de setiembre de 2013, fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013, adoptado en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada en fecha 18 de setiembre de 2013, la SUTEL reiteró la recomendación al Poder Ejecutivo de proceder con la apertura de un procedimiento administrativo correspondiente en contra de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. y proceder con la recuperación a favor del Estado, del Canal físico 51 (rango de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz).

4. **Oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014:**

Mediante oficio N° 8453-SUTEL-DGC-2014 de fecha 03 de diciembre de 2014, denominado *"Principales resultados del estudio de utilización de la banda destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHz)",* se remitió al Poder Ejecutivo el análisis técnico respecto al Canal físico 51 (frecuencias de 692 MHz a 698 MHz), dando como resultado que la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., no cumplió con las obligaciones de transmisión y por ende de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante (Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002).

5. **Oficio N° 08429-SUTEL-DGC-2015:**

Mediante oficio N° 08429-SUTEL-DGC-2015, de fecha 08 de diciembre de 2015, la SUTEL indicó al Poder Ejecutivo que realizó una *"(…) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (…)",* dando como resultado respecto al Canal físico 51 (segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz), que nuevamente para el año 2015, la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., no cumplió con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante.

6. **Oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016:**

A través la SUTEL emitió el dictamen técnico mediante el oficio N° 09206-SUTEL-DGC-2016 *"Principales resultados del estudio de utilización de la banda destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHz)"* de fecha 13 de diciembre de 2016.

Además, en el criterio técnico N° 09206-SUTEL-DGC-2016 se realizó una *"(…) comparación entre la obligación de la cobertura de los títulos habilitantes y la cobertura real obtenida de las mediciones de campo (…)",* dando como resultado

respecto al Canal físico 51 (segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz), que nuevamente para el año 2016, la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., no cumplió con las obligaciones de cobertura establecidas en el respectivo título habilitante.

7. Oficio N° 02024-SUTEL-DGC-2017:

Posteriormente, la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas en los artículos 59, 60 y 73 de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad de Servicios Públicos (ARESEP), mediante el oficio N° 2552-SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017, comunicó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones que el Consejo Directivo de la SUTEL aprobó el criterio técnico emitido mediante oficio N° 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada en fecha 15 de marzo de 2017, en el cual, reiteró la necesidad de apertura del procedimiento administrativo correspondiente en contra de a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA para la aplicación del artículo 22 inciso 1) sub incisos a y b) de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, en vista que la citada empresa concesionaria aparentemente no ha estado cumpliendo la cobertura establecida en el título habilitante para el Canal físico 51, respecto a los mínimos de intensidad de señal definidos en el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, y el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, durante los años 2014, 2015 y 2016, en la totalidad de los puntos evaluados por esa Superintendencia.

8. Oficio N° 09268-SUTEL-DGC-2020:

En atención a la solicitud efectuada por parte del Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio, efectuada mediante el oficio N° MICITT-ODPA-C51-OF-001-2020 de fecha 28 de agosto de 2020, en donde se le solicitó a la SUTEL la actualización de los criterios técnicos relacionados con el cumplimiento de

las obligaciones derivadas del Título Habilitante de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante el oficio N° 09891-SUTEL-SCS-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020, la Secretaría del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones comunicó al Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionador que, mediante el Acuerdo N° 020-078-2020, adoptado por el Consejo Directivo del Órgano Regulador en la sesión ordinaria N° 076-2020 celebrada en fecha 02 de noviembre de 2020, se aprobó el oficio N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020. En dicho dictamen técnico se determinó lo siguiente:

> *"(…) De seguido se presentan los resultados de las mediciones y el porcentaje de cobertura para los últimos tres (3) años*:
>
> ***Tabla 2.*** *Porcentaje de cobertura por año según mediciones de espectro radioeléctrico y conforme al título habilitante*.

Canal	***Porcentaje de cumplimiento (%)***		
	2017	***2018***	***2019***
51 (692 MHz a 698 MHz)	*0*	*20*	*0*

> *Con respecto al uso del canal 51 por parte de la empresa Canal Cincuenta y Uno S.A. con cédula jurídica 3-101-236933, de las mediciones realizadas por esta Superintendencia no se identificó el uso del recurso para los periodos 2017 y 2019 dentro del área de cobertura asignada, y en el año 2018, únicamente en 2 de los sitios evaluados (20% del total) presentó niveles superiores al umbral de intensidad de campo mínima requerida, sin embargo para el año 2019 en estos sitios ya no se identificó el uso del canal. El en anexo 1 del presente oficio se encuentra el detalle de los resultados obtenidos.*
>
> *Al respecto, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 8642, que establece como una de las causales para la resolución del contrato de concesión la no utilización de las frecuencias por parte del concesionario, por lo que se recomienda someter a valoración del MICITT proceder como en derecho corresponda sobre este segmento de frecuencias.*

2. Medición de cobertura para el Canal 51 en el año 2020 (segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz)

En atención al requerimiento de medición de las frecuencias otorgadas a la empresa Canal Cincuenta y Uno S.A., y con la finalidad de contar con los resultados actualizados de la cobertura del canal 51 (segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz de la empresa Canal Cincuenta y Uno S.A. para el servicio de radiodifusión televisiva, se efectuaron mediciones con la estación móvil de monitoreo del Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo de Espectro (SNGME) en varios puntos dentro del área de cobertura de dicho canal según se detalla en la imagen 1 y la tabla 3.

(…)
Para la obtención de los niveles de intensidad de campo eléctrico se cumplió con el procedimiento aprobado mediante la resolución RCS-199-2012 'Protocolo general de medición de señales electromagnéticas' publicado el Alcance Digital N° 104 de La Gaceta N° 146 del 30 de julio del 2012, así como con el procedimiento DGC-CA-PROC-15, 'Mediciones de cobertura de espectro utilizando las unidades fijas y móviles del SNGME', con lo que se asegura el cumplimiento de los estándares definidos por Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) pertinentes a las mediciones de intensidad de campo eléctrico, específicamente las recomendaciones UIT-R SM.443-4, 'Mediciones de anchura de banda en las estaciones de comprobación técnica de las emisiones' y UIT-R SM.378-7, 'Mediciones de la intensidad de campo en las estaciones de comprobación técnica' (…).

En relación con el gráfico anterior, se puede observar que el canal 51 no presentó cobertura en las mediciones realizadas en los 8 (ocho) sitios dentro de la zona de cobertura otorgada, es decir, no se identificaron transmisiones en el segmento de frecuencias comprendido entre 692 MHz a 698 MHz. Por lo anterior, del resultado de las mediciones realizadas con la estación móvil del SNGME se concluye que el uso del canal 51 en el periodo 2020 es del 0%, lo que implica que no existen transmisiones de la señal del canal 51 otorgado a la empresa Canal Cincuenta y Uno S.A., lo cual refuerza la recomendación señalada en la sección anterior, respecto someter a valoración del MICITT proceder como en derecho corresponda sobre este segmento de frecuencias. (…)"

A partir de esta actualización de las mediciones efectuada por la SUTEL correspondientes a los años 2017, 2019 y 2020, dicho Órgano Regulador concluyó que el Canal físico 51 no estuvo operando, esto es, demostró que mantuvo su presunto incumplimiento en cuanto a sus obligaciones legales y reglamentarias de utilizar el segmento de espectro radioeléctrico durante los años indicados.

C. INFORMES TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO; DE LA DIRECCIÓN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES Y DEL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO SANCIONATORIO

El Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico y la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones, ambos del Viceministerio de Telecomunicaciones, en ejercicio de las funciones asignadas en los artículos 9 y 21 y 23, respectivamente, del Decreto Ejecutivo N° 38166-MICITT, "Reglamento de organización de las áreas que dependen de Viceministro (a) de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones", analizó las recomendaciones técnicas emitidas por la SUTEL y elaboraron los siguientes criterios técnicos. Asimismo, el Órgano Director del procedimiento administrativo en cumplimiento del mandato impuesto por el Poder Ejecutivo en la Resolución N° 004-2020-R-TEL-MICITT de las 14:00 horas de fecha 29 de abril de 2020, emitió el informe de recomendación sobre los hallazgos del análisis del expediente administrativo N° GNP-703-2013 y el procedimiento administrativo correspondiente. Los tres informes son analizados en este acápite en lo que interesa:

1. INFORME N° MICITT-GAER-INF-057-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO:

En el Informe Técnico N° MICITT-GAER-INF-057-2019 de fecha 03 de abril de 2019, llamado "*Análisis técnico sobre condiciones de cobertura del Canal 51 de televisión por parte del operador Canal Cincuenta y Uno, S.A.*", concluyó lo siguiente:

"(…)

7. *Conclusiones*

Dado el análisis realizado en el presente informe técnico, el Departamento de Administración de [sic] *Espectro Radioeléctrico concluye lo siguiente:*

1. *El Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP del 2 de octubre de 2002, mediante el cual se otorga el segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, correspondiente al canal físico 51 de televisión a la empresa Canal Cincuenta y Uno, S.A., habilita un transmisor ubicado en Ciudad Quesada, en el Cerro Ron Ron, en el cantón de San Carlos, de la provincia de Alajuela, así como una obligación de cobertura de 25 km.*

2. *Los siguientes documentos constituyen la normativa técnica elaborada por la SUTEL, que establece cómo debe realizarse un proceso de determinación de ocupación de espectro, mismos que contemplan lo señalado por UIT respecto a los procesos de medición de intensidad de señal y anchos de banda:*
    - *Resolución SUTEL-RCS-199-2012 'Protocolo General de medición de Señales Electromagnéticas',*
    - *DGC-CA-PROC-12 'Procedimiento Ordinario para Mediciones de Campo',*
    - *3615-SUTEL-DGC-2015 'Procedimiento complementario de medición de cobertura de las bandas de AM, FM y televisión; y de ocupación de las bandas de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz y 3,5 GHz'; y*
    - *DGC-CA-PROC-15 'Mediciones de cobertura de espectro utilizando las unidades fijas y móviles del SNGME'.*

3. *Los siguientes oficios contemplan los resultados y el criterio técnico emitido por la SUTEL al haber realizado procesos de medición de ocupación de espectro en los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:*
    - *01619-SUTEL-2010,*
    - *05173-SUTEL-DGC-2012,*
    - *04599-SUTEL-DGC-2013,*
    - *08453-SUTEL-DGC-2014,*
    - *08429-SUTEL-DGC-2015,*
    - *09206-SUTEL-DGC-2016 y*
    - *02024-SUTEL-DGC-2017.*

4. *El informe técnico, N° MICITT-GAER-INF-046-2014, de 2 de mayo de 2014 del Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico, analizó las recomendaciones de la SUTEL sobre la ocupación del espectro radioeléctrico del canal 51 y el cumplimiento de las obligaciones de*

cobertura del concesionario, y recomienda proceder como corresponda jurídicamente tomando en consideración un aparente incumplimiento de la cobertura requerida, así como evidenciar la no suscripción del respectivo contrato de concesión según lo dispuesto por el transitorio II del ya derogado reglamento de radiocomunicaciones [sic]*, Decreto N° 31608-G y sus reformas.*

5. *De forma general, y según lo analizado en el presente informe técnico, los resultados contenidos en dichos oficios en cuanto a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de cobertura a partir de las mediciones de intensidad de campo realizadas por la SUTEL para cada año respectivamente y al momento de cada medición, para el concesionario del canal 51 de televisión, parecen resultar ser consistentes, y por ende se concluye por parte de este Departamento que existen técnicamente indicios razonables de posible incumplimiento por parte de Canal Cincuenta y Uno, S.A. de las obligaciones detalladas en el título habilitante para el canal 51.*

6. *Según el derogado Decreto Ejecutivo N° 27554-G Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, del 11 de enero de 1999, y el Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET, del 29 de mayo de 2009 y sus reformas, se concluye que el uso del segmento de frecuencias (Canal 51, segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz) que se indica en el título habilitante para la empresa Canal Cincuenta y Uno, S.A., se encuentra alineado técnicamente a lo dispuesto tanto por la normativa vigente como aquella que se encontraba en vigor en el momento de la emisión del Acuerdo Ejecutivo respectivo.*

7. *Del análisis de los oficios mencionados en la conclusión 3 anterior, se concluye que los procedimientos o protocolos de medición han variado y evolucionado históricamente desde que se emitió el primer informe en el año 2010. En este sentido, se han dado cambios en torno a los detalles y rigurosidad técnica del procedimiento aplicado, y que, al contemplar dichos protocolos la normativa técnica emanada por parte de la UIT, se asegura la precisión en las mediciones obtenidas y en la recolección de la información producto de dichas mediciones, por lo que es posible técnicamente reiterar por parte de este Departamento la existencia de los indicios técnicos razonables de posible incumplimiento señalados en la conclusión anterior, para las mediciones específicas reportadas en dichos criterios técnicos".*

Con vista en dichas conclusiones, el Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico dependencia del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT emitió la siguiente recomendación:

> *"(…) 1. Se recomienda a la Dirección de Concesiones y Normas de* [sic] *Telecomunicaciones, del Viceministerio de Telecomunicaciones, valorar el presente criterio técnico, para proceder según corresponda desde la perspectiva legal, en virtud de lo señalado por la Superintendencia de Telecomunicaciones [en] los oficios N.º 01619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre del 2010, Nº 05173-SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre del 2012, N.º 04599-SUTEL-DGC-2013 del 13 de setiembre del 2013, Nº 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre del 2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre del 2015, Nº 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016 y N° 02024-SUTEL-DGC-2017 del 8 de marzo del 2017, siendo que no existen razones de orden público o interés nacional que sustenten apartarse de la recomendación de la SUTEL, específicamente sobre la posible existencia de indicios técnicos de incumplimiento de las obligaciones de cobertura establecidas en el título habilitante del canal 51 de televisión, para el concesionario Canal Cincuenta y Uno, S.A., al momento de llevar a cabo las mediciones reportadas en los citados criterios técnicos".*

Tomando en cuenta lo referido por la SUTEL en los dictámenes técnicos citados, así como en el informe técnico del DAER, la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones emitió el Informe Técnico jurídico N° MICITT-DCNT-INF-027-2020 de fecha 30 de marzo de 2020, titulado "*Análisis jurídico sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Títulos Habilitantes de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A.*", en los términos en que a continuación se exponen.

2. INFORME TÉCNICO JURÍDICO N° MICITT-DCNT-INF-027-2020 DE LA DIRECCIÓN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES:

Según se indicó, tomando como antecedentes los dictámenes emitidos por la SUTEL, así como en el informe técnico del Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico, la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT, en cumplimiento de los principios

de legalidad, uso eficiente y asignación del espectro radioeléctrico, así como lo dispuesto también en los artículos 10 y 16 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, emitió su criterio técnico y concluyó lo siguiente:

"(…)

1. *La Administración Pública, y en este caso el MICITT, está sujeta a una serie de principios sectoriales que, deben ser orientadores de la conducta administrativa, cuyo objetivo es el de asegurar la continuidad del servicio en los términos de calidad establecidos en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las condiciones particulares definidas en los títulos habilitantes de concesión de los prestadores de servicio.*

2. *La preservación de dichos principios rectores se constituye en una obligación jurídica indeclinable de las autoridades sectoriales, a fin de establecer las garantías necesarias para que la población pueda continuar disfrutando oportunamente del acceso a los servicios de telecomunicaciones.*

3. *El MICITT como Ente Rector sectorial sujeto al principio de legalidad y a las normas que contienen de manera positiva los principios supra citados, debe considerar en su conducta administrativa el contenido de estos axiomas, sin perjuicio de su establecimiento como ley formal de obligatorio acatamiento.*

4. *De conformidad con las disposiciones del artículo 4 de la referida Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones dicho cuerpo legal es de orden público, y de aplicación obligatoria sobre cualquiera otra ley, reglamentos, costumbres, practicas* [sic]*, usos o estipulaciones contractuales en contrario.*

5. *El artículo 8 incisos b) y c) de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones define dentro de los objetivos de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente.*

6. *Por disposición del artículo 29 la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, determina que el aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad privada de interés públicoQue* [sic] *la SUTEL es el órgano regulador establecido por ley para recomendar técnicamente al Poder Ejecutivo las solicitudes que se presenten para la adjudicación, prórroga, extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de frecuencias.*

7. *Que conforme lo dispuso la Procuraduría General de la República por mandato legal, el Poder Ejecutivo debe necesariamente contar con el criterio técnico de SUTEL, a efectos de poder tomar la decisión de otorgar una concesión y, en su caso, para extinguirla, criterio técnico que puede ser considerado una formalidad sustancial, cuya inexistencia es susceptible de viciar el procedimiento administrativo.*

8. *Que, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, corresponde a la Sutel administrar, controlar y comprobar el uso eficiente del espectro, de manera que los recursos escasos, es decir las frecuencias, sean utilizadas eficiente y transparentemente.*

9. *Que, en virtud del principio de paralelismo de las competencias, corresponde al Poder Ejecutivo resolver y extinguir las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones.*

10. *Que compete al Poder Ejecutivo decidir la apertura del procedimiento administrativo para tales fines, y en su caso, además, nombrar el órgano director encargado de instruir el procedimiento. Asimismo, le corresponde adoptar la decisión final del procedimiento.*

11. *Que, para efectos de resolver la concesión, el Poder Ejecutivo debe sujetarse al procedimiento ordinario establecido en el artículo 308 y siguientes de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública. Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el artículo 229 de esa Ley y del artículo 4 de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones.*

12. *Que de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, otorgado a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, dicho concesionario debe cancelar mediante entero a favor del Gobierno, el impuesto establecido en el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 1758, Ley de Radio* [sic, léase *(Servicios Inalámbricos)*]*, resultando que el incumplimiento de esta obligación pecuniaria deviene en una causal para extinguir el título de concesión otorgado, así como para proceder con la resolución del contrato de concesión suscrito con la Administración Concedente.*

13. *Que nuestro ordenamiento sectorial no define alguna causal que determine la extinción de las concesiones en razón de la morosidad en el pago de las obligaciones con la seguridad social de forma taxativa, sin embargo de conformidad con las disposiciones del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encontrarse en estado de 'Patrono Moroso' constituye una causal de incumplimiento contractual, en relación con los títulos habilitantes de concesión otorgados por la Administración Pública.*

14. *Como parte de sus competencias propias, corresponde a SUTEL vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, velando por el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones y, controlando el uso del espectro radioeléctrico. En general, supervisando, verificando, inspeccionando y vigilando los operadores y proveedores, como así lo dejó en manifiesto el criterio vinculante de la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-306* [sic] *del 11 de noviembre de 2015, mediante el cual brinda su criterio vinculante en cuanto a las funciones que corresponden al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones dentro del procedimiento administrativo que debe instaurarse para la revocación y extinción de concesiones, conforme lo establecido por la Ley General de Telecomunicaciones.*

15. *El ejercicio de los poderes legalmente atribuidos la Superintendencia de Telecomunicaciones puede revelar circunstancias irregulares o incumplimientos, cuyo conocimiento por la Administración activa podría motivar el inicio de un procedimiento administrativo.*

16. *Como formalidad sustancial del procedimiento de resolución, la Superintendencia de Telecomunicaciones debe rendir un criterio técnico, no vinculante al Poder Ejecutivo, que en este caso particular se ve manifestado en los informes: N° 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre del 2010* [sic]*, N° 5173-SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre del 2012* [sic]*, el informe N° 4599-SUTEL-DGC-2013 de fecha 13 de setiembre de 2013, aprobado mediante el oficio Nº 4732-SUTEL-SCS-2013 que fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013, adoptando en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre del 2013, Nº 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre del 2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre del 2015, Nº 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016, y el informe N° 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, aprobado mediante el oficio Nº 2552-SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017 el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptando en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada el 15 de marzo de 2017.*

17. *Que los resultados del estudio de utilización de la banda destinada para televisión donde se denota la no operación del canales 51 (692 MHz a 698 MHz), lo anterior sustenta la existencia de elementos que justifican la apertura de un Procedimiento Administrativo para averiguar la verdad real de los*

hechos investigados por presunto desacato a lo estipulado en el Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, mediante el cual se otorgó en concesión el Canal 51 en el rango de frecuencias 692 MHz a 698 MHz, a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, fundamentado en los informes: N° 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre del 2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre del 2012, el informe N° 4599-SUTEL-DGC-2013 de fecha 13 de setiembre de 2013, aprobado mediante el oficio Nº 4732-SUTEL-SCS-2013 que fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013, adoptando en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre del 2013, en los informes Nº 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre del 2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre del 2015, Nº 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016 y N° 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, aprobado mediante el oficio Nº 2552-SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017 el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptando en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada el 15 de marzo de 2017, que justifican la necesidad de Apertura del Procedimiento Administrativo.

18. *Que, una vez analizados los estudios técnicos emanados por la SUTEL, se logró determinar que existen suficientes elementos que sustentan la apertura de un Procedimiento Administrativo para averiguar la verdad real de los hechos. (…)"*

De manera que, con base en las conclusiones expuestas, la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones recomendó:

"(…) 5. RECOMENDACIÓN:

En atención y congruencia con las conclusiones expuestas, se recomienda:

1) *Al Viceministro de Telecomunicaciones, recomendar al Poder Ejecutivo, para que proceda con la apertura del procedimiento administrativo procecente* [sic] *para la averiguación de la verdad real de los hechos investigados y con el respetivo nombramiento de un Órgano Director de Procedimiento Administrativo, para investigar el presunto incumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico, los deberes jurídicos dispuestos mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, lo relativo al posible incumplimiento en el pago del impuesto establecido en el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 1758, Ley de Radio* [sic, léase *(Servicios Inalámbricos)*]*, así como del incumplimiento de las disposiciones*

contenidas en el artículo 74 de la Ley Nº 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y de los umbrales de cumplimiento de cobertura y transmisión del Canal físico 51 (692 MHz a 698 MHz) que se encuentran concesionados a nombre de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A con cédula jurídica 3-101-236933, lo anterior con fundamento en los informes siguientes [sic] *informes de la SUTEL: N° 1619-SUTEL-2010 de fecha 08 de setiembre del 2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre del 2012, N° 4599-SUTEL-DGC-2013 de fecha 13 de setiembre de 2013, aprobado mediante el oficio Nº 4732-SUTEL-SCS-2013 que fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013, adoptando en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre del 2013, Nº 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre del 2014, Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre del 2015, Nº 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016 y el informe N° 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, aprobado mediante el oficio Nº 2552-SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017 el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptando en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada el 15 de marzo de 2017; así como en el informe técnico N° MICITT-DERRT-DAER-INF-057-2019, de fecha 03 de abril de 2019 y el presente informe jurídico".*

3. **INFORME TÉCNICO N° ODPA-INF-CANAL51-001-2021 DEL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO:**

De conformidad con la investigación realizada por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo, para encontrar la verdad real de los hechos éste comprobó los hechos imputados en el traslado de cargos, de la siguiente manera:

"(…) 1. Que con fundamento en las mediciones realizadas por la SUTEL por medio de los informes N° 1619-SUTEL-2010 con fecha 08 de setiembre de 2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre de 2012, 4549-SUTEL-DGC-2013 del 13 de setiembre de 2013, aprobado mediante el oficio N° 4732-SUTEL-SCS-2013 que fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013 adoptado en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre de 2013, N° 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre de 2014, N° 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre de 2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016, el informe N° 02024-SUTEL-DGC-2017 del 08 de marzo de 2017, aprobado mediante el oficio N° 2552- SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017 el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL,

mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada el 15 de marzo de 2017, el oficio N° 09891-SUTEL-SCS-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020, mediante el cual la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico emitido mediante oficio N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL N° 020-076-2020, adoptado en la sesión ordinaria N° 076-2020, celebrada el 02 de noviembre de 2020, se determinó contundentemente el registro de 0% de cobertura del Canal físico 51, frecuencias 692 MHz a 698 MHz, de parte de la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

2. Según los informes N° 1619-SUTEL-2010 con fecha 08 de setiembre de 2010, N° 5173- SUTEL-DGC-2012 del 14 de diciembre de 2012, 4549-SUTEL-DGC-2013 del 13 de setiembre de 2013, aprobado mediante el oficio N° 4732-SUTEL-SCS-2013 que fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013 adoptado en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre de 2013, N° 08453-SUTEL-DGC-2014 del 03 de diciembre de 2014, N° 08429-SUTEL-DGC-2015 del 08 de diciembre de 2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016 del 13 de diciembre de 2016, el informe N° 02024-SUTEL-DGC-2017 del 08 de marzo de 2017, aprobado mediante el oficio N° 2552-SUTEL-SCS-2017 de fecha 23 de marzo de 2017 el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada el 15 de marzo de 2017, el oficio N° 09891-SUTEL-SCS-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020, mediante el cual la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico emitido mediante oficio N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL N° 020-076-2020, adoptado en la sesión ordinaria N° 076-2020, celebrada el 02 de noviembre de 2020, donde constan las mediciones realizadas por la SUTEL, ***se tiene por comprobado que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, no ha cumplido con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, ya que de las mediciones realizadas por la SUTEL, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo logró acreditar que el porcentaje de ocupación del segmento de frecuencias comprendido de 692 MHz a 698 MHz es del 0%, lo que implica que no existen transmisiones de la señal del Canal físico 51.***

3. ***No consta dentro del expediente administrativo que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA haya hecho uso y explotación del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz (Canal físico 51), ni que haya realizado transmisiones entre los años 2010 a la fecha de emisión del presente informe de recomendación.***

4. ***No consta dentro del expediente administrativo que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA haya presentado justificación que compruebe caso fortuito o fuerza mayor para la no transmisión y uso de la***

concesión otorgada, por ende, se tiene por acreditado el incumplimiento a las condiciones del título habilitante otorgado, el contrato de concesión suscrito y el marco normativo aplicable.
5. Que mediante el memorándum N° MICITT-DERRT-DAER-MEMO-052-2019, de fecha 29 de marzo de 2019, se informó que el último pago que consta a nombre del concesionario 'CANAL CINCUENTA Y UNO S.A.', correspondiente a la frecuencia de Canal físico 51 (692 MHz a 698 MHz), fue realizado mediante el entero RS-078-12, efectuado por el concesionario y correspondiente al año 2012, por lo que según los registros de ese Departamento, la empresa citada mantiene un deuda por el impuesto de radiodifusión de ₡840.000.00 correspondiente a los años de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 6. (…)" (El resaltado no corresponde al original).

A partir de lo anterior recomendó a este Órgano Decisor lo siguiente:

"PRIMERO: REVOCAR LA CONCESIÓN PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DEL RANGO DE FRECUENCIAS 692 MHz a 698 MHz (CANAL 51 FÍSICO), otorgado a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA mediante el ACUERDO EJECUTIVO Nº 3094-2002-MSP [sic] *de fecha 02 de octubre de 2002, en vista del incumplimiento de la empresa con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias y la morosidad por el no pago de los impuestos de radiodifusión de los periodos 2010 a 2021, con fundamento en los artículos 3, 22 inciso b), y 99 de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 1758, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos).*

SEGUNDO: Advertir a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA, que la firmeza de la presente resolución de revocación no provoca la extinción de las deudas pendientes de pago del impuesto anual de radiodifusión, periodos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 por lo que se mantiene pendiente su obligación de pago. Asimismo, no la exime de las eventuales obligaciones de cumplir con los adeudos pendientes que ha [sic] *futuro se adviertan por parte de las autoridades competentes respecto al pago de montos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente, procedimientos que, en el caso de aplicar, resultan independientes de la presente gestión.*

TERCERO: Informar a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA, sobre su derecho a recurrir la presente Resolución, mediante el recurso de reposición el cual deberá ser presentado ante el Poder Ejecutivo en el plazo de [sic] *máximo* [sic] *tres (3) días hábiles contado a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente Resolución, debiendo presentar su*

escrito en el Despacho Ministerial de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, sito en San José, Zapote, 250 metros oeste de la entrada principal de Casa Presidencial, Edificio Mira, primer piso. Lo anterior de conformidad con el artículo 346 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública.

CUARTO: Notificar el presente Acuerdo Ejecutivo a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, por el medio señalado dentro del expediente administrativo y que este mismo sea notificado a la Superintendencia de Telecomunicaciones con el fin de ser inscrito en el Registro Nacional de Telecomunicaciones.

QUINTO: Rige a partir del día hábil siguiente a su notificación".

D. DE LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA.

Mediante el Auto de Traslado de Cargos N° MICITT-ODPA-CANAL51-AUTO-001-2020, de las 08:00 horas de fecha 25 de noviembre del año 2020, así como de la Resolución N° MICITT-ODPA-CANAL51-RES-001-2020 de las 15:45 horas de fecha 03 de diciembre de 2020, notificada bajo los procedimientos legalmente dispuestos, se citó a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA a la Comparecencia Oral y Privada, de conformidad con los artículos 218 y 309 de la LGAP, teniendo como finalidad la evacuación de las pruebas para encontrar la verdad real respecto a los hechos investigados en contra de ésta.

Es relevante señalar, que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA no se presentó a la Audiencia Oral y Privada citada, por lo que el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio dio por cerrada dicha sesión a las 09 horas 48 minutos del día 16 de febrero de 2021. A la fecha de la emisión de la presente Resolución administrativa no consta en el expediente administrativo respectivo diligencia alguna en donde la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, donde justifique su ausencia ante dicha comparecencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En vista de lo anterior, y con el objeto de determinar la verdad real de los hechos sobre los presuntos incumplimientos de obligaciones y condiciones del uso y explotación de la concesión del Canal físico 51 (rango de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz), sobre las obligaciones de cumplimiento de los umbrales de intensidad de cobertura y mínimos de horas de transmisión, del pago del impuesto anual de radiodifusión, del pago de la Caja Costarricense del Seguro Social y de los impuestos correspondientes al Ministerio de Hacienda, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, se avocó al análisis de la prueba documental recabada en el expediente administrativo N° GNP-703-2013, para realizar su recomendación a este Órgano Decisor, cuyos resultados son retomados por el Poder Ejecutivo en la presente Resolución administrativa en los siguientes apartados.

E. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE USO Y EXPLOTACIÓN DE UNA CONCESIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

Tal y como se apuntó en líneas anteriores, el objeto de la concesión conferida por este Poder Ejecutivo mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, es el uso y explotación de espectro radioeléctrico, el cual constituye un bien demanial, y, por ende, sujeto a las condiciones constitucionales y legalmente establecidas por el acervo jurídico vigente.

El principal efecto del otorgamiento de una concesión es precisamente su fuerza obligatoria, la cual *"(…) se traduce en el imperativo de que las partes den cumplimiento, de buena fe, a las obligaciones surgidas del acuerdo de voluntades, así como a aquellas que emanan de la naturaleza de las obligaciones pactadas o que por ley pertenecen a ellas".*[2] De manera que, de la emisión de estos actos administrativos, surge el deber, tanto para la Administración como para el concesionario, de cumplir de buena fe con todas y cada una de las obligaciones emanadas directamente del acto administrativo de otorgamiento de la concesión, en este caso del Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP citado y de aquellas que surgen de su naturaleza misma.

[2] RODRÍGUEZ (Libardo). "Los efectos del incumplimiento de los contratos administrativos", Revista de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, N° 5 (enero-junio 2009), p. 344.

En este sentido, y con el fin de velar porque se cumplan dichas obligaciones, es que la Administración debe de cumplir con el principio de control de los procedimientos, el cual es uno de los principios generales de la contratación administrativa que se encuentran regulados en la Sección Segunda del Capítulo I de la Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa y desarrollados en la jurisprudencia costarricense.

El "***Principio de control de los procedimientos"*** postula que todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. De manera tal que las partes deben cumplir con las condiciones pactadas en la concesión tomando en cuenta lo dispuesto en la normativa de contratación administrativa, así como sus principios generales.[3]

De conformidad con esta función, la Administración debe vigilar y verificar que, durante toda la vigencia de la concesión, la persona física o jurídica concesionaria cumpla con sus obligaciones adquiridas. Esto quiere decir que, ante un eventual incumplimiento o anormalidad en la ejecución de la concesión por parte del concesionario, la Administración deberá tomar inmediatamente las medidas pertinentes en aras de que el bien común no se vea perjudicado. Esto es así porque la ejecución de la concesión, ejecutada en tiempo y forma, se traduce en la tutela efectiva del interés público.

Ahora bien, el incumplimiento de un concesionario en cuanto a las obligaciones convenidas con la Administración Pública acarrea consecuencias jurídicas que podrían afectar o revocar el título habilitante otorgado. El incumplimiento contractual se puede definir de la siguiente manera:

[3] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 998-1999, 16 de febrero de 1998, 11:30 horas.

> *"Hay incumplimiento de las obligaciones jurídicas cuando el deudor no cumple lo debido ya sea porque no previó adecuadamente su capacidad de cumplimiento, es decir creyó en un inicio poder obligarse y poder cumplir con dichas obligaciones, pero luego por diversas circunstancias que le son imputables no puede hacerlo (negligencia). Es consecuencia de la mala fe o la negligencia del obligado y por ende no produce la satisfacción del interés del acreedor que debió haber quedado satisfecho con el cumplimiento de la prestación".*[4]

Asimismo, el Tribunal Contencioso Administrativo señala:

> *"En síntesis, el objeto del contrato está constituido por la obligación impuesta contractualmente, que implica una prestación, que constituye siempre una conducta de dar, hacer no hacer algo. Ahora bien, si el objeto del contrato es siempre la obligación de una prestación debida, entonces, se cumple con el objeto del contrato, realizando la conducta o comportamiento obligado. La idea contraria, es decir, la falta de ejecución de la prestación debida; implica el incumplimiento del objeto del contrato".*[5]

En similar sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conceptualiza el incumplimiento contractual de la siguiente forma:

> *"(…) el incumplimiento contractual significa no ejecutar determinada prestación en los términos originalmente pactados. El incumplimiento, específicamente en cuanto a contratos administrativos se refiere, está referido (sic) a un modo anormal de extinción de tales convenios, y puede ser imputable tanto a la Administración como al contratista".*[6]

Tomando estos conceptos, la omisión de la obligación de prestación *"(…) hace referencia al caso en el cual no se consigue el objetivo de la obligación porque (…) no se recibe prestación alguna, o mejor, absolutamente nada en relación con la obligación pactada. Se trata de la inejecución absoluta de la obligación".*[7]

---

[4] JIMÉNEZ (Jorge). "Caso fortuito y fuerza mayor diferencia conceptual", Revista de Ciencias Jurídicas, N° 123, (setiembre-diciembre 2010), p. 79.

[5] Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Resolución N° 83, de fecha 07 de octubre de 2014, 11 horas.

[6] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 1205, de 15 de marzo de 1996, 9 horas.

[7] RODRÍGUEZ, op cit, p. 178.

En este sentido es relevante señalar, que, si bien es cierto, en el caso de mérito no se suscribió un contrato de concesión, lo cierto es que, las obligaciones contractuales de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA devienen del otorgamiento de la concesión para el uso y explotación del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz conferida mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002.

De esta manera, en virtud del incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria, en la ejecución de sus obligaciones, ésta se expone a sanciones o la resolución de su concesión y por ende la revocación de su título habilitante, según sea la magnitud de sus incumplimientos de acuerdo con la norma transgredida.

La Administración Pública posee prorrogativas y una de ellas es la facultad de resolver un contrato o una concesión unilateralmente, potestad administrativa que existe, aunque no se encuentre establecido en el acto administrativo de concesión. Esto implica que, en la contratación administrativa, la Administración Pública puede extinguir ella misma una relación contractual por razones de incumplimiento del concesionario, siempre que la Administración pueda imputarle a este último su incumplimiento en lo pactado, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, de conformidad con el procedimiento regulado en la Ley General de la Administración Pública, mediante el cual se valora y constata la procedencia de la resolución de la concesión respectiva.

La Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su reglamento regulan el incumplimiento contractual sin definirlo conceptualmente, en este sentido el artículo 11 de la LCA establece a la Administración el Derecho de rescisión y resolución unilateral, de la siguiente manera:

> *“Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral. Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso*

fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso.
(…)"

En este mismo orden de ideas el artículo 204 del Decreto Ejecutivo Nº 33411-H, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula la resolución del contrato por incumplimientos del concesionario, al señalar:

> *"Artículo 204. Resolución contractual. La Administración, podrá resolver unilateralmente los contratos por motivo de incumplimiento imputable al contratista. (…)"*

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha estimado que la resolución del contrato administrativo por incumplimiento es:

> *"(…) el modo de disolución anormal de un contrato en razón de una causa sobreviniente, que corresponde al incumplimiento de una de las partes y que extingue retroactivamente el contrato, resolución que puede ser declarada exoficio por la Administración cuando es el contratista el que incumple con sus obligaciones y sin perjuicio, en ambos casos, del control de legalidad que deberá ejercer el juez competente".*[8]

En este sentido la resolución contractual por incumplimiento tiene como presupuesto un comportamiento del concesionario que le es imputable, rompiendo la composición de intereses de que el contrato es expresión.

Ahora bien, pueden darse eximentes o razones que justifiquen el incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria, por eso el ordenamiento jurídico prevé dichas situaciones siempre y cuando el afectado haga de conocimiento a la Administración de dicha situación.

Tomando en cuenta esto, y dado que el ordenamiento jurídico costarricense establece que uno de los requisitos para que proceda la resolución contractual por incumplimiento es que el concesionario sea culpable, resulta indispensable considerar si existe alguna causa que lo exonere de culpabilidad.

---

[8] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 1205, de fecha 15 de marzo de 1996, 9 horas.

Dado el caso de que no existe ningún eximente que justifique el incumplimiento por parte de la empresa concesionaria, es de proceder por parte de la Administración la resolución del contrato y por ende la revocación de la concesión otorgada, llevando a cabo el procedimiento respectivo y cumpliendo a cabalidad con el principio del debido proceso, tal y como lo señala el Tribunal Contencioso Administrativo:

> *"IV.- DE LA POTESTAD MODIFICADORA Y EXTINTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATOS SUSCRITOS POR ELLA. (…) Sin embargo, estas potestades de variación, modificación, rescisión o extinción del contrato administrativo que posee la administración tienen límites, los que se encuentran consagrados en la legislación vigente de cada ordenamiento. Así, uno de tales límites a esa potestad, lo constituye el procedimiento administrativo que debe llevar a cabo la Administración, previo al dictado del acto final que modificará o extinguirá la relación entre las partes ya constituida; y con él se garantiza al administrado el cumplimiento del principio del debido proceso, y así los derechos derivados de él, con el fin de que el acto que lo culmina no sea nulo ni vulnere tal derecho. Dentro de ellos se encuentran: el conocimiento del traslado de los cargos, los derechos de audiencia y defensa, y el de doble instancia entre otros".*[9]

De forma similar, dicho Tribunal ha recalcado la importancia del debido proceso en el procedimiento de resolución contractual, basándose en lo ya dicho por la Sala Constitucional:

> *"En esta inteligencia al procedimiento deben incorporarse las diversas manifestaciones y garantías del principio constitucional del debido proceso, dispuesto por el canon 39 de la Carta Magna. El tema ya ha sido de vasto análisis por parte de la Sala Constitucional, quien en su amplia jurisprudencia sobre este particular ha sostenido que deben converger en la especie, una serie de garantías elementales, que permitan al particular ejercer su derecho de defensa y que ofrezcan una certeza de que la decisión que en definitiva adopte la entidad pública, es el resultado de una ponderación objetiva del caso, y no una voluntad antojadiza y arbitraria (entre otras, resoluciones, 243-98, 3929-96, 632-99 y 2376-*

[9] Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Resolución N° 19, de fecha 22 de febrero de 2006, 15 horas 40 minutos.

98). Dentro de estos elementos mínimos indicados, se impone el derecho de defensa, como eje central del debido proceso y en virtud del cual, acude a la parte pasiva del procedimiento, el derecho de asistencia letrada, acceso irrestricto al expediente administrativo y sus piezas, incluidas las pruebas, oportunidad razonable y proporcional de formular los alegatos, derecho a una resolución motivada y el derecho de impugnación de las resoluciones cuando la ley así lo disponga".[10]

El objeto del procedimiento de resolución contractual consiste en determinar que los hechos en virtud de los cuales se instruye realmente pueden ser imputados al supuesto responsable y, por ende, imponerle las consecuencias jurídicas que de antemano dispone el ordenamiento jurídico.

Señalado todo lo anterior, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo analizó los incumplimientos cometidos por la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, los cuales se referencian a continuación.

F. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA.

Al realizarse el análisis técnico de los resultados provistos por la SUTEL, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo identificó que los resultados de cobertura fueron recabados por medio de procedimientos previamente definidos y estandarizados, siguiendo las recomendaciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Por esta razón, no encontró objeción técnica o legal en cuanto al contenido y alcance contenidos en éstos, y, por ende, recomendó a este Órgano Decisor a proceder con la revocación del título habilitante conferido a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA.

Al respecto, se debe considerar que el artículo 49 de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, regula lo siguiente:

[10] Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Resolución N° 206, de fecha 05 de octubre de 2011, 11 horas 30 minutos.

"ARTÍCULO 49.- Obligaciones de los operadores y proveedores

Los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones:

1) *Operar las redes y prestar los servicios en las condiciones que establezcan el título habilitante respectivo, así como la ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten.*

2) *Cumplir las obligaciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad que les correspondan, de conformidad con esta Ley.*

3) *Respetar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y atender sus reclamaciones, según lo previsto en esta Ley.*

4) *Adoptar y aplicar los procedimientos y las soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros.*

5) *Las demás que establezca la ley."*

De esta manera sobre el caso en particular evidenció la SUTEL, mediante el dictamen técnico emitido mediante el oficio Nº 1619-SUTEL-2010 de fecha 8 de setiembre 2010, se indicó que:

> *"(…) 59. Canal 51, se recomienda que el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1 a), Ley N° 8642, cancelar el derecho de uso y explotación del canal Acuerdo Ejecutivo N° 3094-2002 MSP, otorgado mediante concesión y el respectivo contrato. Lo anterior en vista de que el canal 51, que opera como transmisor principal (matriz), no se encuentra en operación."*

Además, la SUTEL en el dictamen técnico emitido mediante el oficio Nº 05173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre 2012, se identificó que:

“En ninguno de los 10 puntos de medición ubicados en los centros de ciudades principales, en los cuales el RGLT especifica una intensidad de campo de al menos 80 dBµV/m para este canal, se cumple esa condición. ***De esta manera, en los núcleos de las ciudades principales, el canal 51 tiene cobertura en el 0% de los puntos medidos. En los demás puntos, donde el requerimiento del RLGT es de 64 dBµV/m, el canal 50 no cumple en ninguno de los 28 sitios, para un cumplimiento en el 0% de los sitios fuera de los centros de ciudades principales.***

A este canal mediante el Acuerdo Ejecutivo 3094-2012 MSP se le autorizó la instalación de un transmisor en el Cerro Ron Ron, y se le otorgó cobertura en un radio de 25 kilómetros alrededor de este punto de transmisión

La cobertura asignada está acorde con lo establecido en el PNAF, ya que este canal, al ser impar, debe cubrir solamente áreas fuera del Valle Central.

Según la información presentada por el concesionario en atención al oficio 1041-SUTEL-DGC-2012 con respecto a la actualización de información técnica de los transmisores, este reportó un (1) trasmisor ubicado en Aguas Zarcas de San Carlos.

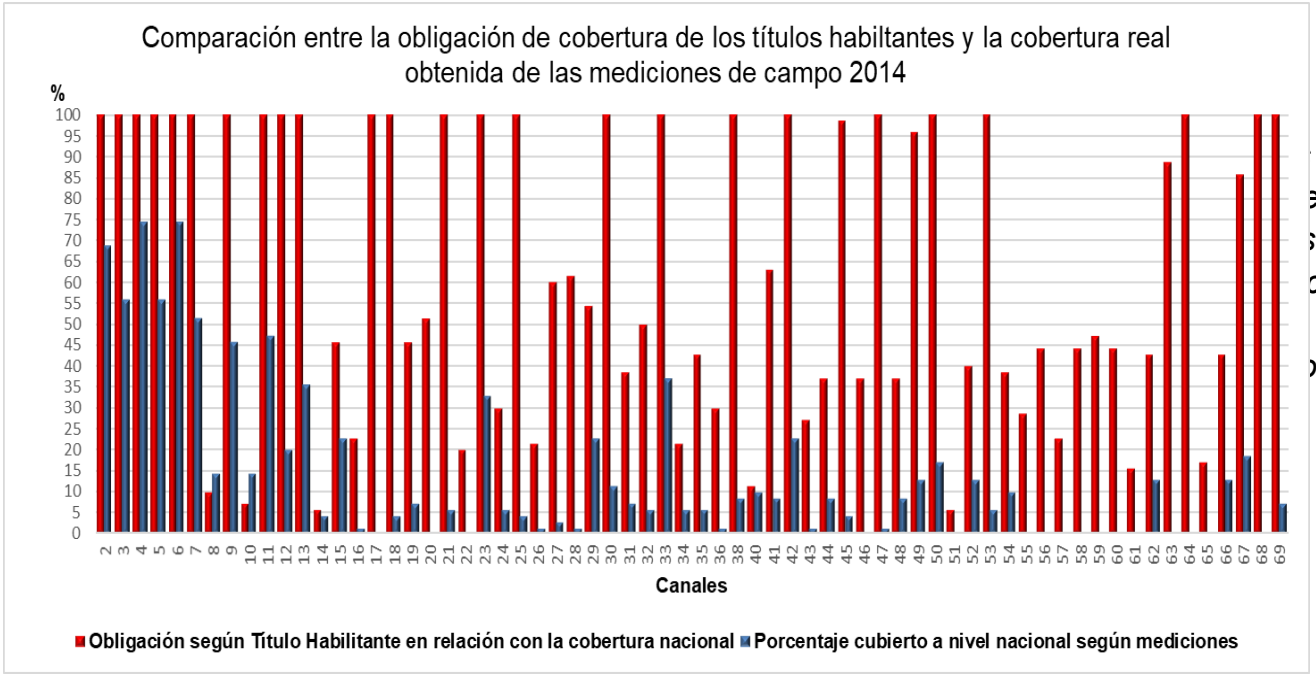
(…) De los 38 puntos de medición a nivel nacional, únicamente 4 se encuentran dentro de la zona de cobertura especificada por el Acuerdo Ejecutivo: Cerro Ron Ron, Ciudad Quesada, San Ramón y Naranjo. La señal del canal 51 no cumple en ninguno de estos 4 sitios con la intensidad de campo eléctrico especificado en el RLGT, por lo que tiene cobertura en el 0% de los sitios que se encuentran dentro del área de cobertura asignada a este canal. De hecho, no es posible identificar ninguna portadora en ninguno de los puntos de medición.

Los resultados obtenidos evidencian que el canal 51 no tiene ningún sitio de transmisión en operación en el territorio nacional y por lo tanto no se encuentra utilizando las frecuencias concesionadas.”

(…) No fue posible observar el contenido del canal 51 en ninguno de los sitios de medición mediante la tarjeta de demodulación de televisión (descrita en el anexo 1). Esto es congruente con las mediciones de intensidad de campo eléctrico y potencia de la señal sobre el piso de ruido, las cuales tuvieron un resultado de “no cobertura” en todos los casos. La figura 246 muestra la imagen del canal 51 en Ciudad Quesada (sitio donde debería de haber cobertura, según el Acuerdo Ejecutivo), que es igual a todas las imágenes tomadas para este canal en todos los puntos de medición.” (Énfasis agregado).

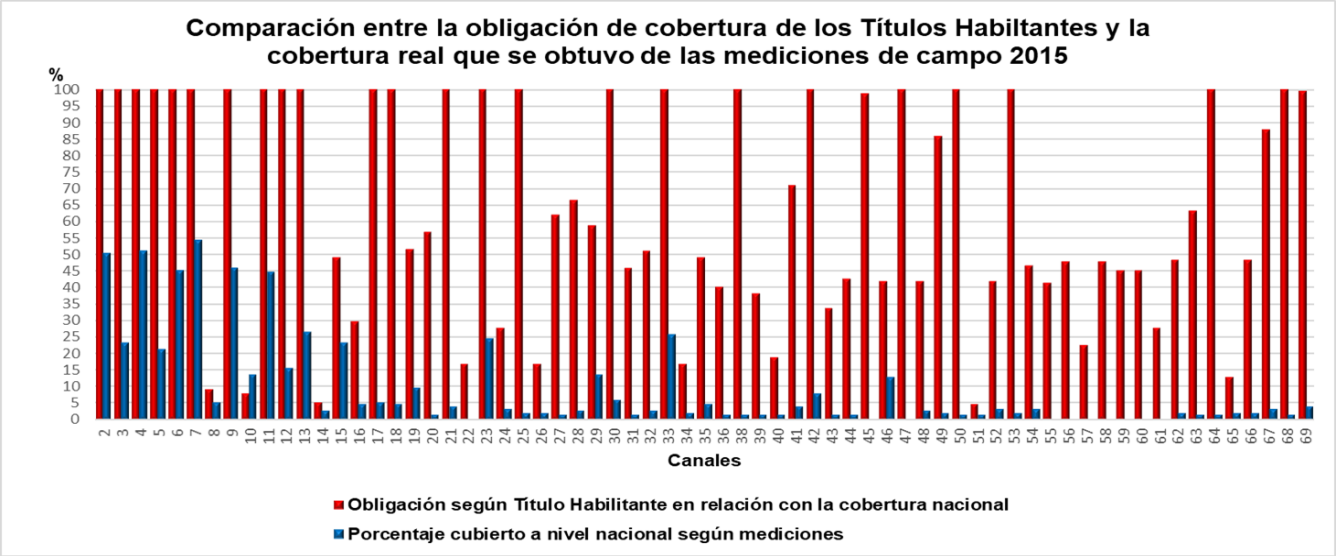
Además, el Órgano regulador indicó en el citado dictamen técnico Nº 05173-SUTEL-DGC-2012 que *"(…) Para el canal 51 (canal matriz), los porcentajes de no cobertura en ambas mediciones se han mantenido en un 100%, lo que comprueba que este canal no está siendo utilizado. A este concesionario se le otorgó una cobertura de 25 km alrededor del punto de transmisión en Cerro Ron Ron, lo cual es acorde con lo indicado en el PNAF para los canales impares del segmento de canales 38 a 69. A partir de los resultados obtenidos mediante el presente informe y el del año 2010 (1619-SUTEL-2010), se comprobó que dicho canal no se encuentra en utilización, por lo tanto se debería iniciar el procedimiento administrativo para recuperar el canal 51 aplicando lo dispuesto por el artículo 22 de la LGT y permitir la disponibilidad formal de dicho espectro."* (Subrayado es propio).

Asimismo, mediante el dictamen técnico emitido mediante el oficio Nº 08453-SUTEL-DGC-2014 de fecha 03 de diciembre 2014, se identificó que: *"(…) En la sección del espectro correspondiente a UHF (canales 14 a 69[11]), hay dos grupos de canales (del 14 al 51) que tienen un promedio de puntos con cobertura de aproximadamente 8,07%"*, de la misma manera en dicho informe se evidencia lo anterior con la siguiente gráfica[12]:



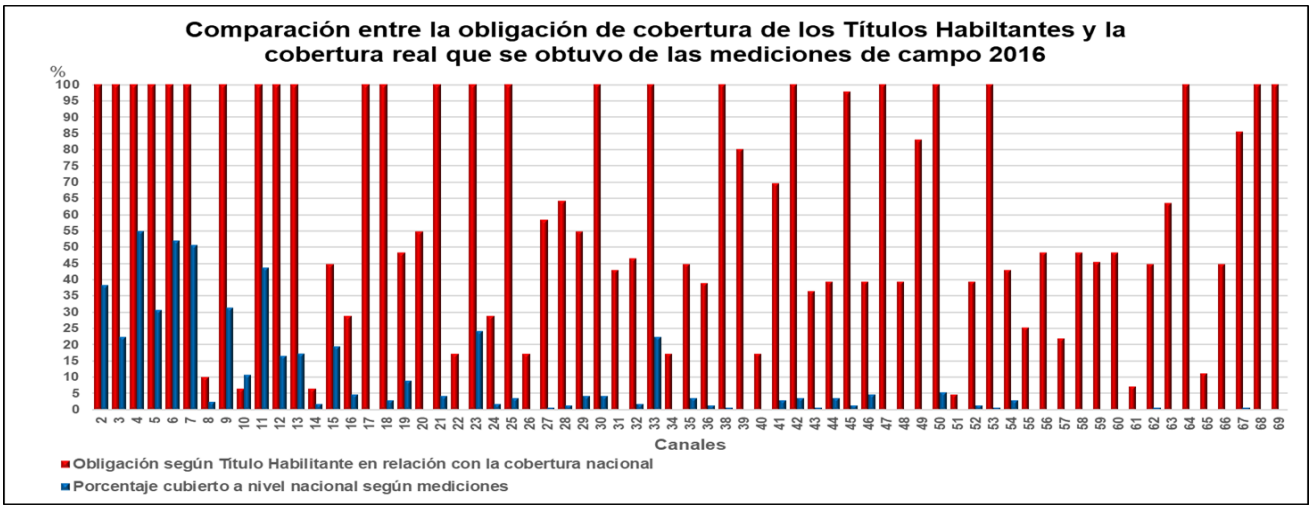
de
del
ente
s se
cual
del
o de

Por su parte, en el informe Nº 08429-SUTEL-DGC-2015 de fecha 08 de diciembre 2015, se identificó y actualizó que: *"(…) En la sección del espectro correspondiente a UHF (canales 14 a 69), hay dos grupos de canales (del 14 al 51) que tienen un promedio de puntos con cobertura de aproximadamente 8,44%"* de la misma manera en dicho informe se evidencia lo anterior y lo actualiza con la siguiente gráfica:



Como complemento a lo expuesto, en el dictamen técnico emitido mediante el oficio Nº 08429-SUTEL-2015 de fecha 08 de diciembre 2015, el Órgano Regulador concluye que: *(…) de los resultados obtenidos en las mediciones del año 2015, y en concordancia con los resultados de años anteriores, se hace evidente la necesidad de realizar ajustes en los títulos habilitantes para que los mismos se adecuen a la realidad de las trasmisiones de cada uno de los concesionarios, lo cual permitiría hacer un uso más eficiente del espectro aumentando la disponibilidad del recurso en zonas en las que se podría mejorar la calidad y cobertura del servicio de radiodifusión televisiva."*

Por otra parte, en el dictamen técnico Nº 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre 2016, la SUTEL identificó y actualizó nuevamente la información indicando en esta oportunidad que: *"(…) En la sección del espectro correspondiente a UHF (canales 14 a 69), hay dos grupos de canales (del 14 al 51) que tienen un promedio de puntos con cobertura de aproximadamente 3,58%"*; de la misma manera en dicho informe se evidencia lo anterior y lo actualiza nuevamente con la siguiente gráfica:



Aunado a lo anterior, el Órgano Regulador en el dictamen técnico emitido mediante el oficio Nº 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre 2016, concluyó que: "*(…) de los resultados obtenidos en las mediciones del año 2016, y en concordancia con los resultados de años anteriores, se hace evidente la necesidad de realizar ajustes en los títulos habilitantes para que los mismos sean adecuados a la realidad de las trasmisiones de cada uno de los concesionarios, lo cual permitiría hacer un uso más eficiente del espectro aumentando la disponibilidad del recurso en zonas en las que se podría mejorar la calidad y cobertura del servicio de radiodifusión televisiva.*" (Subrayado es propio).

Mediante el dictamen técnico emitido mediante el oficio Nº 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, la SUTEL identificó que: *"(…) La Superintendencia de Telecomunicaciones desde el año 2010, en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, ha presentado informes al Ente Rector donde se evidencia una serie de incumplimientos en el uso de las frecuencias del canal 51, aspectos que desde la perspectiva de esta Superintendencia ameritan la valoración de la apertura de un procedimiento administrativo que, pudiera derivar en la aplicación lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley No 8642, respecto a la posible recuperación del citado canal*

concesionado a la empresa Canal Cincuenta y Uno S.A. En ese sentido, la actuación administrativa tiene obligación de procurar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos por el ordenamiento vigente en materia de telecomunicaciones, en especial, la optimización de los recursos escasos"; y a su vez en dicho dictamen técnico la SUTEL recomendó al Poder Ejecutivo: *"(…) la necesidad de la apertura al amparo del artículo 22 de la Ley N° 8642 de los procedimientos administrativos relacionados con la posible recuperación del canal 51, otorgados a Canal Cincuenta y Uno S.A., todo lo cual contribuya al fiel cumplimiento de los objetivos y principios establecidos por el ordenamiento vigente en telecomunicaciones, en especial a la optimización de los recursos escasos."* (Subrayado es propio).

Así las cosas, se debe recordar que en un ámbito normativo la Ley N°8642, Ley General de Telecomunicaciones (LGT), dispone los mecanismos de regulación de las telecomunicaciones comprendiendo lo relativo al uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

Por lo anterior, están sometidas a su ámbito de aplicación normativo, el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la operación de redes de telecomunicaciones; y en adición la misma LGT, dispone una regulación especial en lo que atiende a la figura de la concesión para el uso y explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que habilita la operación de redes de telecomunicaciones. Particularmente, el artículo 11 de la LGT dispone, lo siguiente:

> *"Artículo 11. Concesiones:*
>
> *Se otorgará concesión para el uso y la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones. Dicha concesión habilitará a su titular para la operación y explotación de la red. (…) La concesión se otorgará para un área de cobertura determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la utilización eficiente del espectro radioeléctrico."* (El subrayado es propio).

En concordancia, el Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones (en adelante RLGT), emitido el 22 de setiembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 186 del 26 de setiembre de 2008 y sus reformas en su artículo 5 inciso 7) define la concesión como "*El acto jurídico mediante el cual el Poder Ejecutivo otorga a una persona física o jurídica el derecho para usar y explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones.*"

Y, el artículo 21 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo Nº 34765-MINAET, mediante el cual se derogó la normativa anterior que regulaba esta materia (Decreto Ejecutivo N° 31608-G, Reglamento de Radiocomunicaciones), es su artículo 21 dispone que: "*La concesión se otorgará para un área de cobertura determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, (…)".*

Resultando de acuerdo con los extremos normativos expuestos, que dentro de estas obligaciones se encuentra el deber jurídico de cumplir las condiciones dispuestas en el título de concesión, con inclusión de las condiciones de cobertura habilitadas. Condiciones de cobertura que restringen *"la libertad de acción del obligado en cuanto le niega el derecho de omitir la conducta prescrita o el de ejecutar la prohibida, y solo le concede el de hacer lo que le mande omitir o el omitir lo que le veda*". (Eduardo García Maynes, Lógica del Juicio Jurídico, Páginas 15 y 16).

Parafraseando al Profesor Ortiz Ortiz (Eduardo), se puede indicar en relación con este deber jurídico, lo siguiente:

> *"El deber no corresponde a lo que esta ordenado o impuesto, sino a lo que está prohibido. La restricción de la libertad apuntada como esencial del mismo, positivamente corresponde a la prohibición de hacer algo, a la imposibilidad*

jurídica de hacerlo. Hay una restricción de la libertad, porque hay algo que no se puede hacer, que es la omisión de una conducta autorizada.

Según este resultado, pueden darse las siguientes definiciones del derecho subjetivo y del deber: es derecho subjetivo la autorización (de conducta), dada por la norma jurídica, que produce en el sujeto la posibilidad de hacer u omitir lícitamente algo. Es deber la prohibición (de conducta) impuesta por la norma jurídica, que produce en el sujeto la necesidad jurídica, que produce en el sujeto la necesidad jurídica de no hacer algo o la imposibilidad de hacerlo." (Ortiz Ortiz (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II página 217.) (Subrayado es propio).

A las anteriores disposiciones normativas este Poder Ejecutivo debe aunar que, tanto de la Ley General de Telecomunicaciones, su Reglamento Ejecutivo, y la Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), determinan en relación con las condiciones mínimas de transmisión[13] y los parámetros de intensidad de señal[14]. Al respecto se procede a indicar por su relevancia, las siguientes:

Ley General de Telecomunicaciones (Ley Nº 8642)

"Artículo 22.- Revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos

Para efectos de esta Ley, son causales de resolución y extinción del contrato de concesión las siguientes:

1) La resolución del contrato de concesión procede por las siguientes causas:

a) Cuando el concesionario no haya utilizado las frecuencias para el fin solicitado luego de un año de haber sido asignadas o de haberse concedido la prórroga. Este plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, previa recomendación del Consejo, a solicitud de parte y por motivos debidamente justificados.

b) Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley,** los **reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito o fuerza mayor.

[13] Tiempo de transmisión "al aire".
[14] Cobertura de la señal.

c) Incumplimiento en el pago de la contribución al Fondo Nacional de Telecomunicaciones y de las obligaciones impuestas de acceso, servicio universal y solidaridad.

d) El atraso de al menos tres meses en el pago de las tasas y cánones establecidos en la presente Ley.

*e) No cooperar con las autoridades públicas en los casos a que se refiere el **artículo** 5 de esta Ley.*

f) La reincidencia de infracciones muy graves, de conformidad con el artículo 67 de esta Ley, durante el plazo de vigencia del título habilitante.

g) El incumplimiento de brindar acceso inmediato de comunicaciones al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) en los términos y las disposiciones establecidos en la Ley contra la delincuencia organizada. Esta infracción será catalogada como muy grave, según lo establecido en el inciso a) del artículo 68 de esta Ley.

La declaratoria de resolución del contrato estará precedida de un proceso administrativo que respetará las reglas del debido proceso. El titular de la concesión cuya resolución haya sido declarada por incumplimiento grave de sus obligaciones, estará imposibilitado para mantener nuevas concesiones de las previstas en esta Ley, por un plazo mínimo de tres años y máximo de cinco años, contado a partir de firmeza de la resolución.

2) Las concesiones, las autorizaciones y los permisos se extinguen por las siguientes causales:
a) El vencimiento del plazo pactado.
b) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del Estado.
c) El rescate por causa de interés público.
d) El acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario. Este acuerdo deberá estar razonado debidamente tomando en consideración el interés público.
e) La disolución de la persona jurídica concesionaria.
Cuando la extinción se produzca por causas ajenas al concesionario, quedará a salvo su derecho de percibir las indemnizaciones que correspondan según esta Ley y el contrato de concesión."

Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones

*"Artículo 99.-Tiempo mínimo de transmisión. Las estaciones al servicio de radiodifusión sonora y televisiva deberán **cumplir con un mínimo de transmisión de doce horas diarias**, debiendo notificar a la SUTEL su horario."*

Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), Ley Nº 1758

ARTICULO 22.- El ***pago de los impuestos señalados por esta ley deberá hacerse por trimestres adelantados*** *y tal obligación implicará preferencia a cualesquiera otros gravámenes sobre las estaciones radiodifusoras afectadas."* (Énfasis agregado).

Es menester señalar también que, mediante memorándum Nº MICITT-DCNT-DNPT-MEMO-062-2019 de fecha 26 de marzo del 2019, se le solicitó al Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico, se refiriera de manera concreta si la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, se encuentra al día con el pago al impuesto anual de radiodifusión, dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 1758, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos). Sobre el particular, mediante el memorándum N° MICITT-DERRT-DAER-MEMO-048-2019, el Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico, indicó lo siguiente:

"En vista de lo anterior, según los registros del Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico y el oficio N° 09007-SUTEL-DGC-2017, 'Situación actual de los concesionarios de las bandas de frecuencias de microondas declaradas de asignación no exclusiva e información presentada de conformidad con el transitorio I del decreto ejecutivo N° 39057-MICITT modificado mediante decreto N° 39311-MICITT', procedemos a informar que los últimos pagos que constan a nombre del concesionario 'CANAL CINCUENTA Y UNO, S.A', correspondientes a la frecuencia de canal 51 (de 692 MHz a 698 MHz), fueron realizados mediante el entero RS-078-12, donde se evidencia que el último pago efectuado por el concesionario corresponde al año 2012, constando a su vez en el respectivo expediente los comprobantes de pago para los años de 2009 a 2011. Por otra parte es importante aclarar que, este concesionario no registra enlaces de microondas.

A continuación, se detalla la imagen (copia) del entero respectivo al año 2012:



BCR OFICINA VIRTUAL Print Form

Rectoría de Telecomunicaciones

* 27 MAR 2012 *

MICHAEL GUZMÁN GARITA
OFICIAL COMERCIAL

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA

IMPUESTO ANUAL DE RADIODIFUSIÓN

El señor: CANAL CINCUENTA Y UNO S.A Indicativo TI - TI-DSY

Ha enterado la suma de CIENTO VEINTE MIL **Colones exactos.**

Por concepto del pago del derecho de uso de las frecuencias:

CANAL 51 (692-698MHz)

Correspondiente a los años: 2012

Según Ley 1758 del 19/06/1954 y sus reformas.

₡ 120,000.00

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE RADIO

Rectoría de Telecomunicaciones 27 MAR 2012

Original: Contabilidad Nacional, CC: Banco Central, (2 Rectoría de Telecomunicaciones), (1) interesado.

ENTERO N° RS-078-12

Figura 1: Entero RS-078-12

Asimismo, en vista del mecanismo de coordinación existente entre este Departamento y la Dirección de Contabilidad Nacional (DCN) del Ministerio de Hacienda, se tiene evidencia de los registros históricos de aquellos enteros de Gobierno emitidos para el pago del IAR de los cuales el concesionario no aportó los respectivos de cancelación a este Ministerio, o de pagos que el concesionario haya realizado sin la confección de dicho entero, ***para el caso en consulta es menester mencionar que no figuran registros de pago para este concesionario que efectivamente hayan ingresado a la caja única del Estado, de conformidad con lo señalado por la DCN en el oficio DCN-URCP-1468-2017.*** *(…)"* (Resaltado y subrayado es propio).

Por último, el Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico indicó lo siguiente: *"Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la empresa concesionaria* ***Canal Cincuenta y Uno, S.A.*** *tiene un monto total pendiente de pago de* ***₡840.000.00 (ochocientos cuarenta mil colones exactos)****, por concepto de Impuesto Anual de Radiodifusión."* (El resaltado es propio).

Por lo anterior, en virtud de la prueba documental que consta en el expediente administrativo N° GCP-703-2013 recopilada y comprobada por parte del Órgano

Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio, se verificó que en efecto en la especie, la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA no cumplió con sus obligaciones derivadas de la concesión suscrita con el Estado a través del Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, ni tampoco cumplió con las obligaciones definidas en la Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), Ley General de Telecomunicaciones y el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, por lo que lo procedente es, dada la verificación los hechos, la extinción del título habilitante, conformidad con las estipulaciones antes señaladas, y lo dispuesto en el artículo 22 incisos a y b) de la Ley Nº 8642.

Por su parte, el artículo 74 inciso 1) de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), determina entre otros extremos, los siguientes:

> *"**Artículo 74.-***
> *(…)*
> *Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley.*
>
> *1.- La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y esta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones**, concesiones** o licencias. **Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.***
> *(…)*
> ***En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual.** Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia.*
> *(…)*

> *La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las obligaciones con la seguridad social."* (Énfasis agregado).

Según fue indicado por la Procuraduría General de la República mediante su dictamen Nº C-2017-2014 del 26 de junio de 2014, en relación con la norma legal supra citada, su objetivo es *"asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social a través de la debida inscripción y cotización de los particulares e instituciones públicas, incluidas las municipalidades, al régimen administrado por la CCSS. Asimismo, con la finalidad de alcanzar ese objetivo, obliga a la Administración Pública a constatar que los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas gestionen ante ella los trámites administrativos indicados en ese artículo, estén debidamente inscritos (en la modalidad que les corresponda) y se encuentren al día con el pago de sus obligaciones."*

Por lo cual debe estimarse que no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social constituye a los efectos del contrato de concesión otorgado por la Administración Concedente una causal de incumplimiento contractual.

Lo anterior resulta de suma relevancia, pues al elaborarse la presente Resolución administrativa, tal y como se demuestra en el elenco probatorio que consta en el expediente administrativo N° GCP-703-2013, la empresa concesionaria se encuentra en condición de "Patrono Moroso", en relación con sus obligaciones sociales ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

Al tenor de lo expuesto, podemos entonces concluir que, si bien es cierto no se define en nuestro ordenamiento sectorial alguna causal que determine la extinción de las concesiones en razón de la morosidad en el pago de las obligaciones con la seguridad social de forma taxativa, lo cierto es que existe una normativa especial en la materia, esto es, el último párrafo del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se establece literalmente como causal de revocación de una concesión, como lo sería la concedida mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, ante el incumplimiento de las deudas obrero patronales citadas.

Por otra parte, en cuanto a las obligaciones de trasmisión de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA dentro de la zona de acción (obligaciones de cobertura), en la concesión bajo análisis por parte del Poder Ejecutivo se definían los kilómetros que debía cubrir el canal de televisión y en su caso, si la cobertura era local, regional o nacional. De esta forma, la empresa concesionaria podía devenir obligada a prestar el servicio cubriendo todo el territorio nacional o bien, puede suceder que se establezca que ese servicio se prestará en una determinada zona (televisoras locales, por ejemplo).

Tanto el área, como la cobertura, fueron definidos en el Acuerdo Ejecutivo N° 3094-2002 MSP citado. Así en dicho título habilitante se definió como área de cobertura 25 km desde el punto de transmisión principal, Cerro Ron Ron en Ciudad Quesada. En todo caso, la empresa concesionaria no era libre para definir la zona de cobertura de su servicio. Esta venía determinada en el acto de otorgamiento de la concesión. Definidos estos elementos, su cumplimiento constituía una obligación de parte de la empresa concesionaria.

De manera concreta, para el caso en particular del Canal físico 51, otorgado a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933, expediente administrativo N° GCP-703-2013, se determinó por parte de la SUTEL, y de las dependencias técnicas y jurídicas del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT, las cuales fueron analizadas por del Órgano Director del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ordinario, lo siguiente:

a) Según el PNAF vigente se establece que el segmento de frecuencias UHF de 614 MHz a 806 MHz se atribuye para el desarrollo de servicio de radiodifusión televisiva de acceso libre o como comúnmente son llamados *"canales de televisión de libre acceso"*, los cuales pueden ser accedidos sin limitaciones por la población costarricense. Cabe mencionar, que el Canal físico 51 (segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz) se encuentra comprendido dentro del segmento de frecuencias UHF señalado. No obstante, en vista de la no operación de este canal concesionado a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A., acreditado durante el procedimiento ordinario sancionatorio se priva a la población costarricense del beneficio de contar con el contenido de la programación de los canales de libre acceso otorgados en nuestro país.

b) En este sentido el artículo 113 inciso 2) de la Ley General de Administración Pública dispone que *"**En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo**, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia*"; lo anterior, sin perjuicio del adecuado uso y explotación del bien demanial constitucional (por ejemplo el espectro radioeléctrico), pues tal y como lo establece el artículo 8 inciso c) de la LGT dentro de los objetivos de planificación, la administración y el control del espectro radioeléctrico se encuentran *"**Asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente** y sin perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales."* (Resaltado es propio). Aspectos que también son trasgredidos por parte de la empresa concesionaria, ante la demostración de la no utilización del segmento de frecuencias concesionado por el Estado.

c) Según la información aportada al expediente administrativo N° GCP-703-2013, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Sancionatorio determinó el incumplimiento en el pago del impuesto de radiodifusión, así como de las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica Nº 3-101-236933.

c) Ante las situaciones irregulares advertidas por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio se está en presencia de una revocación de la concesión, con pleno respeto de las reglas del debido proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 22, inciso 1), de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, el cual dispone:

*"**ARTÍCULO 22.- Revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos***

Para efectos de esta Ley, son causales de resolución y extinción del contrato de concesión las siguientes:

***1)** La resolución del contrato de concesión procede por las siguientes causas:*

***a)** Cuando el concesionario no haya utilizado las frecuencias para el fin solicitado luego de un año de haber sido asignadas o de haberse concedido la prórroga. Este plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, previa recomendación del Consejo, a solicitud de parte y por motivos debidamente justificados.*
***b)** Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito o fuerza mayor.*

c) *Incumplimiento en el pago de la contribución al Fondo Nacional de Telecomunicaciones y de las obligaciones impuestas de acceso, servicio universal y solidaridad.*
d) *El atraso de al menos tres meses en el pago de las tasas y cánones establecidos en la presente Ley.*
e) *No cooperar con las autoridades públicas en los casos a que se refiere el artículo 5 de esta Ley.*
f) *La reincidencia de infracciones muy graves, de conformidad con el artículo 67 de esta Ley, durante el plazo de vigencia del título habilitante.*
g) *El incumplimiento de brindar acceso inmediato de comunicaciones al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) en los términos y las disposiciones establecidos en la Ley contra la delincuencia organizada. Esta infracción será catalogada como muy grave, según lo establecido en el inciso a) del artículo 68 de esta Ley.*

La declaratoria de resolución del contrato estará precedida de un proceso administrativo que respetará las reglas del debido proceso. El titular de la concesión cuya resolución haya sido declarada por incumplimiento grave de sus obligaciones, estará imposibilitado para mantener nuevas concesiones de las previstas en esta Ley, por un plazo mínimo de tres años y máximo de cinco años, contado a partir de firmeza de la resolución.

2) *Las concesiones, las autorizaciones y los permisos se extinguen por las siguientes causales:*

a) *El vencimiento del plazo pactado.*
b) *La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del Estado.*
c) *El rescate por causa de interés público.*
d) *El acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario. Este acuerdo deberá estar razonado debidamente tomando en consideración el interés público.*
e) *La disolución de la persona jurídica concesionaria.*

Cuando la extinción se produzca por causas ajenas al concesionario, quedará a salvo su derecho de percibir las indemnizaciones que correspondan según esta Ley y el contrato de concesión."

Conforme la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que se ha aludido anteriormente en la presente Resolución, corresponde a ese Órgano regulador, administrar, controlar y comprobar el uso eficiente del espectro, de manera que los recursos escasos, es decir las frecuencias

del espectro radioeléctrico, sean utilizadas de forma eficiente y transparentemente, no puede, así, existir duda en cuanto a la competencia de SUTEL para investigar las causales de resolución de los títulos de concesión y, por ende, para informar y advertir al Poder Ejecutivo de su existencia, para que proceda a su recuperación, salvo que existan razones de orden público o interés nacional para separarse de dichas recomendaciones.

Desde la perspectiva del criterio técnico de la SUTEL, se refiere a que ese Órgano Regulador dentro del marco de sus competencias determinó que una vez realizados los estudios técnicos presuntamente se incumple lo relativo a las condiciones establecidas en el título habilitante del concesionario, no encontrando el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio razones que justificaran o eximentes de responsabilidad de los incumplimientos advertidos por parte de la SUTEL, que determinaran en que este Poder Ejecutivo se aparte de las recomendaciones emitidas por parte de ésta.

Asimismo, en consonancia con el deber que tiene el Poder Ejecutivo de vigilar el adecuado uso óptimo y racional del espectro, en apego al principio de legalidad y el interés público que reviste la optimización de los recursos escasos como principio rector dentro del sector telecomunicaciones, debe analizarse lo resuelto a la luz de lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, específicamente en los artículos 2 inciso g), artículo 3 inciso i) y el artículo 8 inciso b), mismos que disponen como objetivo y principio rector del sector de las telecomunicaciones, la optimización de los recursos escasos, lo cual presupone la asignación y utilización de los recursos de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria, asegurando un uso eficiente y efectivo del espectro radioeléctrico, de parte del Estado, y de recuperarlo en el caso, que se demuestre, como el caso en concreto, previo cumplimiento del debido proceso y derecho de defensa, ante un no uso de este recurso escaso y estratégico.

En este sentido la Procuraduría General de la República ha manifestado en el Dictamen N° C-003-2013 de fecha 15 de enero de 2013, respecto del principio de optimización de los recursos escasos lo siguiente:

> "*El espectro radioeléctrico es un recurso natural escaso, por lo que se impone un uso racional y eficaz para su aprovechamiento óptimo. Precisamente, uno de los principios fundamentales que rigen el sector de las telecomunicaciones es la optimización de los recursos escasos, que se refiere a la asignación y utilización de estos recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, transparente, no discriminatoria, para asegurar una competencia efectiva y la expansión y mejora de redes y servicios (artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones). La Ley General de Telecomunicaciones tiene como objeto establecer los mecanismos de regulación de las telecomunicaciones, comprensivo del uso y explotación de las redes.*
>
> *(…)*
>
> *El requerimiento de un uso racional y eficiente del espectro radioeléctrico plantea la necesidad de ordenarlo, planificando y regulando su uso. La asignación, uso y explotación, administración y control del espectro radioeléctrico parten de esa naturaleza de bien demanial escaso.*
>
> *(…)*
>
> *La protección constitucional del espectro radioeléctrico, su condición de recurso escaso y estratégico, que debe ser usado de manera óptima, eficiente, equitativa, no discriminatoria y transparente impiden considerar que el espectro radioeléctrico es un bien demanial 'como cualquier otro'. Sobre todo, impide estimar que su uso puede hacerse sin observancia de lo dispuesto constitucionalmente, en particular en relación con el principio de reserva de ley*".

Ahora bien, respecto a la cobertura, el empleo del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, se tiene que cada uno de los dictámenes técnicos emitidos por la SUTEL en el período comprendido entre los años 2010 a 2020, resultan ser consistentes al indicar de forma general que no se evidenció cobertura durante el período en el que se realizaron las mediciones en los puntos específicos localizados dentro de la zona en la que el Canal físico 51 otorgado a la empresa CANAL

CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA debía tener cobertura, según su obligaciones prestacional derivada del Título Habilitante Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002.

Por otro lado, con respecto al Informe técnico N° MICITT-DERRT-DAER-INF-057-2019, de fecha 03 de abril de 2019 y el Informe Técnico Jurídico N° MICITT-DCNT-INF-027-2020 de fecha 30 de marzo de 2020, emitidos por la dependencia técnica y la dependencia jurídica del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT también considerados por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio en su recomendación (previamente citada), los mismos contemplan los análisis que el Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico y la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones han realizado sobre los criterios emitidos por la SUTEL respecto al Canal físico 51 de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, y en los que dichos Departamentos llegan a la conclusión, al igual que este Órgano Decisor de que se está en supuesto de no cobertura e incumplimiento en las obligaciones de cobertura establecidas en el título habilitante.

Ahora bien, como se señaló anteriormente, mediante el Acuerdo Ejecutivo Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002, se le otorgó a la empresa la concesión del segmento de frecuencias de 692 MHz a 698 MHz, correspondientes a Canal físico 51. De conformidad con dicho título habilitante, la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, tenía dentro de las obligaciones contraídas con el otorgamiento de su concesión, las siguientes:

- ✓ La prestación de los servicios de radiodifusión televisiva abierta y gratuita, con transmisiones en Ciudad Quesada, Cerro Ron Ron, con un área aproximada de cobertura de 25 km.

- ✓ Prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, y no suspenderlo salvo fuerza mayor o causa justa debidamente comprobada.

- ✓ Cancelar el impuesto anual de radiodifusión.

Este impuesto se encuentra establecido en el artículo 18 inciso c) de la Ley N° 1756, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos) y fue reiterado en la cláusula cuarta del respectivo Contrato de Concesión. Dicho artículo estipula:

> *"ARTICULO 18.- A partir de la vigencia de la presente ley, deberá pagarse un impuesto anual de radiodifusión en la siguiente forma:*
> *(…)*
> *c) Las estaciones de fonía privadas dedicadas a actividades agrícolas o industriales pagarán cien colones (¢ 100.00) al año y las otras que sirvan a actividades comerciales pagarán quinientos colones (¢ 500.00)".*

Asimismo, lo señala el artículo 74 inciso g) del RLGT:

> *"Artículo 74.-Obligaciones Generales del Titular del Título Habilitante.*
> *(…)*
> *g) Pagar oportunamente los cánones, tasas y demás obligaciones establecidas en la ley o en su respectivo título habilitante;*
> *(…)"*

Como se analizó, según los dictámenes técnicos emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante oficios N° 1619-SUTEL-2010 con fecha 08 de setiembre de 2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012, 4599-SUTEL-DGC-2013 de fecha 13 de setiembre de 2013, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013, adoptado en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada en fecha 18 de setiembre de 2013, N° 8453-SUTEL-DGC-2014 de fecha 03 de diciembre de 2014, N° 08429-SUTEL-DGC-2015 de fecha 08 de diciembre de 2015, N° 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, N° 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, aprobado por el Consejo

de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada en fecha 15 de marzo de 2017, N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL mediante Acuerdo N° 020-076-2020, adoptado en la sesión ordinaria N° 076-2020, celebrada en fecha 02 de noviembre de 2020, donde constan las mediciones realizadas por la SUTEL, se tiene por comprobado que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, no ha cumplido con la obligación de prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, ya que de las mediciones realizadas por la SUTEL se logró comprobar que el porcentaje de ocupación del segmento de frecuencias comprendidas de 692 MHz a 698 MHz es del 0%, lo que implica que no existen transmisiones de la señal del Canal físico 51 operado por la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA.

En cuanto a lo anterior, también se debe señalar que no consta en el expediente administrativo analizado, alguna justificación de la empresa que pudiera representar una causal eximente del incumplimiento contractual por parte de la concesionaria.

Asimismo, y de conformidad con el memorándum N° MICITT-DERRT-DAER-MEMO-052-2019 de fecha 29 de marzo de 2019 del Departamento de Administración del Espectro Radioeléctrico, la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA adeuda la suma de ₡840.000,00 (ochocientos cuarenta mil colones exactos) por concepto de no pago de los impuestos de radiodifusión de los periodos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, por la frecuencia matriz del Canal físico 51. Lo cual genera otro incumplimiento de los deberes legales derivados de la concesión otorgada, y que tampoco consta en el expediente administrativo alguna prueba que refute la condición de morosidad.

En vista de los incumplimientos señalados por parte de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, los cuales han ocasionado una afectación al interés público de la Administración y un menoscabo al principio de

optimización de los recursos escasos, este Órgano Decisor acoge las recomendaciones mencionadas a lo largo de la presente Resolución, y por ende, como custodio del recurso escaso y estratégico, debe aplicar lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, aplicando la sanción correspondiente a dichos incumplimientos, el cual corresponde a la revocación de la concesión conferida. Dicho artículo se procede a reiterar dada su importancia, en lo que nos interesa, estipula lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 22.- Revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos*
> *Para efectos de esta Ley, son causales de resolución y extinción del contrato de concesión las siguientes:*
> *1) La resolución del contrato de concesión procede por las siguientes causas:*
> *(…)*
> *a) Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito o fuerza mayor.*
> *(…)"*

Aunado a lo anterior el artículo 36 del Reglamento a la LGT señala:

> *"Artículo 36.- Extinción, caducidad y revocación de las concesiones. Son causales de revocación y extinción de los contratos de concesión, las señaladas en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones.*
>
> *El procedimiento para la extinción, caducidad y revocación de las concesiones será el procedimiento ordinario establecido en el Libro II de la Ley General de Administración Pública, Nº 6227, del 2 de mayo de 1978, y sus reformas".*

Conforme a lo expuesto, considera este Órgano Decisor, que existe certeza de que la empresa concesionaria CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, **ha incumplido con sus obligaciones en cuanto a la utilización del recurso según las condiciones establecidas en el del título habilitante otorgado y la normativa vigente, tanto en el pago correspondiente al impuesto anual de radiodifusión de los periodos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, así como con el deber de trasmitir por doce (12) horas diarias y dentro del área de cobertura conferida por**

parte del Poder Ejecutivo, hechos por los cuales se le intimó a la concesionaria, y de los cuales no se recibió prueba en contrario ni contradicción por parte de la empresa durante el procedimiento administrativo sancionatorio ordinario.

G. PAGO DE OBLIGACIONES SOCIALES CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Dentro de los presuntos incumplimientos de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, por lo que la Resolución N° 004-2020-R-TEL-MICITT de las 14:00 de fecha 29 de abril del año 2020 del Poder Ejecutivo, instauró el Órgano Director del Procedimiento Administrativo, fue la morosidad de la empresa en cuanto a sus obligaciones obrero-patronales con la CCSS, aspecto que también fue intimado a la concesionaria, y fue analizado durante el procedimiento administrativo sancionatorio ordinario por parte del Órgano Decisor designado.

Así las cosas, fue demostrado por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo por medio de consulta realizada en fecha 15 de febrero de 2021, al sitio web de consulta sobre morosidad patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social, y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA **mantiene deudas y obligaciones con las instituciones citadas.** Demostrándose el incumplimiento legal, y, por ende, siendo obligatorio por parte de este Órgano Decisor a proceder a aplicar la sanción contemplada en el ordenamiento especial (Ley Constitutiva de la CCSS), el cual es la revocación de la concesión.

Aunado a lo expuesto, en la especie ha quedado debidamente demostrado, según consultas al sitio web de consulta pública de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en relación con el estado de las obligaciones tributarias materiales y formales de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. que dicha concesionaria no ha presentado las declaraciones correspondientes del impuesto de ventas y de renta ante el Ministerio de Hacienda, lo anterior de conformidad con el

mandato impuesto por el artículo 18 de la Ley N° 4755 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y el artículo 18 bis de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, los cuales disponen que para tramitar u obtener cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, o durante la vigencia de los mismos se requiere que la persona física o jurídica se encuentre al día con sus obligaciones tributarias.

Finalmente, debe establecer que es obligación del Estado costarricense, como custodio de los bienes de dominio público, de velar por cuanto el recurso de espectro radioeléctrico cumpla con los objetivos y los principios sectoriales de utilización óptima y eficiente de éste, así como asegurar la protección de los derechos de los usuarios del servicio de radiodifusión, de ahí que, cuando se advierte que se está en presencia de una no utilización de los segmentos de frecuencias concesionados, en atención a los principios de beneficios de los usuarios y de utilización óptima del espectro radioeléctrico, proceder a su recuperación.

POR TANTO,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1.- APROBAR la recomendación contenida en el Informe N° ODPA-INF-CANAL51-001-2021 de fecha 17 de febrero de 2021 emitido por parte del Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio y por ende, **REVOCAR LA CONCESIÓN PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DEL RANGO DE FRECUENCIAS DE 692 MHz a 698 MHz (CANAL FÍSICO 51),** conferido mediante el ACUERDO EJECUTIVO Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002 a favor de la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica N° 3-101-236933 y por ende **DECLARAR EXTINTO** para todos los efectos legales correspondientes, el mencionado título habilitante (ACUERDO

EJECUTIVO Nº 3094-2002 MSP de fecha 02 de octubre de 2002), en vista de que se ha demostrado el incumplimiento de la citada empresa con sus obligaciones prestacionales, legales y reglamentarias, consistentes en prestar el servicio de radiodifusión televisiva en forma regular, transmitiendo un mínimo de doce (12) horas diarias, en la zona de cobertura definida en el título habilitante, encontrarse al día respecto al pago de los impuestos de radiodifusión (por su morosidad acreditada en los períodos correspondientes desde el año 2013 a la fecha de emisión de la presente Resolución), así como el cumplimiento de sus obligaciones obrero patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, con fundamento en los artículos 3, 8, 10, 22 inciso 1), sub apartados a) y b), y 99 de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 1758, Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), artículo 74 de la Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el artículo 22 inciso a) de la Ley N° 5662, “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. Lo anterior, en virtud de no existir razones de orden público o interés nacional para separarse de los dictámenes técnicos emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones oficios N° 1619-SUTEL-2010 con fecha 08 de setiembre de 2010, N° 5173-SUTEL-DGC-2012 de fecha 14 de diciembre de 2012, 4599-SUTEL-DGC-2013 de fecha 13 de setiembre de 2013, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 017-050-2013, adoptado en la sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada en fecha 18 de setiembre de 2013, N° 09206-SUTEL-DGC-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016 aprobado por el Consejo de la SUTEL mediante el Acuerdo N° 009-074-2016, celebrada en fecha 19 de diciembre de 2016, N° 02024-SUTEL-DGC-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, aprobado por el Consejo de la SUTEL, mediante el Acuerdo N° 030-024-2017, adoptado en la sesión ordinaria N° 024-2017, celebrada en fecha 15 de marzo de 2017, N° 09268-SUTEL-DGC-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, el cual fue aprobado por el Consejo de la SUTEL mediante Acuerdo N° 020-076-2020, adoptado en la sesión ordinaria N° 076-2020, celebrada en fecha 02 de noviembre de 2020, los cuales se integran en la fundamentación de la presente resolución administrativa, y siendo la obligación del Estado de velar por el uso eficiente y óptimo del recurso escaso y garantizar la prestación del servicio de

radiodifusión a la población, y consecuentemente a proceder a recuperar el recurso que se encuentre ocioso, y que no se esté utilizando de forma eficiente, según los principios y objetivos sectoriales contenidos en la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones.

ARTÍCULO 2.- ADVERTIR a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA que la firmeza de la presente resolución de revocación del título habilitante de concesión no provoca la extinción de las deudas pendientes de pago del impuesto anual de radiodifusión, periodos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 por lo que se mantiene pendiente su obligación de pago, ni tampoco la exime del cumplimiento de las cuotas obrero patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Asimismo, no la exime de las eventuales obligaciones de cumplir con los adeudos pendientes que ha futuro se adviertan por parte de las autoridades competentes respecto al pago de montos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente, procedimientos que, en el caso de aplicar, resultan independientes de la presente gestión.

ARTÍCULO 3.- INFORMAR a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA, sobre su derecho a recurrir la presente Resolución, mediante el recurso de reposición el cual deberá ser presentado ante el Poder Ejecutivo en el plazo máximo e improrrogable de tres (3) días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al día de la notificación de la presente Resolución, debiendo presentar su escrito en el Despacho Ministerial de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, sito en San José, Zapote, 250 metros oeste de la entrada principal de Casa Presidencial, Edificio Mira, primer piso. Lo anterior de conformidad con el artículo 346 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo Ejecutivo a la empresa CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, por el medio señalado dentro del expediente administrativo y que este mismo sea notificado a la Superintendencia de Telecomunicaciones con el fin de ser inscrito en el Registro Nacional de Telecomunicaciones.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega Castillo.—Solicitud N° 333796.—(IN2022630040).